Legislatura MENDOZA | UNIDAD DE ENLACE

2019

DIGESTO DE AGUAS

Presentación

El Digesto de Legislación de Aguas de la Provincia de Mendoza ha sido concebido, como una herramienta de consulta imprescindible para todas aquellas personas que se interesen por el estudio de la temática jurídica relacionada con los recursos hídricos, sean profesionales, productores, estudiantes o funcionarios públicos y que hoy no cuentan con un cuerpo sistemático de consulta sobre tan importante temática.

Es el resultado de la investigación y análisis de las principales normas de aguas que tienen vigencia en la provincia de Mendoza, desde la Ley General de Aguas de 1.884 hasta las últimas sancionadas recientemente por la Honorable Legislatura de la Provincia, que son especialmente relevantes[1].

Ha sido realizado por la Unidad de Enlace de la Vicegobernación de la Provincia como consecuencia de las inquietudes y pedidos que se formularon en distintos talleres y seminarios sobre recursos Hídricos que se realizaron en la Legislatura de Mendoza durante el año 2016 y 2017.

El presente Digesto está disposición de todos los usuarios de la web de la Honorable Legislatura de Mendoza en su página oficial, el que será actualizado en forma permanente en la medida de que sigan sancionando normas consideradas de relevancia o importancia para la temática hídrica.

Dra. Andrea Lara – Directora de la Unidad de Enlace
Dr. Víctor Guillermo Hernández – Unidad de Enlace. Compilador.

[1] La única resolución incorporada por su relevancia es la dictada por el Departamento General de Irrigación Nº 778/96.

DIGESTO DE AGUAS

CONTENIDO

LEY GENERAL DE AGUAS 5

LEY N° 322 (Reglamentaria) 41

LEY N° 368 53

LEY N° 386 54

LEY N° 402 56

LEY N° 430 58

LEY N° 1.920 65

LEY N° 2.605 85

LEY N° 2.625 90

LEY N° 2.797 98

LEY N° 4.035 102

LEY 4.036 116

LEY N° 4.154 122

ANEXO: ESTATUTO DEL COIRCO 123

LEY N° 5.302 133

LEY N° 6.044 137

LEY 6.105 166

LEY N° 6.405 168

LEY N° 7.722 178

LEY 8.115 181

LEY N° 8.152 184

LEY N° 8.213 189

ANEXO: DECRETO N° 1.737 192

ANEXO I: ACTA CONSTITUTIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. 201

DECRETO Nº 1.767 219

LEY N° 8.270 222

LEY N° 8.364 231

LEY N° 8.629 234

LEYES N° 971 – 1.063 – 1.210 Y 1.451 238

RESOLUCIÓN N° 778 247

ANEXO I 272

ANEXO II 281

ANEXO III 285

ANEXO IV 287

ANEXO V 291

RESOLUCIÓN N° 627 293

ANEXO I a) RESOLUCIÓN N° 778/96 H.T.A 297

ANEXO I –b) RESOLUCIÓN 778/96 H.T.A. 319

ANEXO I C) RESOLUCIÓN N° 778/96 H.T.A. 328

ANEXO I D) Resolución 778/96 H.T.A 335

ANEXO I - E) RESOL N° 778/96 DEL H.T.A 342

DECRETO N° 1.839/74 345

DECRETO-LEY N° 555/75 362

LEY GENERAL DE AGUAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: La administración del agua, su distribución, canales, desagües, servidumbres, etc., las concesiones de agua para la irrigación y su empleo para otros usos, están exclusivamente sujetos a las disposiciones de esta ley y de las autoridades creadas por ellas.

Artículo 2: El agua concedida a uno o más vecinos sólo podrá ser conducida por canales, cauces o acueducto, ordenados o construidos con aprobación expresa de las autoridades de aguas.

Artículo 3: Los desagües de uno o más fundos estarán sujetos a las mismas condiciones.

Artículo 4: Las expulsiones a que tuviesen lugar los vecinos morosos en el pago del impuesto de aguas, se ejecutaron administrativamente y en la forma establecida para el cobro de los demás impuestos fiscales.

Artículo 5: El mismo procedimiento se observará para el cobro de cualquier gasto o multa impuesta por las autoridades de aguas.

Artículo 6: La policía de las aguas y sus cauces naturales o artificiales, riberas y zonas de servidumbre, la vigilancia para que las aguas no puedan afectar a la sanidad pública ni a la seguridad de las personas y bienes, estará a cargo de las autoridades creadas por esta ley.

Artículo 7: Todas las obras de defensa, tomas y demás que reclame el servicio de las aguas, se sacarán siempre a licitación, pudiendo solamente hacerse por administración en los casos urgentes o cuando no se presenten licitadores.

Artículo 8: Todo canal, acequia o desagüe que produzcan filtraciones que puedan causar perjuicio a los edificios vecinos, deberán reformarse

construyendo un acueducto impermeable, aunque guardarse la distancia que establece la ley.

Artículo 9: El dueño de un canal, acequia o desagüe, deberá establecerlo a una distancia, por lo menos, de tres metros de la línea divisoria con el vecino.

Artículo 10: Las autoridades civiles, municipales o policiales, están obligadas a prestar a las de aguas, el más eficaz auxilio para hacer cumplir sus mandatos.

TÍTULO II
DEL DOMINIO DE LAS AGUAS

Artículo 11: El agua corriente es del dominio público, cuando no nace y muere dentro de una propiedad particular.

Artículo 12: El dominio público está limitado por el derecho que los particulares, propietarios de terrenos cultivados, tienen adquirido.

Artículo 13: El derecho reconocido en el artículo precedente es el de aprovechar el agua para el riego de los terrenos cultivados, o para otros objetos industriales, en la proporción y bajo las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 14: El derecho de aprovechamiento del agua es inseparable del derecho de propiedad sobre todo terreno cultivado o que se cultive en la provincia.

Artículo 15: Todo contrato de agua destinándola a otro uso que aquél para el cual se hizo la concesión, es nulo; y los que ejecuten pagaran una multa de veinte a cien pesos m/n.

Artículo 16: El derecho al aprovechamiento del agua se pierde por el abandono de su ejercicio durante más de cinco años, que principiarán a contarse desde el momento en que el concesionario esté en aptitud de usarlo.

Artículo 17: Tendrán derecho de aprovechamiento indefinido todos los terrenos cultivados que, a la fecha de la presente ley, existan en la Provincia, y las concesiones que se empadronen con el arreglo de la misma. Si de la distribución

que se haga de las aguas del río Mendoza conforme a esta ley para los terrenos actualmente cultivados resultase un sobrante, se destinará este para el regadío de las tierras situadas al oeste de la ciudad, al objeto exclusivo del cultivo de la vid con derecho de aprovechamiento definitivo o indefinido.

Artículo 18: Fuera de los terrenos expresados en el artículo anterior, es absolutamente prohibido aumentar los derechos de aprovechamiento indefinido con aguas del río Mendoza.

Artículo 19: No podrán hacerse concesiones de agua, con derecho de aprovechamiento indefinido, en perjuicio de derechos adquiridos.

Artículo 20: Entendiéndose por derecho de aprovechamiento eventual el que sólo existe con las intermitencias debidas a la carencia o la disminución del agua.

Artículo 21: Estos derechos serán considerados en el orden de su antigüedad.

Artículo 22: Los derechos de aprovechamiento eventual no pueden nunca perjudicar a los que tienen o tengan derecho de aprovechamiento definitivo o indefinido.

Artículo 23: No podrán hacerse en adelante concesiones de agua que reduzcan las de los que tengan adquiridos derechos de aprovechamiento definitivo a menos cantidad que la establecida en los Art.17 y 18 para los terrenos cultivados con agua del río Mendoza.

Artículo 24: Todo contrato sobre un terreno cultivado comprende también el derecho de agua correspondiente al mismo.

Artículo 25: El derecho de agua no puede ser embargado ni enajenado, si no juntamente con el terreno para que fue concedida.

Artículo 26: El agua en uso perteneciente a una propiedad puede transferirse temporalmente durante los turnos a otra propiedad cultivada que esté bajo el

regadío del mismo canal, cuando las necesidades del cultivo lo requieran y fuese solicitado por el interesado.

Artículo 27: Sólo podrá suspenderse el uso del agua en los casos siguientes:

1. Cuando sea necesario hacerse algún trabajo en el canal de su servicio, apertura de desagües o arreglo de compuertas.
2. En los casos de derrumbe del canal o abandono de la toma.
3. Como pena impuesta por la Superintendencia, el Subdelegado de aguas o los inspectores de canales, a los que incurran en mora en el pago de los impuestos que le correspondan, no cumplan con la apertura de los canales o las hijuelas particulares, no satisfagan el valor de los trabajos que por disposición de esta ley deberán practicarse por cuenta de los interesados en canales, hijuelas o desagües, o carezcan de compuertas.

Artículo 28: Los trabajos a que se refiere el inciso 1 del artículo anterior, deberán hacerse siempre en la época en que menos perjudique la privación del agua, y dándose aviso a los interesados con ocho días de anticipación.

Artículo 29: El agua podrá emplearse como fuerza motriz, con tal de no perjudicar a la agricultura.

Artículo 30: Pertenecen al dueño de un predio las aguas pluviales que caen en el mismo mientras discurren por él. Podrá, en consecuencia, construir dentro de su propiedad, estanques, represas o aljibes, donde conservarla al efecto, o emplear cualquier otro medio adecuado, siempre que con ello no cause perjuicio al público ni a terceros.

Artículo 31: Se reputan aguas pluviales, para los efectos de esta ley, las que proceden inmediatamente de las lluvias.

Artículo 32: Son del dominio público las aguas pluviales que discurren por barrancos o ramblas cuyos cauces son de dominio público.

Artículo 33: Pertenecen al dueño de un predio en propiedad las aguas subterráneas que en él hubiese adquirido por medio de pozos ordinarios. (Derogado por Ley n° 4.035).

Artículo 34: Todo propietario puede abrir libremente pozos ordinarios para elevar aguas dentro de sus fincas. (Derogado por Ley n° 4.035).

Artículo 35: Para la apertura de pozos ordinarios deberá guardarse entre las poblaciones la distancia de cinco metros entre foso y foso, y la de 20 metros en la campaña, entre la nueva excavación y los pozos, estanques, puentes o acequias permanentes de los vecinos. (Derogado por Ley n° 4.035).

Artículo 36: Se entiende por pozos ordinarios, para los efectos de esta ley, aquellos que se abren con el exclusivo objeto de atender el uso doméstico y necesidades ordinarias de la vida, y en los que se emplea en los aparatos la extracción del agua otro motor que el hombre. (Derogado por Ley n° 4.035).

Artículo 37: Cuando se busca el alumbramiento de agua subterráneas por medio de pozos artesianos, por socavones o galerías, el que las hace o hiciese surgir a la superficie de terreno, será dueño de ellas a perpetuidad, sin perder su derecho aunque salgan de la finca donde vieron la luz, cualquiera sea la dirección que el alumbrado quiera darles, mientras conserve su dominio. (Derogado por Ley n° 4.035).

Artículo 38: Si el dueño de las aguas obtenidas por los medios expresados en el artículo anterior, no construyese acueductos para conducirlas por los predios inferiores que atraviesan, y los dejase abandonados a su curso, los dueños de los predios inferiores tendrán el derecho de aprovechamiento eventual de esas aguas. (Derogado por Ley n° 4.035).

Artículo 39: El derecho de aprovechamiento eventual puede consolidarse, en el caso precedente, por el uso no interrumpido durante diez años. (Derogado por Ley n° 4.035).

Artículo 40: El álveo o cauce natural de las corrientes continuas formadas con aguas pluviales, es el terreno que aquellas cubren durante sus avenidas ordinarias en las barrancas o ramblas que le sirven de recipiente.

Artículo 41: Son de propiedad privada los cauces a que se refiere el artículo anterior cuando se hallen dentro de una propiedad privada.

Artículo 42: Son del dominio público los cauces que no pertenecen a la propiedad privada.

Artículo 43: Alveo o cauce natural de un río o arroyo, es el terreno que cubren sus aguas en sus mayores crecientes ordinarias.

Artículo 44: Son de propiedad particular las aguas detenidas, estanques o lagunas comprendidas dentro de una propiedad particular.

Artículo 45: Cuando el estanque o laguna esté rodeado de dos o más propietarios, todos podrán aprovechar el agua en común.

Artículo 46: Si los depósitos o lagunas de que hablan los artículos precedentes, están alimentados por una o más corrientes continuas, que se extienden más allá de los terrenos de un solo propietario, los depósitos, lagunas y corrientes son de propiedad pública.

TÍTULO III
DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 47: El dueño de todo predio está sujeto a recibir en este las aguas que descienden naturalmente de predios superiores, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello. No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal o acequia sobre el predio vecino, si no se ha constituido esta servidumbre especial.

Artículo 48: En el predio sirviente no se puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre natural, ni en el predio dominante que la grave.

Artículo 49: El dueño de una heredad puede hacer de las aguas que corren por ella el uso conveniente para los menesteres domésticos o para abrevar sus animales; pero no podrá hacer uso para el riego ni como fuerza motriz, sin una concesión de autoridad competente, haciendo siempre volver el sobrante a su cauce natural.

Artículo 50: El dueño de una heredad no puede hacer trabajos en los álveos o cauces naturales de corrientes discontinuas, ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las mismas en perjuicio de tercero, o cuya construcción, por las fuerzas de las avenidas, puedan causar daños a predios, fábricas o establecimientos, puentes, caminos o poblaciones inferiores.

Artículo 51: Los dueños de predios o establecimientos inferiores podrán oponerse a recibir los sobrantes de establecimientos industriales, que arrastran o llevan en disolución sustancias nocivas introducidas por los dueños de éstos.

Artículo 52: Si en cualquiera de los casos de los artículos precedentes le conviniera al dueño del predio inferior dar inmediata salida a las aguas para eximir de la servidumbre, sin perjuicio para el superior ni para tercero, podrá hacerlo a su costa.

Artículo 53: El dueño del predio sirviente tiene derecho a hacer dentro de él ribazos, malecones o paredes que, sin impedir el curso de las aguas, sirvan para regularizarlas, para aprovecharlas en su caso.

Artículo 54: Del mismo modo puede el dueño del predio superior o dominante, construir dentro de él ribazos, malecones o paredes que, sin grabar la servidumbre del predio inferior, suaviza en la corriente de las aguas, impidiendo que arrastre consigo la tierra vegetal o causan desperfectos en la finca.

Artículo 55: Cuando el dueño de un predio varíe la salida de las aguas procedentes de alumbramiento y con ello se irrogue daño a tercero, podrá éste exigir indemnización o resarcimiento.

Artículo 56: No se considera daño el contraído al suprimir el aprovechamiento de las aguas sobrantes a los que sólo eventualmente las disfrutan.

Artículo 57: Cuando el agua acumule en un predio piedra, broza u otros objetos que, embarazando su curso natural, pueden producir embalse con inundaciones, distracciones de las aguas u otros daños, los interesados podrán exigir del dueño del predio que remueva el estorbo o les permita remover.

Artículo 58: Si en el caso precedente hubiera lugar a indemnización de daños, será a cargo del causante.

TÍTULO IV
DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES

Artículo 59: Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en favor de otra heredad que carezca del agua necesaria para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, en favor de una población que precise agua para el servicio doméstico de los habitantes, lo mismo que todo establecimiento industrial que las necesite para el movimiento de sus máquinas.

Artículo 60: A la misma servidumbre están sujetas todas las heredades para dar salida a las aguas sobrantes que provengan del riego o establecimientos industriales.

Artículo 61: Se exceptúa de la servidumbre establecida en el artículo 59 el terreno que ocupan las casas, patios y jardines, sino por advenimiento de los interesados.

Artículo 62: Exceptúase de la servidumbre establecida en el artículo 60 las casas, patios y jardines.

Artículo 63: La conducción de las aguas por acueductos se hará de manera que no se ocasionen derrames, ni se deje estancar el agua, ni acumular basuras, debiendo el acueducto tener los puentes necesarios para la cómoda administración y cultivos del fundo sirviente.

Artículo 64: En el caso que un acueducto causare perjuicio a las heredades sirvientes o vecinas, desmejorando, por filtraciones o derrame, la calidad de los terrenos o seguridad de los edificios, los dueños del predio sirviente y los vecinos perjudicados tendrán derecho a exigir la indemnización de los daños causados y que el acueducto se construya en condiciones inofensivas.

Artículo 65: El derecho de acueducto comprende el de llevarlo por un rumbo que permita el libre descenso de las aguas y que por la naturaleza del suelo no haga excesivamente dispendiosa la obra.

Artículo 66: Verificadas las condiciones establecidas en el artículo anterior se llevará el acueducto por el rumbo en que menos perjuicio cause a los terrenos cultivados.

Artículo 67: El rumbo por donde sea más corto el acueducto se considerará como menos perjudicial a la heredad siguiente, y el menos costoso para el interesado, si no se probase lo contrario.

Artículo 68: Siempre se deberá conciliar en lo posible los intereses de las partes; y en caso de duda, se decidirá a favor de la heredad sirviente.

Artículo 69: El dueño del fundo sirviente tendrá derecho para que se le pague el precio del terreno que tiene ocupado por el acueducto, y, además, un ancho de dos metros a cada lado, o más extensión según sean las dimensiones del canal, las imperfecciones que se les cause en su regadío y nuevas construcciones que tengan que hacerse con este motivo, en toda la extensión de su curso.

Artículo 70: Deberá además indemnizarse al dueño del fundo sirviente de todo perjuicio ocasionado por pérdida o arranque de plantas o árboles, teniéndose también en consideración el desmérito que sufre la heredad sirviente por la subdivisión.

Artículo 71: El dueño del predio sirviente podrá impedir toda especie de plantación u obra nueva en el espacio de lateral de que habla el artículo 69.

Artículo 72: El que tiene a beneficio suyo un acueducto en su heredad, puede oponerse a que se construya otro en ella, ofreciendo paso al suyo a las aguas que otra persona quiera servirse, con tal de que ello no se siga en perjuicio notable al que quiera abrir un nuevo acueducto.

Artículo 73: Aceptada esta oferta, se pagará al dueño de la heredad sirviente el valor del suelo ocupado por el acueducto incluso en el espacio lateral designado en el artículo 69, en proporción del nuevo volumen de agua introducida en él.

Artículo 74: Deberá también indemnizarse al que facilite su acueducto lo que valiere la obra en toda la longitud que aproveche el interesado, en la misma proporción establecida en el artículo anterior.

Artículo 75: Si el acueducto no tiene bastante capacidad, el interesado lo ensanchará a su costa, y pagará el nuevo terreno ocupado por él, y el espacio lateral, y todo otro perjuicio.

Artículo 76: Si el que tiene un acueducto en heredad ajena quisiera introducir mayor volumen de agua en él, podrá hacerlo indemnizando de todo perjuicio a la heredad sirviente; y si para ello fuese necesario nuevas obras, se observará respecto de éstas lo dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 77: Las reglas establecidas para la servidumbre de acueductos, se extienden a los que se construyan para dar salida y dirección a las aguas sobrantes y para desecar pantanos y filtraciones por medio de zanjas, drenajes y canales de desagües.

Artículo 78: Abandonado un acueducto, vuelve el terreno a la propiedad y uso del dueño de la heredad sirviente, quien sólo será obligado a restituir lo que se le pagó por el valor del suelo si el abandonante hace desaparecer toda señal de acueducto, dejando el terreno en el mismo estado en el que se hallaba antes de haberse establecido la servidumbre.

Artículo 79: Siempre que las aguas que corren a beneficio de particulares impidan o dificulten la comunicación con los predios vecinos o embaracen los

riegos o desagües, el particular beneficiado deberá construir los puentes, canales u otras obras necesarias para evitar este inconveniente, observando las disposiciones vigentes y las que sobre el particular dictaren el P.E. o las municipalidades.

Artículo 79 bis: Los puentes u otras obras de carácter municipal relacionadas con la irrigación, cuya ejecución corresponda ordenar a las municipalidades departamentales, deberán ser pagadas por los interesados de los canales, hijuelas o desagües. Al efecto, se ordenara el cobro por el inspector respectivo, por medio del agente o cobrador municipal. En ningún caso, los inspectores opondrán dilaciones al pedido de la autoridad municipal, haciéndosele personalmente responsables en caso de omisión. Los inspectores harán el reparto de las cuotas que correspondan a cada interesado según el padrón.

Artículo 80: El dueño del predio sirviente, su arrendatario o administrador serán obligados a permitir la entrada a los trabajadores para la limpieza o desembanque del acueducto y demás atenciones que requiera para su debido curso y seguridad.

Artículo 81: En el caso precedente, el dueño del predio sirviente, tiene derecho para exigir que se le dé aviso previo de la entrada y que los trabajadores o dueños del acueducto, no se aparten del radio establecido para recorrerlo.

Artículo 82: Los dueños o tenedores de un fundo son responsables de toda sustracción fraudulenta de aguas que se verifique dentro de su propiedad en beneficio propio, cualquiera que sea la persona que la hubiere cometido, contra quien le queda expedito el derecho para procurar el reintegro.

Artículo 83: Si el dueño del fundo pudiese presentar al culpable, probándole el hecho de la substracción, quedará libre de responsabilidad.

Artículo 84: El dueño del predio sirviente tiene privilegio sobre todo otro acreedor para ser pagado con el valor del fundo dominante, de los perjuicios que la servidumbre le haya ocasionado.

Artículo 85: Corresponde al Superintendente de aguas otorgar y decretar las servidumbres de acueducto, desagües, con apelación para ante el poder ejecutivo.

Artículo 86: En todo caso deberá preceder al decreto de constitución de la servidumbre, la instrucción del expediente justificativo de la utilidad de la que se intente imponer, con audiencia de los dueños de los terrenos que hayan de sufrir el gravamen.

Artículo 87: El dueño del terreno sobre que trate de imponerse la servidumbre forzosa de acueducto podrá oponerse, por no ser el que la solicite dueño concesionario del agua o del terreno en que intente utilizarse para objeto de interés privado.

Artículo 88: Podrá también oponerse, probando que la servidumbre puede establecerse sobre otros medios con iguales ventajas para el que pretende imponer, y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla.

Artículo 89: Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por un solo punto se divida por herencia, venta u otro título entre dos o más dueño, los de la parte superior quedan obligadas a dar paso al agua como servidumbre de acueducto para riego de los inferiores, y los inferiores deberán dar paso a los desagües sin poder exigir por ello indemnización, a no haberse pactado otra cosa.

Artículo 90: La servidumbre forzosa de acueducto se constituirá con acequia abierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación ni ofrezca otros inconvenientes.

Artículo 91: Deberá constituirse con acequia cubierta, cuando lo exijan su profundidad, su continuidad a habitaciones, caminos, patios, puertas, veredas o algún otro motivo análogo, a juicio de la autoridad competente.

Artículo 92: Deberá constituirse la servidumbre con cañería o tubería, cuando puedan ser absorbidas otras aguas ya apropiadas, cuando las aguas conducidas puedan infeccionar a otras, o absorber sustancias nocivas o causar daño a obras

o edificios, y siempre que resulte necesario del expediente que al efecto se formará.

Artículo 93: En toda acequia o acueducto, el agua, el cauce y los márgenes serán considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que van destinadas las aguas.

Artículo 94: Los dueños de los predios que atraviese una acequia o acueducto o por cuyos linderos corriere, no podrán alegar derecho de posesión, ni de aprovechamiento de su cauce ni márgenes, a no fundarse en títulos de propiedad expresivos de tal derecho.

Artículo 95: Cuando por ser una acequia o canal de construcción inmemorial, o por otra causa, no estuviese bien determinada la anchura de su cauce, no hubiese restos o vestigios que la comprueben, la anchura se determinará por el Departamento de Aguas, pudiendo servirse los interesados de todos los medios de prueba.

Artículo 96: La concesión de la servidumbre legal de acueducto caducará si dentro del plazo que se hubiese fijado no hiciese el concesionario uso de ella y si no hiciere al dueño del predio sirviente la indemnización establecida.

Artículo 97: La servidumbre ya establecida se extinguirá por consolidación, o sea reuniéndose en una sola persona el dominio del predio sujeto a la servidumbre y el derecho de aprovechamiento de las aguas.

Artículo 98: Se extinguirá también la servidumbre por el no uso durante diez años, ya por imposibilidad o negligencia de parte del dueño de la servidumbre, ya por actos del sirviente contrario a la servidumbre, sin contradicción del dominante.

Artículo 99: Se extinguirá también la servidumbre por enajenación forzosa por causa de utilidad pública.

Artículo 100: El uso de la servidumbre de acueducto por cualquiera de los condóminos conserva el derecho para todos, impidiendo la prescripción por falta de uso.

Artículo 101: Las servidumbres procedentes de contratos privados se regirán por las leyes comunes.

Artículo 102: Todo el que derive en provecho propio el agua que pase por su predio destinada a otro, pagará una multa de veinte a cien pesos moneda nacional.

TÍTULO V
DE LAS CONCESIONES SOBRE EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Artículo 103: Todos los propietarios de terrenos cultivados se presentarán en el término de seis meses, desde la promulgación de esta ley, a hacer registrar en el Departamento de Aguas el número de hectáreas que tengan cultivadas con derecho a aprovechamiento de aguas, solicitando que se les otorgue el título correspondiente, por el número de hectáreas cultivadas que justifiquen tener.

Artículo 104: Los que no cumpliesen con la disposición precedente, serán privados del uso del agua hasta que cumplan, y pagarán una multa de dos pesos nacionales para cada hectárea de terreno (ver Ley n° 82).

Artículo 105: No podrán hacerse nuevas concesiones de agua o reconocerse derecho, por perjuicio de derechos adquiridos.

Artículo 106: Mientras las aguas corran por cauces naturales y públicos, todos podrán usar de ellas para beber, lavar la ropa, vasijas o cualesquiera otros objetos, bañarse, abrevar o bañar animales, con sujeción a los reglamentos de policía y ordenanzas municipales.

Artículo 107: En las aguas que, apartadas artificialmente de sus cauces naturales o públicos, discurriesen por canales, acequias o acueducto descubiertos, aunque pertenezcan a concesionarios particulares, todos podrán extraer o conducir en

vasijas la que necesitan para usos domésticos, o fabriles, o para riego de plantas; pero la extracción habrá de hacerse a mano sin género alguno de máquinas y sin detener el curso del agua, ni deteriorar las márgenes del canal o acequia.

Artículo 108: En propiedad privada, nadie puede penetrar para buscar o usar el agua, a no mediar permiso del dueño.

Artículo 109: En los canales, acequias o acueductos de aguas públicas descubiertos, aunque de propiedad temporal de los concesionarios, todos podrán lavar ropas, vasijas u otros objetos, siempre que con ellos no se deterioren las márgenes y que no exija el uso a que se destinan las aguas que se conservan en estado de pureza.

Artículo 110: Nadie podrá aprovechar las aguas de los ríos o arroyos de propiedad pública, fuera de los casos expresados en los artículos anteriores, sin la expresa concesión de autoridad competente.

Artículo 111: Todo el que quiera aprovechar las aguas de dominio público para el riego, o para establecimientos industriales, deberá presentarse por escrito ante el Superintendente de Aguas, expresando el nombre del río o arroyo de donde se propone sacar el agua, y el predio, con designación exacta al número de hectáreas que va a regar.

Artículo 112: Cuando se solicite el agua para motor u otros usos industriales, se expresará la dotación de agua que requieran y el cauce público o particular adonde se arrojarán las aguas sobrantes.

Artículo 113: El Superintendente de Aguas substanciará la solicitud y la elevará al ministerio de gobierno para la resolución que corresponde. (Derogada por la ley de 18 de marzo de 1.887).

Artículo 114: Si se acordase la concesión, deberá someterse a la aprobación del Departamento de Aguas el punto de la toma, las dimensiones de ésta, los trabajos a ejecutarse para su provisión y demás requisitos que aseguran que la toma no causará perjuicios al público ni a particulares.

Artículo 115: En las concesiones de aprovechamiento especiales de aguas públicas, se observará el siguiente orden de preferencia:

1. Abastecimiento de poblaciones;
2. Abastecimiento de ferrocarriles;
3. Riegos;
4. Molinos y otras fábricas;
5. Estanques para viveros o criaderos de peces.

Artículo 116: Dentro de cada clase serán preferidas las empresas de mayor importancia y utilidad; en igualdad de circunstancias, las que antes hubieran solicitado el aprovechamiento.

Artículo 117: Todo aprovechamiento especial de aguas públicas está sujeto a expropiación forzosa por causas de utilidad pública, previa la indemnización correspondiente, en favor de otro aprovechamiento que le preceda, según el orden fijado en el artículo anterior, pero no en favor de las que le igualen o sigan, a no ser en virtud de una ley especial.

Artículo 118: Toda concesión de aprovechamiento de aguas públicas se entenderá hecha sin perjuicio de tercero, y dejando a salvo los derechos de particulares.

Artículo 119: Respecto a la duración de las concesiones, se determinará en cada caso, según las prescripciones de la presente ley.

Artículo 120: En las concesiones de aprovechamiento de aguas se entenderá comprendida la de los terrenos de dominio público necesario para las obras de la presa y para los canales y desagües.

Artículo 121: Respecto a los terrenos de propiedad particular, se procederá, según los casos, a imponer la servidumbre forzosa de acueducto cuando proceda, o a la expropiación por causa de utilidad pública, previo el oportuno expediente y demás formalidades que corresponda con arreglo a la ley.

Artículo 122: En toda nueva concesión de aprovechamiento de aguas públicas, se determinará la cantidad que corresponda como máximun, si es para riego, a razón de uno y medio litros por segundo, para cada hectárea de terreno.

Artículo 123: El propietario de un terreno cultivado cuya explotación haya cesado de efectuar, por causa de encenegamiento, sin renunciar a su derecho de regadío, y habiendo satisfecho sin interrupción todos los impuestos que le correspondan en tal carácter y todos los gastos que su irrigación haya exigido en los canales respectivos, tanto principales como secundarios, puede solicitar concesión de agua en otro terreno, la que deberá concederse mediante el abandono absoluto de su primitivo derecho y el consentimiento de los interesados del canal con cuyas aguas desee regar. Si el terreno de que se trata debiera ser regado con las aguas del mismo canal que servía a la propiedad abandonada, el acuerdo de los interesados no será requerido.

Artículo 124: El Estado o la Administración no serán responsables de la falta o disminución que pueda resultar en el caudal expresado en la concesión, ya sea que proceda de error o de cualquiera otra causa.

Artículo 125: Las concesiones de aprovechamiento de agua, caducarán por no haberse cumplido las condiciones y plazos con arreglo a los cuales hubieren sido otorgadas.

Artículo 127: Las concesiones de aguas hechas individual o colectivamente a los propietarios de las tierras para el riego de éstas serán a perpetuidad, o mientras el concesionario quiera emplear el agua para el riego del terreno para que fue destinada; pero no podrán emplearla para el riego de otro terreno, sin una nueva concesión.

Artículo 128: Donde existan aprovechamientos en uso de un derecho reconocido y valedero, solamente podrán hacerse otras concesiones, en el caso de que, del aforo de las aguas en años ordinarios, resultare sobrante el caudal que se solicite, después de cubiertos completamente los aprovechamientos existentes.

Artículo 129: Cuando del aforo resulte no haber sobrante de aguas en años ordinarios, solo podrá concederse el derecho de aprovechamiento eventual.

Artículo 130: Nadie podrá establecer molinos u otros establecimientos industriales utilizando el agua como fuerza motriz o de cualquier otro modo, sin expresa concesión de autoridad competente.

Artículo 131: Cuando un establecimiento industrial comunique a las aguas sustancias o propiedades nocivas a la salubridad o a la vegetación, el Superintendente de Aguas dispondrá que se haga el reconocimiento facultativo, y si resultare cierto el perjuicio, se mandará suspender el establecimiento industrial hasta que sus dueños adopten el oportuno remedio.

Artículo 132: Las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas para establecimientos industriales, durarán mientras se ejercite la industria para que fueron concedidas.

Artículo 133: La interrupción de cinco años en el ejercicio de la industria hará caducar la concesión.

Artículo 134: Siempre que, en cualquier tiempo, las aguas adquieran propiedad nociva a la salud o a la vegetación, por causa de la industria que fueron concedidas, se declarará la caducidad de la concesión, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario.

Artículo 135: Para otorgar los aprovechamientos que son objeto de la presente ley, es requisito indispensablemente la audiencia de las personas a cuyo derecho pueda afectar la concesión, si fuere conocida.

Artículo 136: Cuando la persona no fuese conocida, se hará publicar por quince días la solicitud y las resoluciones que acerca de ella dicte la administración.

Artículo 137: También se hará publicar la solicitud y las resoluciones que se dicten, cuando la concesión afecte o pueda afectar intereses colectivos que no constituyan personalidad jurídica, o que carezcan de representante legal.

TÍTULO VI
DE LOS CANALES DE RIEGO

Artículo 138: La irrigación de la provincia se considerará dividida en tantas secciones como canales derivados de los ríos, arroyos o afluentes, existan o se construyan en adelante.

Artículo 139: No se permitirá sacar canales de los ríos o de sus afluentes si no para regar más de 500 hectáreas, con la sola condición de que el terreno a regarse no pueda surtirse de ninguno de los canales existentes.

Artículo 140: Es prohibido en lo sucesivo poner tacos en los canales, ni levantar de manera alguna el agua, sea para derivar acequia o con cualquier otro fin.

Artículo 141: El que infringiere la disposición anterior, pagará una multa de 20 a 100 $ m/n., doblándose la multa en cada reincidencia.

Artículo 142: Los que tengan el terreno más alto que el plan del canal o hijuela de donde deban sacar el agua para regar, deberán rebajar sus terrenos, o solicitar el cambio de su toma, de manera que el agua salga sin levantarla del canal a la hijuela y de ésta a la acequia regadora.

Artículo 143: La derivación de canales secundarios se hará por medio de tomas cuyo nivel será fijado por el Departamento de Aguas, con arreglo a las prescripciones establecidas.

Artículo 144: La limpieza de los canales se hará por los que rieguen con ella en lo que lo disponga el Departamento de Aguas, avisándose a los vecinos con ocho días de anticipación, para cuyo efecto debe tener cada vecino señalada la parte que le corresponda en proporción al número de hectáreas que riega y de la extensión del canal que aproveche.

Artículo 145: En la misma forma se hará la compostura de derrumbes u otros trabajos que sean necesarios y de utilidad común. Los omisos en el caso de éste

y del artículo anterior pagarán además una multa de 20 a 100 $ m/n. a beneficio del canal.

Artículo 146: Cuando un derrumbe fuere causado por culpa u omisión de un interesado o de cualquier extraño, la compostura se hará a costa del causante.

Artículo 147: Todo el que quiera hacer uso de un canal artificial para conducir el agua que se le haya concedido, deberá pagar a los propietarios del canal la parte que le corresponda, en proporción de la cantidad de agua de la nueva concesión, con las que los dueños conduzcan por el canal.

Artículo 148: Todos los gastos que fueren necesarios en los canales hasta sus últimas derivaciones, para mejor servicio de la irrigación y que se ejecuten por orden o con aprobación del Superintendente de Aguas o del Ministerio de Gobierno, serán cubiertos por los que reciben el agua, en proporción al número de hectáreas que cada uno riegue.

TÍTULO VII
DE LOS DESAGÜES

Artículo 149: Cada sección tendrá uno o más canales de desagüe para conducir el agua sobrante de los riegos, o de la industria a que fuere destinada, hasta otro canal de riego, o al río o arroyo de su origen, adonde no cause daño a las tierras de cultivo siempre con arreglo a las disposiciones de la Superintendencia de Aguas.

Artículo 150: Cada vecino que aproveche el agua para el riego u otra industria, está también obligado a tener un canal de desagüe para vaciar el agua sobrante a otro de riego o al general.

Artículo 151: Solo podrá utilizarse para irrigación el agua de los desagües, cuando se reúnan las condiciones:

1. Cuando pueda sacarse el agua sin hacer tacos en el desagüe ni obstruir en manera alguna su corriente.

2. Cuando el terreno por regarse tenga pendiente igual, por lo menos, a la del desagüe.
3. Cuando el terreno que se va a regar pueda desaguar convenientemente.

Artículo 152: En todo canal de desagüe, cuya conservación, por su gran capacidad o extensión, sea, a juicio de la Superintendencia de Aguas, dispendiosa para los que utilizan el agua como regantes, o con destino a aplicaciones industriales, aquella correrá a cargo tanto de lo que desagüen en él, como de los que utilicen sus aguas, debiendo computarse la participación de estos en la designación de los cupos respectivos, en razón de la importancia de los cultivos o industrias y en una proporción que no baje del doble, respecto de los que desaguan. En caso de dificultad corresponderá esta designación proporcional a la Superintendencia de Aguas.

Artículo 153: A ningún vecino le será permitido hacer uso del agua para regar o para cualquier otra industria, si no tiene desagües conforme las prescripciones de la presente ley.

Artículo 154: El agua que corre por los desagües es de utilidad pública.

Artículo 155: Es prohibido hacer lagunas o depósitos de agua que puedan causar perjuicio por filtración en los terrenos de cultivo o edificios. El infractor es responsable de los daños y perjuicios que cause.

Artículo 156: El que obstruya el curso de un desagüe pagará una multa de 20 a 100 $ m/n.

Artículo 157: Lo establecido respecto de los desagües generales es aplicable respecto de los particulares.

Artículo 158: Lo establecido sobre la limpieza de canales de riego, apertura, construcción de puentes y además garantías para que no causen perjuicios al público ni a terceros, es aplicable a los canales de desagüe.

Artículo 159: La dirección de los canales de desagüe debe ser siempre al sentido de la mayor pendiente.

Artículo 160: Declárense de utilidad pública las lagunas o terrenos pantanosos o de ciénaga, y el Poder Ejecutivo podrá proceder a su expropiación cuando pueda hacerse la desecación o saneamiento y los propietarios no quieran o no puedan hacerlo.

Artículo 161: La desecación o saneamiento de terrenos pantanosos, podrá ser concedida por el Estado a particulares, dándoles como indemnización, la parte que considere equitativa de los mismos terrenos desecados.

TÍTULO VIII
EL TURNO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Artículo 162: Siempre que en épocas de escasez extraordinaria el agua de un arroyo o de un río y sus afluentes sujetos a creces periódicas no alcance para la dotación permanente a razón de un litro por segundo para cada hectárea de terreno de regadío, se establecerá el aprovechamiento por turno entre todos los interesados que rieguen por el arroyo, el río o sus afluentes, mientras dure la escasez.

Artículo 163: El turno sólo podrá decretarse por el Superintendente de Aguas en virtud de los datos que le suministren los compartidores o inspectores o de los que adquieren personalmente, sin perjuicio del derecho que se reconoce a los interesados de una hijuela para turnarse entre sí para el mejor y más cómodo aprovechamiento de sus aguas.

Artículo 164: Decretado el turno, se distribuirá el agua proporcionalmente entre todos los canales derivados del río y sus afluentes que rieguen más de quinientas hectáreas, proporcionalmente al número de hectáreas que cada canal deba regar.

Artículo 165: Hecha la distribución establecida en el artículo anterior, se dividirá cada sección en dos o más subdivisiones, según los casos, dando toda el

agua del canal por uno, dos o más días a cada subdivisión, de manera que los interesados de cada una tengan el agua permanente durante el período de su turno, dejándose en los demás el agua necesaria para la bebida.

Artículo 166: Al mismo tiempo que se decrete el turno para el aprovechamiento del agua de un río o arroyo y sus afluentes, se establecerá para todos los canales derivados de los mismos que rieguen menos de quinientas hectáreas, de manera que el turno de estos canales dure el mismo que los períodos establecidos para las subdivisiones, según lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 167: El interesado que violase el turno o sacara agua en los períodos que no le corresponda, pagará una multa de 20 a 100 $ m/n., doblándose en cada reincidencia; pero en las hijuelas regadoras podrán los interesados establecer el turno entre ellos como mejor les convenga.

TÍTULO IX
DE LAS OBRAS DE DEFENSA

Artículo 168: Todos los dueños de predios lindantes con canales públicos o con canales de riego tienen derecho para poner defensa contra las aguas en sus respectivos márgenes por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen conveniente, dando de ello previo aviso al inspector del canal o a la autoridad de aguas inmediata.

Artículo 169: La administración podrá mandar suspender las obras autorizadas en el artículo anterior, y aún restituir las cosas a su primitivo estado, cuando, por cualquier circunstancia, amenacen aquéllas causar perjuicio, desviando las corrientes de su curso natural o produciendo inundaciones.

Artículo 170: Cuando las plantaciones u otras obras de defensa que se intenten, hayan de invadir el cauce del río, arroyo y canal, no podrán efectuarse sin previa autorización del Superintendente de aguas.

Artículo 171: En los cauces en que haya conveniencia en ejecutar plantaciones, la Superintendencia concederá una autorización general, para que los dueños de

los predios limítrofes, cada cual en la parte de cauce lindante con su respectiva rivera, puedan ejecutarlas.

Artículo 172: En este caso, todos deberán sujetarse a las condiciones que se establezcan en la concesión, encaminadas a evitar que unos propietarios causen perjuicio a otros.

Artículo 173: Cuando las obras proyectadas sean de alguna consideración, la administración podrá obligar a costearlas a todos los propietarios que hayan de ser beneficiados con ellas, en proporción de la utilidad que a cada uno reporte.

TÍTULO X
DE LAS CUESTIONES SOBRE EL AGUA

Artículo 174: Todas las cuestiones que se susciten sobre la administración o distribución del agua serán resueltas por el Superintendente de Aguas, con apelación ante el Poder Ejecutivo.

Artículo 175: Del mismo modo serán resueltos por el Superintendente todos los casos de fraude o abuso cometidos por particulares en el uso de agua o por empleados del Departamento, imponiéndoles multa o destitución, según los casos y dando cuenta en los casos graves al Ministerio de Gobierno para la resolución que corresponda.

Artículo 176: Los procedimientos de las causas sobre aguas serán públicos y verbales; y los fallos del Superintendente o el Poder Ejecutivo, que serán ejecutivos se consignarán en un libro, o en el Registro Oficial en su caso, con expresión del hecho y de la disposición legal en la que se funden.

Artículo 177: En los casos de expropiación forzosa para el establecimiento de servidumbre de acueducto, se observarán para el trámite las disposiciones de la ley de expropiación por causa de utilidad pública.

Artículo 178: Las penas por infracciones o abusos en el aprovechamiento de las aguas, obstrucción de los canales , acequias o desagües y otros excesos, serán

siempre pecuniarios, pudiendo solamente imponerse penas corporales cuando el reo no presente bienes para responder de las penas establecidas.

Artículo 179: Estos abusos podrán ser denunciados por cualquiera de los interesados en el canal, acequia o desagüe o en el río o arroyo de donde hayan sido derivados.

Art. 180; Las providencias dictadas por el Superintendente de Aguas causarán estado, si no se reclama de ellas cuando proceda para ante el Poder Ejecutivo en el término de quince días.

Artículo 181: Las resoluciones del Poder Ejecutivo serán reclamables por la vía contenciosa en los casos que determina la presente ley, siempre que el recurso se interponga en el término de quince días, contados desde la notificación administrativa, o en el término de un mes desde su publicación en la prensa.

Artículo 182: Contra las providencias dictadas por la administración dentro del círculo de sus atribuciones en materia de agua, no se admitirán interdictos por los Tribunales de Justicia. Únicamente podrán estos conocer a instancia de parte cuando en los casos de expropiación forzosa, previstos en esta ley, no hubiese precedido al desahucio la correspondiente indemnización en la forma que establece la ley de expropiación.

Artículo 183: Compete a los tribunales ordinarios conocer de los recursos contra las providencias dictadas por la administración en materia de aguas, en los casos siguientes:

1. Cuando se declare la caducidad de una concesión hecha a particulares o una empresa.
2. Cuando por ella se lastimen derechos adquiridos en virtud de disposiciones emanadas de la misma administración.

Artículo 184: Compete también a los tribunales ordinarios el conocimiento de las cuestiones relativas al dominio de las aguas públicas, y al dominio de las aguas privadas y su posesión.

Artículo 185: Las cuestiones relativas al dominio de las playas, álveos o cauces de los ríos y al dominio y posesión de las riberas, son también de la competencia de los Tribunales ordinarios.

Artículo 186: Las cuestiones fundadas en títulos de derecho civil, relativas a servidumbre de aguas y paso por las márgenes, corresponden también a los Tribunales ordinarios.

Artículo 187: Es también de la competencia de estos tribunales el conocimiento de las cuestiones suscitadas entre particulares sobre preferencia de derecho de aprovechamiento de agua fuera de sus cauces naturales, cuando la preferencia se funde en títulos de derecho civil, o sobre preferencia a aprovechamiento de aguas pluviales.

Artículo 188: Compete también a los tribunales de justicia el conocimiento de las cuestiones relativas a daños y perjuicios ocasionados a terceros en sus derechos de propiedad particular cuya enajenación no sea forzosa en los casos siguientes:

1. Por apertura de pozos ordinarios
2. Por apertura de pozos artesianos y por la ejecución de obras subsiguientes:
3. Por toda clase de aprovechamiento a favor de particulares.

TÍTULO XI
DE LAS ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Artículo 189: La administración del agua y en general el cumplimiento de la presente ley, estará bajo la dirección del Departamento General de Aguas, compuesto del siguiente personal:

1. Un Superintendente de Aguas, que será el jefe del Departamento;
2. Dos ingenieros o Agrimensores;
3. Un secretario;
4. Un compartidor para cada uno de los ríos y para el canal zanjón;

5. Un inspector para distribuir el agua entre las hijuelas derivadas de cada canal, o entre las hijuelas derivadas de las principales, pudiendo nombrarse un inspector para dos o más canales o hijuelas.
6. Un subdelegado de aguas para los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia.
7. Un subdelegado de aguas para los departamentos de Tupungato y Tunuyán
8. Un subdelegado de aguas para el departamento de San Carlos
9. Un subdelegado de aguas para los departamentos de San Rafael y Malargüe
10. Un subdelegado de aguas para los departamentos de Santa Rosa y La Paz.
11. Un subdelegado de aguas para el departamento del Rosario.

Artículo 189 (bis): La administración inmediata del Canal Zanjón estará, a cargo de un inspector nombrado por los Delegados a propuesta del Superintendente de Aguas, de quién dependerá.

Las atribuciones de este inspector serán: vigilar y cuidar del Canal, desde su toma hasta el confín; inspeccionar las compuertas y tomas que derivan del canal cuidando se conserven en buen estado, y ordenar el arreglo de las que no lo están; vigilar que el tomero repartidor haga la distribución del agua con estricta regularidad y de conformidad a los padrones mandados observar por la Superintendencia; vigilar que el subastador del agua del canal, cumpla las obligaciones que sean impuestas en el contrato, dando cuenta a la Superintendencia de las faltas que note y que no se hayan podido subsanar; inspeccionar los trabajos que la junta de delegados mande ejecutar en la toma del canal o sus márgenes, o dirigirlos cuando así lo disponga; intervenir en el pago de los trabajadores y pasar a la Superintendencia las planillas justificadas que correspondan; y finalmente, cumplir las órdenes que reciba de la Superintendencia para el mejor servicio del canal.

El sueldo del inspector y tomero será fijado por los delegados y pagado de los fondos de prorrata.

TÍTULO XII
ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SUPERINTENDENTE

Artículo 190: El Superintendente tendrá la administración general de las aguas en la parte científica y de reglamentación en toda la Provincia, y estará a su cargo el cumplimento de la presente ley; lo mismo que la policía de las aguas y sus cauces naturales, riberas y zonas de servidumbre, dictando las medidas necesarias para el buen orden en el uso y aprovechamiento de aquellas.

Artículo 191: Son deberes del Superintendente: determinar por medio de algunos de los medidores de corrientes y los cálculos científicos necesarios, la cantidad de agua que el Río Mendoza trae en cada mes del año, y la que contiene en cada creciente extraordinaria.

Artículo 192: Deberá también fijar el punto de arranque de cada toma de canal y su declive, y los trabajos de presas y de seguridad que deban ejecutarse en los canales matrices de todos los ríos y arroyos, formando los respectivos presupuestos.

Artículo 193: Marcará el arranque de las tomas particulares y determinará la distribución proporcional que deba hacerse a los interesados.

Artículo 194: Hará reformar las tomas que no se ajusten a las prescripciones de la presente Ley.

Artículo 195: Determinará la cuota que deban abonar los agraciados con nuevas concesiones por los trabajos hechos en el canal, río, arroyo o desagüe de que van a aprovechar.

Artículo 196: Acondicionará medidores de volumen y dará las instrucciones necesarias para que los subastadores e inspectores puedan calcular la cantidad de agua que corresponda a cada canal o hijuela.

Artículo 197: Recorrerá personalmente, por lo menos una vez al año, los diversos cauces y las boca-tomas de sus canales derivados, para conocer su estado y adoptar las medidas que cada caso requiera.

Artículo 198: Resolverá las cuestiones de carácter administrativo que se susciten con motivo de la distribución del agua, desagües y servidumbres.

Artículo 199: Atenderá las quejas y reclamos que se presenten contra los empleados del Departamento, levantando un sumario en cada caso, para dar cuenta al Ministerio de Gobierno.

Artículo 200: Establecerá los turnos rigurosos de agua en las épocas de escasez en que ésta no alcance para la dotación de los que tengan derecho de aprovechamiento indefinido.

Artículo 201: Estudiará aquellas partes de las cuencas y laderas de los ríos y arroyos que convenga poblar o mantener forestalmente poblada, en interés del buen régimen de las aguas, lo mismo que los que convenga despoblar.

Artículo 202: En todos los casos en que, por que otros trabajos reclamen su atención por cualquier otra causa, el Superintendente, con el personal del que dispone no pudiera atender oportunamente alguno de los deberes de su cargo, deberá dar aviso al Ministerio de Gobierno, para que le haga auxiliar con el personal necesario del Departamento Topográfico.

Artículo 203: Los Ingenieros del Departamento están a las órdenes del Superintendente, y ejecutarán las comisiones y estudios que éste les recomiende para el mejor régimen de las aguas y el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 203 a): Cuando fuese resistida la entrada a una propiedad al Superintendente de Aguas y demás autoridades del ramo, siendo ella requerida para la inspección o ejecución de obras necesarias a la conservación o libre curso de los canales, podrán aquellos funcionarios solicitar del Juez de Paz más inmediato la respectiva orden de allanamiento, que será expedida

inmediatamente, disponiéndose en ella que dicho acto se verifique con el auxilio de la fuerza pública si ella fuese requerida por aquellos.

Artículo 203 b): Corresponde a la Superintendencia de Aguas ordenar el cambio de las tomas particulares cuando estas sean perjudiciales al canal o hijuela de donde se derivan, previos los estudios necesarios.

Artículo 203 c): Los trabajos que éstos ejecuten a solicitud de los delegados o interesados de un canal o hijuela y por orden de la Superintendencia serán pagados por los que soliciten el trabajo o por los interesados del canal o desagüe, materia de estudio.

Artículo 203 d): El Superintendente de Aguas, además de los casos previstos en la ley, tiene la facultad de imponer multas de 10 100 $, a los que infrinjan las prescripciones de la misma, y si el interesado juzgase arbitraria la multa podrá demandar su devolución ante los Tribunales ordinarios.

TÍTULO XIII
DE LOS SUBDELEGADOS DE AGUA

Artículo 204: Los Subdelegados de Aguas dependen del Superintendente, y desempeñan las funciones que éste en su respectivo Departamento, en cuanto se relacione con la distribución equitativa del agua de riego y demás aprovechamiento para la industria, sujetándose a las disposiciones de esta ley y a las instrucciones que reciban de aquel.

Artículo 205: Vigilarán y dirigirán a los empleados inferiores del Departamento de Agua, procurando siempre el mejor servicio público.

Artículo 206: Atenderán las quejas que se presenten contra dichos empleados y practicarán las indagaciones del caso, dando cuenta de todo al Superior para la resolución que corresponda.

Artículo 207: Darán aviso a la superintendencia inmediatamente que noten aumento o disminución de agua en los ríos o arroyos de su respectivo Departamento.

Artículo 208: Determinarán los trabajos de toma y de seguridad que a su juicio deban ajustarse, pidiendo oportunamente el envío de un ingeniero que haga los estudios y proyectos necesarios, en los casos que requieran la intervención de un facultativo.

Artículo 209: Marcarán el arranque de las tomas particulares, y la distribución proporcional que deba hacerse entre los interesados.

Artículo 210: Darán cuenta a la Superintendencia de las tomas generales o particulares, y de los desagües que no se ajusten a las prescripciones de presente ley.

Artículo 211: Recorrerán, con arreglo a las instrucciones que reciban de la Superintendencia, los diversos cauces y las boca-tomas de sus canales derivados, para conocer su estado, e indicar las medidas que cada caso requiera.

Artículo 212: Tramitarán las cuestiones de carácter administrativo que se susciten con motivo de la distribución del agua o servidumbre, remitiendo los expedientes al Superintendente para la resolución que corresponda.

Artículo 213: Desempeñarán las comisiones que para el mejor régimen de las aguas les sean encomendadas por el Superintendente.

TÍTULO XIV
DE LOS COMPARTIDORES

Artículo 214: Estará a cargo de los Compartidores la inspección de las tomas y compuertas de los canales a su cargo.

Artículo 215: Deberán recorrer personalmente dos veces por semana, y en los días que determine la Superintendencia las boca-tomas de sus canales para distribuir el agua en la forma que aquel determine.

Artículo 216: Avisarán al Superintendente inmediatamente que noten cualquier aumento o disminución en el agua de los ríos o arroyos.

Artículo 217: Propondrán al Superintendente los trabajos que crea necesarios en sus respectivos canales para el mejor régimen de las aguas, dando cuenta mensualmente del estado y servicio de las boca-tomas de los canales matrices o del estado de éstos.

Artículo 218: Entregarán a los inspectores de los canales derivados el agua que a éstos corresponda, con arreglo a las instrucciones que reciban del Superintendente y en proporción al número de hectáreas que cada canal derivado deba regar.

Artículo 219: Desempeñarán las comisiones que para el mejor servicio les fuesen encomendadas por la Superintendencia o por los Subdelegados de Aguas.

Artículo 220: Desempeñaran las funciones de Inspectores en los casos que para el mejor servicio público lo resuelva la Administración.

TÍTULO XV
DE LOS INSPECTORES

Artículo 221 a): La administración de los canales e hijuelas estará a cargo de Inspectores, debiendo agregarse a estos Delegados en aquellas que rieguen más de trescientas hectáreas. .

Artículo 221 b): Los Inspectores desempeñarán las funciones de Jueces de canal e hijuela, y tendrán a su cargo la administración de éstos.

Artículo 221 c): Serán elegidos el segundo domingo de enero de cada año, debiendo concurrir al acto un número de interesados que represente la tercera parte más uno de los votos que correspondan al canal o hijuela, según la proporción establecida por la ley.

Artículo 221 d): La elección se practicará en la forma siguiente: Reunidos los interesados, por si o por apoderados, en el local designado de antemano por el

Inspector y Delegados donde los haya, se procederá a recibir los votos, correspondiente uno al poseedor de una hectárea o fracción hasta cinco, y así sucesivamente, observándose esta proporción hasta quince votos, que es el mayor número que podrá reunir un solo interesado.

La mesa receptora será presidida por el Inspector o uno de los Delegados en su ausencia, debiendo éstos funcionar como vocales.

En el caso que no concurran éstos, se elegirán los miembros de una mesa entre los presentes a simple mayoría de votos.

Artículo 221 e): En los canales donde no se hubiese hecho la elección conforme al artículo anterior, lo hará el Poder Ejecutivo a propuesta en terna, que hará la Superintendencia de Aguas, de personas interesadas en el agua del canal o hijuela.

Artículo 221 f): Los Inspectores tienen el deber de consultar con los Delegados todos los asuntos de importancia que se relacionen con el canal o hijuela a su cargo, como ser: los presupuestos de gastos que anualmente se harán para la conservación de las tomas, obras extraordinarias que necesiten efectuarse y que ellos resuelvan, apertura del canal o hijuela, arreglo de compuertas y puentes, etc. Deberán, además, rendir cuenta de la inversión de los fondos que administren.

Llevarán los libros, uno de actas en que consten los acuerdos de los Delegados y todas las resoluciones que se tomen sobre su administración, y otro del movimiento de entradas y salidas. Ambos libros llevarán en sus fojas el sello de la Superintendencia o el de la Subdelegación de Aguas respectiva.

Artículo 221 g): Los Inspectores podrán imponer multas de 5 a 30 pesos a los interesados que infringiesen las prescripciones de la ley, y a los deudores morosos hasta el 50% sobre el valor de las pensiones que se impongan para gastos del canal o hijuela y que hubiesen omitido pagar.

Artículo 221 h): Las resoluciones del Inspector o Delegados son apelables ante el Subdelegado de Aguas del Departamento respectivo.

En los Departamentos donde no haya Subdelegado la apelación se hará ante la Superintendencia.

Artículo 221 i): Los Inspectores pueden ser multados por los Subdelegados de Aguas o la Superintendencia por falta en el cumplimiento de sus deberes, o destituidos por el Poder Ejecutivo, a petición de ésta, siempre que la causa por la que se pide la destitución sea justificada.

Artículo 221 j): Los Inspectores son responsables de los fondos que administren, debiendo hacerse efectiva esta responsabilidad por la vía administrativa.

Artículo 222: Vigilarán todas las hijuelas derivadas por su canal para verificar que cada una tenga el agua que le corresponda.

Artículo 223: Darán cuenta al Superintendente o Subdelegado de Aguas, inmediatamente que noten cualquier abuso o sustracción de aguas en los canales o hijuelas a su cargo.

Artículo 224: Desempeñarán las comisiones que les fuesen encomendadas por el Superintendente para el mejor servicio público.

Artículo 225: Tendrán a sus órdenes uno o más tomeros repartidores, nombrados por ellos mismos.

TÍTULO XVI
DE LOS DELEGADOS

Artículo 226: En los canales o hijuelas que rieguen más de 300 hectáreas habrá una comisión de tres Delegados, electos anualmente de entre los interesados en el agua de los mismos, cuya elección se hará en el día y forma designado por los Inspectores, bajo cuya presidencia funcionarán teniendo las siguientes atribuciones:

1. Contratar la subasta y provisión de agua, la que deberá efectuarse por licitación pública, o por contrato particular si no se presentaran licitadores o si esta fuera más ventajosa.
2. Autorizar y presupuestar las obras que hayan de ejecutarse.
3. Resolver la prorrata con que deben contribuir los interesados por cada hectárea de regadío. A este efecto, cada fracción menor de 1 hectárea concurrirá con una de éstas.
4. Examinar la cuenta de administración que el Inspector debe rendir, y prestarle o no su aprobación, dejando, en ambos casos, constancia en el libro de actas que debe llevar aquel.
5. Dar aviso al Superintendente de Aguas cuando resulten cargos en el examen de las cuentas de los Inspectores, debiendo acompañar los antecedentes necesarios para la resolución que corresponda.
6. Fijar el sueldo que corresponda al Inspector y designar los tomeros repartidores de entre los propuestos por el Inspector a cuyas órdenes deben funcionar.

Artículo 227: En los casos urgentes o cuando después de una segunda citación, no concurren los Delegados, el Inspector procederá a efectuar los gastos y obras que sean necesarias, dando cuenta inmediatamente a la Superintendencia y a los Delegados en la próxima reunión.

Artículo 228: Si no se hiciese la elección de Delegados en el día y forma indicados, se hará por el Poder Ejecutivo, debiendo aquella recaer en personas interesadas en el canal o hijuela.

Artículo 229: El Canal Zanjón tendrá cinco Delegados, elegidos en el mismo tiempo y forma que los demás canales, debiendo designarlos el Poder Ejecutivo de entre los interesados, si no se efectuara aquella.

Funcionarán bajo la Presidencia del Superintendente de Aguas y sus atribuciones serán las siguientes:

1. Fijar la prorrata con que cada interesado debe contribuir anualmente.

2. Aprobar o desechar los presupuestos de gastos que el Superintendente de Aguas les presente para los trabajos que deban ejecutarse en la toma del Zanjón y sus márgenes.
3. Contratar la provisión del agua del mismo o autorizar sus servicios por administración, cuando no se presenten licitadores o las propuestas se consideren inaceptables.
4. Proponer y resolver las obras que hayan de ejecutarse en el mismo.
5. Examinar las cuentas del Tesorero, que anualmente presentarán al Superintendente, de los fondos que administre.

Art. 230: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY N° 322 (Reglamentaria)[1]

Artículo 1: La administración general de las aguas de los ríos, canales, hijuelas y desagües de la Provincia, su distribución y la tramitación de toda solicitud sobre concesión de ellas para el riego y su empleo en usos industriales, estará a cargo del Departamento de Irrigación.

Artículo 2: De conformidad a lo prescripto por los Arts. 208 y 209 la Constitución de la Provincia, el Superintendente y el Consejo que componen aquel Departamento tendrán las atribuciones determinadas por la presente ley, mientras no se reforme la Ley de Aguas sobre esta materia

DEL SUPERINTENDIENTE

Artículo 3: El Superintendente de Irrigación es el Jefe del Departamento; tiene a su cargo el cumplimiento de los deberes y el ejercicio las facultades que establece la Ley de Aguas con las ampliaciones y restricciones de la presente

Artículo 4: El Superintendente conocerá originariamente:

1. El trámite de toda solicitud sobre concesión definitiva o de agua para cultivos, o del uso de la energía hidráulica, con fineses o aplicaciones industriales;
2. De los reclamos que se deduzcan contra los procedimientos de los Subdelegados de aguas, Inspectores, Delegados y demás funcionarios inferiores, pudiendo imponer multas, suspensiones y destituciones, según la gravedad de las cosas;
3. De toda queja sobre fraudes o abusos cometidos por particulares en el

[1]Ley N°863:
Artículo 1: Declárase subsistentes, inter se dicta la ley general de irrigación las leyes existentes sobre la materia en cuanto no se opongan a la presente y a la Constitución de la Provincia.
Artículo 2: El Consejo de Irrigación podrá formar quórum legal y resolver los asuntos de su conocimiento con tres de sus miembros, siempre que no hubieran incidencias entre los mismos y todos sus componentes hubieren sido citados en forma para conocer el asunto a resolver.
Artículo 3: Agréguese como inciso 6° del Art. 26 de la Ley 322 el siguiente: "Para aprobar o desaprobar los presupuestos y cálculos de recursos de los canales, hijuelas y desagües que deben presentar anualmente las autoridades respectivas", derogándose el inciso 5° del Art. 6" de la misma ley".
Artículo 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

uso o aprovechamiento del agua

Artículo 5: Conocerá en grado de apelación y en última instan administrativa:

1. De las resoluciones que dicten los Subdelegados, dentro de las atribuciones que la Ley de Aguas les confiere;
2. De las medidas o disposiciones que en igual caso pronuncien los Inspectores y Cuerpos de Delegados en los Departamentos donde no exista Subdelegación.

Artículo 6: Incumbe también al Superintendente:

1. Recorrer una vez al año por lo menos los diversos cauces de riego y sus tomas respectivas, pudiendo adoptar las medida estime del caso para el buen orden y mejor uso y aprovechamiento de las aguas;
2. Controlar el manejo e inversión de las rentas de todos los canales, hijuelas, desagües o cauces de riego, de oficio o solicitud de los interesados;
3. Dar cuenta anualmente al Tribunal creado por el Art. 26 presente ley, por medio de un balance general, de los gastos de la Administración durante el ejercicio vencido;
4. Nombrar interinamente los empleados del Departamento y demás funcionarios de aguas en caso de renuncia, suspensión, destitución de éstos, poniendo el hecho en noticia del Consejo a los efectos que más adelante se determinan (Art. 26. Inc. 3)
5. Aprobar o desaprobar los presupuestos que las Juntas de Delegados deben hacer anualmente de los gastos que reclame la provisión y distribución del agua en sus respectivos canales, hijuelas o desagües;
6. Acordar los cambios de derechos de regadío que se soliciten, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley de Aguas vigente
7. Intervenir en la fijación de los turnos en los canales y demás cauces de riego, cuando las necesidades de la irrigación requieran; y en las hijuelas, a solicitud de parte interesadas, sin perjuicio de las demás facultades conferidas por la Ley de Aguas vigente.

Artículo 7: Todo compareciente deberá en su primer escrito o exposición ante la Superintendencia, constituir domicilio dentro del radio de un kilómetro del asiento de la oficina.

La Superintendencia exigirá de oficio esta formalidad y no dará curso a ninguna gestión mientras no se cumpla con ella.

Artículo 8: Los Subdelegados de agua y en su caso los Inspectores, al otorgar recursos de apelación para ante la Superintendente, deberán a su vez exigir al apelante el cumplimiento previo del requisito estipulado en el artículo anterior.

Artículo 9: Los procedimientos en las causas sobre aguas serán breves y sumarios; y los fallos contendrán, además de las resoluciones y fundamentos, una relación sucinta del hecho que los motiva, debiendo llevarse un libro especial en el Consejo y en la Superintendencia para insertar copia exacta de todas las resoluciones que produzcan, suscriptas por la autoridad que las haya dictado.

Artículo 10: Cuando hubiera hechos controvertidos que influyan sobre la cuestión administrativa a resolver, tanto el Superintendente como el Consejo, en su caso, podrán abrir la causa a prueba por un término que no excederá de diez días, guiándose, en lo aplicable, por lo establecido para la recepción de la prueba por el Código de Procedimientos.

Artículo 11: Contra las resoluciones que dicte originariamente el Superintendente, habrá el recurso de apelación para ante el Consejo Superior, que deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación.

Artículo 12: Dichas resoluciones causarán estado si no se reclama de ellas en el término establecido por el artículo anterior.

Artículo 13: Elevado un expediente al Consejo, el Presidente ordenará ponerlo en Secretaría por el término de seis días, a fin de que, dentro de los mismos, el apelante exponga brevemente, en forma verbal o por escrito, los motivos de su apelación.

Artículo 14: En caso de optarse por la forma verbal, el interesado podrá formular su exposición ante la Secretaría del Consejo, quien dejará constancia de ella en el expediente, labrando el acta respectiva.

Artículo 15: De dicha exposición se dará traslado por igual término a la otra parte y con lo que ésta manifieste quedará la causa concluida para dictar resolución.

Artículo 16: Si el apelante no usare en tiempo del derecho que le acuerda el Art. 13, acusada una rebeldía, se declarará desierto el recurso, y se devolverá el expediente.

Artículo 17: Si el apelado no contestase en el término prefijado la exposición del apelante, se seguirá la instancia en su rebeldía, si la acusare este último.

Artículo 18: La rebeldía podrá acusarse por escrito o verbalmente ante el Secretario del Consejo, en cuyo caso dejará constancia de ella En el expediente. Esta diligencia será también suscripta por el interesado.

Artículo 19: De los fallos que dicte el Consejo, como de las resoluciones que pronuncia el Superintendente en última instancia, habrá el recurso contencioso-administrativo para ante la Suprema Corte de la Provincia.

Artículo 20: Este recurso deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación del fallo o sentencia respectiva.

Artículo 21: Cuando los interesados no activasen el trámite establecido en los Arts. 16 y 17 omitiendo acusar las correspondientes rebeldías, el Consejo podrá pronunciar resolución en cuanto a la parte del régimen administrativo del Departamento, después de ocho días de paralizado el expediente, sin decidir lo que solamente sea materia de la controversia entre los interesados, cuando el caso lo permita.

Artículo 22: El Consejo podrá después de conclusa la causa para resolución, o antes, si lo estimase necesario:

1. Decretar que se traiga a la vista cualquier expediente o documento que crea conducente para esclarecer el derecho de las partes:
2. Exigir explicaciones a las mismas sobre hechos que estime de influencia en la cuestión;
3. Solicitar informes, ordenar reconocimientos, inspecciones oculares y, por intermedio de la Oficina Técnica, las diligencias periciales que se consideren necesarias para el mejor esclarecimiento de las cuestiones gestionadas. Estas diligencias podrán ser controladas por las partes.

Artículo 23: El cargo de Presidente del Consejo se ejercerá anualmente por turno entre los miembros, empezando por el de mayor edad.

Artículo 24: En los casos del Art. 208, inciso II de la Constitución de la Provincia y Arts. 183 a 188 de la Ley de Aguas el trámite del juicio ordinario civil deberá instaurarse diez días hábiles después de concluido el procedimiento administrativo.

Vencido este término quedará concluida la instancia con el trámite de orden administrativo y no se admitirá la acción ordinaria.

Artículo 25: Cuando se deduzca la acción ordinaria, se ofrecerá el informe del Superintendente de Irrigación o del Consejo de Apelaciones, según proceda, para acreditar que la presentación se ha hecho en tiempo, y producido aquél, el Juez resolverá lo que corresponda con audiencia del interesado.

Artículo 26: El Consejo, compuesto de sus propios miembros en mayoría, más el Superintendente, se constituirá en tribunal único a los efectos siguientes:

1. Para nombrar y remover todos los empleados del Departamento
2. Para aprobar o desaprobar, sin más recurso, las elecciones de autoridades de aguas, que deben verificarse anualmente en todo los canales, desagües o cauces de riego de la Provincia;
3. Para acordar dichas autoridades, cuando los interesados no practicasen la elección en la época designada o cuando ésta fuere

anulada o en casos de renuncia o destitución;

4. Para acordar la venia necesaria cuando las Juntas Administrativas o Cuerpos de Delegados solicitasen autorización a objeto de fijar sueldo a los Inspectores;
5. Para sancionar el Presupuesto de Gastos y Recursos del Departamento de Irrigación, anualmente.

DE LAS CONCESIONES SOBRE EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Artículo 27: Las solicitudes sobre concesiones de agua de los ríos o arroyos de la Provincia y sus afluentes o derivados con destino a la agricultura, sea que revistan carácter eventual o permanente, serán formuladas ante la Superintendencia de Irrigación.

Artículo 28: La Superintendencia substanciará estas peticiones por los trámites que determina el Título V de la Ley de Aguas vigente, y una vez llenados, producirá su informe, remitiéndolas al Poder Legislativo a los efectos prevenidos por el Art. 211 de la Constitución.

Artículo 29: Las solicitudes de concesión de agua para fuerza hidráulica que se pidan de los canales de irrigación existentes, y las solicitudes sobre aprovechamiento de desagües, serán formuladas, tramitadas y concedidas por ante la Superintendencia General de Irrigación.

Artículo 30: Al otorgarse dichas concesiones se fijará en cada caso el término dentro del cual deben aprovecharse, bajo pena de caducidad.

Este término no podrá exceder de dos años contados desde la fecha de la concesión.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS CUENTAS

Artículo 31: Los Inspectores percibirán y administrarán los fondos procedentes de pensiones o multas en los cauces a su cargo.

Artículo 32: Los Inspectores llevarán los libros que determina el Art. 221 f. de la Ley de Aguas con las formalidades allí exigidas, como asimismo un archivo de todos los comprobantes necesarios a justificar las entradas y salidas.

Artículo 33: El Departamento de Irrigación podrá en cualquier momento exigir, de oficio o a solicitud de interesados, la presentación de los libros y papeles, siendo posibles de destitución aquellos funcionarios que rehusaren o demoraren hacerlo.

Artículo 34: Sin perjuicio de la disposición anterior, los Inspectores remitirán a la Superintendencia un balance semestral de entradas y salidas.

Artículo 35: Los Inspectores que no rindiesen cuenta fiel de la inversión de los fondos que administran, quedarán inhabilitados por cinco años para desempeñar cualquier cargo en la administración de la aguas, sin perjuicio de destitución cuando la irregularidad fuese notada o descubierta durante el ejercicio del empleo.

Artículo 36: En igual pena incurrirán los Delegados cuando ordenasen pagos o gastos fuera del Presupuesto o indebidos, o apareciesen complicados en la malversación.

Artículo 37: Los saldos que resultasen deudores los funcionarios cesantes se cobrarán por la vía de apremio.

Sin perjuicio de esta medida, el Superintendente, y en su defecto el Subdelegado o la Junta respectiva, tendrán personería bastante para deducir ante la justicia las acciones civiles y criminales correspondientes.

Artículo 38: El cargo de Inspector y Delegado será gratuito. Solo podrán asignarse retribución a los Inspectores, previa autorización del Tribunal determinado en el Art. 24 de la presente ley, quien podrá otorgarla cuando, a su juicio, la administración del cauce demande por circunstancias especiales servicios mayores que los ordinarios a esta clase de funciones.

DE LAS ELECCIONES

CONDICIONES DE LOS ELECTORES Y ELECTOS

Artículo 39: Los Inspectores y Delegados durarán un año en el ejercicio de sus funciones, y podrán ser reelectos.

Tendrán las atribuciones y deberes que determina la Ley de Aguas en cuanto no fueren modificados por la presente.

Artículo 40: Para ser Inspector o Delegado se requieren las siguientes condiciones:

1. Tener domicilio en la Provincia;
2. Ser poseedor o tenedor de terrenos cultivados, en el canal, hijuela o desagüe de que se trate;
3. No adeudar contribuciones de agua, ni multas impuestas por las autoridades de Irrigación;
4. No tener la inhabilitación expresada en el Art. 35 de la presente ley.

Artículo 41: Para poder elegir son igualmente esenciales los requisitos prevenidos en el artículo anterior con excepción del domicilio y la inhabilitación, que no impedirán el voto.

Artículo 42: Los votos se computarán a razón de uno por cinco hectáreas o fracción, y así sucesivamente, hasta quince votos, que será el mayor número que podrá reunir un solo interesado por sí.

Artículo 43: Si un interesado lo fuere por varios predios aprovechamientos que se surten de un mismo cauce, aquéllos se considerarán como un solo fundo a los efectos del cómputo.

Artículo 44: En la misma forma se computarán los votos correspondientes a una finca dividida en fracciones, por concepto de arrendamientos. En este caso se considera como un solo interesado al propietario.

Artículo 45: El voto se dará personalmente o por medio de apoderado. En este caso, el poder deberá ser visado por el Jefe político, Subdelegado de Aguas o el Juez de Paz del Departamento donde resida el interesado, o donde esté situada la finca respectiva.

Si el poderdante no supiera o no pudiera firmar, deberá solicitar de otra persona que lo haga por él en presencia de los funcionarios expresados, haciéndose constar así en el instrumento o carta-poder. Si el poder se extiende en la Capital de la Provincia, será visado por el Superintendente de Irrigación.

Artículo 46: Fuera de los votos que le correspondan por derecho propio, ningún interesado podrá reunir más de cinco poderes por representación.

Artículo 47: El arrendatario o mero tenedor de un fundo no tiene derecho a votar en la elección de autoridades de agua, salvo que por disposición expresa, estipulada en el contrato, el propietario hubiera delegado en el la facultad.

Artículo 48[2]: La elección de autoridades de canales, hijuelas y desagües se verificará el primer domingo de noviembre de cada año, desde las siete de la mañana, hora en que se empezará el escrutinio, hasta las cuatro de la tarde.

El acto tendrá lugar en las oficinas de la Inspección, si las tuviere, en caso contrario en el local que el Inspector y Delegados, donde los haya, determinen de antemano.

Artículo 49: El punto donde haya de verificarse la elección se notificará a los regantes con treinta días de anticipación.

---

[2] Ley N° 498:
Artículo 1°- Modifícase el Art. 48 de la Ley No 322, reglamentario de la sección novena de la Constitución, en la siguiente forma:
"Artículo 48.- La elección de autoridades de canales, hijuelas y desagües, se verificará el segundo domingo de Noviembre de cada año, desde las 7 de la mañana, hora en que se empezará el escrutinio, hasta las 4 de la tarde".
Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Si el interesado no residiere o no se encontrase en el fundo, la diligencia se entenderá con su administrador, capataz, encargado, etc.

Artículo 50: La elección se tendrá por no verificada si no hubiere sufragado un número de interesados que represente la tercera parte más uno de los votos que correspondan al cauce según la proporción establecida en el Art. 42.

En este caso, el nombramiento de autoridades se hará directamente por el Tribunal (Art. 26, Inc. III).

Artículo 51: La mesa receptora de votos será presidida por el Inspector o uno de los Delegados en su ausencia, debiendo éstos funcionar como vocales.

En el caso que no concurran éstos, se reemplazarán con interesados presentes, elegidos a simple mayoría de votos.

Artículo 52: Las resoluciones de las mesas serán tomadas por mayoría de votos entre sus miembros. El presidente decidirá los empates.

Artículo 53: En el acta correspondiente que labrarán los miembros de la mesa, se hará constar el nombre de los sufragantes, el número de orden del padrón, y nombre de los candidatos expresándose al mismo tiempo el resultado que arroje el escrutinio con arreglo al cómputo establecido en el Art. 42.

Artículo54: El acta así confeccionada, y en doble ejemplar será suscripta por los miembros de la mesa y demás personas que quieran hacerlo de entre los presentes, y se remitirá cerrada al Superintendente de Irrigación, debiendo adjuntarse también los poderes rubricados por el Presidente. El otro ejemplar se reservará en el archivo de la Junta respectiva.

Artículo 55: Las protestas se consignarán al pie del acta que haya de remitirse a la Superintendencia y será suscripta por las personas que las hubieren formulado.

Podrán también los interesados presentarlas directamente a la Superintendencia en el plazo de diez días improrrogables, vencidos los cuales no se oirá reclamación alguna.

Artículo 56: Ocho días después de verificadas las elecciones, el Presidente del Consejo convocará al Tribunal determinado en el Art. de esta ley, a los efectos que establecen los incisos lo y 29 de dicho artículo.

Artículo 57: Serán aprobadas las elecciones que no fueren protestadas con justa causa, y anuladas en caso contrario, pudiendo también el Tribunal anular de oficio aquellas en que apareciere que los electo tuviesen la inhabilitación del Art. 35, o cuando el acta contuviera alguna enmendatura no salvada que afectare el resultado del escrutinio.

Artículo 58.- Si por cualquiera causa la elección no se verificase el día determinado, la designación de autoridades se hará directamente por el Tribunal (Art. 26, Inc. 39).

Artículo 59: Del 1° al 5 de enero de cada año, las nuevas autoridades procederán a tomar posesión de sus cargos. Dentro del mismo término, los funcionarios cesantes rendirán ante los nombrados, cuenta justificada de su administración, haciéndoles al mismo tiempo entrega de todos los libros y papeles correspondientes.

Artículo 60: Si por cualquier circunstancia las nuevas autoridades nombradas no pudiesen tomar posesión de sus cargos dentro del plazo prevenido en el artículo anterior, los Inspectores y Delegados salientes continuarán interinamente en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 61: Cuando el Inspector o Delegados cesantes rehúyan o demoren sin justa causa el cumplimiento de la formalidad prevenida en el Art. 59, incurrirán en una multa de cien pesos cada uno, sin perjuicio de las acciones civiles o criminales que correspondan.

DE LAS ACTUACIONES ANTE LAS AUTORIDADES DE AGUAS

Artículo 62: Toda solicitud que se formule ante las autoridades de aguas y los trámites a que diere lugar, se sustanciarán en sellos de cincuenta centavos.

Exceptúase la primera foja de las peticiones sobre aprovechamiento o concesión de aguas para terrenos o industrias que no la hubiesen tenido, a cuya foja corresponde un sello de diez pesos.

Artículo 63: Los trámites o actuaciones relativas al manejo o gobierno interno de la Repartición de Aguas, se extenderán en papel común.

Artículo 64: Se empleará también papel común en los casos en que las autoridades de aguas procediesen u ordenasen de oficio cualquiera investigación tendiente a descubrir faltas o abusos, sea en la administración o en el aprovechamiento de las aguas.

En este caso, el papel será repuesto por el funcionario o interesado que apareciere culpable.

Artículo 65: Queda derogada toda disposición que se oponga a la presente ley.

Artículo 66: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY N° 368

Artículo 1: Los Notarios de Registro no autorizarán transferencia de dominio de bienes raíces cultivados o con derecho de agua, sin que las partes acrediten previamente estar satisfechos los impuestos de irrigación, que arrojen los respectivos presupuestos aprobados.

Este requisito se certificará en la boleta de transferencia que se corra por la Superintendencia de Irrigación en la Capital y en los Departamentos por los Inspectores de los cauces respectivos.

Artículo 2: Los Notarios de campaña darán cuenta quincenalmente al Departamento General de Irrigación de las transferencias de inmuebles que se efectúen por su intermedio.

En caso de no estar empadronada la propiedad a nombre del que la transfiere, la Superintendencia o la Inspección del Canal respectivo despacharán las transferencias sin perjuicio de la tramitación del expediente sobre empadronamiento, previa solicitud que suscribirán las partes contratantes, quedando la propiedad sujeta a las obligaciones que emerjan de dicho empadronamiento.

Artículo 3: La misma condición establecida en el Art. 1° se exigirá para los impuestos correspondientes a la Municipalidad de la Capital.

Artículo 4: Los contraventores a las disposiciones de la presente ley sufrirán las penas establecidas en el Art. 26 de la Ley de Rentas vigente.

Artículo 5: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY N° 386

Artículo 1: Apruébese el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 27 de abril del presente año[3], autorizando al ingeniero don Carlos Wauters para que proyecte las obras de irrigación por los ríos Diamante y Atuel en el concepto de que el uso del agua sea en cantidad suficiente, por hectárea, para llenar las necesidades a que se la destina.

Artículo 2: Las concesiones de aprovechamiento de agua para irrigación que no tuviesen un plazo para ser cumplidas, caducarán en el derecho definitivo o eventual acordado por el todo o la parte de la tierra que no hubiere sido irrigada y cultivada, dentro de los cinco años siguientes a la promulgación de la presente ley, quedando de hecho caducas las concesiones que no hubiesen pagado los derechos de irrigación.

La tierra cultivada no empadronada, que no hubiere pagado los derechos respectivos o que no tuviese concesión de aprovechamiento de agua, le será acordado éste, siempre que en el término de noventa días se abone como multa, al Tesoro Público, la suma de cuarenta pesos por hectárea y a la Superintendencia General de Irrigación los derechos respectivos en la forma de

ley.

En caso de no verificarse aquélla y éstos, se impedirá el uso indebido del agua, sin que después se permita acogerse a lo dispuesto anteriormente, quedando siempre a salvo los derechos de la Superintendencia General de Irrigación.

Artículo 3: Las disposiciones de los artículos anteriores regirán asimismo respecto de las tierras que actualmente se riegan con obras provisorias por los ríos Mendoza y Tunuyán.

Artículo 4: Derógase toda disposición contraria a los artículos ante

[3] Año 1907

Artículo 5: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY N° 402

Artículo 1: Las disposiciones de la Ley N° 386 serán extensivas y regirán para todos los ríos y arroyos de la Provincia que sólo tuvieran obras provisorias de irrigación, así como para los canales e hijuelas derivadas de aquéllas y los desagües provenientes de éstas.

Regirán asimismo para los ríos con obras definitivas de riego y sus canales, hijuelas y desagües respectivos, pero la multa a que se refiere la segunda parte del Art. 2o de la ley citada será de cien pesos moneda nacional por hectárea, debiendo reintegrarse, además, a la Superintendencia General de Irrigación el importe de los derechos respectivos, con intereses de Banco, desde el día en que se dieron al servicio público los diques, canales, hijuelas y desagües con que fraudulentamente se han beneficiado los regantes, el que se aplicará a mejoras de los mismos. Reintégrase igualmente al Tesoro Público, con el interés de Banco, desde las mismas fechas, las cuotas que han debido abonar para contribuir al pago de las obras de diques, canales, hijuelas y desagües, cantidades que se invertirán en mejoras de las mismas obras, así como también las cuotas que adeudasen las tierras cultivadas y cultivables con derecho de agua, beneficiadas con aquéllas.

Artículo 3: Los terrenos incultos pero con derecho de agua que no hayan abonado las cuotas que le correspondieran para contribuir al pago de las obras de diques, canales, hijuelas y desagües, podrán optar entre renunciar al derecho de agua o pagar aquéllas y si no optaren en el término de sesenta días se tendrá por caducado el derecho.

Artículo 4: El aprovechamiento eventual de agua que acuerda la segunda parte del Art. 29 de la Ley No 386 a los terrenos cultivados clandestinamente en la fecha de la promulgación de esta ley será acordado por el mismo cauce por donde se riega, sin perjuicio de éste o de derechos anteriores.

Artículo 5: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a la misma, quedando derogada cualquier otra en la parte que se le

opusiera.

Artículo 6: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY N° 430

Artículo 1: Las peticiones de aprovechamiento de agua del dominio público de los ríos y arroyos de la Provincia para cultivo de tierras serán resueltas, en cada caso, de conformidad a las disposiciones de la presente ley, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo las remitirá a la Honorable Legislatura con todos los antecedentes e informes técnicos y administrativos correspondientes.

Las solicitudes sobre aprovechamiento de agua de desagües y sobrantes de canales, serán resueltas por el Poder Ejecutivo, aplicándoseles las disposiciones concernientes de esta ley y las demás sobre la materia, en cuanto no se opusieren a la presente.

Artículo 2: Toda concesión de agua de los ríos Mendoza y Tunuyán, arriba de los diques distribuidores actuales y sin servirse de éstos, deberá ser sancionada por el voto de las tres cuartas partes de los miembros que componen cada Cámara; por dos tercios de los mismos cuando se tratare de concesiones arriba de los diques proyectados en los ríos Diamante, Atuel y Tunuyán, a la altura de Santa Rosa, y en el Mendoza arriba de Palmira; y por dos tercios de los miembros presentes, cuando se tratare de concesiones aguas abajo de Palmira y del dique proyectado en Santa Rosa.

Artículo 3: Las concesiones que se otorguen tendrán siempre el carácter de eventual y sólo se convertirán en definitivas una vez llenadas la condiciones que esta ley establece, sin responsabilidad para la Provincia y sin perjudicar los derechos de tercero determinados por las leyes es generales vigentes sobre la materia.

Artículo 4: Toda concesión de aprovechamiento de agua lleva consigo la obligación de donar a la Provincia cinco hectáreas de tierra por cada quinientas hectáreas sobre las cuales se acuerde aquélla. Las fracciones de doscientas cincuenta hectáreas arriba se computarán como entero y para las que no llegaren a esa cifra la donación será de dos hectáreas. Las concesiones por una

extensión menor de cien hectáreas, quedan exoneradas de la obligación referida.

Dentro de los sesenta días de acordado el derecho de agua, el concesionario transferirá a la Provincia el dominio de las tierras que corresponda, según lo dispuesto anteriormente, cuya ubicación determinará el Poder Ejecutivo en conjunto o por fracciones, como lo estime conveniente, con obligación, por parte de aquél, de construir, sin cargo alguno para el Estado, las canalizaciones necesarias hasta llegar al límite de su propiedad con la fiscal a fin de que ésta aproveche la irrigación.

Artículo 5: Toda concesión de riego se cumplirá totalmente dentro de los cinco años de la fecha de la promulgación de la ley respectiva, debiendo abonarse durante ese tiempo un peso moneda nacional por cada hectárea de tierra sobre las cuales se haya concedido el derecho, cuyo pago se hará por cuotas iguales al finalizar cada año de la concesión y aun cuando no hubiese hecho uso de aquel derecho en cualquier extensión.

Si las nuevas concesiones se otorgasen para una extensión mayor de diez mil hectáreas, el plazo fijado anteriormente se aumentará a razón de un año por cada cinco mil hectáreas o fracción que pase de mil. Si la concesión se otorgase para una extensión mayor de treinta mil hectáreas, el plazo máximo no excederá de diez años, y en estos casos el impuesto fijado en el párrafo anterior y en el Art, 6o será del doble.

Cuando se solicitase concesión de agua proveniente de diques cuya construcción hubiese sido autorizada a la fecha de la sanción de la ley que la concede, el plazo para cumplirla empezará a contarse desde el día en que sea entregado al servicio público.

Artículo 6: Vencido el término fijado en el artículo anterior caducará de hecho la concesión por las hectáreas que no hubiesen sido cultivadas y se hará efectiva una multa de cinco pesos moneda nacional por cada una de esas hectáreas, dentro de los diez días siguientes de expirado el plazo. No se admitirá excusas ni

motivo alguno en contrario de lo dispuesto anteriormente, ni se recibirá ni dará trámite a ninguna solicitud o exposición a ese respecto, y cualquier proyecto que se presentase a la Legislatura sobre la materia de este artículo, sólo podrá considerarse por el voto de tres cuartas partes de los miembros que componen cada Cámara.

La caducidad y multa referidas no comprenderán a las tierras de que trata el Art. 4o mientras estuviesen bajo el dominio del Estado, pero si éste transfiere su propiedad, se regirán por las disposiciones de la presente ley.

Artículo 7: Se entiende que un terreno está cultivado, a los efectos de esta ley, siempre que estuviese desmontado, nivelado y con las canalizaciones en servicio necesarias para irrigarlo y se encontrase sembrado, o con viña, o con plantaciones de árboles en no menor cantidad de cien por hectárea, a las distancias convenientes.

Artículo 8: Toda petición o proyecto de prórroga del término para cumplir una concesión otorgada en virtud de la presente ley será considerada como una nueva solicitud, a los efectos de las disposiciones que la misma establece.

Artículo 9: Las concesiones definitivas o eventuales, otorgadas con anterioridad a esta ley, se regirán por las que les hubiesen dado origen y por las números 386, 402 y la presente, en cuanto fijan reglas de carácter general, pero si se solicitase prórroga del término para cumplirse o nueva concesión de agua para tierra que hubiese tenido derecho de aprovechamiento, no cumplido en todo o en parte, y cualquiera que fuese la ley que lo acordó, se procederá de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, con excepción del gravamen establecido por el Art. 5, que será de diez pesos por hectárea, no aplicándose el Art. 4 si en la concesión de origen hubiera sido incluida una análoga.

Artículo 10: Mientras no se verifique el aforo de los ríos y arroyos y se determine la cantidad de agua que corresponde por hectárea, según la naturaleza del terreno y clase de cultivos existentes legalmente a la fecha de esta ley, las tierras que se cultivasen de acuerdo con las disposiciones de la

presente, conservarán su carácter de riego eventual y sólo se hará el empadronamiento con derecho definitivo una vez verificadas las operaciones referidas y hasta la cantidad de agua que resultase disponible, continuando como eventuales las restantes.

Artículo 11: A los efectos del artículo precedente, al finalizar cada año se hará el denuncio de las tierras que se hubiesen cultivado durante el transcurso de éste, tanto en virtud de concesiones otorgadas de acuerdo con la presente ley, como de las permanentes y eventuales concedidas por otras anteriores. Este denuncio da preferencia de empadronamiento con derecho definitivo de irrigación, aun cuando las tierras denunciadas tuviesen una concesión de riego de fecha posterior a otras aún en vigencia, pero si hubiese concurrencia de dos o más denuncios por el mismo río o arroyo, la anotación de prioridad se hará dando preferencia por el orden de fecha de la respectiva concesión.

Artículo 12: El empadronamiento con derecho definitivo de irrigación de las tierras cultivadas o cultivables a que se refieren las Leyes N° 386 y 402, se regirán por las disposiciones de los dos artículos anteriores, pero para que aquél se verifique deberá abonarse previamente el derecho establecido por el Art. 5 de la presente.

Artículo 13: El derecho de agua de concesiones que caducaren en todo o en parte, cualquiera que sea la ley, resolución o decreto que las hubiese autorizado, beneficia a los que le sigan por orden de fecha Con relación a lo dispuesto en la segunda parte del Art. 11 de la presente ley, y a este objeto, si se acordase nuevo derecho, se tomarán en cuenta la fecha de éste y no la de la concesión anterior.

Artículo 14: Las obligaciones impuestas por esta ley, pesan sobre toda la tierra en favor de la cual se acuerda el derecho de irrigación y las seguirán a objeto de hacerse efectivas en ella.

Artículo 15: Dentro de los sesenta días de promulgada la ley que concede un derecho de irrigación, el concesionario suscribirá el respectivo contrato aceptando las condiciones establecidas en ella y en esa oportunidad podrá

disminuir la extensión del terreno a irrigar y, consiguientemente, la del derecho de agua acordado, lo que se hará constar y se tendrá como no concedido por esa parte a los efectos de la concesión y de las disposiciones correlativas de esta ley.

Desde la fecha del contrato deberá abonarse la prorrata destinada a cubrir los gastos de la Superintendencia General de Irrigación, de acuerdo con la cuota que anualmente se fije a ese objeto, con excepción de los terrenos fiscales a que se refiere el Art. 4. La Superintendencia deberá someter anualmente, por intermedio del Poder Ejecutivo, a la aprobación de la Legislatura, antes de la clausura del período ordinario de sesiones, su presupuesto de recursos y gastos para el año siguiente.

Artículo 16: Las concesiones que se otorgasen en virtud de esta ley, caducarán por las causas enumeradas en las generales sobre la materia, o por falta de cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente.

Artículo 17: Podrá privarse temporariamente del uso del agua a los interesados cuyo derecho haya sido concedido de acuerdo con la presente ley o en cualquiera otra anterior, por las causas enumeradas en las leyes generales de la materia y, además, cuando los concesionarios, para fines agrícolas o industriales, hicieren obras de mampostería, ribazos, malecones, terraplenes o paredes que interrumpan el curso natural de las aguas de los canales, hijuelas y desagües o produzcan su estancamiento y filtraciones.

La privación durará hasta tanto se ejecuten por los causantes los acueductos y obras necesarias para dar libre paso a las aguas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a que hubiere lugar.

Artículo 18: El que después de promulgada la presente ley, cultivase o irrigase tierra sin concesión de aprovechamiento de agua, será privado del uso indebido de ésta y abonará una multa de doscientos pesos moneda nacional por cada hectárea, a beneficio de la instrucción primaria; el duplo, con interés de Banco, desde la fecha de esta ley, del importe proporcional por hectárea que corresponda al pago de las obras de diques, canales, hijuelas y desagües, que se

aplicará a mejora de las mismas, así como el duplo, con el mismo interés y desde la misma fecha, de los derechos correspondientes, a favor de la Superintendencia General de Irrigación.

Las cantidades anteriores serán recargadas con un cincuenta por ciento (50%), que se adjudicará al que descubra o denuncie el fraude y se harán efectivas por la vía de apremio, sin que los jueces puedan trabar el procedimiento ni admitir excepción alguna previa al pago,tanto en la infracción de este artículo como a los regantes clandestinos a que se refieren las Leyes N° 386 y 402.

Es entendido que no se comprende en la disposición de este artículo los terrenos que se cultiven con aguas propias o sea con las que nacen y mueren dentro de la propiedad.

Artículo 19: Los que se encontrasen comprendidos en el artículo anterior, y después de cumplido lo que él dispone, podrán solicitar aprovechamiento de agua de la Honorable Legislatura para el terreno referido y se procederá a su respecto como lo establece la presente ley.

Artículo 20[4]: Cada hectárea de tierra con derecho de aprovechamiento de agua acordado con anterioridad a la presente ley o que se concediese en adelante, abonará una cuota anual de treinta centavos moneda nacional, que se invertirá exclusivamente en los gastos que demande la verificación del aforo de los ríos y el estudio de las tierras y cantidad de agua con que deben irrigarse, según lo dispuesto en esta ley y en las números 386 y 402.

Se llevará cuenta especial, para cada arroyo o río, de entradas y gastos, y una vez que se hayan terminado, respectivamente, las operaciones mencionadas, cesará el cobro de las cuotas referidas, pero se harán efectivas para las nuevas

[4] Ley N° 688
Artículo 1: Autorízase al Poder Ejecutivo de la Provincia para traspasar a los fondos de la Ley N° 393, de Puentes y Caminos, la cantidad de 200.000 pesos de los valores en efectivo de que dispone la Ley N° 430, procedentes del impuesto establecido por el Art. 20.
Artículo 2: Suspéndase desde el corriente año los efectos del citado Art. 20 de la Ley N° 430.
Artículo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

concesiones que se otorgaren y en ese caso su importe se aplicará a mejoras en las obras generales por donde Correspondiese el riego.

Artículo 21: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, quedando derogadas las disposiciones de otras anteriores en cuanto se le opongan.

Artículo 22: Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley serán cubiertos con los recursos de la misma e imputados a ella.

Artículo 23: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY N° 1.920

Artículo 1: El uso de agua pública en los fines de la agricultura, será permitido exclusivamente para el cultivo de los predios particulares beneficiados con la concesión de riego, y solamente hasta la Superficie indicada en el respectivo otorgamiento, de conformidad a lo que establecen los Artículo 240 y 241 de la Constitución de la Provincia, y con sujeción a las leyes y reglamentaciones de la materia.

Declárense sin valor ni efecto alguno desde la fecha de su expedición, todas las disposiciones del Decreto-Acuerdo N° 862-E-1945, dictado por la Intervención Federal de la Provincia, en fecha 18 de junio de 1945; déjense sin valor los denuncios, permisos de riego y demás actos que se hayan realizado en virtud de ese decreto acuerdo.

Artículo 2: Serán considerados clandestinos e ilegítimos los cultivos realizados con aguas del dominio público, en los casos siguientes:

a) En inmuebles que no tuvieren otorgada con anterioridad concesión legítima de aprovechamiento de agua para regadío, cualquiera fuere la forma de sustracción o derivación del agua;

b) En inmuebles en mayor superficie a la expresada en la respectiva concesión de riego, o mayor al derecho legalmente empadronado en los registros oficiales del Departamento de Irrigación;

c) El uso de agua proveniente de arroyos, vertientes o cualquier otra fuente, sean o no tributarios o afluentes de los ríos, cuyas aguas hayan estado y estén bajo el dominio público de la Provincia; y se aprovecharen sin otorgamiento legítimo, como aguas del dominio privado. Igualmente, el uso de aguas de tales procedencias, que hayan sido anteriormente del dominio privado y hoy correspondieran al dominio público, cuando se aprovecharen sin existir título o derecho anterior legítimos sobre las mismas y no se ostente tampoco un otorgamiento público;

d) Los cultivos hechos con dotaciones mayores a las que hubieren correspondido, obtenidas mediante fraccionamiento ficticio de los inmuebles y de los derechos de agua, en cuanto la superficie cultivada exceda de la superficie beneficiada con el primitivo derecho objeto del fraccionamiento. En los fraccionamientos reales, los excesos de cultivos contenidos en cada parcela, quedarán comprendidos en el inciso b) de este artículo;

e) Los casos de concesión de desagües, cuando en lugar de haber sido empleada el agua de desagüe concedida, se hubiere realizado el cultivo con aguas vivas, derivadas de los ríos o arroyos públicos o de los cauces de distribución de aguas vivas;

f) Igualmente, los casos de concesión de sobrantes de ríos, canales e hijuelas, cuando los cultivos se hubieren realizado compartiéndose indebidamente las dotaciones originarias destinadas a los regantes legítimos, y directos, al derivar directamente el agua del cauce común de riego que utilizaren esos regantes y con perjuicio de los mismos;

g) El empleo de una parte o de la totalidad del derecho de agua que corresponde a determinado inmueble, en un inmueble distinto y sin derecho de agua, o con derecho para menor superficie a la de los cultivos, aunque no existiere perjuicio para terceros y aunque la parte cultivada no excediere al derecho de agua empadronado para ambas propiedades;

h) En general, toda maniobra o abuso del que resulta un aprovechamiento de aguas públicas sin otorgamiento legítimo; o un cultivo efectuado con esas aguas, en inmueble distinto al beneficiado o en superficie mayor a la concedida o empadronada.

Artículo 3: Queda prohibido el suministro de aguas públicas o la realización de cultivos con esas aguas en inmuebles que carezcan de derecho de regadío o en los cuales concurran las circunstancias del artículo anterior. Se exceptúan de esta prohibición los inmuebles que, por acogimiento y cumplimiento de sus propietarios a las exigencias de esta ley, quedan comprendidos en su beneficio.

Los cultivos clandestinos o ilegítimos que se pretendiera mantener o efectuar en el futuro, incurrirán en las penalidades que esta ley establece, sin perjuicio de que sus autores y cómplices puedan quedar sometidos a la acción de la justicia competente.

Las autoridades superiores del Departamento de Irrigación, las autoridades de cauces y, en general, toda autoridad de riego, quedan obligadas a adoptar las medidas necesarias para que el agua pública sea empleada, utilizada y distribuida exclusivamente en forma equitativa y proporcional, en favor de los regantes legítimos y no para mantener cultivos clandestinos o ilegítimos, bajo pena de incurrir en las sanciones que luego se determinan. A tales fines, las autoridades y reparticiones de la Provincia están obligadas a prestar a las autoridades de riego la cooperación legal que les sea requerida; y los jueces expedirán, cuando así se les requiera, órdenes de allanamiento o para el auxilio de fuerza pública, en los casos en que exista presunción fundada de uso indebido de agua.

Artículo 4: El Departamento de Irrigación propenderá a implantar un sistema de encadenamiento de desagües y aguas sobrantes no otorgadas en concesión o permiso para que sirvan de refuerzo natural a cauces públicos o concesiones administrativas de regadío, con el fin de uniformar y regularizar las dotaciones particulares, conforme a la categoría de los derechos, sin lesionar derechos de terceros y en cuanto la ello técnicamente posible.

El suministro del agua pública se hará conforme a la superficie empadronada del derecho de agua, según categoría y con las eventualidades naturales de los caudales disponibles; y en las fracciones menores a una hectárea, se hará por la superficie en metros que corresponda, sin perjuicio de que la hectárea sirva de unidad y base en la distribución de los tributos de riego.

Artículo 5: No se autorizará el fraccionamiento del derecho de agua cuando se disperse arbitrariamente en una superficie mayor del inmueble, sin relación a su normal aprovechamiento; y cuando corresponda autorizar la división del derecho de agua, se adoptarán las medidas técnicas que correspondan para

evitar el logro de mayores dotaciones de agua que las del primitivo derecho, y para impedir la realización cultivos clandestinos o ilegítimos.

Las subdivisiones del derecho de agua, practicadas en legal forma, incorporan ese derecho a la fracción de inmueble, en forma inseparable.

Artículo 6: El Departamento General de Irrigación llevará el registro oficial de aguas del dominio privado, de las existentes en la Provincia, donde se inscribirán los títulos legales que los propietarios regantes acrediten en debida forma, a los efectos de que esa Repartición ejercite el poder de policía que le corresponda sobre esas aguas y su aprovechamiento. Tal empadronamiento será voluntario solamente para aquel propietario que, conforme a su derecho, usare las aguas privadas de que se trate, en forma exclusiva y mientras mantenga legalmente esa situación.

El citado Departamento dispondrá la revisión de los empadronamientos existentes, de aguas del dominio privado, a fin de verificar en cada caso la procedencia y legitimidad del registro, conforme a los antecedentes del mismo o a los títulos y derechos que invoquen los interesados. Aun cuando se juzgare actualmente que determinados cursos no corresponden a la categoría de aguas del dominio privado, serán respetados los empadronamientos existentes y los usos que se hagan en esa calidad, siempre que el registro originario hubiere sido practicado en forma regular por constar oficialmente ordenada esa inscripción y tenga el mismo una antigüedad no menor a treinta años a la fecha de vigencia de esta ley. En este supuesto, el registro subsistirá y el uso será respetado, hasta la superficie realmente cultivada que cada propietario acredite poseer a la fecha de vigencia de esta ley, en el inmueble respectivo

Todo nuevo empadronamiento de aguas de dominio privado, y toda cuestión que se suscite respecto a la procedencia y legitimidad inscripción, serán sustanciados con intervención del Fiscal de Estado.

Queda establecido que los empadronamientos existentes o practicaran en el futuro, sólo determinan la procedencia forma título emanado del derecho

privado, relativo a las aguas de que trate, sin que ello importe resolver en forma definitiva sobre la naturaleza pública o privada de las mismas, lo que será revisible en cualquier oportunidad o podrá ser cuestionado por el afectado ante la autoridad judicial competente.

Artículo 7: Los beneficios que acuerda esta ley, para regular situación de los cultivos clandestinos o ilegítimos de carácter permanente, a que se refiere el artículo siguiente, quedan limitados a las superficies reales, cultivadas que el interesado acredite poseer y cuando los cultivos reúnan los siguientes extremos:

a) Que los cultivos signifiquen una mejora definitiva incorporada al predio y una riqueza económica ya acumulada;
b) Que esos cultivos hubieren sido mantenidos hasta el presente y se encuentren en general en buen estado;
c) Que los cultivos estén distribuidos en el terreno en forma normal de plantación y no por hileras o grupos aislados.

Artículo 8: Los cultivos beneficiados por esta ley son exclusivamente los siguientes, salvo lo dispuesto en los Artículos 14, 15 y 16:

a) Plantaciones en montes forestales de especies arbóreas (álamos, sauces, olmos u otras especies) cuando tengan un mínimo de un mil plantas por hectárea, distribuidas normalmente en el terreno, con una antigüedad de plantación en el mismo y de cultivo no menor a tres años anteriores a la vigencia de la actual Constitución de la Provincia;
b) Montes de árboles frutales (durazneros, ciruelos o ciroleros, perales y otras especies arbóreas), de igual antigüedad de plantación y cultivo, con un mínimo de ciento cincuenta plantas distribuidas por hectárea. Cuando se trate de nogales, el mínimo será de veinte plantas por hectárea; y cuando se trate de olivos, el mínimo de sesenta plantas por hectárea, distribuidas en el terreno.

En los casos de plantaciones intercaladas, se atenderá, para fijar el mínimo, el del cultivo principal o que abarque mayor superficie, en relación a cada hectárea denunciada.

c) Viña que a la fecha del denuncio esté plantada en forma uniforme (viña baja, espaldera o parral) y que el porcentaje de fallas no sea superior al veinte por ciento; y de una antigüedad de plantación y de radicación en el inmueble, no menor de tres años, computados en la forma dicha.

Artículo 9: Concédase, sin perjuicio de terceros y de otorgamientos Existentes, derecho eventual de riego, de aguas vivas o de desagües, según sean las utilizadas, en favor de los inmuebles donde ubiquen los cultivos a que se refieren los Artículo 7o y 8o de esta ley y hasta la superficie real cultivada existente en esas condiciones, siempre que sus propietarios se acojan expresamente y en tiempo a este beneficio y cumplan Con las cargas, pagos y condiciones que esta ley impone para tal otorgamiento.

Este derecho de agua se entenderá concedido con arreglo a las disposiciones constitucionales y legales de la materia; y será empadronado en el cauce que ha sido utilizado para la realización de los cultivos denunciados, mediante las obras que disponga la autoridad competente, con arreglo al Artículo 24 de esta ley.

Si la propiedad denunciada tuviere derecho de agua en menor superficie a la de los cultivos existentes, se aplicará y ubicará previamente el derecho de agua empadronado en la Zona de los cultivos permanentes, de los determinados en el Artículo 8 y sólo si existiere demasía de tales cultivos permanentes, podrán éstos, en el exceso, quedar beneficiados con el otorgamiento a que se refiere el presente artículo.

Artículo 10: Los otorgamientos de derechos de agua y empadronamiento de los mismos, que se efectúen en virtud del Artículo 9, están expresamente sujetos e ineludiblemente condicionados al pago de los tributos que se aforen conforme a la clasificación que se detalla en el presente artículo, con los aumentos o disminuciones que correspondan la aplicación de los Artículo 11 y 12. En esos

tributos la fracción menor una hectárea abonará en proporción a su superficie real.

Inciso 1: Cultivos exclusivos de viña o intercalados en que predomine la viña:

- **a)** Los efectuados con aguas vivas procedentes de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel, abonarán la suma de SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($6.000 m/n.) por cada hectárea que se declare comprendida en esos beneficios;
- **b)** Los efectuados con aguas vivas derivadas de arroyos, vertientes u otras fuentes, tributarios o afluentes de esos grandes ríos citados, abonarán la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($4.500 m/n.) por cada hectárea que se declare comprendida en esos beneficios;
- **c)** Los efectuados con aguas procedentes de arroyos, desagües, ciénagas, drenajes, vertientes u otras fuentes no tributarias de esos ríos, TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($3.000 m/n.) por cada hectárea.

Inciso 2: Cultivos de frutales, olivos, nogales o los intercalados donde éstos predominen: Estos cultivos pagarán las dos terceras partes de los tributos fijados en el inciso anterior, según sean las aguas utilizadas.

Inciso 3: Forestales: Estos cultivos abonarán la mitad de los derechos aforados conforme al inciso 1 de este artículo.

Cuando las aguas utilizadas en los cultivos a que se refiere este artículo fueren de los mencionados en el apartado c) del inciso 1, el derecho deberá ser empadronado conforme a la categoría de esas aguas utilizadas.

Artículo 11: Cuando la superficie que resulte beneficiada con el derecho de agua exceda de diez hectáreas, se aplicarán, además de los tributos fijados en el Artículo 10, las siguientes sobretasas:

- **a)** Por la superficie que exceda de 10 hectáreas y hasta 20 hectáreas, el 20% más;

b) Sobre lo que exceda de 20 hectáreas y hasta 30 hectáreas, el 30% más;

c) Sobre lo que exceda de 30 hectáreas y hasta 40 hectáreas, el 40% más;

d) Sobre lo que exceda de 40 hectáreas en adelante, el 50% más.

A los efectos de la aplicación de estas sobretasas, se considerará un solo inmueble el que existía al 10 de marzo de 1949, aunque con posterioridad se hubiere subdividido; y el monto total de tributos y sobretasas, en el caso de subdivisión, será soportado proporcionalmente por los nuevos propietarios, en relación al derecho de agua que a cada uno se le acuerde.

Artículo 12: Cuando la superficie que resulte beneficiada con los derechos a que se refiere el Artículo 9 fuere menor de diez hectáreas aplicarán los tributos establecidos en el Artículo 10, con una reducción del cinco por ciento sobre cada hectárea que faltare para completar superficie.

Si el beneficio fuere de nueve hectáreas y fracción, o si fuere de diez hectáreas, se aplicarán los aforos del Artículo 10, sin aumentos, ni reducciones, computándose tales superficies con arreglo a cada inmueble, existente a la fecha indicada en el artículo anterior.

Artículo 13: Se exceptúan los casos comprendidos en los incisos c) y f) del Artículo 2, cuyos cultivos serán gravados únicamente con la mitad de los tributos fijados en el Artículo 10, según sean las aguas vivas utilizadas.

En estos casos, el derecho eventual de aguas concedido lo será de aguas vivas y se empadronará directamente en el cauce utilizado; deberá, simultáneamente, eliminarse las anteriores concesiones de sobrantes y desagües, en las superficies que queden beneficiadas con esta nueva concesión de riego.

Artículo 14: En el caso del inciso g) del Artículo 2, de haberse utilizado el derecho de agua en inmuebles distintos del beneficiado con la concesión de riego, podrá solicitarse la ubicación y empadronamiento del mismo derecho de agua, sin variar su categoría, ni ampliar la superficie de la concesión, en el

inmueble que ha sido objeto de los cultivos, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que ambas propiedades pertenezcan actualmente al dominio exclusivo del mismo propietario, con una antelación en el dominio de ambos inmuebles por lo menos de tres años anteriores a la vigencia de esta ley;

b) Que ambos inmuebles sean colindantes o ubiquen ambos en el mismo distrito departamental o en distritos colindantes;

c) Que el inmueble cultivado se riegue y pueda regarse por el mismo cauce menor de regadío donde se registra inscripta la concesión de riego, en los padrones parciales y no cuando fuere menester el traspaso a otro cauce;

d) Que no se derive perjuicio en forma particular para los demás regantes.

La ubicación y empadronamiento solicitado podrá acordarse respecto de toda la superficie cultivada que se constate existir y que no exceda el derecho de agua cuando sean los cultivos permanentes y de una antigüedad de cuatro años, por lo menos, anteriores a la vigencia de esta ley. Simultáneamente deberá eliminarse del inmueble originariamente beneficiado el todo o la parte del derecho de agua que se empadrone y ubique en el otro inmueble cultivado.

De estas mutaciones sobre ubicación del derecho de agua deberá tomarse nota marginal en los asientos del dominio de los inmuebles afectados, a cuyo efecto las actuaciones administrativas serán oportunamente enviadas, a ese fin, al Registro de la Propiedad Inmueble.

Las ubicaciones y empadronamientos a que se refiere el presente artículo estarán gravadas solamente con un tributo pagadero al contado de DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($200 m/n.) por hectárea o fracción que se declare comprendida en estos beneficios, salvo que hubiere exceso de cultivos, en relación al derecho de agua existente, en cuyo caso el exceso estará sometido a las reglas pertinentes de esta ley.

Artículo 15: En el caso del inciso h) del Artículo 2, cuando la maniobra se haya consumado mediante empadronamiento en los registros de riego, sin mediar concesión legítima, quedará subsistente una concesión en la categoría que luego se determina, por la superficie real de cultivos permanentes que se demuestre existir hasta el día de vigencia de la actual Constitución de la Provincia, mantenidos en forma ininterrumpida, en las condiciones del Artículo 7, siempre que se cumplieren y reunieren, además, los siguientes extremos:

a) Que el empadronamiento ilegítimo haya quedado registrado en los padrones oficiales, general y parcial de riego, con anterioridad a 1930 y tal empadronamiento hubiere subsistido sin interrupción hasta la fecha de vigencia de la actual Constitución de la Provincia;

b) Que el Departamento de Irrigación hubiere expedido certificados de riego sobre el mismo, haciendo incurrir en error a terceros, adquirentes de buena fe, respecto a la legitimidad y existencia del derecho de agua certificado;

c) Que se hayan pagado en forma normal, durante ese transcurso los tributos y cargas de irrigación;

d) Que conste tasado oficialmente el inmueble, en base de derecho de agua, objeto del empadronamiento ilegítimo, a los efectos del pago de Contribución Directa; y éste haya sido pagado en relación a tal avalúo;

e) Que el inmueble a beneficiar pertenezca en propiedad a terceros, adquirentes de buena fe, limitándose el beneficio de la concesión a la superficie que, en las condiciones de esta ley, pertenezcan a esos terceros;

f) Que la inscripción de dominio en favor de terceros de buena fe y sucesores en igual condición, en el Registro de la Propiedad sea anterior a la vigencia de la Constitución de la Provincia.

En caso que el empadronamiento ilegítimo constare registrado derecho definitivo de agua, tal categoría será reemplazada por la de derecho eventual; y si constare registrada como derecho eventual o de concesión de sobrantes o

desagües, quedará subsistente en la misma categoría empadronada, en la medida y condiciones anteriormente establecidas.

Los empadronamientos fundados en la causal a que se refiere el artículo, abonarán un tributo de DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($200 m/n.), por hectárea o fracción beneficiada.

No podrá optar por este beneficio el propietario en cuyo favor se hubiere hecho originariamente el empadronamiento ilegítimo, aunque lo hubiere readquirido de terceros de buena fe.

Artículo 16: Concédase derecho eventual de regadío, a ser su empadronado por el cauce que hubieren utilizado los interesados y hasta un máximo de CINCO HECTÁREAS por persona beneficiada y por predio, en favor de los inmuebles que sin tener derecho de riego, hayan sido cultivados en forma ininterrumpida con cultivos de chacra, o intercalados éstos con huerta o potreros, siempre que los propietarios de esos inmuebles acrediten además, los siguientes extremos:

a) Que trabajen personalmente esa tierra o lo hagan con sus familiares;
b) Que no sean dueños de otro inmueble, beneficiados con derecho de agua;
c) Que ese predio a beneficiar no tenga derecho de agua alguno, o lo tenga en menor superficie a la de cinco hectáreas. En este último supuesto, el nuevo otorgamiento que concede la presente disposición, lo será solamente para completar esa superficie de cinco hectáreas;
d) Que se comprometan durante cinco años, a dedicar la tierra beneficiada, a cultivos de chacra.

Este otorgamiento está sujeto al pago de un tributo único de DOSCIENTOS PESOS por hectárea o fracción de hectárea beneficiada.

Artículo 17: El pago de los derechos que han quedado establecidos en los artículos anteriores, es condición ineludible para el acogimiento, reconocimiento y empadronamiento de los derechos de agua en la forma

autorizada. La falta de pago, la reserva en el pago, cualquier cuestión que se plantee respecto a la obligatoriedad del pago de los tributos que se liquiden conforme a esta ley, así como todo acto que no importe el pago liso y llano o el reconocimiento liso y llano de la exigibilidad de estos tributos producirá en cualquier tiempo la caducidad del beneficio y del empadronamiento.

El pago deberá hacerse al contado, antes de todo empadronamiento. En los casos de los Artículo 10, 11, 12 y 13 podrá el propietario optar por hacerlo en cinco cuotas iguales, la primera a ingresar antes del empadronamiento del derecho; y las cuatro restantes, a uno, dos, tres y cuatro años de plazo con más el interés anual, pagadero juntamente con cada cuota, del ocho por ciento, pudiendo el deudor cancelarlas antes de su vencimiento, con los intereses liquidados hasta el día de su efectivo pago.

La falta de pago de una sola cuota podrá producir la caducidad del otorgamiento y la cancelación de todo empadronamiento, pudiendo optar el Poder Ejecutivo, en caso de mora -que se producirá por el simple vencimiento de los plazos- entre declarar esa caducidad o exigir el pago de las cuotas, con más un interés punitivo del doce por ciento anual.

En los casos de transmisión del dominio por título universal o singular, constitución de derechos reales, ventas voluntarias o por ejecución forzada y en general, en cualquier acto que implique una modificación al derecho de propiedad, estos tributos deberán ser previamente cancelados en su integridad, no estando sujetos a división, so pena de caducidad de los beneficios acordados y empadronamientos producidos, salvo que el nuevo adquirente se haga expresamente cargo de su pago, haciéndose constar así en la escritura o acto de trasmisión, o declaren en otro caso, de previo y preferente abono a toda otra obligación.

Artículo 18: El cumplimiento, con respecto al pago en las formas indicadas deberá efectuarse dentro del término de tres meses de haber aceptado el acogimiento del propietario a los respectivos beneficios de esta ley, bajo sanción

de quedar sin efecto el pedido y trámite realizados. El Poder Ejecutivo, en casos especiales, podrá ampliar este término.

En caso de haberse optado por los pagos a plazos, la declaración del acogimiento y el empadronamiento del derecho serán provisorios hasta que se ingrese la totalidad del tributo. Si por cualquier causa no pudiera obtenerse el pago voluntario o forzoso, caducará el derecho provisoriamente acordado y será cancelado el empadronamiento efectuado en ese mismo carácter.

Esos acogimientos y empadronamientos provisorios se harán constar en registros especiales, para incorporarse a los registros y padrones definitivos de riego, una vez cancelada la deuda en su integridad y en los certificados de riego que se expidan se hará constar esa inscripción provisoria.

Artículo 19: A partir de la publicación de esta ley, fíjase un plazo improrrogable de seis meses para que los propietarios interesados formulen los respectivos denuncios de cultivos clandestinos o ilegítimos, en presentaciones individuales y separadas para cada inmueble a los efectos de acogerse expresamente a los beneficios y someterse en n todo inicialmente, a las exigencias y condiciones que impone esta ley y las que fije su reglamentación, bajo sanción de caducidad del denuncio.

Los denuncios se tramitarán ante el Departamento de Irrigación, que hará producir los informes pertinentes y ordenará, por cuenta exclusiva del interesado, la certificación de cultivos y levantamientos de planos. Ese Departamento formará un registro de profesionales, sean o no dependientes de la Administración Pública, de Ingenieros Agrimensores, Ingenieros Agrónomos y Fruticultores -Enólogos que estén habilitados para tales ejercicios y que soliciten inscribirse.

En cada denuncio, se practicará sorteo, de entre los inscriptos el Registro, para designar los profesionales necesarios, aplicándose en lo pertinente la Ley N° 1.289; y cada profesional designado aceptará el cargo en el expediente y en libro especial, quedando desde entonces sometido a las obligaciones y deberes de los

funcionarios públicos, respecto a las certificaciones que produzcan. El honorario y los gastos del profesional serán exclusivamente a cargo del propietario denunciante, que los depositará en la forma, monto y condiciones que fije el Departamento de Irrigación; pero el honorario sólo será pagadero al profesional sorteado, una vez constatadas sus certificaciones con otros informes oficiales y siempre que no haya existido error manifiesto, culpa inexcusable o malicia.

Los profesionales serán recusables por las causales enumeradas en el Artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles, en lo que fuere pertinente.

El profesional sorteado deberá certificar en el plano y en informe a presentar por separado y duplicado, las circunstancias que cumplan las finalidades informativas al respectivo denuncio de los Artículo 2, 7, 8, 9, 10, 14 y 15.

Tales certificaciones serán luego controladas por las oficinas técnicas del Departamento de Irrigación; y se dará intervención a las autoridades de los cauces que resulten afectados o interesados, y a los regantes legítimos a quienes perjudique en forma particular el denuncio.

Artículo 20: El falso denuncio del propietario podrá hacer caducar su presentación y acogimiento; y la falsedad o error culpable del profesional en las certificaciones, en planos e informes, podrán hacer caducar su derecho a remuneración, sin perjuicio de que estas transgresiones puedan ser sancionadas con multas de UN MIL PESOS ($1.000) MONEDA NACIONAL a CINCO MIL PESOS ($5.000) MONEDA NACIONAL, aplicables por el Tribunal Administrativo de Irrigación, con el recurso que autoriza el Artículo 26 de esta ley. En estos casos el Tribunal podrá ordenar la eliminación del profesional, del Registro citado, sin recurso alguno.

Estas sanciones se aplicarán teniendo en cuenta en cada caso la gravedad del hecho constatado y su influencia respecto a la solución del denuncio; e incurrirán en ellas, en lo que fueren aplicables, los funcionarios y empleados que emitan falsos informes.

Cuando se constatare la comisión presunta de un delito, los antecedentes se enviarán a la justicia de instrucción en lo criminal.

Artículo 21: En cada caso de estos denuncios se expedirá el Tribunal Administrativo del Departamento de Irrigación, con la libertad de apreciación que le confiere el artículo siguiente, declarando o no procedente el acogimiento. Si juzgara que el beneficio no debe ser acordado, su decisión será definitiva, salvo el recurso de reconsideración ante el mismo Tribunal, que se interpondrá y fundará en el término de quince días hábiles, posteriores a la respectiva notificación de la denegatoria.

Las autoridades del Departamento de Irrigación, impulsarán de oficio el trámite de todos los denuncios estando obligado el Tribunal Administrativo a dictar resolución dentro de los sesenta días hábiles de encontrarse el expediente en estado. El retardo reiterado se considerará como mal desempeño de la función y causal de juicio político.

Si juzgara que el denuncio es legítimo, declarará comprendido al interesado en los beneficios respectivos de la ley, ad-referéndum de la aprobación por el Poder Ejecutivo de la Provincia; deberá mediar pronunciamiento favorable de éste, para que el derecho quede reconocido y pueda ser empadronado luego, en forma definitiva o provisoria, según sea la forma de pago de los tributos.

El Poder Ejecutivo deberá expedirse en el término de tres meses de haber recibido el expediente del denuncio y si no lo hiciere dentro de ese plazo, quedará automáticamente confirmada la resolución del Tribunal Administrativo de Irrigación.

Artículo 22: Aunque algunos inmuebles pudieran quedar comprendidos en los beneficios de la presente ley, tanto el Tribunal de Irrigación como el Poder Ejecutivo podrán denegarlos o restringirlos cuando:

a) Juzgue inconveniente el otorgamiento por ser el lugar de difícil o dispendioso contralor administrativo, en cuanto al uso del agua;

b) Perjudique el nuevo otorgamiento el derecho de otros regantes legítimos, por disminuirles en forma particular las dotaciones que les son destinadas, sin poder ser reforzadas o compensadas:

c) La propiedad no puede ser servida con el sistema de riego actual y requiera grandes obras, a emplazar en los ríos o arroyos; o exista imposibilidad física o técnica en el suministro del agua.

La decisión que adopte la Administración en estos casos no podrá ser objeto de acción ni de recurso alguno, salvo el de reconsideración ante la propia autoridad administrativa, en la forma ya establecida.

Artículo 23: Los inmuebles beneficiados quedan sujetos a las leyes y reglamentaciones de la materia sobre el uso del agua; al pago de los gastos de creación o conservación del cauce de que deban servirse y tributos de riego liquidados por el término de diez años; y al pago de obras ejecutadas y en ejecución, pendientes de reembolso.

Los cultivos denunciados serán objeto de avaluación fiscal, para el pago de la Contribución Directa y reembolso al Fisco de los impuestos dejados de abonar.

Esos inmuebles estarán además sujetos a la imposición de servidumbres generales o particulares, para la irrigación y desagües, sin derecho a indemnización y como carga del otorgamiento.

Artículo 24: El uso del agua pública por los beneficiarios de esta ley, será efectuado mediante obras que apruebe y autorice la Superintendencia de Irrigación, en base de proyectos de obras que presenten por su cuenta los interesados, cuyo costo será de cuenta exclusiva de los beneficiarios denunciantes, sin derecho a reembolsos o reintegros, aunque la obra o la reforma del sistema redundara en beneficio de otros regantes legítimos.

La Superintendencia emplazará a los interesados para la ejecución de las obras que juzgue necesarias, bajo sanción de suspenderles el suministro de agua; y, en caso de reiterado incumplimiento, podrá dar por caduco el derecho acordado.

Artículo 25: Salvo los casos comprendidos en los beneficios de la presente ley, deberá cesar de inmediato toda situación de hecho de la que derive un aprovechamiento indebido del agua pública. A tal Efecto, el Departamento de Irrigación, por intermedio de sus autoridades competentes, adoptará las medidas necesarias para privar del suministro de agua y ordenar clausuras y demoliciones de obras.

Los cultivos ilegítimos o clandestinos, a los que no beneficie la presente ley y que se pretenda mantener o ampliar en el futuro, así como do cultivo futuro de esta índole, no podrán ya ser legitimados; y demás de la supresión del agua y de las acciones penales que puedan corresponder, se aplicará a los propietarios de los inmuebles respectivos na multa de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($3.000 m/n.), por cada hectárea que se constate haberse cultivado en forma clandestina o ilegítima. En caso de que el infractor sea autoridad de riego en el cauce donde fuere sustraída el agua, se aplicará el doble de la multa precedentemente establecida y cesará de inmediato en sus funciones.

Incurrirán en multas de UN MIL PESOS ($1.000) a CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($5.000 m/n.), los funcionarios, empleados o autoridades de riego que toleren la sustracción indebida de agua, cuando tuvieran un conocimiento cierto del hecho, sin denunciarlo o sin adoptar las medidas respectivas.

Artículo 26: Esas multas serán aplicadas, con audiencia del afectado, por el Tribunal Administrativo de Irrigación; y se harán efectivas ir la vía de apremio, si no fueren abonadas a los quince (15) días de quedar notificada la resolución administrativa que las imponga. La decisión será recurrible previa consignación del valor de la multa, en efectivo, en el Departamento de Irrigación; y el término para entablar recurso será perentorio de quince (15) días hábiles, de notificada esa resolución, mediante recurso de apelación, que se concederá en el solo efecto devolutivo para ante el Juez competente en lo Criminal. Este recurso se sustanciará en la forma de las apelaciones concedidas libremente, podrá abrirse a prueba el recurso, a pedido del recurrente, por el término de diez (10) días,

dándose intervención al Departamento de Irrigación y al Fiscal de Estado. El fallo que recaiga será inapelable para el presunto infractor.

Se empezará a aplicar estas multas, una vez vencido el término de seis meses que fija el Artículo 19 para efectuar los denuncios.

Artículo 27: Una vez vencido el término de seis meses que fija el Artículo 19 de esta ley, toda persona, sea o no funcionario, que denuncie con antelación a todo procedimientos o conocimiento oficial la existencia de un caso concreto de cultivos clandestinos o ilegítimos, en propiedades que no resulten amparadas por los beneficios de la presente ley o que no hayan sido objeto del oportuno denuncio, tendrá derecho a una participación en el importe de la multa, que fijará y reconocerá en cada caso el Tribunal Administrativo de Irrigación, entre el diez y el treinta por ciento de la suma que en forma definitiva ingrese a la Administración y una vez agotada toda cuestión judicial a su respecto.

Para que ese denuncio pueda ser viable, será esencial que el denunciante, en representación personal identificada, denuncie cada caso por separado, con indicación concreta de nombre, apellido y domicilio del propietario del inmueble; ubicación de la propiedad, en Departamento, Distrito, límites, calles públicas; superficie de la propiedad, en total; derechos de agua que les correspondan, determinando el cauce de riego; superficie total cultivada, clase y superficie de cultivos legítimos e ilegítimos, con datos aproximados; y los demás requisitos que determine el Departamento de Irrigación. Además se hará responsable de los gastos y daños y perjuicios que la denuncia pueda ocasionar, si fuere maliciosa y la administración podrá exigir al denunciante el depósito de la suma necesaria para cubrir gastos de constatación, cuando lo juzgue prudente, bajo sanción de dar por caduco el denuncio y todo pretendido derecho sobre multas. Esos importes depositados le serán reintegrados al denunciante, en caso de declararse procedente el denuncio.

Los denunciantes podrán hacerse parte, como terceros coadyuvantes, en los procedimientos administrativos y judiciales que se formaren, sometiéndose a sus resultados; pero su intervención quedará limitada al impulso del

procedimiento y a la constatación de los cultivos y aplicación de sanciones, sin poder promover cuestiones dilatorias o que obstaculicen el procedimiento.

Caducará todo derecho de los denunciantes a la participación en las multas, si la sanción no fuere procedente, o no pudiere ser aplicada importe de la multa no pudiere hacerse efectivo o no fuere ingresado por cualquier causa; y los denunciantes sólo tendrán derecho a formular reclamos, en el único caso de ingreso definitivo de la multa y de haber prosperado definitivamente su denuncio.

El Tribunal Administrativo de Irrigación podrá imponer a los denunciantes, multas de DOSCIENTOS PESOS ($200) a UN MIL PESOS ($1.000) MONEDA NACIONAL, en caso de haberse obrado con malicia, recurribles, en la forma prevista en el Artículo 26.

Artículo 28: El valor de los tributos fijados en los Artículo 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y el importe de las multas que se aplicaren en virtud de las disposiciones de la presente ley, ingresarán a una cuenta especial, a nombre del Gobierno de la Provincia y del Departamento General de Irrigación, a los fines de invertir su producido en grandes obras de irrigación, según se proyecte y acuerde entre el Poder Ejecutivo de la Provincia y el citado Departamento y lo apruebe oportunamente la ley, pudiéndoseles dar otro destino.

Para la inversión de esos fondos y su aplicación por zona, regirán las normas de los Artículo 39 y 49 de la Ley N° 1.744; y las obras de riego estarán destinadas preferentemente a beneficiar a los regantes de los tramos inferiores de los ríos o a la masa de regantes más afectada por la escasez del agua.

Las obras que sean construidas con estos fondos no serán reembolsables por los regantes que se sirvan de ellas.

Artículo 29: Facúltase al Poder Ejecutivo para que de Rentas Generales y con imputación a la presente ley, entregue al Departamento General de Irrigación, la

suma de TRESCIENTOS MIL PESOS MODA NACIONAL ($300.000 m/n.), con destino al pago de sueldos y gastos que origine el cumplimiento de la misma.

El Departamento General de Irrigación nombrará el personal necesario y pondrá en ejecución las disposiciones de la presente ley.

De los fondos que se recauden en virtud de esta ley, se reintegrará a Rentas Generales la cantidad autorizada a invertir por este artículo.

Artículo 30: Los regantes que utilicen aguas procedentes de los ríos identificados en el Artículo 257 de la Constitución Provincial, deberán presentar al Departamento General de Irrigación, dentro del término de un año a contar desde el de vigencia de esta ley, denunciando los cultivos realizados y solicitando el otorgamiento del derecho de agua.

El Departamento General de Irrigación podrá otorgar en estos casos, permisos precarios de usos, subordinados a lo que disponga la ley, mientras se sustancie la respectiva concesión.

Artículo 31: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY N° 2.605

Artículo 1: Concédase derecho definitivo de agua para res los inmuebles fiscales cuyo número, ubicación y límites se indicana continuación y figuran en el mapa de la Dirección de Tierras Fiscales de la Provincia que se anexa como parte integrante del texto de la presente ley.

N° Inmueble	N° Insc. Dirección de Rentas	Departamento	Distrito	Límites	Superficie en ha	
					Total del inmueble	Para lo que se otorga concesión
24	703/124	S. Rafael	Monte Coman	N. Río Diamante S. Alfredo Israel E. Suc. Diego Alvear O. Alfredo Israel	900	900
24	703/124	S. Rafael	La Llave	N. Río Diamante S. Río Atuel y Alfredo Israel E. Elisa Alvear de Bosch y lote fiscal	70.687	70.687
37	1721/314	Malargüe	Río Grande S.	N. Lote IV sec. 6 S. Lote III sec. 6 E. Lote V sec. 5 O. Lote III sec. 6	37.648	450
37´	1700/293	Malargüe	Río Grande	N. Lote II sec. 5 S. Lote V sec. 5 E. Lotes II y V sec. 5 O. Río Grande	1.250	150
38	1691/78	Malargüe	Río Grande	N. Lote V sec. 5 S. Lote VIII sec. 5 E. Lote VI sec. 6 O. Río Grande	30.503	450
38´	1701/294	Malargüe	Río Grande	N. Lote V sec. 5 S. Ídem E. Ídem O. Lote V sec. 6	1.250	150
41	1697/85	Malargüe	Río Grande	N. Lote VII sec. 5 S. Ídem E. Lote II sec. 3	37.015	300

				O. Río Grande		
42	1685/51	Malargüe	Río Barrancas	N. Lote III sec. 6 S. Río Barrancas E. Lote VI sec. 6 O. Lote VIII sec. 6	22.061	300
42´	1702/295	Malargüe	Río Barrancas	N. Lote VII sec. 6 S. Río Barrancas E. Lote VI sec. 6 O. Lote VI sec. 6	1.250	150

Artículo 2: Las concesiones otorgadas por el artículo anterior serán servidas con dotación de 0,85 litros por segundo y por hectárea.

Artículo 3: El Departamento General de Irrigación derivará uncaudal total de 71 metros cúbicos 675 litros por segundo, para ser concesiones otorgadas en el Art. 1 y además para satisfacer las necesidades de agua para uso doméstico, municipal y energético de laspoblaciones existentes y futuras en el área de las concesiones otorgadas y para uso industrial y minero.

Dichas derivaciones se harán en la siguiente forma:

a) 20 metros cúbicos por segundo, en las cercanías de la confluencia de los ríos Cobre y Tordillo. Estas aguas serán derivadas, mediante las obras pertinentes cuya construcción se autoriza, hacia la cuenca del Río Atuel o sus tributarios, que será utilizada para transportar esas los lugares de uso;

b) 50 metros cúbicos por segundo, en las cercanías de Bardas Blancas, en la margen izquierda del Río Grande. Estas aguas serán derivadas mediante obras pertinentes, cuya construcción se autoriza, hacia la cuenca del Río Atuel o sus tributarios, incluso la de la Laguna Llancanello, utilizándose estas últimas para conducirlas hasta los lugares de uso;

c) Para servir las concesiones otorgadas a los inmuebles N° 37, 38, 38’ y 41, los caudales pertinentes, hasta un máximo de mil doscientos

setenta y cinco metros cúbicos serán derivados de cualquiera de ambas márgenes del Río Grande, en los puntos que mejor convenga;

d) Para servir las concesiones otorgadas a los inmuebles N° 42 y 42, los caudales pertinentes, hasta un máximo de cuatrocientos litros por segundo, serán derivados de la margen izquierda del Río Barrancas.

El caudal total de setenta y un metros cúbicos, doscientos setenta y cinco litros por segundo, provenientes del Río Grande y de cuatrocientos litros por segundo provenientes del Río Barrancas, quedan reservados para atender a los fines previstos en el Art. 1 y en el presente y no podrán ser comprometidos ni afectados a otros destinos.

Artículo 4: Las concesiones precedentemente otorgadas serán inmediatamente inscriptas en los padrones del Departamento General de Irrigación. Los inmuebles beneficiarios no contribuirán al pago de la cuota de sostenimiento hasta que empiece la prestación efectiva del suministro de agua, lo que será declarado, en cada caso por resolución del H. Consejo de Irrigación.

Artículo 5: En el caso de aquellos inmuebles individualizados en el Art. 1 que tengan mayor extensión que la concedida para riego, el Poder Ejecutivo individualizará las fracciones a las que se atribuye el derecho de agua. Una vez puesta en servicios las obras pertinentes, los inmuebles referidos serán fraccionados y puestos en venta, con los derechos de agua correspondientes, bajo el régimen de la Ley N° 2.021. Quedan incluidos los inmuebles que se vendan conforme al régimen de la Ley de estímulo industrial y las concesiones otorgadas de acuerdo a las disposiciones del Código de Minería.

En caso de que una fracción de las tierras enumeradas precedentemente, salga del dominio del Estado por reivindicación u otras causas no previstas en la presente ley, no le corresponderá derecho de agua.

Artículo 6: Apruébese la planilla anexa, que forma parte integrante de la presente ley, y que detalla las inversiones realizadas por el Gobierno de la Provincia, desde el año 1911 hasta ahora, para el estudio y proyecto de las obras

autorizadas por el Art. 3. Tales gastos, más los que esta ley autoriza y los de construcción y financiación que en el futuro se hagan, serán sumados y el total será cargado en la siguiente forma:

a) El 20% será soportado por el tesoro provincial, de sus rentas generales, sin cargo de reembolso;

b) Una parte será cargada a los usuarios de electricidad, que la con suman provenientes de las centrales hidroeléctricas que utilicen las obras a que alude el Art. 3o. Esta parte será determinada estableciendo la diferencia de costo entre las centrales hidroeléctricas que no construyen y otras térmicas de igual potencia La amortización y gastos financieros de esta parte serán reembolsados por los usuarios de electricidad en la forma prevista en el Art. 17 de la Ley N° 2.541;

c) El saldo será prorrateado, por hectárea, entre los inmuebles beneficiados con concesiones de riego por el Art. 1 y será reembolsado por sus titulares en la forma prevista por el Art. 1 de la Ley N° 2.541.

Artículo 7: Agregase a la planilla analítica correspondiente al capítulo I, Anexo I, Inciso 2, de la Ley N° 2.541, los siguientes nuevo ítems que el Poder Ejecutivo correlacionará: "Terminación del estudio y proyecto definitivo de las obras de derivación de aguas de los río Cobre y Tordillo a la cuenca del Río Atuel o sus tributarios….. $ 2.000.000; Terminación de los estudios y proyectos definitivos de obras de derivación de aguas del Río Grande, cerca de Bardas Blanca hacia la cuenca del Río Atuel o sus tributarios, incluyendo la eventual utilización de la Laguna Llancanello $ 10.000.000".

Artículo 8: Modificase el Ítem 38 de la misma planilla aludida en el artículo anterior, en la siguiente forma: "38 - Estudio de obra hidráulica en general; estudios económicos agronómicos, jurídicos y de ingeniería referentes al uso de las aguas de los ríos Grande y Barrancas y sus tributarios en las mismas u otras cuencas situadas en la Provinciales o que tiendan a facilitarlo..... $ 3.500.000".

Artículo 9: Los fondos necesarios para las nuevas partidas creada o para el refuerzo de la ya existente, dispuesto en los dos artículos precedentes, serán tomados de la partida “Recursos complementarios" la Ley N° 2.541, Art. 3.

Artículo 10: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY N° 2.625

Artículo 1: El otorgamiento de concesiones para aprovechar los cauces públicos, naturales y artificiales, en la producción de energía eléctrica, estará condicionado al cumplimiento previo de los trámites y requisitos establecidos en la presente ley.

CAPÍTULO I
DE LAS CONDICIONES

Artículo 2: La energía hidroeléctrica que se generare en las concesiones de cauces públicos en las condiciones que esta ley determine será utilizada en las actividades que se enumeran seguidamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo III:

1) Industrias declaradas, por decreto del P.E., de interés provincial a los efectos de esta ley.
2) Empresas o cooperativas industriales que para su actividad específica les sea indispensable la energía que ellas deben producir.
3) Extracción de agua subterránea.
4) Obras destinadas a aumentar o diversificar la producción deindustrias ya instaladas en la provincia.
5) Cualquier otro tipo de actividad industrial.
6) Explotaciones turísticas.

Artículo 3: La concesión solamente podrá ser transferida conjuntamente con la actividad a la cual es inherente y esta última podrá cambiar de ramo, siempre que se conservaren todas las condiciones primitivas, requiriéndose previamente y en todos los casos aprobación legislativa.

Artículo 4: La concesión para el aprovechamiento energético de un cauce no incluirá el consumo de agua. Este deberá ajustarse a las leyes que rigen en la materia.

Artículo 5: El concesionario se ajustará a lo establecido por las leyes que conforman el Régimen de Aguas de la Provincia en todo lo que no se oponga a la presente ley.

Artículo 6: A los efectos de establecer un régimen de prioridad en la concesión de aprovechamiento energético de un sector de cauce en aquellos casos que no fuere suficientemente determinante lo establecido en la Ley de Aguas, fíjase el orden establecido en el Art. 2 de esta ley. Las preferencias se determinarán conforme a los principios del Art. 116 de la Ley General de Aguas de la Provincia.

Artículo 7: El P. E. aconsejará la prioridad de una concesión frente a la posibilidad de aprovechamiento de cauces en los que tenga obras en estudio la Dirección Provincial de Energía.

En el caso que cualquier organismo provincial o nacional coincidiera con una industria en la solicitud de concesión para el aprovechamiento de un cauce, podrá invocarse el régimen de prioridad establecido en el Art. 115 de la Ley de Aguas, si demostrara fehacientemente que éstos corresponden a un plan orgánico.

CAPÍTULO II
DE LOS BENEFICIOS

Artículo 8: Las concesiones que se otorgaren, quedarán exentas de todo impuesto provincial o municipal, ordinario o de emergencia y de cualquier otro gravamen creado o a crearse, sobre la producción, transmisión y consumo de la energía, así como también sobre las propiedades, construcciones y dependencias para el servicio exclusivo de la concesión. Quedan exceptuados los aportes a la Dirección de Asistencia a la Ancianidad e Invalidez, las tasas retributivas de servicios como así también la contribución de mejoras que no se refieren a los cauces.

Artículo 9: El P.E. en cada caso, y en la medida necesaria, concederá el uso gratuito de los terrenos de propiedad fiscal, como asimismo el de calles, subsuelos, puentes, caminos y otro del dominio público, siempre que no se perjudique el servicio a que están destinados o al que se los destinare en el futuro.

Artículo 10: Los inmuebles de la Provincia o del municipio quedarán sujetos a la servidumbre necesaria para el transporte y distribución de la energía eléctrica producida. Esta servidumbre será gratuita per el concesionario estará obligado a abonar las indemnizaciones correspondientes por los perjuicios que pudiera producir. Igualmente que darán a su cargo los gastos originados por remoción o reparación de pavimentos y de cualquier otro elemento que resultare afectado.

A los titulares de inmuebles particulares, les será requerida la posibilidad de constituir servidumbres dentro de los principios sustentados en el Código Civil. Su negativa dará base para la iniciación trámite de expropiación.

Artículo 11: Los terrenos que, por su ubicación y características favorables para el aprovechamiento energético de un cauce, fueren útil para la construcción de las obras hidráulicas, edificios e instalaciones anexas, podrán ser objeto de expropiación conforme a lo establecido las leyes de la materia.

CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 12: El 10% como mínimo de la potencia total que se obtenga, será puesto por el concesionario a disposición del Estado. El concesionario tendrá la obligación de realizar y explotar las obras correspondientespara extraer el máximo de energía que técnicamente permita el caudal del cauce y la altura a aprovecharse, debiendo entregar los excedentes que no utilizare al Estado Provincial en las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 13: El Estado no podrá vender los excedentes que le entregare el concesionario, a establecimientos industriales del mismo ramo.

Artículo 14: La energía que se obtuviera conforme al Art. 12 de la presente ley deberá servir, preferencialmente a: otras industrias no afines a las del concesionario, hospitales, escuelas, viviendas, alumbrado público, para el levantamiento de agua, para la forestación de zonas aledañas a la concesión o todo otro objetivo que el P.E. estime conveniente y que no afecte a la actividad del concesionario.

Artículo 15: Cuando por causa justificada debiera suspenderse parcial o totalmente la producción de energía por un período superior a 48 horas, el concesionario lo comunicará de inmediato por escrito al Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, quien a solicitud del concesionario y previa verificación de las causas por la Dirección Provincial de Energía, podrá eximirlo de la obligación de entregar la reserva indicada en el Art. 12, hasta tanto se solucionaren los inconvenientes. En todos los casos, la Dirección Provincial de Energía, verificará las deficiencias denunciadas y la marcha de los trabajos necesarios para su rehabilitación, los que deberán ajustarse a un plan de trabajo, presentado en la solicitud y aprobado por la Dirección Provincial de Energía.

Artículo 16: El Estado Provincial o el organismo que determine la reglamentación, pagará la energía, que por cualquier concepto se le entregare, al precio de costo de mantenimiento del servicio.

Artículo 17: Cuando el concesionario, por las obras hidráulicas autorizadas, debe encauzar la totalidad de un curso de agua, deberá suministrar los aforos de éste, a requerimiento del Departamento General de Irrigación.

Artículo 18: El P.E. podrá requerir de los concesionarios cuando la Zona de emplazamiento del aprovechamiento lo justifique, la instalación y mantenimiento de una estación meteorológica con instrumentos simples, que no requieran atención permanente y los informes que éstos proporcionaren.

Artículo 19: El Estado Provincial podrá interconectar su red con las instalaciones del concesionario, siempre que no se limite de manera alguna la actividad del mismo.

CAPÍTULO IV
DE LA TRAMITACION

Artículo 20: La solicitud para gestionar la concesión deberá ser presentada por ante el Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego

Artículo 21: Toda solicitud para la concesión deberá ser acompañada por un anteproyecto de las obras a realizar el que deberá incluir todos los datos que permitan avaluar la importancia de ésta.

Artículo 22: La documentación requerida en el artículo anterior deberá indicar:

a) Industria a que se aplicará la energía eléctrica producida, el presando: materia prima que se empleará en su origen, volumen y régimen de producción, ubicación respecto a la central hidroeléctrica, cantidad de obreros que empleará, forma, régimen utilización y consumo de energía eléctrica;
b) Potencia y característica de las instalaciones generadoras;
c) Dimensiones y disposición del terreno que necesitarán las construcciones y dependencias para el servicio exclusivo de la concesión;
d) Capacidad financiera y técnica de la empresa concesionaria:
e) Acreditar la personería;
f) Disposición de las líneas de conducción de energía eléctrica entre la central y los puntos de consumo. Deberá fijar las normas a las que se ajustará para su construcción;
g) Aprovechamiento previsto para el cauce por el solicitante y anteproyecto de las obras hidráulicas necesarias, el que indicará el

sector del cauce afectado y el tipo de obra a realizar, la ubicación y magnitud de la misma, afectaciones y servidumbre que se consideren necesarias;

h) Plan de trabajos para la realización de las obras e instalaciones indicando fecha de iniciación de la explotación.

Artículo 23: El Departamento General de Irrigación, la Dirección Industrias, la Dirección Provincial de Energía, la Dirección Provincial de Turismo y la Dirección de Rentas, informarán sobre la concesión solicitada en las materias de su incumbencia.

Artículo 24: Todos los informes técnicos de las Reparticiones indicadas en el artículo anterior, serán producidos mediante un trámite preferencial y acompañarán a la solicitud que se envíe a la H. Legislatura para su consideración.

Artículo 25: Aun cuando los peticionantes hubieren cumplido con todos los requisitos impuestos por esta ley, no adquieren, por esa causa, derecho alguno, puesto que el otorgamiento de la concesión es facultad privativa del Poder Legislativo.

CAPÍTULO V
DE LA FISCALIZACION

Artículo 26: Las Direcciones de Industrias y Provincial de Energía y el Departamento de Irrigación, o cualquier otra repartición que, a juicio del P.E. pueda ejercer la fiscalización, verificarán el cumplimiento de las condiciones expresadas en la presente ley, una vez otorgada la concesión, dentro de las atribuciones que sus respectivas funciones específicas determinen. El concesionario estará obligado a instalar instrumentos de medición y suministrará los datos que le sean requeridos, los cuales serán constatados por cualquiera de las reparticiones a cargo de su fiscalización.

Artículo 27: El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones referentes a la concesión, vigentes en la Provincia, por parte del concesionario, lo hará pasible de una multa equivalente hasta cuatro veces el valor del consumo de energía eléctrica, manifestando en la solicitud de concesión, el precio indicado en el Art. 16 durante el lapso en que subsista el hecho e independientemente de cualquiera otra sanción que le corresponda.

Artículo 28: La aplicación de la multa establecida en el artículo anterior, se llevará a cabo desde el momento en que se notificare al concesionario, la irregularidad en que incurriere.

Artículo 29: Las reparticiones indicadas en el Art. 26 solicitarán al P. E. la aplicación de la multa determinada en el Art. 27.

CAPÍTULO VI
DE LA CADUCIDAD

Artículo 30: La concesión caducará cuando:

- **a)** Hubiere interrupción de seis meses en el ejercicio de la actividad que la originó, que a juicio del P.E. no resultare justificable. Durante los períodos de interrupción la empresa deberá mantener el servicio dispuesto por el Art. 12, salvo en caso de fuerza mayor. Pasados 2 meses de la interrupción de las actividades industriales y hasta tanto se reanudaren éstas o caducare la concesión, el Estado Provincial podrá disponer que se le entregue toda la energía que éste requiera al precio determinado en el Art. 16. La reactivación de la industria por períodos inferiores a un mes no ocasionará el origen de nuevos términos para su caducidad;
- **b)** Se comprobare la entrega de energía a terceros ajenos a la empresa;
- **c)** Se realizaren modificaciones en las obras hidráulicas o en las de producción de energía sin previa autorización expresa de autoridad competente;

d) No se diera cumplimiento al plan de trabajos requeridos en el inc. h) del Art. 22.

Artículo 31: Para el concesionario de actividades turísticas quedará terminantemente prohibido la instalación de medidores o la aplicación de cualquiera otra medida tendiente a obtener retribución directa de la energía consumida, por las personas que hagan uso de las instalaciones.

Artículo 32: Será causal de caducidad la comprobación de reiteradas transgresiones a las disposiciones de la presente ley y a las que conforman el Régimen de Aguas de la Provincia.

Artículo 33: En cada contrato de concesión se fijará, para el caso de caducidad, las normas que regularán las concesiones de orden patrimonial y los procedimientos a seguir.

Artículo 34: Queda derogada toda disposición que se oponga a la presente ley.

Artículo 35: Comuníquese, etc.

LEY N° 2.797

Artículo 1: Créase la "Dirección de Defensa contra Aluviones", con jurisdicción sobre las obras de defensa contra aluviones y los cauces aluvionales existentes en terreno de dominio público o privado de la Provincia.

Artículo 2: Son funciones de la Dirección de Defensa Contra Aluviones la realización de estudios, proyectos y obras destinadas al encauzamiento de las aguas pluviales en defensa de las zonas rurales y urbanas de la Provincia y la conservación y mejoramiento de las obras existentes.

Artículo 3: Encárgase al Departamento General de Irrigación la organización funcional, técnica y administrativa de la Dirección de Defensa Contra Aluviones, del cual dependerá jerárquicamente, quedando el Departamento General de Irrigación facultado para la designación y remoción del personal técnico y administrativo necesario para su funcionamiento, y para efectuar contrataciones, licitaciones y adquisiciones en las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 4: Los fondos necesarios para el funcionamiento de la Dirección de Defensa Contra Aluviones serán provistos por el Poder Ejecutivo y administrados por el Departamento General de Irrigación, quien anualmente rendirá cuenta de su inversión al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Artículo 5: Facúltase al Departamento General de Irrigación a invertir para el funcionamiento de la Dirección de Defensa Contra Aluviones, desde su creación y hasta el 31 de diciembre de 1961, hasta la suma de Tres millones quinientos mil pesos moneda nacional ($ 3.500.000,00 m/n.), dentro del siguiente detalle:

Sueldos y viáticos ..... $ 2.000.000.00

Gastos de funcionamiento $300.000,00

Inversiones Patrimoniales (vehículo, instrumental, material de dibujo y de oficina) $1.200.000.00

Estos fondos serán tomados con cargo a Rentas Generales de la Provincia y se invertirán conforme a las reglamentaciones que rigen al Departamento General de Irrigación.

Artículo 6: A partir del presupuesto del año 1962 el Poder Ejecutivo incluirá anualmente en el proyecto de ley del Presupuesto que se envía a la H. Legislatura el presupuesto de gastos de la Dirección de Defensa Contra Aluviones, previa solicitación, debiéndose invertir los fondos conforme a la reglamentación que rija en este organismo.

Artículo 7: Las expropiaciones que sean necesarias para los trabajos proyectados o que se proyecten por la Dirección de Defensa Contra Aluviones, serán determinadas por ley especial en cada caso.

Artículo 8: Inclúyese en la planilla analítica correspondiente al Capítulo I, Anexo 1, Inciso 2, Rubro Único: Irrigación, Plan de Obras Públicas, Ley N° 2.541, los siguientes Ítems que el Poder Ejecutivo correlacionará y cuyos fondos serán tomados de la partida: "Recursos Complementarios", de la Ley N° 2.541, Art. 3o; Ítem 1: "Para estudios y proyectos definitivos de obras de defensa en cauces aluvionales de la Provincia", Quince millones de pesos moneda nacional ($ 15.000.000,00 m/n.); Ítem 2: Puente carretero, Rápidos, Puente Canal y obras accesorias Canal de los Ciruelos y calle Boulogne Sur Mer, Diecinueve millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y tres pesos con noventa y siete centavos moneda nacional ($ 19.460.653.97 m/n.); Ítem 3: Canal Cacique Guaymallén, Muros Laterales y amortiguador de energía en la desembocadura del Zanjón de los Ciruelos, Once millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y dos pesos con treinta centavos moneda nacional (S 11.533.492,30 m/n.); Ítem 4: Impermeabilización del Zanjón Frías, Diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro pesos con veinte centavos moneda nacional ($ 17.458.684,20 m/n.).

Artículo 9: Autorízase a la Dirección de Defensa Contra Aluviones a afectar directamente o a licitar los estudios correspondientes al Ítem 1 del artículo

anterior; asimismo a licitar y controlar la ejecución de las obras de los Ítems 2, 3 y 4 del citado artículo.

Artículo 10: De acuerdo al Art. 7 de la Ley N° 2.640, amplíase la partidas de los Ítems: Parque General San Martín, incluido Jardín Zoológico y Cerro de la Gloria: Un millón de pesos moneda nacional ($1.000.000,00 m/n.); Reparación Zona Sud de la Provincia, incluido Doscientos cincuenta mil pesos moneda nacional ($ 250.000,00 m/n.) para la reparación camino Punta del Agua: Cuatro millones cien mil pesos moneda nacional ($4.100.000,00 m/n.); con imputación de este gastos a lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley N° 2.640.

Artículo 11: La Dirección de Defensa Contra Aluviones procederá a la brevedad posible, a realizar los estudios necesarios y ejecutar las obras respectivas que defiendan contra los aluviones al distrito Panquehua del Departamento Las Heras, como asimismo de cualquier otro lugar de la Provincia que pueda estar amenazado por las avenidas de aguas pluviales.

Artículo 12: La Dirección de Defensa Contra Aluviones ajustará su acción a la reglamentación vigente de la Ley de Obras Públicas de Provincia N°1.926.

Artículo 13: A los efectos de una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, se faculta a la Dirección de Defensa Contra Aluviones a disponer la colaboración de todas las Reparticiones Públicas de la Provincia, incluso las de jurisdicción municipal, quedando éstas obligadas a prestar toda la colaboración cada vez que se produzcan siniestros aluvionales que demanden su concurso.

Artículo 14: La Comisión de Defensa Contra Aluviones creada por el Decreto N° 18/1960 entregará bajo inventario, a la Dirección de Defensa Contra Aluviones los equipos, máquinas, herramientas y materiales adquiridos durante su gestión.

Artículo 15: En casos excepcionales de desastres causados por aluviones se faculta a la Dirección de Defensa Contra Aluviones, para contratar directamente la ejecución de obras, alquiler de máquinas, adquisición de materiales y

elementos, contratación transitoria de personal técnico y obrero, concertación directa de convenios con empresas o particulares para la ejecución directa de trabajos; con la sola autorización del Poder Ejecutivo tomándose los fondos de Rentas Generales y con imputación a la presente ley.

Artículo 16: La Dirección de Defensa Contra Aluviones comenzará a funcionar a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 17: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY N° 4.035

Mendoza, 18 de julio de1974
(Ley general vigente)
(Decreto reglamentario N° 1839/75-BO30/01/75)
BO: 1974 08 16
N° arts.: 0044

Título: extracción de aguas subterráneas.-
Sumario: Agua- Subterránea- Extracción- Investigación- Explotación- Uso- Control- Aprovechamiento- Reglamentación- Concesión- Abastecimiento- Agricultura- Obligación- Autorización-

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

CAPITULO I
DEL AMBITO DE APLICACION, USOS, MODOS DE ADQUISICION Y PRIORIDADES

Ámbito de aplicación

Artículo 1: la investigación, exploración, uso, control, recarga, conservación, desarrollo y aprovechamiento de las aguas subterráneas, para cuya extracción sea necesaria la construcción de obras, se rigen en el territorio de la provincia por la presente ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.

Uso común

Artículo 2: hay uso común del agua subterránea cuando la misma se destine exclusivamente a satisfacer necesidades domesticas del usuario. Este uso será controlado y reglamentado por la autoridad de aplicación.

Usos especiales. Modo de adquisición

Artículo 3: los usos o aprovechamientos especiales de aguas subterráneas, solo pueden ser adquiridas mediante concesión otorgada por la autoridad administrativa de aplicación.

Clases

Artículo 4: a los efectos de esta ley. Los usos o aprovechamientos especiales de que pueden ser objeto las aguas subterráneas son:

- **a)** abastecimiento de población
- **b)** agricultura y ganadería
- **c)** industria
- **d)** minera
- **e)** recreación y turismo
- **f)** termal o medicinal

Clausula sin perjuicio de terceros y carácter de la concesión

Artículo 5: las concesiones a que se refiere esta ley se entenderán otorgadas sin perjuicio de terceros y estarán siempre sujetas a la existencia de caudales.

Las acciones de revocación o nulidad de concesiones lesivas, solo procederán cuando el uso especial afectado sea de igual o superior rango de prioridad.

Prioridad con relación al uso

Artículo 6: en caso de concurrencia de solicitudes de concesión, la prioridad para su otorgamiento y para la regulación posterior de los usos especiales, comprendidos los existentes, se regirá por el orden de prelación establecido en el artículo 4.

Preferencia con relación al sujeto solicitante

Artículo 7: sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se dará preferencia a las solicitudes para un mismo uso, peticionados en el orden siguiente por:

- **a)** personas jurídicas públicas, comprendidas las inspecciones de cauces;
- **b)** consorcios, asociaciones o cooperativas de usuarios;
- **c)** personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, cuyas propiedades o establecimientos gocen de una concesión para uso de aguas publicas superficiales y el aprovechamiento requerido sea para completar la superficie o volumen concedido o para mantener los cultivos existentes;
- **d)** personas físicas o jurídicas de naturaleza privada para el cultivo de tierras sin derecho de aguas superficiales o para cualquier otro uso. En igualdad de condiciones se preferirá la que primero haya sido presentada.

Excepciones

Artículo 8: las prioridades y preferencias establecidas precedentemente, podrán ser alteradas previo al otorgamiento del permiso para perforar y por resolución fundada, cuando se acreditara fehacientemente que el beneficio económico-social es notoriamente superior al de la solicitud preferente competitiva.

CAPITULO II
DE LA AUTORIZACION PARA PERFORAR Y DE LA CONCESION
Trámite y requisitos

Artículo 9: las solicitudes de concesión deberán presentarse ante la autoridad de aplicación y contendrán esencialmente los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que determine la reglamentación:

- **a)** nombre del o de los solicitantes;

b) título de dominio del inmueble donde se efectuara la perforación o resolución que acredite ser adjudicatario del inmueble sometido a un plan de colonización;

c) conformidad expresa del titular de dominio del inmueble, si el solicitante no fuera su propietario;

d) plano de mensura con ubicación de la futura perforación o descripción del establecimiento, industria o actividad beneficiaria;

e) si se tratare de predios cultivados, clase y extensión de los cultivos, derecho de agua empadronado, obras de regadío, perforaciones, servidumbres y mejoras existentes;

f) destino que se le dará al agua;

g) anteproyecto de la obra de perforación, características técnicas, plan de trabajos a realizar y memoria descriptiva;

h) demarcación de los sistemas de conducción y de desagüe con indicación de los cauces públicos que eventualmente los recibirán;

i) firma, nombre y domicilio del profesional responsable.

Publicidad

Artículo 10: una síntesis de la solicitud deberá publicarse por dos días en el boletín oficial y un diario local y ponerse en conocimiento de los interesados a quienes pueda afectar la solicitud.

Procedimientos en caso de oposición

Artículo 11: todos los que tengan un derecho subjetivo o interés legítimo que defender, deberán formular su oposición en el término de diez días a contar de la última publicación o desde que le hubiere sido notificado personalmente.

De la oposición se dará vista al solicitante por el término de cinco días y si hubiere prueba ofrecida deberá producirse dentro de los quince días perentorios subsiguientes.

La resolución que corresponda será dictada por la autoridad de aplicación dentro del plazo de veinte días de quedar en estado las actuaciones y será apelable sin efecto suspensivo.

Informes oficiales

Artículo 12: cumplidos los requisitos que establecen los artículos precedentes y los que adem6as fije la reglamentación, la autoridad de aplicación ordenara la producción de informes y dictámenes técnicos oficiales tendientes a establecer esencialmente:

- **a)** que el caudal factible de ser extraído no compromete con perjuicio de terceros la calidad, capacidad o disponibilidad de la fuente o acuífero.
- **b)** que tampoco disminuirá o agotara el caudal medio requerido para satisfacer las explotaciones anteriores o prioritarias, ni causara perjuicio sensible a las mismas por estar previsto un régimen de regulación adecuado.
- **c)** que en el anteproyecto de la obra se haya previsto la aplicación de dispositivos adecuados que permitan la medición del caudal a erogarse.
- **d)** que el volumen estimado resulte suficiente para satisfacer las necesidades del uso a que se destine y que responda a un plan de utilización racional.

Autorización para perforar

Artículo 13: con los informes producidos, la autoridad de aplicación otorgara o rechazara por resolución fundada el permiso para perforar.Si lo autorizare aprobara al mismo tiempo y en forma provisoria, los planes respectivos y el plan de trabajos a realizar. Dispondrá igualmente el plazo de ejecución de los trabajos que no podrá exceder de seis meses, bajo apercibimiento de revocar sin más trámite el permiso.

Inscripción - revocación

Artículo 14: el permiso aludido en el artículo precedente deberá anotarse en el registro general de perforaciones aludido en el art. 25 y podrá ser revocado en cualquier momento por resolución fundada, si luego de su otorgamiento o durante la ejecución de las obras y trabajos, sobrevienen causas que tornen imposible su construcción o funcionamiento en condiciones reglamentarias. La revocación será sustanciada con audiencia del interesado.

Certificado final

Artículo 15: realizada la obra, se expedirá en informe técnico final que esencialmente deberá expresar:

- **a)** profundidad y diámetro de la perforación;
- **b)** potencia de explotación y equipos;
- **c)** nivel y calidad del agua;
- **d)** perfil de suelos;
- **e)** condiciones de funcionamiento reglamentarias.

Concesión

Artículo 16: el expediente respectivo será puesto a consideración del organismo concedente para el otorgamiento de la respectiva concesión.

La resolución que así lo disponga, constituirá el "titulo" de la concesión; deberá dictarse dentro de los 30 días de recibido el expediente y su vigencia y efectos comenzaran a regir desde su inscripción en el registro general de perforaciones a que alude el art. 25.Tal inscripción deberá materializarse dentro de los diez días (10) días subsiguientes de la fecha de la resolución, la que esencialmente deberá contener:

- **a)** nombre del o de los concesionarios;
- **b)** individualización del inmueble, establecimiento, industria o actividad beneficiaria;
- **c)** determinación del uso especial;
- **d)** volumen máximo autorizado a extraer, expresado por mes o año;

e) otros aspectos que contemple la reglamentación.

Mensualmente deberá remitirse copia de los títulos de concesión otorgados, al poder ejecutivo y a las respectivas cámaras legislativas.

Falta de pronunciamiento

Artículo 17: la falta de pronunciamiento en el término previsto en el párrafo 2 del artículo anterior, se interpretara con que la concesión es procedente y su reiteración se considerara mal desempeño de la función y causal de juicio político.

CAPITULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Artículo 18: el concesionario goza de los siguientes derechos:

a) usar de las aguas con arreglo a los términos de la concesión y la ley.

b) solicitar y obtener información técnica relativa a límites de acuíferos, niveles, calidad de las aguas, métodos hidráulicos y toda otra información especializada que se encuentre documentada en la administración.

c) compulsar y solicitar informes verbales o escritos relativos a inscripciones obrantes en el "registro general de perforaciones' y de "directores y constructores de perforaciones".

d) solicitar la imposición de limitaciones al dominio privado, necesarias para el pleno ejercicio de la concesión, como expropiaciones, restricciones, ocupaciones temporarias y servidumbres administrativas.

Obligaciones

Artículo 19: son obligaciones del concesionario:

a) utilizar racional y eficientemente el causal concedido, exclusivamente en su propiedad, establecimiento o actividad.

b) abonar las cargas financieras de la concesión que establezca la autoridad de aplicación.

c) suministrar los informes que le sean requeridos por la administración, vinculados a la concesión.

d) comunicar en forma inmediata cualquier alteración física o química producida en la perforación o en el agua extraída, como socavamiento, descenso de niveles, interferencia con otras perforaciones, contaminación, etc.

e) permitir el acceso de personal de la administración a su propiedad que deba realizar los controles administrativos o inspecciones técnica pertinentes.

Prohibiciones

Artículo 20: queda prohibido al concesionario:

a) utilizar el agua total o parcialmente en su uso distinto al concedido.

b) extraer mayor caudal del máximo autorizado.

c) derivar el agua hacia la propiedad, establecimiento o actividad de terceros, sin permiso previo de la autoridad.

d) inficionar las aguas.

Sanciones

Artículo 21: las infracciones o incumplimientos de las obligaciones establecidas podrán ser sancionadas:

a) con multa de cien pesos ($ 100.-) a mil pesos ($1.000.-) de acuerdo con la gravedad de aquellas; o

b) con la suspensión del uso del agua, total o parcial, mientras dure la infracción; o

c) ambas penas a la vez por la misma infracción. Ello, sin perjuicio de la procedencia de la declaración de caducidad de la concesión, en los casos previstos por el art. 35.

CAPITULO IV

DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION

Artículo 22: la ejecución de las obras, sus modificaciones, la realización de trabajos en una perforación, su funcionamiento y operación, serán inspeccionadas y controladas por la administración, que podrá ordenar su modificación, rectificación, suspensión, paralización o demolición, rectificación, suspensión, paralización o demolición, cuando las mismas no se ajusten al proyecto aprobado cuando los materiales, equipos, maquinarias o motores utilizados y su funcionamiento no se encuentren en condiciones reglamentarias.

Regulación del uso. Agotamiento de la fuente

Artículo 23: la autoridad de aplicación podrá:

1. establecer turnos, restringir, limitar o regular por resolución fundada, el uso o la extracción de agua subterránea, cuando a causa de ello puede alterarse el equilibrio del balance hidrológico del acuífero, sea por descenso de niveles, desmejoramiento en la calidad de sus aguas o por cualquier otra causa.
2. establecer zonas de protección alrededor de la perforación, en las que podrá limitar, condicionar o prohibir actividades que puedan afectar su normal explotación.
3. solicitar al poder ejecutivo la declaración de agotamiento de la fuente, cuando su disponibilidad se encuentre totalmente comprometida con concesiones otorgadas, en cuyo caso, no se admitirá respecto de la misma ninguna solicitud de nuevo aprovechamiento y la delimitación en zonas de reserva.

CAPITULO V

DE LAS LIMITACIONES Y RESTRICCIONES AL DOMINIO, EXPROPIACION - RESTRICCIONES, SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS Y OCUPACION TEMPORARIA

Artículo 24: declarase de utilidad pública y sujetos a expropiación, todos los rasgos de terreno, inmuebles, establecimientos, instalaciones, muebles, maquinarias y equipos que la autoridad administrativa determine como necesarios para la investigación, exploración, extracción, control, uso, recarga, conservación y aprovechamiento de las aguas subterráneas. A los mismos fines podrá decretar e imponer al dominio privado, restricciones, servidumbres administrativas u ocupaciones temporarias, de oficio o a solicitud de interesados.

CAPITULO VI

DEL REGISTRO Y CATASTRO

Registro general de perforaciones

Artículo 25: la autoridad de aplicación organizara y llevara un "registro general de perforaciones" en el que se inscribirán la totalidad de los permisos para perforar y las concesiones de uso de agua subterránea que se otorguen en la provincia, clasificados por categoría de usos, ubicación geográfica y titular de las concesiones o permisos, consignándose los demás datos y características que determine la reglamentación. Este registro es de carácter público y real.

Registro de directores y constructores de perforaciones

Artículo 26: igualmente habilitara un "registro de directores y constructores de perforaciones" en el que deberán estar inscriptos los profesionales o técnicos con título habilitante que intervengan como proyectistas, directores o representantes técnicos con título habilitante que intervengan como proyectistas, directores o representantes técnicos y las empresas constructoras de perforaciones, quienes deberán cumplir los requisitos, condiciones y tributaciones que establezca la reglamentación.

Artículo 27: no podrá sustanciarse ninguna solicitud de concesión, ni proyectarse o ejecutarse ninguna obra o trabajo de perforación sin que el profesional o empresa constructora interviniente se encuentre inscripto en el registro aludido en el artículo anterior.

Artículo 28: las infracciones cometidas por los profesionales o constructores inscriptos en el registro aludido en el art. 26 a las disposiciones de esta leyy sus reglamentos, serán sancionadas con inhabilitación de hasta dos años de acuerdo con la gravedad de la misma.

Transferencia - anotación

Artículo 29: ninguna transferencia de inmuebles, por cualquier título en donde exista una perforación, podrá ser autorizada sin previa acreditación de encontrarse al día en el pago de los tributos correspondientes. Tales transferencias deberán además ser anotadas en el registro aludido en el art. 25.

Catastro

Artículo 30: la autoridad de aplicación confeccionara un catastro de perforaciones en el que se consignara además, el tendido de redes de transmisión eléctrica usadas en bombeo de aguas subterráneas.

CAPITULO VII

EXTINCION DE LA CONCESION

Causales

Artículo 31: la concesión para uso de aguas subterráneas se extingue por: renuncia, vencimiento de plazo, revocatoria, caducidad, agotamiento de la fuente de provisión o por perder las aguas aptitud para servir el fin para el que fueron concedidos.

Renuncia

Artículo 32: el concesionario podrá renunciar en cualquier tiempo a la concesión, siempre que:

a) se encuentre al día en el pago de las cargas financieras.

b) medie conformidad del acreedor hipotecario cuando la garantía afecte el inmueble donde ubícala perforación si existiere más de un beneficiario por el uso del agua subterránea, se requerirá la conformidad expresa de todos ellos. La iniciación del trámite será registrada como anotación marginal en el registro aludido en el art. 25.

Si existiere más de un beneficiario por el uso del agua subterránea, se requerirá la conformidad expresa de todos ellos. La iniciación del trámite será registrada como anotación marginal en el registro aludido en el art. 25.

La resolución pertinente deberá dictarse dentro de los diez (10) días de quedar en estado el expediente, siempre que la misma no afecte intereses públicos o colectivos y producirá sus efectos desde su aceptación.

Vencimiento de plazo

Artículo 33: el vencimiento del plazo de vigencia de la concesión, causa su extinción de pleno derecho sin necesidad de declaración alguna y autoriza al organismo de aplicación a disponer el cese inmediato de la utilización del agua.

Revocatoria

Artículo 34: la autoridad de aplicación podrá en cualquier tiempo revocar la concesión indemnizada solo el dado emergente, cuando mediante razones de oportunidad o conveniencia o las aguas sean necesarias para abastecer usos posteriores que lo precedan en el orden establecido por el art. 4.

Caducidad

Artículo 35: la concesión caduca:

a) por el no uso injustificado del agua durante dos años.

b) por emplear el agua total o parcialmente en uso distinto al concedido.

c) por falta de pago de los tributos correspondientes a tres o más años consecutivos.

d) por cese de la actividad que motivo su otorgamiento.

e) por incumplimiento reiterado, previo emplazamiento, de las obligaciones previstas por los incisos a), c) y e) del art. 19.

f) por violación reiterada de las prohibiciones establecidas por el art. 20.

Procedimiento

Artículo 36: la caducidad será declarada por la autoridad de aplicación, fundada en alguna de las causales enumeradas taxativamente en el artículo anterior y previa audiencia del interesado.

En ningún caso trae aparejada indemnización ni libera del pago de los tributos adeudados. La iniciación del trámite será registrada como anotación marginal en el registro aludido en el art. 25. Igualmente procedimiento se adoptara en el caso de agotamiento de la fuente o de haber perdido las aguas aptitud para servir el fin para el que fueron concedidas.

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 37: las perforaciones actualmente en uso que se encuentren legalmente registradas y autorizadas por autoridad competente, gozaran de concesión en los términos de esta ley sin perjuicio de terceros, para el aprovechamiento de aguas subterráneas, siempre y cuando sus titulares no opten por reclamar indemnización dentro del término de noventa días de la vigencia de la presente ley.

Artículo 38: cuando el inmueble en el que ubica el aprovechamiento de agua subterránea, goce además de una concesión para uso de agua superficial salvo prueba en contrario y únicamente comprenderá el dado emergente.

Artículo 39: presentada la demanda por indemnización y depositado el importe que el estado considere adecuado cesara de inmediato el uso del agua

subterránea por parte del usuario, quedando facultada la autoridad de aplicación para impedir su aprovechamiento con auxilio de la fuerza pública y allanamiento de domicilio en caso necesario. A este fin, el juez competente deberá comunicar de oficio a la autoridad de aplicación la interposición de la demanda y el depósito efectuado.

Artículo 40: el otorgamiento de una nueva concesión para el uso de aguas públicas, en favor del mismo inmueble, establecimiento, industria o actividad en cuyo beneficio se utilizaba el agua subterránea, estará condicionado a la restitución por su titular del sesenta por ciento (70%) del valor actual de la indemnización abonada por el estado.

Artículo 41: dentro de los sesenta días de la vigencia de la presente ley, las perforaciones existentes que no se encuentren legalmente autorizadas y cualquier otro aprovechamiento de hecho de aguas subterráneas, deberá renunciarse ante la autoridad de aplicación y solicitarse concesión. El presentante deberá cumplir con los requisitos que prescriben los arts. 9, 10, 11, 12, y 15 de esta ley, procediéndose conforme lo dispone el art. 16.

Si mediare incumplimiento o cualquiera de las disposiciones citadas, la autoridad de aplicación, previo emplazamiento, dispondrá el cese inmediato del aprovechamiento del agua subterránea por parte del infractor con auxilio de la fuerza pública y allanamiento de domicilio en caso necesario.

Artículo 42: deroga art. 33 al 39 ley de aguas.

Artículo 43: esta ley entrara en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación, se aplicara a las solicitudes en trámite y deberá ser reglamentada antes del término establecido para su vigencia.

Artículo 44: comuníquese al poder ejecutivo.

Ortiz - Pressacco - Spano - Díaz

LEY 4.036

Mendoza, 18 de julio de 1974
(Ley general vigente)
(Decreto reglamentario N° 1839/75- BO.30/01/75)
BO: 16/08/1974
N° arts.: 0013

Título: administración de aguas subterráneas.

Sumario: Departamento General de Irrigación- Atribuciones- Funciones- Estructura- Superintendente- Dirección de obras y servicios sanitarios- Aguas- Aguas Subterráneas- Administración- Administración Pública- Uso- Recursos Hídricos- Organismo Descentralizado-

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

CAPITULO I
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA

Artículo 1: La administración de las aguas subterráneas en el territorio de la provincia está a cargo del Departamento General de Irrigación y de la Dirección de obras y servicios sanitarios con la competencia, atribuciones y funciones que se establecen en la presente y demás leyes y disposiciones sobre la materia.

CAPITULO II
DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN

Artículo 2: El Departamento General de Irrigación deberá asesorar a los poderes legislativo y ejecutivo en la formulación y actualización de la política provincial en materia de agua subterránea, considerada como un sector integrante de la política hídrica provincial en concordancia con la económica y social; coordinar la actividad de los demás organismos del estado con competencia funcional

respectivo de algunos usos del agua subterránea y aplicar la ley de aguas subterráneas.

Artículo 3: Para el cumplimiento de tales objetivos y finalidades, el Departamento General de Irrigación deberá:

a) Inventariar y evaluar en forma permanente los recursos hídricos subterráneos, tanto cuantitativamente como cualitativamente y practicar anualmente el balance hidrológico de las cuencas superficiales y subterráneas.

b) Centralizar, recopilar, clasificar, evaluar y publicar toda información existente o futura de naturaleza hidrológica (hidrometereológica, hidrogeológica, hidrográfica, hidrométrica), económica, social, legal, de ingeniería y sobre usos del agua subterránea.

c) Elaborar un planeamiento integral que tienda gradualmente a la utilización y manejo conjunto de las aguas superficiales y subterráneas, con objeto de optimizar su aprovechamiento y evitar o prevenir la alteración perjudicial del ciclo hidrológico, sometiéndolo a consideración del poder ejecutivo;

d) Intervenir en la planificación de las obras publicas para el aprovechamiento, conservación o recarga de las aguas subterráneas;

e) Realizar o disponer la realización de estudios, proyectos, programas o planes de obras y trabajos referidos a la investigación, exploración, uso, recarga, conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos, dentro de la esfera de su competencia, compatibilizados con los que efectúe la provincia en virtud de la ley 3.900;

f) Realizar o disponer la ejecución de las obras y trabajos aludidos precedentemente;

g) Promover y autorizar la creación de consorcios de usuarios que tengan a su cargo la administración de sus rentas, la distribución del agua subterránea y la elección de sus autoridades en la forma, condiciones y con los sistemas de control que fija la reglamentación;

h) Aconsejar al poder ejecutivo respecto de la reorganización, redistribución y funciones referidas a la administración del agua subterránea; colaborar con los organismos públicos o privados, nacionales y/o provinciales en la formulación y adopción de políticas en materia crediticia, financiera, impositiva y de fomento, a efecto de que las mismas sean conducentes al logro de los objetivos propuestos por la política provincial sobre agua subterránea;

i) Dictar reglamentos de cumplimiento obligatorio y realizar todos los actos que sean necesarios para el efectivo ejercicio de poder de policía y de las funciones y atribuciones asignadas por la presente y por la ley de aguas subterráneas.

CAPITULO III

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN

Artículo 4:El Honorable Tribunal Administrativo, sin perjuicio de su actual competencia conocerá en forma originaria de los siguientes asuntos:

a) Reglamentación de la ley de aguas subterráneas;

b) Otorgamiento de concesiones para usos especiales de aguas subterráneas;

c) Declaración de extinción de las concesiones referidas por las causales de renuncia, revocatoria o caducidad;

d) Determinación de los bienes sujetos a expropiación por aplicación del artículo 24 de la ley;

e) Determinación del monto indemnizatorio que corresponda por la imposición de las limitaciones al dominio privado previstas por el articulo 24 citado;

f) Imposición de las cargas financieras de la concesión;

g) Autorizar la creación de consorcios de usuarios de acuerdo con lo previsto por el inc. G) del artículo 3;

h) Conformar el planeamiento integral a que se refiere el inciso e) del mismo artículo;

Artículo 5:Cuando las solicitudes de concesión versen sobre el uso previsto en los incisos a) y f) del artículo 4, se sustanciaran con intervención de la Dirección de obras y servicios sanitarios. Cuando versen sobre los indicados en los incisos c), d) y e) será con intervención del ministerio de economía.

Artículo 6: En las resoluciones que dicte el Tribunal Administrativo en instancia originaria, habrá recurso de revocatoria que deberá interponerse y fundarse ante el mismo organismo dentro del término de diez días de notificado. En contra de la resolución que recaiga habrá el recurso previsto por el artículo 19 de la ley 322.

CAPITULO IV
DEL SUPERINTENDENTE GENERAL DE IRRIGACIÓN

Artículo 7: Corresponde al Superintendente General de Irrigación, sin perjuicio de su actual competencia;

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente, dictando los actos y adoptando las medidas necesarias para ello;
b) Aplicar la ley de aguas subterráneas, salvo en aquellos asuntos que han sido atribuidos en forma originaria al h. Tribunal Administrativo;
c) Decretar e imponer restricciones, servidumbres administrativas u ocupación temporaria autorizadas por el artículo 24 de dicha ley;
d) Aplicar las sanciones prescriptas en los articulo 21 y 28;
e) Solicitar el auxilio de la fuerza pública y allanamiento de domicilio en caso necesario, cuando en ejercicio de sus funciones le fuere resistido el acceso a la propiedad privada;
f) Establecer y llevar el registro de perforaciones y de directores y constructores de perforaciones;

g) Confeccionar el catastro grafico de las obras de extracción o recarga de aguas subterráneas y de las redes de transmisión eléctrica utilizadas en bombeo de tales aguas.

Artículo 8: De las resoluciones que dicte el superintendente, habrá recurso de apelación por ante el consejo de apelaciones del Departamento General de Irrigación, en los términos de las disposiciones de la ley 322.

CAPITULO V
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

Artículo 9: La Dirección de obras y servicios sanitarios, sin perjuicio de su actual competencia deberá:

a) Solicitar al Departamento General de Irrigación el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas para abastecimiento de la concesión de aguas subterráneas para abastecimiento de población e intervenir en todo tramite pro movido por terceros que persigan el otorgamiento de dicho tipo de concesión.
b) Prestar asistencia técnica a organismos públicos o privados, asociaciones o consorcios de usuarios en lo relativo a la prestación de servicios y realización de obras relativas al aprovechamiento de aguas para abastecimiento de población;
c) Intervenir en la confección del certificado final a que alude el artículo 15 de la ley de aguas subterráneas;
d) Solicitar al poder ejecutivo la imposición de las limitaciones y restricciones al dominio autorizadas por el artículo 24 de la ley de aguas subterráneas, en cuanto se refieran al uso del agua para abastecimiento de población, poniendo en conocimiento del Departamento General de Irrigación los casos de expropiación, restricciones o servidumbres administrativas;
e) Suministrar al Departamento General de Irrigación toda información conducen te al logro de las funciones previstas en el artículo 3, incisos a) y b) de esta ley.

Artículo 10:Modifica art. 3 inc. b ley 3.909.

Artículo 11:Esta ley entrara en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación y deberá ser reglamentada antes del término establecido para su vigencia.

Artículo 12: Derogase toda disposición que se oponga a la presente ley.

Artículo 13: Comuníquese al poder ejecutivo.

Ortiz – Pressacco - Spano - Díaz

LEY N° 4.154

Mendoza, 23 de febrero de 1977.

(Ley general vigente con modificaciones)

BO: 15-03-77

N° Arts. : 0003

N° Arts. Anexo: 0043

Tema: Ratificación- Estatuto del Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado (COIRCO)

El Gobernador de la provincia de Mendoza, sanciona y promulga con fuerza de ley:

Artículo 1: ratificase el estatuto del comité interjurisdiccional del rio colorado (COIRCO), elaborado por los señores gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Rio Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza y representantes del ministerio del interior, en acuerdo suscripto con fecha 2 de febrero de 1977, cuyo texto se adjuntan por separado y que forma parte integrante de la presente ley.

Artículo 2: la presente ley será refrenada por todos los señores ministros del poder ejecutivo provincial.

Artículo 3: téngase por ley de la provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al registro oficial y archívese.

Fernández - Dolan - Nallím – Herrera

ANEXO: ESTATUTO DEL COIRCO

CAPITULO I

Artículo 1: la entidad interjurisdiccional creada por el artículo 5to del tratado suscripto en la sexta conferencia de gobernadores del rio colorado se denominara comité interjurisdiccional del rio colorado (COIRCO)

Artículo 2: COIRCO tendrá por objeto asegurar la ejecución del programa único de habilitación de áreas de riego y distribución de caudales del rio colorado (programa único) acordado y su adecuación al grado de conocimiento de la cuenca y a su comportamiento en las distintas etapas de esa ejecución, la que deberá ser gradual y coordinada.

Artículo 3: COIRCO tendrá personalidad jurídica para el cumplimiento de su objeto, con competencia para actuar en el ámbito del derecho público y privado.

Artículo 4: COIRCO tendrá su domicilio legal en la ciudad de buenos aires y podrá establecer subsedes en cualquiera de las provincias integrantes de la cuenca.

El consejo de gobierno, en un plazo máximo de un año, determinara el emplazamiento de la sede operativa donde funcionara el comité ejecutivo, que será en una de las cinco provincias.

CAPITULO II
ATRIBUCIONES DEL COIRCO

Artículo 5: COIRCO tendrá las siguientes atribuciones:

- **a)** fiscalizar el cumplimiento por parte de las signatarias y de terceros del régimen de distribución de caudales establecido en el programa único acordado;
- **b)** controlar que el proyecto, la construcción y los planes de operación y mantenimiento de las obras de regulación y derivación ejecutadas o a

ejecutar sobre la cuenca del rio colorado, así como el caudal y salinidad de los retornos de las obras de regadío, se adecuen a lo previsto en el programa único acordado, a cuyo efecto las partes deben poner previamente a disposición del COIRCO la documentación pertinente.

c) establecer la ejecución gradual y coordinada del programa único acordado, fijando a tal efecto prioridades en la construcción de las obras.

d) centralizar la información que se dispone o se obtenga en el futuro sobre la cuenca y que se refiera a los aspectos meteorológicos, hidrológicos, geológicos y cualquier otro que se relacione con el programa único acordado.

e) completar los estudios y la evaluación de los recursos hídricos de la cuenca en función de su objeto.

f) decidir los reajustes al programa único acordado de conformidad al grado de conocimientos de la cuenca y su comportamiento en las distintas etapas de su ejecución.

g) ajustar temporariamente los caudales derivados por las provincias ribereñas cuando las variaciones del derrame así lo impongan.

h) H) decidir las modificaciones a la distribución de caudales establecida en el programa único acordado siempre y cuando se den las condiciones para que la provincia de buenos aires ceda parte de su alícuota, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del acta de la sexta conferencia de gobernadores del 26 de octubre de 1976.

CAPITULO III

AUTORIDADES DE COIRCO

Artículo 6: COIRCO será dirigido por un consejo de gobierno y administrado por un comité ejecutivo, los que tendrán la composición y competencia que más adelante se indican.

Artículo 7: el consejo de gobierno es el órgano superior del ente y estará integrado por los gobernadores de las provincias signatarias y por el ministro del interior de la Nación. La integración del consejo de gobierno es indelegable.

Artículo 8: el consejo de gobierno como órgano superior del ente tiene amplias facultades de decisión y es el encargado de fijar la acción y la política general que se deberá seguir; al efecto, tendrá las siguientes atribuciones:

a) decidir en los casos de los incisos c), f) y h) del artículo 5o;
b) aprobar el presupuesto anual del ente, su memoria y balance;
c) analizar y decidir con respecto a todos los planes de trabajo y presupuesto que le sean elevados por el comité ejecutivo;
d) decidir sobre los créditos y aportes;
e) aprobar el reglamento interno que proyecto el comité ejecutivo.

Artículo 9: la presidencia del consejo de gobierno será ejercida por el señor ministro del interior. El consejo de gobierno contara con un vicepresidente cuya única función será reemplazar al presidente en caso de ausencia o impedimento de esto. La vicepresidencia del consejo de gobierno será ejercida en forma rotativa por cada uno de los gobernadores provinciales siguiendo el orden alfabético de las provincias. La primera vez la vicepresidencia será sorteada.

Artículo 10: las reuniones del consejo de gobierno serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebraran por lo menos dos veces al año, y las extraordinarias lo serán cuando lo disponga la presidencia o lo solicite uno de los miembros del consejo de gobierno o el comité ejecutivo. Las reuniones se celebraran en la sede del ente o en el lugar que fije la presidencia, cuando las circunstancias lo hagan aconsejable.

Artículo 11: el consejo de gobierno sesionara válidamente con la totalidad de sus miembros. Si convocada la reunión no se lograra dicha totalidad, el presidente del consejo llamara a una segunda reunión, la que sesionara válidamente con la mitad más uno de los miembros del consejo de gobierno. Las decisiones, en todos los casos, se adoptaran por acuerdo de los presentes. Las

abstenciones se computaran como adhesión expresa a lo resuelto. En caso de no accederse al acuerdo se recurrirá al procedimiento previsto en el capítulo v.

Artículo 12: el comité ejecutivo de COIRCO estará integrado por un representante de cada provincia y otro de la Nación, que designaran y removerán los respectivos poderes ejecutivos. La presidencia del comité ejecutivo será ejercida por el representante de la Nación quien tendrá la representación legal del comité ejecutivo.

*Artículo 13: los miembros del comité ejecutivo no podrán ejercer por sí o por terceros, actividad ni integrar sociedades, asociaciones o cualquier otra forma empresaria que directa o indirectamente pueda tener relación con el COIRCO. El presidente deberá residir en la sede de la entidad no pudiendo desempeñar ningún otro cargo en la administración pública nacional, provincial o municipal, con excepción del ejercicio de la docencia universitaria.

(Texto según ley 4.595, art.1).

Artículo 14: el comité ejecutivo contara con un vicepresidente cuya única función será reemplazar al presidente en caso de ausencia o impedimento de este. La vicepresidencia del comité ejecutivo será ejercida anual y rotativamente por cada uno de los representantes provinciales siguiendo el orden alfabético de provincia. La primera vez, la vicepresidencia será sorteada.

Artículo 15: el comité ejecutivo tendrá las atribuciones enumeradas en el artículo 5 del presente estatuto que no hayan sido asignadas al consejo de gobierno y, en consecuencia, ejercerá las siguientes funciones:

a) cumplir y hacer cumplir el programa único de habilitación de áreas de riego y distribución de caudales del rio colorado conforme a lo acordado en la sexta conferencia de gobernadores, así como cumplir y hacer cumplir las adecuaciones que se vayan introduciendo al mismo;
b) cumplir las resoluciones del consejo de gobierno;

c) adoptar las medidas necesarias para la dirección y administración del COIRCO;

d) decidir las operaciones de crédito que fueran necesarias para el desarrollo de las actividades del COIRCO y el cumplimiento de su objetivo hasta el monto que le autorice el consejo de gobierno;

e) establecer las bases de concurso y decidir sobre el nombramiento de los gerentes;

f) autorizar los actos que importen disposición de bienes del patrimonio de COIRCO;

g) G) elaborar el presupuesto para cada ejercicio, la memoria, el balance anual y el plan de trabajos y elevar los mismos al consejo de gobierno;

h) proyectar el reglamento interno del COIRCO;

i) decidir los casos previstos en el art. 5o, inciso g) del presente estatuto;

j) proponer al consejo de gobierno las medidas que hacen a la competencia de este.

Artículo 16: el comité ejecutivo se reñirá ordinariamente, como mínimo una vez por mes, y extraordinariamente, toda vez que sea convocado por el presidente o a petición de uno de sus miembros.

Artículo 17: el comité ejecutivo sesionara válidamente con la totalidad de sus miembros. Si convocada la reunión no se lograra el quorum necesario, el presidente del comité llamara a segunda reunión la que sesionara válidamente con la mitad más uno de los miembros del comité. Las decisiones se adoptaran por votación. Cada representante provincial presente tendrá un voto. El presidente titular tendrá voz y solo votara en caso de empate. En el caso que el vicepresidente estuviera a cargo de la presidencia, no pierde su derecho a voto.

Artículo 18: el comité ejecutivo operara a través del sistema gerencial, pudiendo, a tal efecto, crear las gerencias que considere necesarias, las que tendrán las funciones que se establezcan en el reglamento interno. Los gerentes serán seleccionados y designados a través de concurso público.

CAPITULO IV

PATRIMONIO Y RECURSOS

Artículo 19: los recursos financieros del COIRCO estarán integrados por:

- **a)** los fondos que expresamente destinen el gobierno nacional y las provincias;
- **b)** los provenientes de organismo públicos;
- **c)** las contribuciones, créditos, donaciones o legados de entidades u organismos provinciales, nacionales, internaciones, públicos o privados, o de personas individuales, con la previa aceptación del comité ejecutivo;
- **d)** el producido por la participación de utilidades en explotación de obras por retribución de prestación de servicios que expresamente le confieran las partes directamente interesadas o beneficiadas en cada una de ellas.

Artículo 20: el patrimonio del COIRCO estará integrado por:

- **a)** los recursos indicados en el artículo anterior;
- **b)** las cosas, muebles e inmuebles, que adquiera para su funcionamiento.

Artículo 21: los aportes provinciales que sean necesarios para el funcionamiento del COIRCO serán aportados por partes iguales por las provincias signatarias. Los que se requieran para los estudios serán aportados por las partes directamente interesadas o beneficiadas en la concreción de cada uno de estos estudios en las proporciones y oportunidades que acuerde el consejo de gobierno.

Artículo 22: a fin de cumplir con los aportes, establece el siguiente mecanismo de transferencia: las respectivas tesorerías deberán librar cheque a la orden del COIRCO en las oportunidades y de acuerdo con las necesidades que se establezcan en los presupuestos aprobados por el consejo de gobierno.

Artículo 23: las partes directamente interesadas o beneficiadas garantizaran las operaciones de crédito que realizare el COIRCO para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 24: el ejercicio financiero se cerrara el 31 de diciembre de cada año, debiendo presentarse al consejo de gobierno la memoria y balance antes del 31de marzo del año siguiente.

CAPITULO V
DE LA SOLUCION DE LOS DIFERENDOS

Artículo 25: toda cuestión que se suscite respecto de la interpretación de este estatuto, o de la aplicación del programa único acordado, será resuelta por el consejo de gobierno.

Artículo 26: si en el consejo de gobierno, dentro del plazo que fijara el reglamento interno, no se arribara a acuerdo, el presidente, ha pedido de cualquiera de las partes en desacuerdo deberá llamar a juicio arbitral en el término de quince (15) días

Artículo 27: el árbitro será el Presidente de la República.

Artículo 28: dentro de los treinta días de instado el procedimiento arbitral, el consejo de gobierno elevara obligatoriamente los antecedentes al árbitro.

Artículo 29: el árbitro tendrá treinta días para recabar las informaciones y antecedentes y en general, para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer. Vencido dicho termino, deberá laudar dentro de los treinta días siguientes, pudiendo ampliar los plazos antes establecidos mediante decisión fundada.

Artículo 30: las partes estarán obligadas a remitir al árbitro, todos los antecedentes que les sean requeridos dentro del término que a tal efecto este las fije.

Artículo 31: el laudo dictado de acuerdo a las normas precedentes, será obligatorio e inapelable para las partes.

Artículo 32: los plazos indicados en el presente capitulo se computaran en días hábiles administrativos según la legislación nacional en la materia.

Artículo 33: los gastos que demande el arbitraje, serán aportados por COIRCO.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 34: antes de los treinta (30) días de constituido el comité ejecutivo propondrá el reglamento interno.

Artículo 35: será ley aplicable la legislación nacional.

Artículo 36: la contaduría general y el tribunal de cuentas de la Nación ejercerán el control que le competa sobre los actos del COIRCO, únicamente por el examen de la cuenta de inversión respectiva, quedando excluida cualquier clase de intervención previa que importe la suspensión del cumplimiento de los actos por parte del ente.A efectos de facilitar el control, COIRCO exhibirá y suministrara todos los elementos, balances y comprobantes que le sean requeridos.

Artículo 37: las partes signatarias gestionaran la exención de COIRCO del pago de impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales, salvo el abono de tasas de servicios efectivamente prestados. El poder ejecutivo nacional gestionara la exención del pago de los derechos de importación respecto de los bienes que se introduzcan en el país para la ejecución y explotación de las obras del programa único acordado.

Artículo 38: las partes, a propuesta de COIRCO, declararan de utilidad pública y sujetas a expropiación las áreas necesarias para la construcción de las obras determinadas en el programa único acordado y sus eventuales adecuaciones y se obligan a pagar, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, todos los

actos administrativos y a realizar las gestiones judiciales tendientes a adquirir el dominio de los inmuebles y sus mejoras o a constituir servidumbres gratuitas sobre los mismos. Si estas últimas resultaran onerosas, correrán por cuenta de las provincias directamente interesadas o beneficiadas las erogaciones que demanden.

Artículo 39: las instalaciones que se realicen para la ejecución de las obras previstas en el programa único acordado no conferirán al ente, ni a ninguna de las partes signatarias, dominio ni jurisdicción sobre cualquier parte del territorio de la provincia. Las construcciones que en su territorio realice alguna de las partes por su cuenta, pertenecerán exclusivamente a ellas.

Artículo 40: COIRCO utilizara prioritariamente materiales y productos de la industria argentina, conforme a lo establecido en la legislación nacional que rija la materia. También utilizara con preferencia, en los estudios y trabajos que deban realizarse, y en igualdad de condiciones, las prestaciones profesionales, la mano de obra, los equipos y los servicios disponibles en las provincias signatarias.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 41: la comisión técnica interprovincial del rio colorado (COTIRC) continuara en sus funciones hasta tanto se constituyan el consejo de gobierno y el comité ejecutivo del COIRCO, y una vez constituidos estos, que deberán serlo en forma simultánea, COTIRC quedara disuelta de pleno derecho, transfiriéndose todo su patrimonio, personal, archivo, derechos y obligaciones al COIRCO.

Artículo 42: el presente estatuto será ratificado dentro de los treinta (30) días por ley de las provincias, y entrara en vigencia a partir de la promulgación de la ley nacional correspondiente.

Artículo 43: a los fines de la primera constitución de los organismo de gobierno del COIRCO, dentro de los treinta (30) días de promulgada la ley nacional a que se refiere el artículo anterior, las partes signatarias designaran a sus representantes en el comité ejecutivo y el representante de la Nación procederá convocarlos.

Firmado: Gobernadores de la provincias de Buenos Aires, General de Brigada (E) Dn. Ibérico H. Saint Jean; de Rio Negro, Contralmirante (R) Dn. Aldo L. Bachmann; de La Pampa, General De Brigada (R) Dn. Carlos E. Aguirre; de Neuquén, General de Brigada (R) Dn. José A. Martínez Waldner y de Mendoza, Brigadier Mayor (R) Dn. Jorge Sixto Fernández.

LEY N° 5.302

Mendoza, 17 de mayo de 1988.
(Ley general vigente con modificaciones)
BO.: 16-06-88
N° arts.: 0014

Tema: Régimen de elección para autoridades de inspecciones de cauces de la provincia

SUMARIO: aprovechamiento de aguas, dirección de personas jurídicas sin fin de lucro, inspector de cauce, Recursos naturales, Seguridad social

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de LEY:

Artículo 1: El régimen de elección de autoridades de las inspecciones de cauces de la provincia, se ajustará a las siguientes disposiciones.

SISTEMA DE ELECCIÓN - DURACION DE MANDATOS

Artículo 2: Los inspectores y delegados de las inspecciones de cauces serán elegidos por los concesionarios empadronados en cada una de ellas, por simple mayoría de votos emitidos y por el sistema de lista completa. Durarán cuatro (4) años en sus sunciones.

Los inspectores y delegados tendrán los deberes, derechos y atribuciones que determina las leyes en la materia.

REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS

Artículo 3: Para ser candidato a inspector o a delegado se requieren las siguientes condiciones:

a) ser mayor de edad, argentino, saber leer y escribir y acreditar una mínima de cinco (5) años en la provincia.

b) ser propietario del inmueble con la concesión para uso de agua publica superficial para 1.000 M2. Como mínimo, cuya dotación se efectúe por el cauce de la inspección al que se preste como candidato.

c) no tener inhabilitaciones legales.

d) no adeudar tributos de riego.

PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 4: Las personas jurídicas que cumplan con los requisitos exigidos por los incisos b), c) y d) del artículo anterior podrán ser electos inspectores o delegados, cargo que será ejercido por su representante legal.

REQUISITOS PARA SER ELECTOR

Artículo 5: Para ser elector es necesario ser propietario de inmueble beneficiado con concesión para uso de agua pública superficial, de por lo menos 1.000 M2 empadronado en el cauce cuyas autoridades se elijan. Sin perjuicio de las representaciones legales, el voto podrá emitirse mediante carta poder, conforme a la reglamentación.

En caso de condominio se unificara la emisión del voto en cualquiera de los condóminos.

CÓMPUTO DE VOTOS

Artículo 6: El derecho de voto se establece tomando en consideración cada inmueble beneficiado con una o más concesiones siempre que se encuentre empadronado en el cauce respectivo. Los votos serán ponderados de la siguiente forma:

e) de un mil (1.000) M2 a cinco (5) ha: un voto.

f) de cinco (5) ha. A diez (10) ha: dos votos

g) de diez (10) ha. A veinte (20) ha: cuatro votos.

h) de veinte (20) ha. A treinta (30) ha.: Seis votos.

i) de treinta (30) ha. O más ha.: Ocho votos.

OBLIGATORIEDAD DEL VOTO - SANCIÓN

Artículo 7: El voto es obligatorio y secreto. El incumplimiento será sancionado con un multa equivalente a tres veces la cuota de sostenimiento correspondiente a una ha de riego en el ejercicio vigente a la fecha de elección, la que será exigida juntamente, con el tributo de riego posterior a la elección.

DE LOS COMICIOS

Artículo 8: La elección se llevara a cabo cada cuatro (4) años, durante el mes de noviembre. El h. Tribunal administrativo del Departamento General de Irrigación fijara el día de realización del acto.

La convocatoria se notificara mediante edictos que se publicaran en el boletín oficial y diarios de la provincia. En el padrón electoral del cauce, se consignara a los titulares de los inmuebles con el número de votos que le corresponde emitir de acuerdo al artículo 6o.

El Departamento General de Irrigación designara las autoridades del comicios y ejercerá el contralor del acto, el que se regirá por la reglamentación que se dicte al efecto, y supletoriamente, por las normas contenidas en el código electoral nacional.

Si no hubieren postulantes o el acto eleccionario fuere anulado el H. Tribunal administrativo designara de oficio a las autoridades de la inspección.

APROBACIÓN DEL ACTO ELECCIONARIO

Artículo 9: El H. Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación aprobara o desaprobará, sin más recurso, las elecciones efectuadas dentro de los sesenta (60) días de su realización. Las autoridades electas deberán asumir dentro de los quince (15) días de la aprobación del acto eleccionario.

REEMPLAZOS O ACEFALÍA

Artículo 10: En el caso de ausencia, renuncia, fallecimiento o destitución del inspector del cauce, el cargo será desempeñado por el primer delegado y este será reemplazado por el segundo y así sucesivamente.

La acefalia que se produzca luego de cumplido este sistema de sucesión será cubierta de oficio por el H. Tribunal administrativo.

SUSPENSIÓN, DESTITUCIÓN O INTERVENCIÓN

Artículo 11: Las autoridades de los distintos cauces podrán ser suspendidas o destituidas en cualquier momento por el H. Tribunal administrativo cuando por causa fundada lo soliciten por lo menos los dos tercios de los electores, de acuerdo al cómputo establecido del artículo 6o.

La intervención del cauce podrá ser decretada además, en cualquier momento, por el mismo órgano mediante resolución fundada y cuando existan causas graves que lo justifiquen.

Artículo 12: ElH.Tribunal Administrativo dictara las disposiciones reglamentarias pertinentes.

Artículo 13: Nota de Redacción (Deroga texto ley 2.503).

Artículo 14: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Firmantes: LAFALLA - VERGNIOL - SUAREZ - MANZITTI

LEY N° 6.044

Mendoza, 19 de agosto de 1993.
(Ley general vigente con modificaciones)
(Texto ordenado 23/03/01)
(Decreto reglamentario 1674/93 BO 11/03/94 constituyese comisión honoraria puesta en funcionamiento del opas)
(Decreto reglamentario 2223/94 BO. 29/11/94)
(Decreto reglamentario 956/95 BO 12/07/95)
(Decreto reglamentario 2340/01 BO 31/01/2002)
BO.: 20/09/93
N° artículos: 0065

Tema: Reordenamiento- Institucional- Prestación- Servicios- Provisión- Agua Potable- Saneamiento- Protección- Calidad-

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

TITULO I
DEL OBJETO Y LA POLITICA GENERAL

Artículo 1: Objeto. La presente ley tiene por objeto el reordenamiento institucional de la prestación de los servicios de provisión de agua potable y de saneamiento y la protección de la calidad de agua en el ámbito de la provincia de Mendoza.

Artículo 2: Política general y objetivos. La separación orgánica, entre las funciones de regulación, control y policía de los servicios de agua potable y saneamiento, correspondientes a la operación de los mismos y la determinación de la autoridad responsable en la emisión de las normas de calidad del agua, constituyen los principios generales para la realización de los siguientes objetivos:

1. garantizar el mantenimiento y promover la expansión del sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales e industriales;
2. lograr que la operación de los servicios se ajuste a los niveles de calidad y de eficiencia, que se fijen al efecto;
3. incentivar el uso racional y eficiente del recurso hídrico, velando por la adecuada protección de la salud pública y del medio ambiente;
4. establecer un sistema normativo que garantice la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento;
5. fomentar el incremento de las inversiones y asegurar un régimen comercial y tarifario razonable y equitativo;
6. disminuir el impacto ecológico y económico de la contaminación hídrica
7. perfeccionar la función de control de los servicios de saneamiento;
8. promover la participación de los usuarios y de los trabajadores del sector en la prestación de los servicios;
9. fomentar la incorporación y desarrollo de tecnologías apropiadas, flexibles y accesibles para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios; y
10. proteger adecuadamente los derechos de los usuarios.

TITULO II

DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

CAPITULO I

DEL ENTE REGULADOR

Artículo 3: Creación. Crease en el ámbito del ministerio de medio ambiente, urbanismo y vivienda, el ente provincial del agua y de saneamiento, en adelante EPAS, como ente autárquico del estado provincial con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado, con patrimonio propio integrado por los bienes que se le transfieran y los recursos que adquiera de conformidad con esta ley.

Artículo 4: Funciones y atribuciones. El EPAS tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. dictar las normas reglamentarias de carácter técnico a las cuales deberá ajustarse el desarrollo de la infraestructura, la prestación de los servicios de provisión de agua potable, de saneamiento y la protección de la calidad del agua;
2. controlar la ejecución de los planes y programas de inversión por los operadores del sistema;
3. controlar el régimen de explotación propuesto por los operadores, en particular el régimen tarifario;
4. definir las saboreas de prestación del servicio que corresponda a los operadores, con sujeción a la política ambiental provincial;
5. proponer al poder ejecutivo, de conformidad con los principios y normas de la presente ley, las tarifas de los servicios, como también las bases para su revisión;
6. establecer y aplicar los procedimientos de control de los servicios;
7. resolver en única instancia los conflictos que surgiesen entre los usuarios, los operadores del servicio y terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 10o de la presente ley;
8. organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley;
9. promover ante los tribunales competentes las acciones civiles o penales que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones, los fines de esta ley y su reglamentación;
10. elaborar un informe anual sobre sus actividades y resultados para elevarlo al poder ejecutivo y a la honorable legislatura provincial;
11. aprobar la estructura orgánica y de funcionamiento interno del ente regulador;
12. celebrar contratos que hagan a su objeto como a los objetivos de la ley, con entidades provinciales, municipales, nacionales, internacionales y otras personas jurídicas públicas y privadas;

13. aplicar y hacer cumplir la presente ley y su reglamentación dictando todos los actos necesarios con el fin de alcanzar los objetivos de esta ley.

14. *: implementar un sitio web relativo al programa de información al usuario, donde conste como mínimo la siguiente información: marco normativo del servicio eléctrico; ley de creación del ere; identidad de los miembros del directorio; resoluciones emanadas del ere; informes anuales de gestión; información actualizada de las empresas operadoras en la provincia de Mendoza; índices de cumplimiento de los planes de inversiones y expansión del servicio; fecha, lugar y hora de las audiencias públicas programadas y un espacio para reclamos y/o sugerencias de los usuarios. Esta información puede ser ampliada por el EPRE cuando, por la envergadura de la información, considere necesaria su inclusión."

(Texto según ley 6839, art.2)

Artículo 5: Dirección y administración. La dirección y administración del EPAS estará a cargo de un directorio integrado por un presidente y cuatro miembros en calidad de vocales. El presidente será designado por el poder ejecutivo con acuerdo del h. Senado de la provincia. Los vocales serán designados por el poder ejecutivo, tres de ellos directamente, teniendo en cuenta sus antecedentes técnicos y profesionales en la materia y el cuarto, a propuesta del comité de coordinación municipal.

Remuneración: la remuneración mensual del presidente será el importe que resulte de aplicar el coeficiente noventa centésimos (0,90) y la de los vocales se determinara aplicando el coeficiente ochenta centésimos (0.80) sobre la remuneración que le corresponda al ministro del área.

Duración: el presidente durara en su cargo hasta que el poder ejecutivo solicite al h. Senado un nuevo acuerdo para su reemplazo.

*Artículo 6: Funciones. El directorio del EPAS tendrá las siguientes funciones:

1. aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen a la actividad del ente regulador;
2. organizar su estructura administrativa y dictar el reglamento interno del cuerpo;
3. *contratar y remover al personal del ente regulador fijándole sus funciones y condiciones de empleo, determinando sus sueldos. Las relaciones con su personal se regirán por la ley de contrato de trabajo, no siéndole de aplicación el régimen jurídico del estatuto del empleado público. Se deberá tender a no aumentar la masa salarial, ni los cargos.

   (Texto según modificación ley 6871, art. 49)
4. formular el proyecto de presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, que se elevara al poder ejecutivo;
5. aplicar las sanciones previstas en esta ley;
6. determinar las tasas de inspección, control y sostenimiento;
7. coordinar su gestión con los organismos con competencia hídrica, sanitaria y ambiental;
8. cumplir con las atribuciones establecidas en el artículo 4 de esta ley, realizando todos aquellos actos necesarios para lograr los objetivos de esta;
9. presidir y convocar, cuando lo considere necesario, como mínimo una reunión por bimestre, a los miembros del comité de coordinación municipal y consultores.

Artículo 7: Atribuciones del presidente. El presidente del directorio tendrá las siguientes atribuciones:

1. cumplir y hacer cumplir esta ley, sus reglamentaciones y las resoluciones del directorio;
2. ejercer la representación legal del ente regulador;
3. convocar y presidir las sesiones del directorio, en la forma y condiciones que determine el reglamento correspondiente;
4. autorizar el movimiento de fondos;

5. adoptar medidas necesarias para el cumplimiento de la presente ley cuya urgencia no admitan dilación, dando cuenta al directorio, en la reunión inmediata posterior de las medidas adoptadas;
6. ejercer el poder jerárquico y disciplinario sobre el personal del organismo;
7. ejercer todas aquellas funciones que le designe el directorio.

Artículo 8: Recursos. Los recursos propios, destinados a su adecuado funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos del EPAS, se formaran con los siguientes ingresos:

1. tasa de inspección, control y sostenimiento;
2. producido de multas y decomisos;
3. producido de la prestación de servicios de asesoramiento y de transferencia de tecnologías;
4. subsidios, legados, donaciones, créditos o transferencias que bajo cualquier título se reciban;
5. los demás recursos que puedan serle asignados en virtud de la ley de presupuesto de la provincia o por otras leyes, sus reglamentaciones o concesiones.

Artículo 9: Convenios de descentralización. El EPAS estará facultado para celebrar convenios con organismos provinciales, centralizados o descentralizados, con los municipios de la provincia y también con entidades públicas o privadas, con el objeto de lograr el cumplimiento de sus objetivos de manera más eficiente, conservando su función regulatoria y la supervisión permanente el sistema.

CAPITULO II
DE LAS CONTROVERSIAS

Artículo 10: Jurisdicción administrativa. Las controversias administrativas que se susciten, con motivo de la prestación de los servicios regulados por esta ley, serán sometidas en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del EPAS, quien

conocerá y resolverá en única instancia administrativa. Quedan excluidas las controversias no comprendidas en el código procesal administrativo de la provincia. La reglamentación determinara los procedimientos correspondientes para el cumplimiento de esta disposición. Contra la decisión definitiva y que cause estado emanada del EPAS, se incoara la acción procesal administrativa.

Artículo 11: Audiencia pública. Cuando sea necesario promover mejoras en la calidad de la prestación de los servicios regulados por la presente, el EPAS convocara a audiencia pública a las partes interesadas y a la población en general. La convocatoria indicara el tema, el día y el lugar de la reunión y se efectuara mediante edictos publicados en el boletín oficial y en un diario de circulación general del lugar.

CAPITULO III
DE LOS COMITES

Artículo 12: Comité de coordinación municipal. Crease el comité de coordinación municipal, que será integrado por los representantes de los municipios de la provincia en la forma que determine la reglamentación y que tendrá por función coordinar las actividades del EPAS con los municipios.

Artículo 13: Comité consultor. El EPAS será asesorado técnicamente por un comité consultor, integrado por los representantes de universidades, colegios profesionales, centros de investigación, provinciales o nacionales, públicos o privados, sindicatos y gremios del sector y por especialistas, en la forma que determine la reglamentación.

TITULO III
DEL SERVICIO PÚBLICO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 14: Servicio público. El servicio público regulado por la presente ley comprende la producción, distribución y comercialización de agua para

abastecimiento de la población, incluida la potable, desagües cloacales e industriales.

Se entiende por *producción de agua potable*, la captación y tratamiento de agua cruda para su posterior distribución en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas.

Se entiende por *distribución de agua potable*, el transporte y conducción de agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario.

Se entiende por *desagües cloacales o industriales*, la conducción de aguas servidas desde el inmueble del usuario hasta la entrega para su tratamiento.

Se entiende por *tratamiento de aguas servidas*, la adecuación de la calidad de estas a la norma de calidad admisible por el cuerpo de disposición final que se utilice.

Se entiende por *disposición de aguas servidas*, la evacuación de estas en cuerpos receptores en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas de tratamiento y de calidad respectivas.

Se entiende por *comercialización*, la promoción, facturación y cobranza de los servicios prestados.

Artículo 15: Prestación. El servicio público así definido será prestado en condiciones que aseguren su continuidad, regularidad, calidad, generalidad y obligatoriedad, de manera que se logre la satisfacción de las necesidades de los usuarios y la protección del ambiente.

Artículo 16: Policía. Sin perjuicio de las funciones generales atribuidas al ente que por esta ley se crea, le corresponderá el control de la calidad y potabilidad de las aguas destinadas al abastecimiento de la población, la determinación y control de los niveles de calidad de emisión de las aguas residuales, verificando que estas permanezcan dentro de las normas físicas, químicas y biológicas que se determinen.

Artículo 17: Ocupación temporaria- servidumbres. Declárase de utilidad pública y sujetos a ocupación temporaria o a constitución de servidumbre, a los bienes necesarios para la realización de obras que hagan al objeto de la prestación del servicio.

Corresponderá al ente la determinación de los bienes sujetos a ocupación o servidumbre a pedido del operador. El operador asumirá el carácter de sujeto expropiante en los términos del régimen de expropiaciones de la provincia.

Artículo 18: Obligatoriedad de la prestación. El operador deberá extender y renovar las redes externas, conectar y prestar el servicio para uso doméstico, comercial e industrial, en las condiciones que se establezcan o convengan con este, a todo inmueble comprendido dentro de las áreas servidas y de expansión.

Artículo 19: Obligatoriedad del pago. Los propietarios de inmuebles a servir por el operador deberán pagar los servicios de acuerdo al régimen tarifario correspondiente.

Otras obligaciones. También se les podrá imponer a los propietarios la conexión forzosa a las redes cloacales y de agua potable, soportar gratuitamente servidumbres con objeto de abastecer de agua a otros usuarios, a realizar la construcción de las obras domiciliarias necesarias para la prestación del servicio como para su mantenimiento. La imposición de estas obligaciones deberá tener autorización expresa del ente regulador.

*Artículo 20: Restricción y suspensión: podrá restringirse transitoriamente el servicio, para uso doméstico, cuando se haya producido el vencimiento de dos facturas o hayan transcurrido más de sesenta (60) días desde el vencimiento original de la primera de ellas o vencido igual termino desde el aviso para el pago de contribuciones de mejoras, multas, recargos y liquidaciones originadas en la prestación en cualquiera de los servicios. A tal efecto en cada factura que se emita para el cobro normal de los servicios, se deberá comunicar los importes adeudados, los recargos correspondientes y las consecuencias de la falta de pago en término.

Podrá suspenderse el servicio, para uso doméstico, ocurrido el vencimiento de dos periodos impagos y transcurridos quince (15) días del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, previa intimación fehaciente, salvo el caso de los usuarios comprendidos en las disposiciones del artículo 26 de la presente ley, y/o el de aquellos en cuyos casos se acredite fehacientemente la imposibilidad de pago.

Procederá, previa notificación fehaciente, la suspensión del servicio a usuarios industriales y comerciales, cuando se encuentre impaga una factura y hayan transcurrido sesenta (60) días de su vencimiento original.

En todos los casos, el restablecimiento del servicio se hará en forma inmediata una vez abonadas las deudas.

(Texto según ley 6.511, art. 1)

Artículo 21: Procedimiento. El cobro judicial de los servicios, reembolsos de obras, recargos y liquidaciones originadas en la prestación de estos se hará efectivo por el procedimiento de apremio establecido en el código fiscal de la provincia o del juicio ejecutivo en caso de que el operador sea una persona jurídica privada.

Artículo 22: Certificación de deudas. No se autorizaran transferencias o modificaciones de dominio del inmueble o constitución de otros derechos reales sobre ellos, sin que se acredite por los interesados estar al día en el pago de los servicios. Los escribanos que no cumplieran con esta disposición serán solidariamente responsables de la deuda correspondiente.

CAPITULO II
DE LAS TARIFAS

Artículo 23: Sistema tarifario- principios generales. El EPAS elaborara las pautas tarifarias a la que se ajustaran los operadores según los siguientes principios generales:

1. atenderá a objetivos económicos, sociales y ambientales, procurando en este caso el sostenimiento y promoción de los espacios verdes vinculados directamente con la prestación;
2. las tarifas deberán reflejar los costos de operación, mantenimiento y amortización de los servicios y una retribución razonable para el operador, en el contexto de una administración eficiente.

Artículo 24: Tarifa. La fijación de las tarifas se realizara mediante decreto provincial a propuesta del EPAS, por intermedio del ministerio de medio ambiente, urbanismo y vivienda.

Artículo 25: Duración. Las tarifas a que se hace referencia en el artículo anterior tendrán un periodo de vigencia de cinco (5) años, salvo que, antes de la culminación del mismo, haya acuerdo entre el operador y el EPAS, para prorrogarlo por otro periodo igual. De común acuerdo podrán modificar las tarifas antes del término del periodo de su vigencia, cuando existan cambios importantes en los supuestos de hecho para su cálculo, en cuyo caso las que se obtengan del nuevo estudio tendrán una duración de cinco (5) años. El poder ejecutivo remitirá a la legislatura provincial, en el plazo de un año, desde la constitución del EPAS, un proyecto de ley en virtud del cual se consagre el régimen tarifario de los servicios regulados por esta ley.

*Artículo 26: Subsidio para consumo doméstico. El poder ejecutivo podrá otorgar subsidios para el pago del consumo de los servicios de agua potable y de desagües cloacales, a favor de jubilados y usuarios residenciales de escasos recursos. A tal efecto reglamentara la instrumentación de estos subsidios determinando los porcentajes a subsidiar, de los niveles socioeconómicos que se beneficien con ellos y la compensación a los operadores afectados. La compensación a los operadores deberá comprender exactamente el monto subsidiado al usuario y deberá pagarse en el plazo de sesenta (60) días. El vencimiento de este plazo sin que se pague la compensación importara la caducidad del subsidio. En todos los casos la aplicación de estos subsidios deberá contar con la correspondiente previsión presupuestaria. En la boleta que

se extienda deberá indicarse separadamente el precio total de las prestaciones, el monto subsidiado y la cantidad a pagar por el usuario.

(Reglamentado por decreto 2340/01)

CAPITULO III
DE LOS OPERADORES

Artículo 27: Definición. Son operadores sujetos a las disposiciones de esta ley, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales, provinciales o municipales que realicen por cualquier causa la prestación del servicio regulado por esta ley.

Artículo 28: Deberes y atribuciones. El operador del servicio tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1. cumplir con las disposiciones de esta ley y aquellas que en su consecuencia se dicten;
2. cumplir con las metas y condiciones que establezca el contrato de concesión o el EPAS, en su caso;
3. informar sobre el estado de ejecución de los planes de operación, expansión e inversión para su control por el EPAS;
4. celebrar convenios para el cumplimiento de sus fines;
5. actuar como sujeto expropiante, previa aprobación y determinación de los bienes por el Ente Regulador;
6. administrar y mantener los bienes afectados al servicio;
7. publicar los planes de expansión de la red operada y del servicio, para que los usuarios puedan conocer sus derechos;
8. cobrar tarifas, multas, recargos, reintegros por gastos y otras deudas por los servicios prestados;
9. elevar al EPAS un informe detallado de las actividades desarrolladas y la planificación para el año siguiente;
10. mantener la calidad del agua y del ambiente adoptando los sistemas de tratamiento adecuados;

11. prestar el servicio en la forma y condiciones que determine esta ley, sus reglamentaciones y el EPAS

Artículo 29: Áreas de operación. A los efectos de esta ley las áreas se dividen en tres:

a) áreas servidas: es el territorio donde se prestan actualmente los servicios;
b) áreas de expansión: es el territorio en el cual se prevé la expansión de los servicios;
c) área remanente: es la que no posee servicios ni se encuentra incluida en áreas de expansión. Los operadores tendrán asignada un área servida y un área de expansión, determinando el contrato de concesión, las obras y trabajos a realizar en cada área.

Artículo 30: Nuevos servicios. En las áreas de expansión y en los remanentes se podrá solicitar al EPAS la concesión del servicio por terceros interesados, de conformidad con las normas del título III, capitulo v, de las concesiones.

Artículo 31: Servicios preexistentes. Los operadores preexistentes a la fecha de vigencia de la presente ley, tendrán dos años de plazo para adecuarse a sus disposiciones, adquiriendo el carácter de concesionarios del servicio a todos sus efectos. A tal efecto, el EPAS aprobara los planes y programas de operación que estos deberán elevarle oportunamente. Corresponderá a los municipios que actualmente prestan los servicios regulados por esta ley, la determinación de sus áreas de expansión y remanentes, dentro de la jurisdicción respectiva. El EPAS adoptara estas delimitaciones para el cumplimiento de sus funciones. Los demás municipios de la provincia podrán constituirse en operadores de los servicios cuando así lo determinen sus respectivos concejos deliberantes, quedando sujetos, en lo demás, a las disposiciones de esta ley.

CAPITULO IV
DE LA PROTECCION DE LOS USUARIOS

Artículo 32: Derecho genérico. Todas las personas físicas o jurídicas que habiten en la provincia tienen derecho a la provisión de agua potable, desagües cloacales e industriales, en la forma y condiciones que determine esta ley y sus reglamentaciones.

Artículo 33: Usuarios actuales y potenciales. Son usuarios actuales las personas físicas o jurídicas cuyos domicilios se encuentran en las áreas servidas y son usuarios potenciales quienes estén en las áreas de expansión o remanente.

Artículo 34: Usuarios actuales. Los usuarios actuales gozan de los siguientes derechos:

1. a la prestación del servicio conforme al nivel de calidad que establezca el EPAS;
2. de requerir al EPAS la instalación y restablecimiento de la prestación del servicio en la forma y condiciones que determina esta ley; y a exigir el cumplimiento de los planes de expansión y metas que se fijen al operador;
3. a conocer, con la debida antelación, el régimen tarifario, su composición, sus modificaciones, y a recibir oportunamente las facturas correspondientes;
4. a la rectificación por el operador de las facturas u otros cargos que no coincidan con el régimen aprobado, pudiendo autorizar el EPAS la suspensión del pago hasta la rectificación;
5. a ser informado por el operador y el EPAS sobre todos aquellos aspectos vinculados al servicio para el adecuado ejercicio de sus derechos;
6. a denunciar ante el EPAS, cualquier acción u omisión cometida por el operador o terceras personas que pudieran afectar sus derechos.

Artículo 35: Derecho genérico de los usuarios potenciales. Tienen el derecho de pedir al operador el cumplimiento de las metas de expansión que se le hayan fijado en el área de expansión y, de recurrir ante el EPAS para su imposición.

Prestación del servicio. Tienen derecho a prestar el servicio de conformidad con las disposiciones del capítulo siguiente.

CAPITULO V
DE LAS CONCESIONES

Artículo 36: Ámbito de aplicación. Las concesiones que regula este capítulo tienen por objeto, el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos de provisión de agua potable y de desagües cloacales por usuarios y por terceros interesados, en las áreas de expansión y remanentes que se delimiten con motivo de la aplicación de esta ley. El derecho subjetivo al aprovechamiento especial de aguas superficiales y subterráneas, se ejercerá por concesión de uso aplicando las disposiciones de la constitución provincial, ley de aguas de la provincia y legislación complementaria mediante el procedimiento que se describe a continuación. Previo al otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio público de provisión de agua potable de origen superficial por el EPAS, deberá cumplirse con el artículo 194 de la constitución provincial. A tal efecto el EPAS remitirá al Departamento General de Irrigación los antecedentes a fin de que se gestione la sanción de la pertinente ley de concesión. Simultáneamente con la remisión de los antecedentes el EPAS podrá solicitar al Departamento General de Irrigación la conformidad para el otorgamiento de permisos temporarios de usos, a los efectos de posibilitar la prestación inmediata del servicio. Cuando se refieran al uso de aguas subterráneas, el EPAS solicitara al Departamento General de Irrigación el otorgamiento de la pertinente concesión, de conformidad a la legislación especial en materia de aguas subterráneas, remitiendo al efecto los antecedentes del caso.

Otorgada la concesión, el EPAS podrá conceder el servicio. La registración, empadronamiento, y la fijación y percepción de la tributación de las concesiones de uso del recurso hídrico permanecerán a cargo del Departamento General de Irrigación.

Artículo 37: Integralidad. Las concesiones del servicio público serán integrales, comprensivas de todas las etapas de la prestación del servicio. Excepcionalmente, por razones de interés general, el EPAS podrá recomendar el otorgamiento de concesiones parciales. Cuando se otorguen concesiones parciales se deberá garantizar al usuario el acceso a todas las etapas del servicio. La concesionaria de la distribución del agua potable será responsable de cobrar y recaudar de los usuarios el valor de todas las prestaciones.

Artículo 38: Usuarios. Los usuarios podrán establecer, construir y explotar por si sistemas de provisión de agua potable y desagües cloacales en áreas de expansión y en áreas remanentes. Las concesiones se otorgaran, previa vista al operador actual del área a fin de que, en un plazo razonable que determinara la autoridad, conteste si se encuentra en condiciones de prestar el servicio en los mismos términos propuestos por los usuarios. En caso de negativa del operador, silencio o condiciones similares a las propuestas por los usuarios, estos obtendrán la concesión del servicio.

Régimen. Otorgada la concesión, deberán cumplir con todas las obligaciones correspondientes a los operadores, de conformidad con esta ley y las disposiciones del ente regulador, con excepción del componente lucrativo del régimen tarifario.

Forma jurídica. Los operadores resultantes adoptaran la forma societaria más adecuada, para el cumplimiento de los objetivos del servicio, sea en forma de cooperativa, de consorcio o de asociación civil.

Artículo 39: Terceros interesados. La solicitud de concesión de los servicios se presentara ante el EPAS, con los recaudos que determine la reglamentación. Un extracto de la misma deberá publicarse por dos días en el boletín oficial y un diario local. Si hubiera otros interesados, incluidos usuarios que no hayan tenido la iniciativa reglada en el artículo anterior, estos deberán presentar al EPAS, dentro del plazo de diez días de la última publicación del extracto, una solicitud de concesión. Cuando la solicitud sea en área de expansión, se dará vista de la misma al operador actual del área para que manifieste si puede

prestar el servicio en las condiciones propuestas por el solicitante. A igualdad de condiciones propuestas tendrá preferencia el operador actual del área.

El o los interesados, que hubieren presentado una solicitud de concesión, entregaran al EPAS, en el plazo que se determine, para su apertura en un mismo acto público, la siguiente documentación:

I. un estudio de pre factibilidad técnica y económica, incluyendo un programa de desarrollo, que deberá contener por lo menos:
   a. descripción técnica general y cronograma de las obras proyectadas para un horizonte de quince años como mínimo;
   b. estimaciones de beneficios, costos, valor actualizado y rentabilidad asociados;
   c. tarifas propuestas y aportes considerados;

II. los demás antecedentes que fije la autoridad regulatoria.

Artículo 40: Adjudicación. El EPAS, recomendara al poder ejecutivo la adjudicación de la concesión, teniendo en cuenta, en base a los requerimientos técnicos exigidos, el programa de desarrollo propuesto y la menor tarifa de la prestación. Cuando el interés general lo haga necesario, se considerara el plazo de puesta en marcha de la prestación de los servicios como criterio adicional de adjudicación.

Artículo 41: Caducidad. Las concesiones caducaran en los siguientes casos:

1. incumplimiento de las actividades y obras correspondientes al programa de desarrollo y explotación del servicio concesionado;
2. incumplimiento de la prestación del servicio establecido por la presente ley y sus reglamentaciones;
3. incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión;

Para la calificación de dichas causales, el ente regulador deberá considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia. La caducidad será dispuesta por el poder ejecutivo.

TITULO IV
DE LA PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO

Artículo 42: Orden público ambiental. Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a cumplir con las normas de preservación y de calidad del recurso hídrico, que se establecen en la presente ley, las que serán consideradas a todos sus efectos de orden público.

Desarrollo sustentable. En el proceso de emisión de las normas de calidad deberá observarse esencialmente la necesaria unidad del ciclo hidrológico, el manejo por cuencas y la preservación del ecosistema del que forma parte el recurso hídrico, procurando su aprovechamiento integral, racional y eficiente en el marco del desarrollo sustentable.

Obligación general. La disposición de los efluentes residuales sólidos o líquidos, tóxicos o no, a cualquier curso o cuerpo receptor, que signifique una degradación directa o indirecta del recurso hídrico, deberá ser objeto del correspondiente tratamiento de depuración.

Artículo 43: Calidad del recurso. El EPAS y el Departamento General de Irrigación, coordinadamente, fijaran metas de calidad y plazos para la implementación del tratamiento, que en ningún caso podrán exceder de cinco (5) años. A tal efecto, emitirán las normas de calidad del recurso hídrico provincial, cuyo cumplimiento será obligatorio para todos sus habitantes. Para el adecuado funcionamiento del sistema de preservación hídrica, la compatibilización de las normas que se emitan y la aplicación de las mismas, se establecerá un procedimiento de consulta y coordinación permanente entre el EPAS y el Departamento General de Irrigación.

Para ello, deberán cumplir, entre otras, con las siguientes funciones:

1. reunir la información sobre la calidad, cantidad y disponibilidad del recurso hídrico provincial a fin de evaluar las posibilidades de su aprovechamiento, gestión y control sostenible;
2. evaluar los niveles de contaminación urbana, agrícola e industrial, a través de una comparación con parámetros nacionales e internacionales;
3. identificar las fuentes contaminantes, determinar sus características y disponer su corrección;
4. emitir las normas de calidad del agua según sus usos;
5. emitir las normas técnicas necesarias para el desarrollo del sector y la operación del servicio;
6. elaborar un programa de vigilancia e inspección para asegurar la vigencia de tales normas; y
7. promover sistemas de potabilización de agua y de tratamiento de afluentes.

Artículo 44: Competencia. Para la aplicación de las normas de preservación hídrica que se establecen en este capítulo y sin perjuicio de la coordinación impuesta precedentemente, se deslindan las siguientes áreas de competencia:

1. Departamento General de Irrigación: en lo relativo descarga de afluentes de cualquier naturaleza cuyos cuerpos receptores sean cauces hídricos naturales, sistemas de riego y embalses naturales y artificiales;
2. EPAS: en lo relativo a descargas de efluentes cloacales en cualquier cuerpo receptor y efluentes de cualquier naturaleza cuyos cuerpos receptores sean las redes colectoras cloacales e industriales, como también sobre los sistemas cerrados de reutilización;
3. Municipalidades: en lo relativo a descargas de afluentes de cualquier naturaleza cuyos cuerpos receptores sea la red de riego del arbolado público y los desagües pluviales. Tendrán además la competencia que se les delegue con motivo de los convenios previstos en el artículo 9 de la presente ley.

Coordinación institucional. El poder ejecutivo, a través del ministerio de medio ambiente, urbanismo y vivienda, convocara a los organismos de la administración central y descentralizada, institucional o territorial, con competencia hídrica, para que procedan a unificar sus procedimientos en la aplicación de las normas de calidad, su control y la promoción de los sistemas de tratamiento más convenientes.

TITULO V
DEL REGIMEN CONTRAVENCIONAL

Artículo 45: Sanciones. Las violaciones o incumplimientos a la presente ley y sus normas reglamentarias cometidas por operadores o terceros no prestatarios, según corresponda y de acuerdo a la gravedad del hecho, serán sancionados con:

1. apercibimiento;
2. multa entre $ 100 y $ 1.000.000;
3. suspensión de la actividad del establecimiento;
4. clausura de la fuente de contaminación;
5. clausura del establecimiento;
6. decomiso;
7. caducidad de la concesión.

En ningún caso la aplicación de la sanción podrá afectar la normal prestación del servicio. Cuando se disponga la caducidad de la concesión, el EPAS organizara la prestación provisoria del servicio. Inmediatamente convocara a los usuarios o interesados, mediante concurso público, para el otorgamiento de una nueva concesión, siguiendo en lo pertinente el procedimiento del título iii, capitulo v - de las concesiones.

La imposición de la multa es compatible con la aplicación de las sanciones de suspensión o de clausura del establecimiento o de la fuente, debiendo considerarse la gravedad de los hechos, las circunstancias del caso y las

reincidencias para la graduación de las sanciones a imponer, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que pudiera corresponder.

La autoridad de aplicación del régimen contravenciones correspondiente a la preservación del recurso hídrico, será el organismo competente según el uso del recurso que resulte comprometido.

El procedimiento que se adopte en todos los casos deberá garantizar el ejercicio del derecho de defensa.

Artículo 46: Procedimiento. Corresponderá la vía de apremio para el cobro de tasas, canon, multas y cualquier obligación pecuniaria establecida por el presente título.

Artículo 47: Fuerza pública. A fin de cumplir con las sanciones que se hubieran dispuesto, el ente regulador o la autoridad competente, estará facultada para requerir el auxilio de la fuerza pública con jurisdicción en el lugar del hecho.

Artículo 48: Intervención. El poder ejecutivo, a requerimiento del EPAS, podrá disponer la intervención administrativa del concesionario, empresario prestatario o de explotación del servicio, por el plazo de hasta ciento ochenta días, prorrogables por igual termino. Sera procedente cuando el incumplimiento de las obligaciones legales o convencionales importe irregularidad en las condiciones de prestación y las sanciones previstas precedentemente no sean adecuadas para su restablecimiento.

La intervención tendrá por objeto restablecer la regularidad en las condiciones de prestación del servicio, sin que importe necesariamente la sustitución temporaria de los órganos de dirección y administración de la entidad prestataria.

TITULO VI
DE LOS SERVICIOS DE OBRAS SANITARIAS MENDOZA SOCIEDAD DEL ESTADO

Artículo 49: Sujeto a concesión. Declarase "sujeta a concesión" el servicio público de provisión de agua potable, desagües cloacales e industriales, cuya gestión actual se encuentra a cargo de "obras sanitarias Mendoza sociedad del estado".

Artículo 50: Forma societaria. A tal efecto, el poder ejecutivo constituirá una o más sociedades anónimas, cuyo único objeto social será la prestación de los servicios de provisión de agua potable y de saneamiento en las áreas territoriales de operación que se definan en el acto respectivo.

La posibilidad de constituir más de una sociedad estará limitada a las necesidades de atender a las características del ecosistema provincial, comprendiendo, en general, regiones a partir de sus oasis irrigados. En todos los casos, las nuevas sociedades deberán comprender un sistema integral en la prestación de los servicios previstos por esta ley.

Concesionarias. Las sociedades anónimas que se formen en virtud de la disposición precedente serán concesionarias del uso del recurso hídrico y del servicio público regulado por esta ley.

Inscripción. La inscripción registral la efectuara el poder ejecutivo sin trámites administrativos previos y libre de todo gasto, honorarios, impuestos, tasas y aportes jubilatorios que pudieran corresponder.

Contratos. El poder ejecutivo procederá a otorgar a las sociedades que se constituyan los correspondientes contratos:

4. de concesión del servicio de provisión de agua potable y saneamiento;
5. de concesión de uso de plantas potabilizadoras, de tratamiento de efluentes, de redes de distribución y otros inmuebles resultantes a la empresa obras sanitarias Mendoza S.E.;
6. de transferencia de activos que resulten de la empresa obras sanitarias Mendoza S.E., de su personal y de otras obligaciones que se establezcan.

Estatutos. Previo a la constitución de las sociedades anónimas, el poder ejecutivo deberá remitir sus estatutos sociales a la legislatura provincial para su aprobación. Podrán formar parte de las sociedades anónimas que se constituyan, en los casos del Artículo 54 de la presente los usuarios organizados en cooperativas, uniones vecinales, mutuales y otras asociaciones civiles sin fines de lucro.

Si en un plazo de cuarenta y cinco (45) días no hubiera pronunciamiento expreso se tendrán por aprobados tácitamente. En el directorio de la o las sociedades a constituirse, uno de sus miembros será designado por el personal poseedor de capital accionario de la sociedad. Dicho representante será elegido por sufragio y en forma secreta.

Artículo 51: Término de la concesión. La duración de la concesión se definirá, en cada caso, en función de las inversiones y objetivos que se establezcan para cada sociedad.

Artículo 52: Devolución del servicio. Los respectivos contratos deberán contemplar que, a su extinción, se deberá devolver al estado provincial un sistema en plena operación, con todas sus instalaciones, los adelantos tecnológicos que eviten su obsolescencia y las mejoras y ampliaciones que se hayan incorporado, sin compensación alguna.

Artículo 53: Capital social. El capital social de las nuevas sociedades surgirá de una valoración técnica realizada por el poder ejecutivo, el que deberá obtener previamente un informe producido por un organismo competente en lo financiero de carácter interprovincial, nacional o internacional, según sea posible. La referida valoración será remitida a las comisiones de hacienda de cada cámara legislativa, las que deberán pronunciarse sobre su contenido en un plazo de cuarenta y cinco (45) días de solicitado. Vencido el mismo se tendrá por aprobada.

Artículo 54: Participación del sector privado. La incorporación de aportes del sector privado, con el objeto de desarrollar el plan de inversiones de estas sociedades, podrá realizarse por el procedimiento de aumento del capital social.

Las nuevas acciones representativas del aumento de capital serán suscriptas a través del procedimiento del concurso público o de la oferta pública. Cuando los usuarios, organizados o no, aporten en la expansión de las redes, en su renovación y mantenimiento, podrá otorgárseles en forma directa acciones representativas del correspondiente aumento de capital. Los estatutos societarios y los contratos de concesión deberán instrumentar estas alternativas de conformidad con las condiciones que se establecen a continuación, tratando de procurar que en la adquisición de las nuevas acciones, los inversores residentes en la provincia, en especial los usuarios, tengan la oportunidad de obtener una participación significativa a través de la oferta pública.

Concurso público. Cuando se recurra a este procedimiento, las nuevas acciones emitidas deberán ser nominativas y su transferencia posterior estará sujeta a los requisitos que establezca el poder ejecutivo. Para la venta de este paquete accionario se fijara un monto base para la oferta.

Cuando las nuevas acciones emitidas puedan provocar la pérdida de la mayoría estatal, la suscripción exclusiva de las mismas por concurso público requerirá autorización legislativa previa. La autorización se tendrá por concedida si en un plazo de cuarenta y cinco (45) días de solicitada no hubiera un pronunciamiento expreso.

Oferta pública: a través de la oferta pública se invitara a los usuarios y al público en general a suscribir la nueva emisión, con el fin de otorgarles participación en la titularidad de las sociedades. En este procedimiento deberá preverse una preferencia, consistente en un descuento, para la adquisición de las mismas en favor de los usuarios organizados y en general para los habitantes del territorio provincial.

Venta: las acciones de titularidad de la provincia únicamente podrán ser vendidas previa autorización legislativa y su producido será administrado por el EPAS para el desarrollo del sector, en especial de las áreas de expansión y remanentes.

Artículo 55: Participación del personal. El diez por ciento (10%) del capital social será transmitido de las sociedades anónimas a constituirse gratuitamente al personal de obras sanitarias Mendoza S.E. Que integre su planta de agentes al momento de promulgarse la presente ley y que haya optado por incorporarse a la sociedad concesionaria, de acuerdo a la jerarquía y a la antigüedad de cada agente, de conformidad con la reglamentación que dicte el poder ejecutivo.

Artículo 56: De la participación en las ganancias. El personal participara en la distribución de las utilidades de la sociedad concesionaria de acuerdo a lo que determinen los estatutos sociales.

Artículo 57: Política para el personal. El poder ejecutivo instruirá a la conducción de obras sanitarias Mendoza S.E. Sobre la política para el personal de la empresa, de conformidad con las siguientes alternativas:

a) incorporación a la sociedad concesionaria, por opción del propio trabajador, en las condiciones de la legislación laboral vigente, en el ámbito de obras sanitarias s. E. O lo que surja de la negociación colectiva con las organizaciones gremiales del personal;
b) incorporación al ente regulador, condicionada a las necesidades de personal que indiquen sus autoridades y previa aceptación por el peticionantes del marco laboral y salarial que regulara las futuras relaciones;
c) incorporación a la administración pública provincial, en las mismas condiciones establecidas en el inciso precedente;
d) sistema de retiro voluntario, cuando no se pueda optar por la jubilación anticipada;
e) jubilación anticipada, para el personal que reúna diez (10) años de aportes a la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia;

f) el personal podrá también integrar entidades conformadas según los tipos societarios que determine el poder ejecutivo y en los casos en que este considere pertinente, para que se hagan cargo de la prestación de los servicios accesorios al principal, tales como los de mantenimiento, reparación de redes, desobstrucción de las mismas, entre otros. La incorporación del personal a estas sociedades estará condicionada a la renuncia al empleo. El contrato de concesión que se celebre en la primera oportunidad se otorgara en forma directa y no podrá ser inferior a cinco (5) años y superior a ocho (8) años. El poder ejecutivo podrá disponer conjuntamente la concesión de uso o el arrendamiento de los bienes afectados a las actividades concesionadas por el plazo del contrato.

La jubilación anticipada será procedente cuando el personal que se encuentre en actividad a la fecha de constitución de la sociedad anónima respectiva cuente con treinta (30) años de aportes computables y tenga una edad mínima de cincuenta y tres años (53). En tal supuesto, el haber será reducido inicialmente en el uno por ciento (1%) por cada año que falte para cumplir la edad mínima que establece la legislación vigente.

También podrán acogerse a este beneficio quienes teniendo la edad de sesenta y dos años (62) hayan realizado hasta veinticinco años (25) de aportes. En tal caso, deberán aportar de su haber jubilatorio el once por ciento (11%) hasta completar los cinco (5) años faltantes.

La instrumentación de este beneficio previsional queda sujeto al financiamiento de obras sanitarias Mendoza S.E.

El poder ejecutivo reglamentara las formas y condiciones para el cumplimiento de estas alternativas. En todos los casos, la opción quedara sujeta a la aceptación expresa del personal.

Artículo 58: Del personal transferido. Las sociedades concesionarias serán continuadoras de obras sanitarias Mendoza S.E. En las relaciones laborales que

une a esta con sus empleados, reconociéndoles sus derechos relativos a la antigüedad y sueldo.

El referido personal continuara con el régimen previsional vigente a la época de la sanción de esta ley y en las obras sociales o mutuales actuales, o en las que en adelante las reemplacen.

Podrán sostenerse regímenes previsionales o de obras sociales propios del personal, sujetos a los convenios que a ese efecto se celebren dentro del marco legal de aplicación.

Para la movilidad de los haberes de pasividad del personal jubilado de la empresa obras sanitarias Mendoza s. E., se continuara tomando en consideración el régimen que se establezca para las remuneraciones del personal en actividad perteneciente a la prestataria de los servicios sanitarios; conforme lo determine el régimen jubilatorio, ley no 3794, y/o modificatorias y decretos reglamentarios.

Artículo 59: Comisión bicameral. Deberá constituirse una comisión bicameral para el seguimiento del proceso de transformación operativa que por el presente capitulo se establece. Esta comisión estará integrada con los legisladores miembros de las comisiones competentes en la materia de cada cámara y su función será coordinar la labor entre el poder ejecutivo y el poder legislativo informando a este último sobre todas las etapas que se ejecuten en cumplimiento de esta ley.

Artículo 60: Intervención. A fin de cumplir con las disposiciones establecidas en este título, autorizase al poder ejecutivo a disponer la intervención de la empresa obras sanitarias Mendoza sociedad del estado hasta su liquidación. Las funciones y atribuciones del interventor serán las que las leyes y los estatutos de la sociedad otorguen a sus órganos de administración y dirección.

En el desempeño de su gestión, que durara el lapso que demande la liquidación, deberá dar estricto cumplimiento de las instrucciones que establezca el poder ejecutivo.

Liquidación. Autorizase al poder ejecutivo a proceder a la liquidación de la empresa obras sanitarias Mendoza S.E., de acuerdo con el art. 5 de la ley n° 20.705 y los estatutos aprobados por ley n° 4479.

Propiedad provincial. Las plantas potabilizadoras, de tratamiento de efluentes y las redes de distribución quedaran en propiedad del estado provincial y serán concesionados oportunamente en uso a cada sociedad anónima.

Artículo 61: En forma conjunta a la creación de la nueva sociedad, el estado provincial deberá determinar la totalidad de sus deudas con obras sanitarias Mendoza S.E. El importe de las mismas podrá ser compensado con las obligaciones que adquiera el estado provincial con motivo de la aplicación de los artículos 26 y 57 de la presente ley, así como con la financiación de los planes de desarrollo rural que se establezcan como prioridad por parte del gobierno.

TITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 62: Concesiones parciales. Las sociedades anónimas, cuando corresponda, podrán proceder de conformidad con la ley 5507 y sus modificatorias, para el otorgamiento de concesiones de obras y servicios públicos, siempre que no se afecte la necesaria integralidad del sistema.

Artículo 63: Facultase al poder ejecutivo provincial para proceder a formular el primer presupuesto de gastos y cálculo de recursos del EPAS a partir de los recursos que se le transfieran del presupuesto vigente de la administración pública provincial y de los que se generen con motivo de la aplicación de la presente ley.

La nueva planta de personal del EPAS, será remitida por el poder ejecutivo, ad referéndum de la honorable legislatura.

Artículo 64: El poder ejecutivo reglamentara la presente ley en un plazo de sesenta (60) días, a partir de su promulgación.

Artículo 65: comuníquese al poder ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura, en Mendoza a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres.

LEY 6.105

Mendoza, 29 de diciembre de 1993.
(Ley general vigente)
(V.A.: ley 7444)
Bo: 14-02-94
Nro. Arts. : 0004

Tema: Ley 430- Agua- Derechos- Uso- Publica- Riego- Regadío- Irrigación- Mendoza-Tunuyán- Ríos- Diamante- Atuel-

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1: A efectos de dar cumplimiento a los dispositivos emergentes de la ley 430 en concordancia con lo dispuesto por los arts. 194 y 195 de la Constitución Provincial, en orden a la determinación de la cantidad de agua disponible y las condiciones especiales para asignar, modificar o en su caso caducar, derechos de uso de agua publica para regadío y demás aprovechamientos;

Encomiéndese al Departamento General de Irrigación para que en un plazo máximo de tres (3) a|os a partir de la promulgación de la presente, proceda a efectuar las mediciones pertinentes en los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel.

Artículo 2: El Departamento General de Irrigación deberá informar anualmente a la honorable legislatura -dentro del periodo establecido- sobre el estado de cumplimiento de la presente ley, elevando la nómina de usuarios a quienes corresponda reasignación, modificación o extinción de sus derechos, a fin de proceder a refrendar por ley dicha nomina, en un todo de acuerdo con el régimen legal de agua vigente.

Artículo 3: Incorporase al presupuesto general de la provincia para el ejercicio 1994 y subsiguientes, las partidas necesarias para solventar los gastos que demanden los estudios encomendados por la presente.

Artículo 4: Comuníquese al poder ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

LEY N° 6.405

Mendoza, 02 de julio de 1996.
(Ley general vigente)
(Ver además res. 744/98 del INTA)
(Ver además res. 573/02)
BO: 21/08/96
N° arts. : 0029

Tema: Administración- Control- Conservación- Mantenimiento- Hijuelas- Canales- Desagües- Riego- Inspección- Cauces- Departamento General de Irrigación-

El Senado y Cámara de diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1: competencia funcional. La administración, uso, control, conservación, mantenimiento y preservación de los canales, hijuelas y desagües de riego de la provincia así como de las aguas que son conducidas por los mismos, estarán a cargo de las inspecciones de cauces, con sujeción a lo dispuesto en el capítulo único sección sexta, Departamento General de Irrigación, de la Constitución Provincial.

Los usuarios de aguas subterráneas alumbradas por perforaciones, podrán constituir una inspección para su explotación, bajo el régimen de la presente ley, quedando el Departamento General de Irrigación facultado para disponer su constitución cuando circunstancias excepcionales así lo requieran.

Artículo 2: caracteres. Las inspecciones de cauces son personas de derecho público sin fines de lucro, gozaran de autarquía y plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. Eligen sus autoridades, elaboran sus presupuestos, conforme con lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución Provincial. Se constituyen de pleno derecho por todos los usuarios titulares de derecho de uso de aguas públicas, cuya dotación se suministre a

través de un mismo cauce o de un sistema de cauces específicamente determinado. Sus atribuciones y funcionamiento se rigen por esta ley y demás leyes que rigen en la materia, en tanto no sean modificadas por la presente.

Artículo 3: jurisdicción territorial. Las atribuciones y funciones de las inspecciones de cauces se ejercen dentro del área territorial delimitada por el trazado del canal, hijuela o desagüe o acuífero bajo su jurisdicción y se extienden a toda actividad que directa o indirectamente afecte la normal distribución de las aguas, la integridad de los cauces o la cantidad o calidad de las aguas que conduzca. La demarcación de dicha área será efectuada por el Departamento General de Irrigación, a petición de la inspección.

Artículo 4: órganos de las inspecciones. Son órganos de las inspecciones de cauces: la asamblea general de usuarios, el inspector de cauce, el cuerpo de delegados y la comisión de vigilancia. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias.

Artículo 5: asambleas ordinarias. La asamblea general ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año para votar la conformidad al presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos y rendición de cuentas que presente la inspección de cauces del ejercicio anterior, quedando sujetas a la aprobación del Departamento General de Irrigación.

Artículo 6: asambleas extraordinarias. Las asambleas generales extraordinarias serán convocadas cuando razones de urgencia o importancia así lo requieran. Dicha convocatoria deberá ser efectuada por el inspector por si, a requerimiento del Departamento General de Irrigación, o a petición de los usuarios del cauce que se encuentren al día en sus obligaciones en un número no inferior a la vigésima parte de los derechos empadronados.

Tendrán por objeto:

a) sugerir aquellas medidas tendientes al mejoramiento de la distribución y utilización del recurso hídrico;

b) disponer la fusión o exclusión y asociación o separación con otras inspecciones de cauces;

c) expedirse sobre los demás asuntos que requieran las autoridades de las inspecciones o determinen esta ley o su reglamentación.

Artículo 7: convocatoria, publicidad y cómputos de votos. El procedimiento para la convocatoria deberá garantizar mecanismos eficaces, debida publicidad y quorum para su normal funcionamiento. El cómputo de votos durante las asambleas será ponderado por la siguiente forma:

Hasta cinco mil (5000) m2..... Un voto
Más de cinco mil (5000) m2 a cinco (5) ha. ..... Dos votos
Más de cinco (5) ha a diez (10) ha. ..... Tres votos
Más de diez (10) ha a veinte (20) has. ..... Cuatro votos
Más de veinte (20) ha a treinta (30) has..... Seis votos
Más de treinta (30) ha a cuarenta (40) has. ……. Ocho votos
Más de cuarenta (40) ha..... Diez votos.

Para el caso de usuarios no agrícolas, el Departamento General de Irrigación establecerá las equivalencias. Tendrán derecho a votar aquellos usuarios que se encuentren al día con sus tributos. El resto de los usuarios tendrá derecho a voz.

Artículo 8: dirección y administración. La dirección y administración de las inspecciones de cauces está a cargo del inspector, con la asistencia de tres (3) delegados, como mínimo designados en las normas y condiciones establecidas por la ley N° 5.302 y 5.664 o las que en el futuro estipule el régimen electoral.

Artículo 9: inspector de cauce: funciones. Son funciones del inspector de cauce:

a) ejercer la representación legal de la inspección;

b) proyectar el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos de la inspección y confeccionar la rendición de cuentas respectiva;

c) administrar y distribuir el agua en función de los distintos usos y las categorías de los derechos empadronados, con criterios de equidad y eficiencia;

d) confeccionar los cuadros de turnos respectivos para la entrega de dotaciones de agua, dando debida publicidad a los usuarios;

e) ejercer el poder de policía de las aguas, sus cauces, riberas y zonas de servidumbre, con los alcances previstos en la ley de aguas;

f) resolver en primera instancia, con el carácter de juez de canal o hijuela, los conflictos que se planteen entre los usuarios con motivo del uso y la preservación de las aguas, con apelación ante el subdelegado de aguas de esta jurisdicción o por el superintendente ante la falta del subdelegado;

g) contar con una registración actualizada de derechos de agua que contenga: titularidad, tipos de usos, categorías de derechos, dotaciones y vuelcos autorizados;

h) poseer un plano catastral del área territorial bajo jurisdicción de la inspección con demarcación del recorrido del cauce, ubicación de las tomas generales y derechos empadronados, cultivos existentes, utilización de aguas subterráneas y demás datos conducentes a una mejor eficiencia en la distribución del agua;

i) percibir los recursos y administrar los bienes de la inspección, llevando a tal efecto los libros de inventarios y de banco;

j) designar o contratar el personal de la inspección y fijar sus remuneraciones conforme el presupuesto aprobado y disponer su remoción;

k) llevar un libro de actas donde consten las decisiones y aspectos relevantes de las asambleas y de las reuniones del inspector y delegados;

l) ejecutar las obras y trabajos necesarios para el mantenimiento, conservación y mejora de los cauces y determinar la limpieza por cupos;

m) disponer la suspensión de la entrega de dotación del agua y aplicar multas en los casos previstos por la ley de aguas;

n) adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, impedir y reducir la contaminación de las aguas o el deterioro de los cauces y preservarlos de cualquier otro efecto nocivo;

o) aplicar las demás disposiciones que integran el régimen legal de las aguas en la provincia y ejecutar los actos autorizados por las autoridades del cauce;

p) adquirir o arrendar bienes.

En los supuestos especificados en los incisos b) y j) se requiere la expresa conformidad del cuerpo de delegados.

Artículo 10: comisión de vigilancia. La asamblea general ordinaria deberá constituir una comisión de vigilancia, integrada por tres (3) usuarios, con sus respectivos tributos al día, elegidos por simple mayoría. Su mandato será de un (1) año de duración, pudiendo ser reelectos. Tendrán como función la fiscalización de la inspección.

Artículo 11: cargas financieras: su determinación. En la determinación de las cargas financieras inherentes al uso de aguas públicas, las inspecciones de cauces se ajustaran a los siguientes principios:

a) A) procurar el autofinanciamiento de los costos de operación y mantenimiento de los cauces y de la actividad de la inspección, así como las amortizaciones de las obras;

b) B) compatibilizar la relación entre el mínimo costo razonable para el usuario y el aumento en la seguridad y eficiencia en la distribución;

c) C) asegurar que las tributaciones que se apliquen sean justas y equitativas, tendientes al uso racional del agua.

Artículo 12: recursos. Son recursos de las inspecciones los fondos provenientes de:

a) la percepción de los tributos previstos en el presupuesto de la inspección;

b) las multas, recargos y demás importes y accesorios legales que autorice aplicar el Departamento General de Irrigación;

c) la aplicación de la ley de obras menores, decreto N° 555/75 y sus modificatorias, en la medida que corresponda;

d) D) los provenientes de la venta de forestales existentes en las márgenes de los cauces administrados por la inspección según los términos del art. 12 de la ley n°2.376;

e) los aportes o contribuciones especiales que se establezcan por ley;

f) F) los provenientes del producido de la venta de bienes de la inspección, o de donaciones, legados o de cualquier otra fuente.

Los importes recaudados por los conceptos precedentes deberán ingresar necesariamente, a través de cuentas bancarias abiertas a nombre de la inspección.

Artículo 13: apremio. Constituye título ejecutivo hábil y completo para promover ejecución por la vía de apremio, el certificado de deuda emitido por el inspector de cauce, el que deberá ajustarse a lo determinado por el código fiscal.

Artículo 14: asociación de inspecciones. Las inspecciones de cauces podrán agruparse en asociaciones, para el mejor cumplimiento de sus fines o para la defensa de los derechos y fomento de los intereses de las comunidades de usuarios agrupadas; en la medida que sean compatibles con una administración eficiente del recurso para todos los usos y en procura del bien común zonal.

Artículo 15: constitución. Para la conformación de las asociaciones de inspecciones se requiere el consentimiento expreso de las inspecciones de cauces con voluntad de asociarse, manifestando a través de sus respectivas asambleas generales de usuarios y sin afectar sus autonomías. El Departamento General de Irrigación emitirá el acto aprobatorio respectivo.

Artículo 16: naturaleza jurídica. Las asociaciones de inspecciones, al igual que las inspecciones que la integran, gozan de plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del derecho público y privado, encontrándose facultadas para elaborar sus propios estatutos de organización y funcionamiento; designar sus autoridades y administrar sus rentas, bajo la supervisión del Departamento

General de Irrigación de conformidad con el art. 187 de la Constitución Provincial.

Artículo 17: objeto. Conforme con lo establecido en el art. 14, las asociaciones de inspecciones tendrán por objeto:

a) sugerir y orientar criterios de optimización en la prestación del servicio y en el mejor aprovechamiento y conservación del sistema hídrico zonal;
b) cumplir subsidiariamente todas aquellas actividades de asistencia, promoción y coordinación que superen la posibilidad de ser ejercidas eficientemente por las inspecciones de cauces;
c) estimular la realización de otras actividades afines, que tiendan al desarrollo socio económico regional.

Artículo 18: facultades. Las asociaciones de inspecciones para el mejor cumplimiento de sus fines podrán:

a) adquirir o arrendar bienes para su normal desenvolvimiento;
b) celebrar contrataciones de personas y servicios necesarios para su funcionamiento;
c) ejecutar todo otro acto jurídico ajustado a su objeto.

Artículo 19: órganos de las asociaciones. Son órganos de las asociaciones de inspecciones: el directorio y la sindicatura.

Artículo 20: directorio. La administración y conducción de la asociación de inspecciones estará a cargo de un directorio, compuesto por un representante de cada una de las inspecciones que la integran. El representante deberá ser su respectivo inspector de cauce y en caso de imposibilidad de estos, los delegados en el orden legal correspondiente.

Artículo 21: autoridades. Conformado el directorio, sus miembros designaran al presidente, secretario, tesorero y demás autoridades que estimen necesarias; asimismo, podrán conformar comisiones para el estudio y seguimiento de los diversos temas afines al objeto de la asociación.

Artículo 22: sindicatura. Los estatutos de las asociaciones de inspecciones deberán prever la organización y funcionamiento de una sindicatura, la que tendrá por función fiscalizar la gestión del directorio.

Artículo 23: fiscalización. La fiscalización pública de las inspecciones de cauces y de las asociaciones de inspecciones estará a cargo del Departamento General de Irrigación, el que la ejercerá de la siguiente forma:

1) el tribunal administrativo está facultado para:

- **a)** aprobar el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos y las rendiciones de cuentas presentadas por las inspecciones de cauces y las asociaciones;
- **b)** efectuar los controles de legitimidad de la ejecución presupuestaria y de las rendiciones de cuentas de las inspecciones y asociaciones;
- **c)** aprobar los estatutos de las asociaciones de inspecciones, así como también las modificaciones posteriores;
- **d)** requerir la exhibición de libros y documentos que estime necesaria, solicitar informes y disponer investigaciones de oficio o a petición de parte;
- **e)** llevar un registro de las autoridades electas y la duración de sus cargos;
- **f)** verificar el cumplimiento de los recaudos exigidos para ser designados autoridades;
- **g)** designar veedores de las asambleas generales de usuarios, sean ordinarias o extraordinarias;
- **h)** propiciar la activa participación de los usuarios en la organización y funcionamiento de las inspecciones y asociaciones, en el marco de los principios de coordinación y subsidiaridad;
- **i)** prestar la asistencia técnica y financiera necesaria para el mejor desenvolvimiento de las inspecciones y asociaciones;
- **j)** intervenir administrativamente la inspección o la asociación, de oficio o a petición de los usuarios, cuando existan causas graves que así lo justifiquen;

k) aplicar las demás disposiciones que integran el régimen legal de las aguas de la provincia.

2) el superintendente general de irrigación y los subdelegados de aguas, dentro de sus respectivas jurisdicciones, ejercen las funciones de:

a) vigilar el cumplimiento de las atribuciones, deberes y funciones asignadas a las inspecciones y asociaciones, cuidando de no entorpecer la regularidad de sus respectivas administraciones por las autoridades legítimamente constituidas;

b) disponer inspecciones o verificaciones de carácter técnico que tengan por objeto asegurar el normal escurrimiento de las aguas y el adecuado funcionamiento hidráulico de las obras de conducción;

c) asistir técnicamente a las inspecciones y asociaciones en todo lo atinente a la optimización del uso del recurso y su preservación;

d) ejecutar acciones de asistencia y fomento, tendientes al mejoramiento de la gestión participativa del recurso hídrico;

e) compatibilizar y facilitar a las inspecciones de cauces y a las asociaciones de inspecciones la información registral y contable necesaria para el adecuado funcionamiento de las mismas;

f) aplicar las demás disposiciones emergentes a la legislación en la materia.

Artículo 24: alcance. Las inspecciones de cauces y asociaciones de inspecciones quedan sometidas de pleno derecho a este régimen. Las inspecciones de cauces asociadas existentes, quedan constituidas automáticamente en asociaciones de inspecciones, debiendo adecuar su estructura y funcionamiento a la norma que fije el Departamento General de Irrigación dentro del plazo de un (1) año de vigencia a la presente.

Artículo 25: personal. Al personal que actualmente presta servicios bajo la dependencia de las inspecciones o que en el futuro sea transferido, con su conformidad, del Departamento General de Irrigación a la inspección o asociación de inspecciones, se le mantendrá la antigüedad, remuneración y demás condiciones laborales del derecho público vigente aplicable al personal del Departamento General de Irrigación. Sin perjuicio de lo establecido

precedentemente, en el caso de los tomeros que en el futuro incorporen las inspecciones de cauces, cuya prestación efectiva de servicios no sea inferior a seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales y su cargo este autorizado por el presupuesto oficial del cauce 1995, su relación laboral se regirá por las normas del derecho público aplicables a los tomeros ya comprendidos, salvo en lo que respecta a su estabilidad laboral. Dicha estabilidad cesara cuando así lo disponga la asamblea ordinaria o extraordinaria de la inspección de cauce respectiva. Si el cese de la relación fuese sin causa, el tomero percibirá la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 5811.

Respecto a las obligaciones laborales del personal transferido o a transferir por el Departamento General de Irrigación a las inspecciones de cauces o asociaciones de inspecciones, ambos empleadores responderán solidariamente.

Todo otro personal que en el futuro incorporen las inspecciones o asociaciones se regirá por las normas de derecho laboral privado y por las convenciones colectivas que pacten la representación de los empleadores con la representación gremial de los empleados.

Artículo 26: bienes. Los bienes registrales o no de propiedad del Departamento General de Irrigación, se podrán transferir a las inspecciones o asociaciones, conforme el régimen publico vigente.

Artículo 27: facultad reglamentaria. La facultad reglamentaria del presente régimen legal estará a cargo del Departamento General de Irrigación.

Artículo 28: derogación. Derogase toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

Artículo 29: comuníquese al poder ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la honorable legislatura, en Mendoza, a los dos días del mes de julio de mil novecientos noventa y seis.

LEY N° 7.722

Mendoza, 20 de junio de 2007.

(Ley general vigente)

BO.: 22/06/2007

Nro. Arts. : 0007

Tema: Minería Recursos Naturales Prohibición Protección Recursos Hídricos Agua Sustancias Químicas Cianuro Mercurio Ácido Sulfúrico Procesos Mineros Minas Ecología Medio Ambiente

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1: A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

Artículo 2: Las empresas y/ o personas jurídicas o físicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales metalíferos, o aquellas que industrialicen dichos minerales deben tramitar en el plazo de treinta (30) días el "informe de partida" que establece el Art. 24 del Decreto 2.109/94, a efecto de cumplir con las exigencias de la presente Ley, bajo apercibimiento de cesar inmediatamente en su actividad hasta tanto adecuen todos sus procesos mineros y/ o industriales.

Artículo 3° - Para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley. Los informes sectoriales municipales, del Departamento

General de Irrigación y de otros Organismos Autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley 5961. Para dejar de lado las opiniones vertidas en los dictámenes sectoriales deberá fundarse expresamente las motivaciones que los justifican.

Artículo 4: Establécese como autoridad de aplicación de la presente al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, que reglamentará el establecimiento de un Seguro de Garantía Ambiental para cada emprendimiento y creará, dentro de su ámbito, la Policía Ambiental Minera que tendrá como función específica el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia de Mendoza, debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a las comisiones de Medio Ambiente de la Legislatura Provincial.

Asimismo en lo que refiere a la preservación y uso del agua el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia, en todas y cada una de sus etapas, cuando los mismos afecten las cuencas hídricas.

Artículo 5: La autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo, debiendo respetarse las realidades productivas y sociales de cada uno de los mismos, cuyos dictámenes sectoriales serán de carácter necesarios.

Artículo 6: La autoridad administrativa deberá identificar los daños ambientales que puedan existir y/o que se produzcan en el futuro con causa en la actividad minera, a efectos de exigir administrativamente la remediación del daño, o en su defecto requerir la misma según el procedimiento judicial que regula la Ley 25.675.

Artículo 7: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de Mendoza, a los veinte días del mes de junio del año dos mil siete.

Juan Carlos Jaliff
Analía V. Rodríguez
Andrés Omar Marín
Jorge A. Manzitti

LEY 8.115

Mendoza, 11 De Noviembre De 2009.
(Ley General Vigente Con Modificaciones)
(Texto Ordenado Al 16/12/2011)
B.O.: 15/12/2009
Nro. Arts. : 0008

Tema: Creación Fondo Financiamiento Infraestructura Agua Potable Saneamiento- Obras Sanitarias Mendoza- Ley 6410- 6794- Subsidio- Financiamiento Obras-

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza,sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1: Créase el "Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento" el que estará integrado por el porcentaje del canon de concesión de O.S.M.S.A. previsto para este fin en el artículo 2 de la Ley N° 6.410 y artículo 4 de la Ley N° 6.794 y sus posteriores modificaciones.

Artículo 2: El Fondo creado en el Art. 1 tiene como finalidad el subsidio y financiamiento de obras, adquisición de equipamiento y elaboración de proyectos tendientes a proveer de agua potable y saneamiento a usuarios y operadores de gestión comunitaria y municipal de la Provincia.

Artículo 3: El Fondo establecido en la presente, será administrado y controlado por el EPAS quien asignará las obras previamente determinadas por el Comité de Coordinación Municipal previsto en el Art. 12 de la Ley N° 6.044.

Artículo 4: El Comité de Coordinación Municipal, juntamente con el EPAS, determinará anualmente las obras a realizar según los requerimientos presentados por cada municipio, quién a su vez priorizará las obras elaborando un presupuesto participativo con los operadores comunitarios de su territorio.

Artículo 5: En el Fondo de Financiamiento creado en el Art. 1 deberán contemplarse los recursos necesarios para infraestructura, emergencias operativas, elaboración de proyectos y administración de auditorías de obras, encontrándose facultado el E.P.A.S. a utilizar el dieciocho por ciento (18%) del monto del Fondo creado, del siguiente modo:

a) Cuatro por ciento (4%) para gastos de proyectos de obra;
b) Cinco por ciento (5%) para emergencia operativa de servicios y administración;
c) Nueve por ciento (9%) para seguimiento y auditorías de obras.

Artículo 6: El E.P.A.S. deberá elevar anualmente a la Honorable Legislatura un informe de ejecución del programa donde se detalle descripción y monto de cada obra ejecutada, estado de avance, ubicación geográfica, operador del servicio y habitantes beneficiados.

Artículo 7[5]: Disposición transitoria: Integrará el Fondo creado en el Art. 1 el importe remanente de la Ley N° 7.201 de pesos doscientos sesenta mil setecientos noventa y uno con cincuenta y dos centavos ($ 260.791,52) y el importe remanente de la Ley N° 7.058 de pesos un millón diecinueve mil setenta y nueve con ochenta y nueve centavos ($ 1.019.079,89), respetándose en estos casos en particular en los montos referidos, las asignaciones realizadas en dichas leyes para cada Departamento y que a continuación se detallan:

Municipio	*Ley N° 7.201*	*Ley N° 7.058*	*Total Municipio*
General Alvear	$ 6.127,64	$ 47.128,50	$ 53.256,14
Guaymallén	$ 10.000,00	$ 65.000,00	$ 75.000,00
Junín	$ 31.529,13	$ 12.344,90	$ 43.874,03
La Paz	$ 40.000,00	$ 41.650,00	$ 81.650,00
Las Heras	$ 25.943,51	$ 60.255,00	$ 86.198,51
Luján de Cuyo	$ 40.178,07	$ 67.450,00	$ 107.628,07
Maipú	$ 21.492,00	$ 65.000,00	$ 86.492,00
Malargüe	$ 30.987,99	$ 45.000,00	$ 75.987,99

[5](Texto según ley 8.369, art. 1)

Rivadavia	$ 7.682,29	$ 71.476,50	$ 79.158,79
San Carlos	$ 25.882,00	$ 49.544,61	$ 75.426,61
San Rafael	$ 18.036,89	$ 152.998,13	$ 171.035,02
Tupungato	$ 2.932,00	$ 65.000,00	$ 67.932,00
Tunuyán	$ 0,00	$ 49.340,70	$ 49.340,70
San Martín	$ 0,00	$ 37.040,28	$ 37.040,28
Lavalle	$ 0,00	$ 50.934,11	$ 50.934,11
Godoy Cruz	$ 0,00	$ 18.770,00	$ 18.770,00
Capital	$ 0,00	$ 120.147,16	$ 120.147,16
Total Ley	$ 260.791,52	$ 1.019.079,89	$ 1.279.871,41

Artículo 8: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de Mendoza, a los once días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Sergio Bruni

Mariano Godoy Lemos

Roberto Infante

Jorge Manzitti

LEY N° 8.152

Mendoza, 05 de enero de 2010.
(Ley general vigente)
B.O.: 23/03/10
Nro. Arts.: 0010

Tema: Creación Programa Integral Control Mitigación Hídrica Medio Aguas Ambiente Ecología Ríos Represas Hidroeléctricas Saltos Energéticos Claras Sedimentación Fondo Integral Revestimientos Conservación Cauces Riegos Sesgues Drenajes Departamento General Irrigación

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1º - Créase el Programa Integral de Control y Mitigación Hídrica de los efectos ambientales negativos producidos en los ríos y sistemas hídricos mendocinos, como consecuencia del cambio de régimen hídrico generado por Presas Hidroeléctricas y Saltos Energéticos ubicados en diversas cuencas de la Provincia.

Defínase a los efectos de esta norma, como "Aguas Claras" a la pérdida de sedimentación natural del flujo de aguas en los embalses, por modificación de régimen torrencial lentico que desencadena una fuerte dinámica erosiva y mayor infiltración en los sistemas de derivados, con graves perjuicios y externalidades negativas en la calidad del suelo, agua, plantaciones y otros usos que dependen del recurso hídrico.

Artículo 2º - Créase el Fondo Integral de Revestimiento y Conservación de Cauces de Riego, Desagües y Drenajes afectados por el proceso de "aguas claras", el que se constituirá de la siguiente forma:

a) Las transferencias que realice el Poder Ejecutivo de la totalidad de las regalías hidroeléctricas no participadas a los municipios por la Provincia, a cuyo

efecto desaféctese este recurso de cualquier otro destino al que se encuentren afectadas a partir del presupuesto de recursos y erogaciones del ejercicio 2010. El Poder Ejecutivo deberá desagregar en los respectivos presupuestos de recursos y gastos anuales la partida correspondiente al Fondo creado en el presente artículo.

b) Los recursos que obtenga la Provincia de organismos de financiamiento nacional o internacional, públicos o privados, vinculados a la producción agrícola, modernización de regadíos, saneamiento de sistemas hídricos, provisión de agua potable, mejora de suelos, procesos de desertificación, degradación de tierras, programas ambientales y cualquier otra línea de financiación que se vincule directa e indirectamente con la problemática producida por el efecto de "aguas claras".

c) Los aportes que la Provincia o la autoridad de aplicación obtengan del Estado Nacional en carácter de subsidio o aporte no reintegrable y de asistencia hídrica.

d) Los montos que se asignen específicamente en las leyes de presupuesto a este Programa.

e)Todo recurso provincial, nacional o internacional que tenga por objeto atender a este programa.

f) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o entes provinciales, personas físicas o jurídicas, nacionales, internacionales, públicos o privados.

g) Los recursos provenientes de cualquier reclamo administrativo y/o judicial proveniente de acciones que la Provincia promueva contra la Provincia de La Pampa y/o al gobierno nacional como consecuencia de la percepción indebida por parte de La Pampa de recursos de regalías hidroeléctricas generadas por el río Atuel en el marco de lo dispuesto por el Decreto 1560/73.

h) Los recursos provenientes de las acciones judiciales iniciadas por la Municipalidad de San Rafael contra el Gobierno Nacional y otros, como

consecuencia del perjuicio ocasionado a ese Departamento por el efecto ambiental de "aguas claras", siempre que la cesión de acciones y derechos sea debidamente autorizada por los Concejos Deliberantes de los Departamentos involucrados en la causa judicial.

i) Los montos correspondientes a los reembolsos de obras realizadas en el marco de la presente ley.

Artículo 3º - El Departamento General de Irrigación en su calidad de Administrador del Recurso Hídrico Provincial conforme el mandato constitucional, será autoridad de aplicación de la presente ley, y deberá administrar el Fondo creado en el artículo anterior con la conformidad de la Junta Honoraria de Inspecciones de Cauces de cada cuenca.

Tendrá como misión, definir las acciones necesarias tendientes a dar cumplimiento al objeto del Programa, a cuyo efecto deberá, entre otras:

- **a)** Efectuar un relevamiento de los ríos mendocinos y sistemas hídricos asociados que deban incorporarse,
- **b)** Establecer tipo de obras y priorización,
- **c)** Considerar el balance hídrico en la definición de las acciones de mitigación y control respectivas,
- **d)** Implementar proyectos de capacitación y modernización dirigidos a las organizaciones de usuarios y operadores del sistema,
- **e)** Establecer plazos de ejecución y cronograma de implementación
- **f)** Ejecutar por sí o por terceros las obras que se definan.
- **g)** Tener en cuenta para la ejecución de las obras de impermeabilización de cauces de riego cuya sección hidráulica no supere los 3 m2 y mil (1000) metros de longitud, las disposiciones establecidas en los artículos 16 y 92 del Decreto Ley N° 4.416 de Obras Públicas de Provincia de Mendoza, de modo de garantizar y fomentar la mano de obra local en la ejecución de las obras en diversas cuencas de la Provincia. Para su implementación, la autoridad de aplicación deberá

planificar la ejecución de las obras de impermeabilización de cauces por tramos progresivos.

Artículo 4º - La reglamentación del Plan de Obras, las acciones, incentivos y subsidios establecidos, así como la creación del Fondo Integral de Revestimiento y Conservación de Cauces de Riego, Desagües y Drenajes, enunciados en los artículos precedentes, deberán ser refrendados por el Poder Legislativo.

Artículo 5º - La autoridad de aplicación de la presente ley con la conformidad de la Junta Honoraria de Inspecciones de Cauces de cada cuenca, establecerá el criterio de reembolsos de las obras a realizar en el marco de la presente ley, no pudiendo ser este superior al 60% del monto de cada obra.

Artículo 6º - Los montos del inciso h) del Art. 2° serán afectados a obras que deberán localizarse en la cuenca hídrica de cada río y en proporción a la generación de regalías hidroeléctricas de cada uno de los ríos involucrados en el reclamo referido.

Artículo 7º - La autoridad de aplicación deberá remitir anualmente a las Comisiones de Obras Públicas de ambas Cámaras de la Legislatura Provincial el Plan de Obras enmarcadas en el Programa creado por el Art. 1º, y semestralmente a estas mismas Comisiones Legislativas, informe en donde deberá detallarse la evolución del plan de obras y el estado del Fondo creado en el Art. 2º de la presente norma.

Artículo 8º - Facúltese al Departamento General de Irrigación a celebrar convenios con Mendoza Fiduciaria S.A. tendientes a afectar en garantía el Fondo creado por el Art. 2° de la presente y/o cualquier herramienta financiera que persiga el cumplimiento de los objetivos del Programa creado por el Art. 1º

Artículo 9º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente norma dentro de los ciento ochenta (180) días de sancionada la presente.

Artículo 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de Mendoza, a los cinco días del mes de enero del año dos mil diez.

Cristian L. Racconto
Mariano Godoy Lemos
Jorge Tanus
Andrés Fernando Grau

LEY N° 8.213

Mendoza, 22 de septiembre de 2010.
(Ley general vigente con modificaciones)
(Texto ordenado al 15/12/2011)
BO.: 24/09/2010
Nro. Arts. : 0009

Tema: Constitución creación Agua Saneamiento Mendoza, ratificación decretos 1737/10 1767/10 Sociedad Anónima participación estatal mayoritaria AySAM, SAPEM

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1: Ratifícase el Decreto N° 1.737/10 y su ratificatorio N° 1.767/10, con los alcances y modificaciones establecidos en la presente Ley.

Artículo 2: Dispónese que la Sociedad Anónima creada por el decreto mencionado en el artículo anterior, será una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria en los términos de los Artículos N° 308 a 312 de la Ley N° 19.550 (T.O.1984) y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tendrá por objeto la prestación de los servicios de provisión de agua potable y de saneamiento en las áreas territoriales de operación que se definan en la Provincia de Mendoza mediante el respectivo Contrato de Concesión que se celebre.

b) Contará con un Directorio de cinco (5) miembros titulares y cinco (5) suplentes; correspondiendo a la clase accionaria "A" la designación de cuatro (4) directores titulares y cuatro (4) suplentes, y a la clase accionaria "B" la designación de un (1) director titular y un (1) suplente. El plazo de duración de los directores en su cargo será de dos (2) años.

c) Contará con una comisión fiscalizadora de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes; correspondiendo a la clase accionaria "A" la designación de dos (2) síndicos titulares y dos (2) suplentes, y a la clase accionaria "B" la designación de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente. La comisión fiscalizadora deberá reunirse por lo menos una vez por mes.

d) El capital social será aumentado e integrado en los términos del Artículo 53 de la Ley Nº 6.044, luego de otorgados los contratos a los que hace referencia el Artículo N° 50 de la citada Ley.

e) En todo caso de aumento de capital deberá respetarse el porcentaje de participación de la clase accionaria "B" correspondiente al personal de la empresa, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo N° 55 de la Ley N° 6.044.

f) Modifícase el Artículo N° 35 del estatuto aprobado por Decreto N° 1.737/10 y su modificatorio N° 1.767/10, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Art. 35: Las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora serán fijadas por la Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el Artículo N° 292 de la Ley N° 19.550 (T.O.1.984)."

g) Elimínase el inc. b) del Artículo N° 37 del Estatuto aprobado por Decreto N° 1.737/10 y su modificatorio 1.767/10.

h) Elimínase el Artículo N° 40 del Estatuto aprobado por Decreto N° 1.737/10 y su modificatorio N° 1767/10.

Artículo 3: Dispónese que no podrán transferirse las acciones clase "A" de titularidad de la Provincia; cualquier modificación accionaria deberá contar con ratificación legislativa.

Artículo 4: Dispónese que la empresa Agua y Saneamiento Mendoza, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria -AYSAM - S.A.P.E.M.- no podrá tener una planta de personal superior al número que resulte de aplicar el coeficiente 3,13 por cada 1000 conexiones de agua potable.

La aplicación de la fórmula a la planta de personal existente a la fecha de la sanción de la presente Ley, será conforme a la evolución operativa y financiera de la Empresa.

Artículo 5: Instrúyese y facúltese al Poder Ejecutivo para que modifique el Estatuto de Agua y Saneamiento Mendoza, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria -AYSAM -S.A.P.E.M.- aprobado por Decreto N° 1.737/10, y toda otra norma que resulte pertinente, a fin de adecuarlo a las disposiciones de la presente Ley.

Las modificaciones del estatuto sólo entrarán en vigencia con posterioridad a su ratificación legislativa.

Artículo 6[6]: Dispónese que Agua y Saneamiento Mendoza, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - AYSAM - S.A.P.E.M.- queda exenta del pago de impuestos provinciales.

Artículo 7: La remuneración de los miembros del directorio no podrá superar el noventa y cinco por ciento (95 %) de la remuneración del Gobernador de la Provincia.

Artículo 8: La presente Ley entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 9: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de Mendoza, a los veintidós días del mes de setiembre del año dos mil diez.
Sergio Bruni - Mariano Godoy Lemos - Jorge Tanus - Jorge Manzitti

[6](TEXTO SEGUN LEY 8264, ART. 102)

ANEXO: DECRETO N° 1.737

Mendoza, 30 de julio de 2010

Visto el expediente N° 3576-S-2010-30093, caratulado "Constitución de Agua y Saneamiento de Mendoza S.A.", en el cual se tramita la creación de una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, que tendrá por objeto la prestación del servicio público de provisión de agua potable y saneamiento en el marco de la Ley N° 6.044; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1541/10, el Poder Ejecutivo Provincial ha procedido a rescindir por culpa del Concesionario, el Contrato de Concesión suscripto entre Obras Sanitarias Mendoza S.A. y la Provincia de Mendoza, aprobado en el marco del Decreto N° 1418/97, a partir del 27 de setiembre del corriente año.

Que la mencionada medida encuentra sustento en los graves y reiterados incumplimientos del concesionario rescindido, de naturaleza contractual y societaria, los cuales se encuentran debidamente precisados en el Decreto N° 1541/10 y en el completo y pormenorizado informe presentado por la Auditoría de la Universidad Nacional de Cuyo, en virtud del Contrato celebrado entre la Provincia de Mendoza y esa casa de altos estudios con fecha 26/02/2010 ratificado por Decreto N° 522/2010.

Que la Ley N° 6044 en su art. 52 previó expresamente que los respectivos contratos debían contemplar que, a su extinción, se debería devolver al Estado Provincial un sistema en plena operación, con todas sus instalaciones, los adelantos tecnológicos que eviten su obsolescencia y las mejoras y ampliaciones que se hayan incorporado, sin compensación alguna.

Que en consecuencia, esa facultad delegada se instrumentó en el artículo 13.9.1.1. del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1418/97, estableciendo que, en el supuesto de rescisión, se trasferirán al Concedente o a quien éste designe, la operación del servicio, de todos los bienes afectados a éste

y la conducción del personal que corresponda, en los términos de lo establecido en los artículos 6.8.2. y 7.3. respectivamente.

Que cabe advertir que la Ley N° 6.044 fue dictada en el marco de circunstancias y situaciones específicas y diferenciadas de las actuales que luego de más de 15 años han variado sustancialmente, teniendo en especial consideración que sus previsiones estaban diseñadas para concesionar el servicio público en cuestión a operadores privados, mediante procedimientos normales de selección y lapsos temporales adecuados para su implementación, pero sin previsiones específicas y suficientes relativas a los procedimientos a implementar en el caso de producirse rescisión por culpa del concesionario, las que sólo son tratadas genéricamente en el referido Contrato de Concesión rescindido por Decreto N° 1541/10 (art. 6.8.2., 7.3., 13.1., 13.3., 13.8.2., 13.9., 13.10.2.).

Que en virtud de lo expresado se hace necesario integrar el plexo normativo aplicable para completar el proceso de rescisión, recurriendo al ordenamiento jurídico general y particular, interpretando en forma sistemática y razonable las normas para instrumentar los actos complementarios a la luz de esta nueva realidad; y del espíritu de la misma que se mantiene vigente en cuestiones sustanciales, tales como las previstas en los arts. 1 y 2, pero que ante la situación actual no permite satisfacer en forma eficiente las necesidades concretas para la adecuada prestación del servicio público de provisión de agua potable y saneamiento.

Que, en consecuencia, la Ley N° 6.044 autoriza al Poder Ejecutivo a la constitución de una o más sociedades anónimas concesionarias, cuyo único objeto social sea la prestación del servicio público de provisión de agua potable y saneamiento en las áreas territoriales de operación que se definan en el acto respectivo, exceptuándola del cumplimiento de los trámites procedimentales administrativos previos establecidos para la conformación de las sociedades y facultándolo a efectuar su inscripción Registral (art. 50).

Que no existe en la actualidad posibilidad operativa para que la administración pública provincial asuma en forma directa la prestación integral del servicio en

cuestión, ni entes privados a través de los procedimientos estipulados al efecto, ni con entidad suficiente o con características jurídicas y operativas a las cuales pueda transferirse la operación del mismo, por lo que se estima conveniente proceder a la constitución de una Sociedad Anónima a dicho efecto.

Que, así mismo y en tal sentido, para proveer y garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales del área atendida hasta el día de 27/09/10 por Obras Sanitarias Mendoza S.A., resulta necesario e impostergable, disponer la creación de un ente jurídico con características jurídicas y operativas idóneas que tenga bajo su responsabilidad la operación del servicio.

Que a tal efecto se considera que la Sociedad Anónima es la figura jurídica más apropiada para asegurar la fluidez operativa del servicio y lograr la adaptación necesaria frente a los cambios o contingencias del caso, garantizándose así la continuidad y regularidad de la prestación.

Que en virtud a la participación accionaria que corresponderá al Estado Provincial en la entidad a crearse, la misma entrará en la categoría de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria en los términos de lo dispuesto en los artículos 308 a 312 de la Ley N° 19.550.

Que atento al hecho de que con fecha 27/09/2010 vence en forma indefectible el plazo legal establecido para la Intervención así como la impostergable necesidad de regularizar la prestación del servicio y garantizar en forma definitiva la regularidad y continuidad del mismo resulta procedente disponer la creación de la sociedad cuya conformación se persigue con la emisión del presente y en atención a las argumentaciones vertidas precedentemente.

Que efectuadas estas consideraciones, es dable destacar que se ha estimado procedente que el estatuto de la sociedad a constituir se ajuste en un todo a las disposiciones del Capítulo II, Sección V y VI, artículos 163 a 312 y concordantes de la Ley N° 19.550 (Ley de Sociedades Comerciales).

Que los mismos encuadran además, en las previsiones de la Ley N° 6.044 en lo que respecta al objeto social (art. 50), a la participación del personal con el 10% del capital societario en forma gratuita, a la representación en el directorio y participación en las ganancias (art. 50, 55 y 56).

Que en cuanto a la determinación del capital social para la constitución de la nueva sociedad, se ha procedido a integrarlo con la suma inicial de Pesos cien mil ($ 100.000), atento a la situación de emergencia descripta precedentemente, sin perjuicio de proceder a la integración y aumento del mismo conforme los términos del artículo 53° de la Ley N° 6.044 en cuanto se hubiere operado la correspondiente transferencia de bienes en el marco de lo dispuesto por el art. 13.9.1.1 y concordantes del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1487/97 y suscriptos sean con el Estado Provincial los contratos que autoriza el artículo 50 de la ley N° 6.044.

Que en tal circunstancia, y conforme el procedimiento establecido en el artículo 53 de la Ley N° 6.044, se deberán prever los incrementos de capital social de manera tal que se refleje: a) la incorporación del valor de los bienes transferidos para la prestación del servicio público; y b) el valor de los contratos a los que refiere el artículo 50 de la Ley Nº 6.044.

Que asimismo es procedente prever la posibilidad de realizar incrementos de capital por disposición del Poder Ejecutivo, a los efectos de garantizar el normal y regular funcionamiento de la sociedad constituida y de la prestación de tal esencial servicio público.

Que si bien la Ley N° 6.044 establece en su artículo 50 prevé expresamente la necesidad de remitir a previa aprobación de la Honorable Legislatura el proyecto de estatuto de la mencionada sociedad, el especial marco jurídico y fáctico descripto y la situación de emergencia del esencial y general servicio público en que se inserta el presente decreto impide cumplir con dicho trámite en la forma indicada.

Que a ello debe agregarse que, tratándose de una interpretación legal destinada a integrar las disposiciones de extinción establecidas en la Ley N° 6.044 y el Contrato de Concesión, no resulta incluso adecuado o razonable, aplicar literalmente la disposición contenida en el artículo 50 en cuestión.

Que los hechos enunciados y la situación de emergencia que se materializa en virtud de los mismos, así como la trascendencia de los intereses generales involucrados, y el hecho de que las medidas adoptadas y a adoptarse (rescisión del contrato de concesión del servicio público, creación de la sociedad prestadora de servicios y transferencia del mismo) guardan íntima relación y deben ser emitidas en forma y tiempo que permitan una transferencia ordenada de la operación del servicio, a fin de no afectar la prestación del mismo no permiten cumplir trámite legal previsto en el art 50 de la Ley N° 6044 -citado ut. supra- (remisión previa de sus estatutos sociales a la Legislatura Provincial para su aprobación), correspondiendo por ello, remitir el presente Decreto a ratificación de la Honorable Legislatura Provincial inmediatamente luego de ser emitido por el órgano Ejecutivo.

Que la gravedad y excepcionalidad de las circunstancias descriptas en los presentes considerandos, exige la indelegable, eficaz y oportuna acción del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad y regularidad del servicio esencial en cuestión, a fin de asegurar el derecho de los usuarios al acceso a un servicio público básico y de vital trascendencia.

Que resulta aceptada y reconocida por la doctrina y jurisprudencia, así como por numerosos antecedentes del derecho público nacional y local, que ante la existencia de una situación grave de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo puede emitir aquellas normas cuyo dictado resulte imprescindible, sin resultarle posible incurrir en las demoras propias del trámite legislativo y sin perjuicio de cumplir con la precitada remisión al Órgano Legislativo para su ratificación.

Por ello, conforme las facultades conferidas en el Contrato de Concesión (especialmente arts. 13.9.9.1 y 7.3.1 y cctes.); Ley Nº 6044, arts. 128 inc. 1 y 16,

y 130 de la Constitución Provincial y atento a lo dictaminado por Asesoría Legal del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte; Asesoría de Gobierno de la Provincia y Fiscalía de Estado;

El Gobernador de la provincia decreta:

Artículo 1: Dispóngase la constitución de la sociedad Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima (A.S.M. S.A.), la que tendrá por objeto la prestación del servicio público de provisión de agua potable y saneamiento del área atendida hasta el día 27/09/10 por Obras Sanitarias Mendoza S.A. y las que en el futuro disponga el Ente Regulador conforme el marco legal vigente, bajo el régimen de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales -T.O.1984- y sus modificatorias y la Ley Nº 6.044 en cuanto resulte aplicable.

La sociedad podrá realizar aquellas actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y su objeto social, o bien que sean propias, conexas y/ o complementarias a las mismas, tales como el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano y fiscalización de los efluentes industriales así como la explotación, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas y superficiales. A tales efectos, la sociedad podrá constituir filiales y subsidiarias y participar en otras sociedades y/o asociaciones, cuyo objeto sea conexo y/o complementario. Asimismo, tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos por las leyes, su Estatuto y toda norma que le sea expresamente aplicable.

Artículo 2: La sociedad "Agua y Saneamiento Mendoza S.A." tendrá un capital inicial de cien mil pesos ($ 100.000), representado por un mil (1000) acciones ordinarias de cien pesos ($ 100) de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; de las cuales novecientas (900) son clase "A" y cien (100) son clase "B".

Artículo 3: Dispóngase que la sociedad "Agua y Saneamiento Mendoza S.A." será constituida inicialmente por la Provincia de Mendoza y el Sindicato Único del Personal de Obras Sanitarias.

Las acciones clase "A" representativas del noventa por ciento (90%) del capital social, corresponderán al Estado Provincial y serán ordinarias, nominativas, no endosables y transferibles sólo con autorización legislativa previa.

Las acciones clase "B", representativas del diez por ciento (10%) del capital social, corresponderán inicialmente al Sindicato Único del personal de Obras Sanitarias Mendoza y serán acciones ordinarias, nominativas, no endosables y transferibles solamente entre el personal.

El Sindicato deberá transferir la totalidad de las acciones Clase "B" al personal de planta de Agua y Saneamiento Mendoza S.A. en el plazo dispuesto en el Estatuto aprobado por el art. 4 del presente decreto y en los términos del Programa de Propiedad Participada que por decreto se apruebe, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 55 de la Ley Nº 6044.

Artículo 4:Apruébese el proyecto de Acta Constitutiva y Estatuto Social de la Sociedad Agua y Saneamiento Mendoza S.A., que como Anexo I son parte integrante del presente decreto. Autorícese al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte a firmar las correspondientes escrituras públicas, a suscribir e integrar el capital inicial y a realizar todos los trámites necesarios para la instrumentación y puesta en marcha de la sociedad creada.

Artículo 5: Instrúyase a Escribanía General de Gobierno a que proceda a la protocolización del Acta Constitutiva y de los Estatutos de Agua y Saneamiento Mendoza S.A., así como de toda actuación que fuera menester realizar mediante escritura pública, sin que ello implique erogación alguna.

Artículo 6: Dispóngase que una vez conformada e inscripta la sociedad en el Registro Público de Comercio y suscriptos con la Provincia de Mendoza los contratos a que hace referencia el artículo 50 de la Ley N° 6.044, el capital será

incrementado conforme al procedimiento establecido en el artículo 53 de la mencionada ley y de un modo tal que refleje: a) la incorporación del valor de los bienes transferidos para la prestación del servicio público; y b) el valor de los contratos a los que refiere el artículo 50 de la Ley N° 6.044.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo precedente, el Poder ejecutivo podrá disponer aumentos de capital en virtud de aportes que efectúe en los casos que éste lo estime necesario y oportuno para garantizar el normal funcionamiento de la misma y la continuidad y regularidad en la prestación del servicio. La Provincia garantiza, en los términos del artículo 55 de la Ley N° 6.044 que la participación accionaria de las acciones clase "B" no podrá verse disminuida en forma alguna como consecuencia de cualquier aumento de capital social que se produzca.

Artículo 7: Transfiérase a Agua y Saneamiento Mendoza S.A., a partir del 27 de setiembre de 2010, la operación del servicio de provisión de agua potable y saneamiento en las áreas atendidas hasta dicha fecha por Obras Sanitarias Mendoza S.A., todos los bienes de cualquier índole y naturaleza, afectados a dicha prestación, así como el personal de planta empleado por Obras Sanitarias Mendoza S.A., todo ello en los términos de los arts. 13.9.1.1.; 6.8.2.; 7.3.; 13.10.2 y concordantes del Contrato de Concesión y artículo 52 de la Ley N° 6.044.

Instrúyase al Interventor de Obras Sanitarias Mendoza S.A. para que realice todos los actos útiles tendientes a materializar las transferencias referidas precedentemente, quedando ampliamente facultado a tal fin.

Artículo 8: Dispóngase que será de plena aplicación a las relaciones entre la Provincia Concedente y Agua y Saneamiento Mendoza S.A. el contrato de concesión aprobado por Decreto Nº 1418/97 en cuanto sea compatible y hasta tanto se celebre un nuevo contrato, debiendo tal circunstancia ser aceptada expresamente por resolución de directorio.

Artículo 9: El presente decreto deberá ser remitido, en forma inmediata a ratificación de la Honorable Legislatura Provincial.

Artículo 10: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

Celso Alejandro Jaque - Francisco Humberto Pérez

ANEXO I: ACTA CONSTITUTIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A.

Constitución de "Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima". Escritura Número..... En la Ciudad de Mendoza Provincia de Mendoza, República Argentina, a los.... días del mes de julio de dos mil diez, ante mí Abel Amaya, Escribano General de Gobierno de la Provincia de Mendoza comparece el Cdor. Celso Alejandro Jaque, Gobernador de la Provincia de Mendoza, en representación de la Provincia de Mendoza y el Sr. Daniel Canone, DNI N° 14.169.732, de 49 años de edad, estado civil casado, argentino, profesión, domicilio, en representación del Sindicato Único del Personal de Obras Sanitarias Mendoza, personas hábiles de cuyo conocimiento por haberlos individualizado doy fe. Y dicen:

Primero: Que han decidido constituir una Sociedad Anónima, que se denominará "Agua y Saneamiento Mendoza S.A."

Segundo: Que a los efectos de lo dispuesto por el artículo 11, inciso segundo de la Ley N° 19.550 (T.O.1984), fijan el domicilio de su sede social en calle Belgrano N° 920 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.

Tercero: Que la sociedad constituida se regirá por el siguiente Estatuto:

TÍTULO I
De la Constitución - Denominación - Régimen Legal - Domicilio - Duración:

Artículo 1: Bajo la denominación Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima se constituye esta Sociedad que se regirá conforme los regímenes establecidos en la Ley N° 19.550 (T.O.1984), Ley Provincial N° 6.044, en sus Decretos, Reglamentarios y en estos Estatutos.

Artículo 2: El domicilio de la sociedad se fija en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza, fijando el domicilio de su sede social en Calle Belgrano N° 920 Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza. El domicilio social no podrá ser trasladado

fuera de la Provincia de Mendoza. El Directorio podrá resolver la instalación de agencias, sucursales, filiales o representaciones en cualquier lugar del país.

Artículo 3: El término de duración de la sociedad será de cien (100) años, contados desde la fecha de inscripción de este Estatuto en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Mendoza.

TÍTULO II
Objeto Social y Capacidad:

Artículo 4: Objeto.

4.1: La sociedad tiene por objeto la prestación de los servicios de provisión de agua potable y de saneamiento en las áreas territoriales de operación que se definan en la Provincia de Mendoza mediante los respectivos Contratos de Concesión que se celebren.

El objeto comprende la captación, tratamiento, acopio, transporte, distribución y comercialización de agua potable para el abastecimiento de la población; la captación, acopio y transporte de agua cruda para su tratamiento posterior; la colección, tratamiento, disposición, eventual reutilización y/o comercialización de desagües cloacales, incluyendo desagües industriales cuyo vertimiento al sistema cloacal sea legalmente admisible; todo ello conforme ha sido definido el servicio por el art. 14 de la Ley Provincial N° 6.044.

En todos los casos se incluyen los actos que tengan por objeto el mantenimiento, construcción, rehabilitación, expansión de obras y demás actividades necesarias para la adecuada prestación del servicio. La Sociedad podrá realizar todas aquellas actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto social, debiendo sujetar su actuación a los términos y las limitaciones establecidos por la Ley Provincial N° 6.044, la Ley Provincial de Aguas, la Concesión que con tal fin le otorgue el Estado Provincial conforme a dichas leyes, los Contratos de Concesión que se celebren y las normas constitucionales y legales de la Provincia de Mendoza que resulten de aplicación.

4.2: Medios para el cumplimiento del Objeto Social.

Para cumplir su objeto la Sociedad podrá realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones cualquiera sea su carácter legal, incluso financieros, excluida la intermediación financiera, que hagan al objeto de la Sociedad, o estén relacionados con el mismo, dado que, a los fines del cumplimiento de su objeto tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes, estos Estatutos, la Ley N° 6.044, el decreto por el cual se constituye esta Sociedad, y cualquier otra norma que le sea expresamente aplicable.

TÍTULO III
Del Capital Social y las Acciones:

Artículo 5: El capital social se fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.000), representado por mil (1.000) acciones ordinarias escriturales de cien pesos ($ 100) de valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción, de las cuales mil (1.000) son Clase "A" y ciento veinte (100) son Clase "B".

Artículo 6: Las acciones Clase "A", representativas del noventa por ciento (90%) del capital social, corresponden a la Provincia de Mendoza y son ordinarias, escriturales y transferibles previa autorización legislativa.

Producida la pérdida de la mayoría accionaria por parte del Estado, la eventual transferencia de acciones Clase "A" deberá efectuarse a través de la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 7: Las acciones Clase "B", representativas del diez por ciento (10%) del capital social, que en el presente estatuto se encuentran a nombre del Sindicato Único del Personal de Obras Sanitarias Mendoza serán transferidas en el plazo de 120 días al personal de la planta permanente de la sociedad que se crea mediante el presente estatuto, de conformidad con el art. 55 de la Ley N° 6.044 y el Programa de Propiedad Participada que por decreto se apruebe dentro del plazo indicado. Son acciones ordinarias, escriturales y transferibles sólo entre el

personal de esta nueva sociedad, de acuerdo a lo que establezca el Programa de Propiedad Participada que por decreto se apruebe. La administración común del paquete accionario correspondiente a este tipo de acciones y el ejercicio de los derechos políticos inherentes, se regirán por el Programa de Propiedad Participada aprobado el Decreto Provincial que oportunamente se dicte y por todas las normas que sean su consecuencia. La violación al mismo, será causal de aplicación de las sanciones que legalmente pudieren corresponder a los responsables de tal violación; presta el consentimiento a esta transferencia de acciones el accionista clase A.-

Artículo 8: El porcentaje, (10%) correspondiente a la clase accionaria B, deberá mantenerse incólume ante todo aumento de capital por cualquier concepto y/o emisión accionaria, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 6.044. La participación del personal indicada precedentemente no podrá ser disminuida por ningún motivo.

Artículo 9: Los accionistas de cualquier clase de acción tendrán derecho de preferencia y de acrecer en la suscripción de las nuevas acciones que emita la Sociedad, dentro de su misma Clase y en proporción a sus respectivas tenencias accionarias. Para la suscripción del remanente tendrán derecho de preferencia y de acrecer los accionistas, en proporción a sus respectivas tenencias accionarias. El remanente no suscrito podrá ser ofrecido a terceros.

Artículo 10: Las acciones serán representadas en certificados cuyos caracteres serán: ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción.

Artículo 11: Las acciones son indivisibles. Si existiese copropiedad, la representación para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones deberá unificarse. Las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones deberán constar en el titulo representativo de las mismas.-

Artículo 12: En caso de mora en la integración de acciones, la Sociedad podrá tomar cualquiera de las medidas autorizadas en el segundo párrafo del art. 193 de la Ley N° 19.550 (t.o.1984).

Artículo 13: El capital puede ser aumentado hasta su quíntuplo por decisión de la Asamblea Ordinaria, conforme lo dispuesto por el art. 188 de la Ley Nº 19.550 (T.O.1.984), no rigiendo tal limite si la Sociedad es autorizada a hacer oferta pública de sus acciones. Tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones relativas al aumento de capital se adoptarán por mayorías absoluta de las acciones con derecho a voto. Corresponde a la Asamblea establecer las características de las acciones a emitir en razón del aumento, dentro de las condiciones dispuestas en el presente Estatuto, pudiendo delegar en el directorio la facultad de fijar la época de las emisiones, como también la determinación de la forma y condiciones de pago de las acciones, pudiendo efectuar, asimismo, toda otra delegación admitida por la ley. Toda emisión de acciones se hará por clases respetando la proporción existente entre las distintas clases a la a fecha de esa emisión.

Artículo 14: Podrán emitirse acciones preferidas, las que otorgarán las preferencias patrimoniales que más abajo se establecen, según lo determine la Asamblea que resuelva su emisión:

a) gozarán de un dividendo fijo o variable con o sin participación adicional y acumulativa o no, por uno o más ejercicios, que se abonará preferentemente al dividendo de las acciones ordinarias;
b) podrán ser rescatables, total o parcialmente, convertibles o no en acciones ordinarias;
c) podrán tener preferencia en la devolución del importe integrado en caso de liquidación de la sociedad;
d) podrán participar en la capitalización de reservas o fondos especiales y en procedimientos similares por los que se entreguen acciones integradas;
e) podrán emitirse en la moneda y con las cláusulas de ajuste que admita la legislación vigente;
f) no gozarán de derecho de voto. Sin perjuicio de lo previsto en el inc.
g) precedente, estas acciones tendrán derecho a un voto por acción en los siguientes supuestos:

1. en caso que la sociedad estuviere en mora en el pago de los beneficios que constituyan su preferencia;
2. si cotizaren en bolsa y se suspendiere o retirare dicha cotización por cualquier causa mientras subsista esta situación;
3. en los supuestos especiales previstos en la última parte de art. 244 de la Ley N° 19.550.

Artículo 15: En el marco de lo previsto por el art. 56 de la Ley Provincial N° 6.044, la Sociedad emitirá, a favor de sus empleados con relación de dependencia, cualquiera sea su jerarquía, Bonos de Participación para el Personal en los términos del art. 230 de la Ley N° 19.550 (T.O.1984), de manera tal de distribuir entre el conjunto de los beneficiarios en forma proporcional, el, tres por ciento (3%) de las ganancias líquidas y realizadas, después de impuestos, de la Sociedad. Los bonos se distribuirán entre los empleados en función de su remuneración, antigüedad y cargas de familia, de acuerdo a lo que disponga la Asamblea de Accionistas, a propuesta del personal. La participación correspondiente a los bonos será abonada a los beneficiarios al mismo tiempo en que deberían abonarse los dividendos a los accionistas, con independencia de que éstos se distribuyan o no. Los títulos representativos de los Bonos de Participación para el Personal deberán ser entregados por la Sociedad a sus titulares. Estos Bonos serán personales e intransferibles y su titularidad se extinguirá con la extinción de la relación laboral, cualquiera sea su causa, sin dar por ello derecho a acrecer a los demás bonistas. La Sociedad emitirá una lámina numerada por cada titular, especificando la cantidad de bonos que le corresponden. El título será documento necesario para ejercitar el derecho del titular del bono. Se dejará constancia de cada pago en el cuerpo del documento. Las condiciones de emisión de los bonos sólo serán modificables por Asamblea Especial convocada en los términos de los arts. 237 y 250 de la Ley N° 19.550 (T.O.1984). La participación correspondiente a los titulares de los bonos será computada como gasto y exigible en las mismas condiciones que los dividendos.

Artículo 16: La Sociedad podrá contraer empréstitos en forma pública o privada. A tal efecto podrá, emitir debentures u obligaciones negociables y cualquier otro

título circulatorio, dentro o fuera del país y en las monedas que establezca. Los debentures podrán emitirse con garantía flotante, con garantía especial o con garantía común, pudiendo serlo en moneda nacional o extranjera y convertible o no en acciones de acuerdo al programa de emisión. Cuando la relación entre el pasivo y el activo social, según el último balance aprobado sea superior a cero coma siete (0,7) se requerirá autorización especial otorgada por Asamblea Extraordinaria mediante el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto.

TÍTULO IV

De las Asambleas de Accionistas:

Artículo 17: Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas por el Directorio o la Comisión Fiscalizadora en los casos previstos por la ley, o cuando cualquiera de dichos órganos lo juzgue necesario o cuando sean requeridas por accionistas de cualquier Clase que representen por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital social. En este último supuesto la petición indicará los temas a tratar y el Directorio o la Comisión Fiscalizadora convocará la asamblea para que se celebre en el plazo máximo de cuarenta (40) días de recibida la solicitud. Si el Directorio o la Comisión Fiscalizadora omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente. Las asambleas serán convocadas por publicaciones durante cinco (5) días, con diez (10) días de anticipación por lo menos y no más de treinta (30) días en el Boletín Oficial de la Provincia, y en uno (1) de los diarios de mayor circulación general de la Provincia. Deberá mencionarse el carácter de la asamblea, fecha, hora y lugar de reunión y el Orden del Día. La asamblea en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes, y las publicaciones se efectuarán por tres (3) días con ocho (8) de anticipación como mínimo. Ambas convocatorias podrán efectuarse simultáneamente. En el supuesto de convocatoria simultánea, si la asamblea fuera citada para celebrarse el mismo día deberá serlo con un intervalo no inferior a una (1) hora a la fijada para la primera. La asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan

accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto.

Artículo 18: Cuando la Asamblea deba adoptar resoluciones que afecten exclusivamente los derechos de una Clase de acciones, se requerirá el consentimiento o la ratificación de esta Clase, que se prestará en Asamblea Especial regida por las normas establecidas en estos Estatutos para las Asambleas Ordinarias y, subsidiariamente, por las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.550.

Artículo 19: La constitución de la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto, debiendo estar presente el representante de la clase accionaria "B". En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones con derecho a voto presentes, aunque sólo concurran los representantes de una sola clase accionaria. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por la mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión.

Artículo 20: La Asamblea Extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento (60%) de las acciones con derecho a voto, debiendo estar presente el representante de la clase accionaria "B". En la segunda convocatoria se considerará constituida con la concurrencia de accionistas que representen al menos el treinta (30%) de las acciones con derecho a voto, aunque sólo concurran los representantes de una sola clase accionaria. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por la mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. Cuando se tratare del aumento o ampliación de capital, tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto.

Artículo 21: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para su registro en el respectivo Libro de Asistencia, con tres (3) días hábiles de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada para la

celebración de la asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar por mandatario, de conformidad con lo establecido en el art. 239 de la Ley N° 19.550 (T.O.1984). Las asambleas serán presididas por el Presidente del Directorio o su reemplazante; en su defecto, por la persona que designe la asamblea respectiva. Cuando éstas fueran convocadas por el juez o la autoridad de contralor, serán presididas por el funcionario que ellos determinen. Las Asambleas Especiales se regirán, en lo aplicable, por las disposiciones del presente Título, y subsidiariamente por las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.550 (T.O.1984).

TÍTULO V
De la Administración y Representación:

Artículo 22: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por siete (7) Directores titulares y siete (7) Directores suplentes, que reemplazarán a los titulares exclusivamente dentro de su misma Clase y conforme al orden de su designación. El término de duración de su mandato es de tres (3) ejercicios. Los accionistas de la Clase "A" tendrán derecho a elegir, en Asamblea Especial de accionistas seis (6) Directores titulares y seis (6) suplentes. Los accionistas de la Clase "B" tendrán derecho a elegir un (1) Director titular y un (1) suplente, que se designarán en Asamblea Especial de accionistas de esa clase.

Artículo 23: Los Directores titulares y suplentes permanecerán en sus cargos hasta tanto se designe a sus reemplazantes.

Artículo 24: El Presidente y Vicepresidente del primer Directorio serán designados en el instrumento constitutivo de la sociedad. En caso de renovación del directorio, luego de celebrada la Asamblea que renueve a los miembros del mismo, el Directorio designará de entre sus miembros a un (1) Presidente y a un (1) Vicepresidente.

Artículo 25: Si el número de vacantes en el Directorio impidiera sesionar válidamente, aun habiéndose incorporado la totalidad de los Directores

suplentes de la misma clase, la Comisión Fiscalizadora designará a los reemplazantes, quienes ejercerán el cargo hasta la elección de nuevos titulares, a cuyo efecto deberá convocarse a la Asamblea Ordinaria o de Clase, según corresponda, dentro de los diez (10) días de efectuadas las designaciones por la Comisión Fiscalizadora.

Artículo 26: En garantía del cumplimiento de sus funciones, los Directores depositarán en la Caja de la Sociedad la suma de pesos mil ($ 1.000) en dinero en efectivo, valores o pagaré a la vista avalados por terceros, que quedarán depositados en la Sociedad hasta treinta (30) días después de aprobada la gestión de los mismos. Dicho monto podrá ser modificado en los términos y conforme a las pautas y condiciones que fije la asamblea.

Artículo 27: El Directorio se reunirá, como mínimo, una (1) vez cada tres (3) meses. El Presidente o quien lo reemplace estatutariamente podrá convocar a reuniones cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite cualquier Director o la Comisión Fiscalizadora. La convocatoria para la reunión se hará dentro de los cinco (5) días de recibido el pedido; en su defecto, la convocatoria podrá ser efectuada por cualquiera de los Directores. Las reuniones de Directorio deberán ser convocadas por escrito y notificada a cada uno de los directores al domicilio especial denunciado por el Director en la Sociedad, y con al menos dos días de anticipación a la reunión. La notificación deberá incluir indicación del día, hora y lugar de celebración así como los temas a tratar; podrán tratarse temas no incluidos en la convocatoria si se verifica la presencia de la totalidad de sus miembros y la inclusión de los temas propuestos fuera aprobada por el voto unánime de los Directores titulares.

Artículo 28: El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen y tomará resoluciones por mayoría de votos presentes. En caso de empate en la votación, el presidente del Directorio tendrá doble voto.

Artículo 29: El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remoción o ausencia temporaria o

definitiva de este último, debiéndose elegir un nuevo Presidente dentro de los diez (10) días de producida la vacancia definitiva.

Artículo 30: El Directorio tiene los más amplios poderes y atribuciones para, la organización y administración de la Sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de la Ley N° 19.550 (T.O.1984), del decreto que dispone la constitución de esta sociedad, de las concesiones otorgadas por la Provincia de Mendoza, de los contratos de concesión respectivos y del presente Estatuto. Se encuentra facultado para:

a) otorgar poderes especiales, conforme al Art. 1.881 del Código Civil y el art. 9 del Decreto-Ley N° 5.965/63;
b) operar con instituciones de crédito oficiales o privadas;
c) establecer agencias, sucursales y toda otra especie de representación dentro o fuera del país;
d) otorgar a una o más personas, poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente, con el objeto y extensión que juzgue conveniente;
e) nombrar gerentes y empleados, fijarles su retribución, removerlos y darles los poderes que estimen convenientes;
f) proponer, aceptar o rechazar los negocios propios del giro ordinario de la Sociedad;
g) someter las cuestiones litigiosas de la Sociedad a la competencia de los tribunales judiciales, arbitrales o administrativos, nacionales o del extranjero, según sea el caso;
h) cumplir y hacer cumplir el Estatuto Social y las normas referidas en el mismo;
i) vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones;
j) Disponer la creación de un Comité Ejecutivo, en los términos del art. 269 de la Ley Nº 19.550 y mod., designar a sus integrantes y reglar su funcionamiento; y
k) en general, realizar cuantos más actos se vinculen con el cumplimiento del objeto social. En la primer reunión, luego de distribuidos los

cargos, el Directorio podrá dictar su reglamento interno, el que deberá ser aprobado por la Asamblea de accionistas. La representación legal de la Sociedad será ejercida por el Presidente y en ausencia de éste por el Vicepresidente del Directorio o su reemplazante, quienes podrán absolver posiciones en sede judicial, administrativa o arbitral, ello sin perjuicio de la facultad del Directorio de autorizar para tales actos a otras personas.

Artículo 31: Las remuneraciones de los miembros del Directorio serán fijadas por la Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el art. 311 de la Ley N° 19.550 (T.O.1984).

Artículo 32: El Presidente, el Vicepresidente y los Directores responderán personal y solidariamente por el mal desempeño de sus funciones.

Quedarán exentos de responsabilidad quienes no hubiesen participado en la deliberación o resolución, y quienes habiendo participado en la deliberación o resolución o la conocieron, dejasen constancia escrita de su protesta y diesen noticia a la Comisión Fiscalizadora.

TÍTULO VI
De la Fiscalización:

Artículo 33: La fiscalización de la Sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres (3) Síndicos titulares que durarán tres (3) ejercicios en sus funciones. También serán designados tres (3) Síndicos suplentes que reemplazarán a los titulares en los casos previstos por el art. 291 de la Ley N° 19.550 (T.O.1984). Los Síndicos titulares y suplentes serán designados por la Asamblea de Accionistas. Los accionistas de la Clase "A" tendrán derecho a elegir en Asamblea Especial de Accionistas, dos (2) Síndicos Titulares y dos (2) suplentes. Los accionistas de la clase "B" tendrán derecho a elegir en Asamblea Especial de Accionistas, un Síndico Titular y un Síndico Suplente. Los Síndicos permanecerán en sus cargos hasta tanto se designe a sus reemplazantes.

Artículo 34: La Comisión Fiscalizadora se reunirá por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses; también será citada a pedido de cualquiera de sus miembros o del Directorio, dentro de los cinco (5) días de formulado el pedido al Presidente de la Comisión Fiscalizadora o del Directorio, en su caso.

Todas las reuniones serán notificadas por escrito, al domicilio que cada Síndico indique al asumir sus funciones. Las deliberaciones y resoluciones de la Comisión Fiscalizadora se transcribirán a un libro de actas, las que serán firmadas por los Síndicos presentes en la reunión. La Comisión Fiscalizadora sesionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y adoptará las resoluciones por mayoría de votos presentes, en caso de empate el presidente de la comisión fiscalizadora tendrá doble voto, sin perjuicio de los derechos conferidos por la ley al Síndico disidente. Será presidida por uno de los Síndicos, elegido por mayoría de votos en la primera reunión de cada año; en dicha ocasión también se elegirá reemplazante para el caso de vacancia por cualquier motivo. El Presidente representa a la Comisión Fiscalizadora ante el Directorio.

Artículo 35: Las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora serán fijadas por la Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley N° 19.550 (T.O.1984).

TÍTULO VII

Balances y Cuentas:

Artículo 36: El ejercicio social cerrará el 30 de abril de cada año. A esa fecha se confeccionará el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y la Memoria del Directorio, de acuerdo con las prescripciones legales, estatutarias y normas técnicas vigentes en la materia. La Asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, comunicándola a las autoridades de contralor e inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio.

Artículo 37: Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán de la siguiente forma:

a) Cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscrito por lo menos, para el fondo de reserva legal;
b) Remuneración de los integrantes del Directorio, y de la Comisión Fiscalizadora, dentro de los límites fijados por el Art. 261 de la Ley N° 19.550 (T.O.1984);
c) Pago de las participaciones correspondientes a los Bonos de Participación para el personal;
d) Las reservas voluntarias que la Asamblea decida constituir, en cuyo caso, tanto en primera como en segunda convocatoria, la resolución se adoptará por el voto del setenta por ciento (70%) de las acciones con derecho a voto;
e) El remanente que resultare se repartirá como dividendo de los accionistas, cualquiera sea su Clase.

Artículo 38: Los dividendos serán pagados a los accionistas en proporción a sus respectivas participaciones, dentro de los tres (3) meses de su aprobación.

Artículo 39: Los dividendos en efectivo aprobados por la Asamblea y no cobrados prescriben a favor de la Sociedad luego de transcurrido el plazo previsto por la legislación común. En tal caso, dichos fondos, integrarán una reserva especial, de cuyo destino podrá disponer el Directorio.

Artículo 40: El derecho a percibir las acciones correspondientes a los dividendos en acciones prescribe, a favor de la Sociedad, en el mismo plazo indicado en el artículo precedente. En este caso, las acciones serán puestas a la venta concediéndose derecho de preferencia a los demás accionistas en proporción a sus tenencias y con relación a la clase de acciones que cada uno posee. Los accionistas tendrán también derecho a acrecer, en el caso en que los demás no ejerzan su derecho de preferencia. El Directorio fijará los plazos, condiciones y modalidades del ejercicio del presente derecho, debiendo otorgar una publicidad adecuada al procedimiento. El producido de la venta integrará la

reserva especial aludida en el artículo anterior. Los derechos correspondientes a las acciones no percibidas quedarán suspendidos hasta tanto la Sociedad haya tomado razón de su enajenación. En ningún caso, la utilización de esta metodología podrá significar una disminución del porcentaje correspondiente a las acciones clase "B" de acuerdo a lo establecido en el presente estatuto y la Ley N° 6.044.

TÍTULO VIII
De la Disolución y Liquidación de la Sociedad:

Artículo 41: Disuelta la Sociedad por cualquiera de las causales previstas en el art. 94 de la Ley de Sociedades, la liquidación de la misma se regirá por lo dispuesto en el Capítulo I, Sección XIII, arts. 101 a 112 de la Ley N° 19.550 (T.O.1984) y estará a cargo de la persona designada por el concedente, y en su defecto por el Directorio o de los liquidadores que sean designados por la Asamblea, bajo la vigilancia de la Comisión Fiscalizadora. El remanente, una vez cancelado el pasivo y los gastos de liquidación, se repartirá entre todos los accionistas, sin distinción de clases o categorías y en proporción a sus tenencias.

Cuarto: Los comparecientes suscriben totalmente el capital social de pesos cien mil ($ 100.000) en este acto, representado por mil (1.000) acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables o escriturales, con derecho a un voto por acción en la siguiente forma:

- **a)** La Provincia de Mendoza suscribe novecientas (900) acciones por la suma de pesos noventa mil ($ 90.000).
- **b)** el Sindicato Único de Personal de Obras Sanitarias Mendoza suscribe cien (100) acciones por la suma de pesos diez mil ($ 10.000). Los socios fundadores integran el cien por ciento (100%) del capital social en este acto, es decir la suma de pesos cien mil ($ 100.000) en efectivo.

Quinto: Se designa para integrar el primer Directorio como titulares por las clase accionaria "A" a los Señores: Rolando Daniel Baldasso, D.N.I. N° 17.119.554, de profesión Ingeniero Civil, de nacionalidad argentino, casado,

mayor de edad, con domicilio real en calle Muñoz N° 184, Rincón Andino, Vistalba, Luján; José Luis Puliafito, D.N.I. N° 11.827.537, de profesión ingeniero, de nacionalidad argentino, casado, mayor de edad, con domicilio real en calle Málaga N° 1.201, Godoy Cruz, Mendoza; Luciano García Bistué, D.N.I. N° 24.917.546, de profesión abogado, de nacionalidad argentino, casado, mayor de edad, con domicilio real en calle Rivadavia N° 727, Ciudad, Mendoza; Marcelo Eduardo Chamorro Pombo, D.N.I. N° 17.865.763, de profesión contador público nacional, de nacionalidad argentino, casado, con domicilio real en B° Residencial Cementista, Mza 30, Casa 07, Las Heras, Mendoza; y por la clase accionaria "B" al Sr. Daniel Antonio Canone, D.N.I. N° 14.169.732, empleado, de nacionalidad argentino, casado, mayor de edad, con domicilio real en calle Manuel A. Sáenz N° 838, Las Heras, Mendoza; quienes se encuentran presentes en este acto, personas hábiles, de mi conocimiento doy fe. Los comparecientes manifiestan

a) Que aceptan las designaciones efectuadas;

b) Que declaran bajo fe de juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 310 de la Ley 19.550;

c) Que a los fines de hacer efectiva la garantía establecida por el artículo vigésimo sexto del estatuto social, depositan cada uno, el importe equivalente de pesos un mil ($ 1.000) de acuerdo a lo dispuesto en el citado artículo;

d) Que constituyen los siguientes domicilios especiales: Rolando Daniel Baldasso en calle Muñoz N° 184, Rincón Andino, Vistalba; José Luis Puliafito en Calle Málaga N° 1.201, Godoy Cruz, Mendoza; Luciano García Bistué, en Calle Rivadavia N° 727, Ciudad, Mendoza; Marcelo Eduardo Chamorro Pombo, en B° Residencial Cementista, Mza 30 Casa 07, Las Heras, Mendoza; Daniel Eduardo Canone en Calle Manuel A. Saenz N° 838, Las Heras, Mendoza conforme al artículo 256 de la Ley N° 19.550.

Sexto: Se resuelve designar como Presidente del Directorio al Sr. Rolando Daniel Baldasso; y como Vicepresidente al Sr. José Luis Puliafito, quienes declaran aceptar dichos cargos.-

Séptimo: Se resuelve designar a los Sres. Rolando Daniel Baldasso y Luciano García Bistué como personas autorizadas para que en forma indistinta realicen todos los trámites administrativos y judiciales que sean necesarios para obtener la conformación de los estatutos sociales y la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Sociedades Anónimas, otorgando en este acto al autorizado mandato a este efecto y el que se extinguirá de pleno derecho al cumplirse el objeto del mandato conferido, con facultades suficientes para proponer y aceptar modificaciones, pudiendo firmar escrituras subsanatorias o complementarias de la presente; asimismo están facultado para depositar y retirar del Banco de la Nación Argentina los fondos correspondientes al art. 187 de la Ley N° 19.550 y a efectuar el pedido de rúbrica y retiro de libros de la sociedad. Octavo: Se designa para integrar la Comisión Fiscalizadora como titulares por la clase accionaria "A" a los Señores: Héctor David Caputto, D.N.I. N° 14.609.646, de profesión Contador Público Nacional, de nacionalidad argentino, casado, mayor de edad, con domicilio real en calle Alpatacal N° 705; Aldo Gustavo Mantineo, D.N.I. Nº 21.373.911, de profesión abogado, de nacionalidad argentino, casado, mayor de edad, con domicilio real en calle Monseñor Orzali N° 698, Las Heras, Mendoza; y por la clase accionaria "B" al Sr. Felix Alejandro Olmos, D.N.I. N° 13.700.775, de profesión abogado, de nacionalidad argentino, casado, mayor de edad, con domicilio real en calle Bogado N° 134, Ciudad, Mendoza; quienes se encuentran presentes en este acto, personas hábiles, de mi conocimiento doy fe. Los comparecientes manifiestan

a) Que aceptan las designaciones efectuadas;

b) Que declaran bajo fe de juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 286 de la Ley N° 19.550. Con esta instrumentación de escritura pública, los comparecientes, dejan constituida a "Agua y Saneamiento Mendoza S.A." Los comparecientes aceptan

respectivamente esta escritura en todas sus partes y previa lectura y ratificación, firman ante mí doy fe.

DECRETO Nº 1.767

Mendoza, 3 de agosto de 2010

Visto el Decreto N° 1737/10; y

CONSIDERANDO:

Que se ha advertido un error material en la cláusula tercera del acta constitutiva, artículo quinto del estatuto de la empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A., que como Anexo I forma parte del Decreto N° 1737/10.

Que en tal sentido, donde dice "...de las cuales mil (1.000) son Clase "A" y ciento veinte (100) son Clase "B", debe decir, "'de las cuales novecientas (900) son Clase "A" y cien (100) son Clase "B".

Que asimismo en el artículo 3° del Decreto N° 1737/10, como en la cláusula cuarta del acta constitutiva que como Anexo I forma parte del mencionado Decreto, debe aclararse que la totalidad de las acciones representativas del capital social son ordinarias y escriturales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del estatuto que como Anexo I forma parte del Decreto N° 1737/10.

Que, consecuentemente deberán rectificarse dichas discordancias y errores materiales de manera tal que se entienda que la totalidad de las acciones representativas del capital social son escriturales.

Que en el artículo 37 inciso b) se hace referencia al artículo 261° de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, cuando, por ser la misma sociedad anónima con participación estatal mayoritaria en los términos del artículo 308°, corresponde referir al artículo 311° de la citada normativa, en consonancia con lo establecido en el artículo 31° del estatuto que como Anexo I forma parte del decreto que por el presente se rectifica.

Que los errores mencionados no alteran lo sustancial del acto y que resulta susceptible de ser rectificado en cualquier momento con efecto retroactivo a la fecha de emisión del mismo (artículo 77 y 78 de la Ley N° 3.909).

Por ello, El Gobernador de la provincia decreta:

Artículo 1: Rectifíquese el artículo quinto del Artículo estatuto de la Empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A., que como Anexo I integra el Decreto N° 1737/10, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 5: El capital social se fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.000), representado por mil (1.000) acciones ordinarias escriturales de cien pesos ($ 100) de valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción, de las cuales novecientas (900) acciones son Clase "A" y cien (100) acciones son Clase "B"."

Artículo 2: Rectifíquese el artículo 3° del Decreto N° 1737/10, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 3°: Dispóngase que la sociedad "Agua y Saneamiento Mendoza S.A." será constituida inicialmente por la Provincia de Mendoza y el Sindicato Único del Personal de Obras Sanitarias. Las acciones clase "A" representativas del noventa por ciento (90%) del capital social, corresponderán al Estado Provincial y serán ordinarias y escriturales; y transferibles sólo con autorización legislativa previa.

Las acciones clase "B", representativas del diez por ciento (10%) del capital social, corresponderán inicialmente al Sindicato Único del personal de Obras Sanitarias Mendoza y serán acciones ordinarias y escriturales; y transferibles solamente entre el personal.

El Sindicato deberá transferir la totalidad de las acciones Clase "B" al personal de planta de Agua y Saneamiento Mendoza S.A. en el plazo dispuesto en el Estatuto aprobado por el art. 4 del presente decreto y en los términos del Programa de Propiedad Participada que por decreto se apruebe, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 55 de la Ley N° 6044."

Artículo 3: Rectifíquese la cláusula cuarta del acta constitutiva de la sociedad Agua y Saneamiento de Mendoza S.A. que como Anexo I forma parte del Decreto N° 1737/10, la cual quedará redactada de la siguiente manera: "Cuarto: Los comparecientes suscriben totalmente el capital social de pesos cien mil ($ 100.000) en este acto, representado por mil (1.000) acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias y escriturales, con derecho a un voto por acción en la siguiente forma:

a) La Provincia de Mendoza suscribe novecientas (900) acciones por la suma de pesos noventa mil ($ 90.000).

b) el Sindicato Único de Personal de Obras Sanitarias Mendoza suscribe cien (100) acciones por la suma de pesos diez mil ($ 10.000). Los socios fundadores integran el cien por ciento (100%) del capital social en este acto, es decir la suma de pesos cien mil ($ 100.000) en efectivo."

Artículo 4: Rectifíquese el inciso b) del artículo 37 del estatuto que como Anexo I forma parte del Decreto N° 1737/10, el cual quedará redactado de la siguiente manera.: "b) Remuneración de los integrantes del Directorio, y de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos N° 261°, 292° y 311° de la Ley N° 19.550 (T.O.1984)".

Artículo 5: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

Celso Alejandro Jaque
Francisco H. Pérez

LEY N° 8.270

Mendoza, 01 de marzo de 2011.
(Ley general vigente con modificaciones)
(Texto ordenado al 22/12/2015)
B.O.: 15/03/11
Nro. Arts. : 0017

Tema: poder ejecutivo implementación plan estratégico obras mejoras mejoramiento operativo agua potable saneamiento Mendoza servicios

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1: Encomiéndese al Poder Ejecutivo la implementación del Plan Estratégico de Obras y Mejoramiento Operativo de Agua Potable y Saneamiento de Mendoza, contemplando para elloel conjunto de cursos de acciones en el tiempo, para recuperar, revitalizar, reordenar y desarrollar los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en toda la Provincia de Mendoza.

Artículo 2: Los objetivos particulares del Plan serán:

1. Establecer, sostener y ejecutar en el tiempo un Plan Provincial de Obras para la rehabilitación, desarrollo y expansión de los servicios.
2. Establecer, sostener y ejecutar en el tiempo un Plan Provincial de Mejoramiento Operativo de Servicios, en correspondencia a las normas decalidad vigentes y las que se dicten al efecto.
3. Definir el Plan Estratégico de Agua y Saneamiento entre todos los actores del sector, Gobierno Provincial, Municipios, EPAS, DGI, AySAM SAPEM, Operadores Municipales y Comunitarios y otras esferas de la Administración Pública, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial 8.051.
4. Reestructurar y desarrollar el sector, propendiendo al fortalecimiento institucional de los Operadores, armonizando y compatibilizando la

gestión del servicio de AySAM SAPEM, Municipios Operadores y Operadores de Gestión Comunitaria.

5. Promover el uso racional, equitativo y solidario del agua potable y su reaprovechamiento integral.
6. Articular las demandas municipales con las ofertas de servicios de los Operadores.
7. Establecer un Servicio Público con perfil social responsable y económicamente sustentable.

Artículo 3: El horizonte temporal de este plan será de veinte (20) años. Se considerarán los siguientes tramos:

- de emergencia dos (2) años;
- corto plazo cinco (5) años;
- mediano plazo diez (10) años; y
- largo plazo veinte (20) años.

Los horizontes de mediano y largo plazo deberán contemplar las estrategias generales y cursos de acción correspondientes, a fin de satisfacer los objetivos del Plan Estratégico.

El horizonte de corto plazo deberá contemplar las metas cualitativas y cuantitativas de los servicios, y metas de infraestructura y equipamiento correspondientes al Plan Provincial de Obras y al Plan Provincial de Mejoramiento Operativo.

El horizonte de emergencia, deberá especificar las obras prioritarias y equipamiento en especial atención a la emergencia operativa de los servicios.

Artículo 4: El Plan Provincial de Obras y Mejoramiento Operativo de Agua y Saneamiento para el período comprendido entre el año 2.011 y el año 2.020 (mediano plazo 10 años),por un monto total de Dólares estadounidenses trescientos setenta y tres millones (U$S 373.000.000), se ajustará a las siguientes pautas:

1. Para el segmento aplicable al servicio prestado por AySAM SAPEM deberá contener como mínimo las obras de infraestructura y metas físicas especificadas en Anexo I y Anexo II de la presente Ley, con una inversión total de Dólares estadounidenses doscientos cincuenta y tres millones (U$S 253.000.000).
2. Para el segmento aplicable a los servicios prestados por los Operadores Municipales, deberá contener como mínimo las obras de infraestructura y metas físicas especificadas en Anexo III de la presente Ley, con una inversión total de Dólares estadounidenses de veinte millones (U$S 20.000.000).
3. Para el segmento aplicable a los servicios prestados por losOperadores de Gestión Comunitaria, deberá contener como mínimo las obras de infraestructura especificadas en Anexo IV de la presente Ley, con una inversión total en subsidios de Dólares estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000).

Artículo 5: Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito y hacer uso del crédito que atienda el corto plazo (cinco (5) años - 2011/2015 -) de acuerdo a lo especificado en el artículo 3° de la presente Ley, por un monto de hasta Dólares estadounidenses ciento sesenta millones (U$S 160.000.000) o su equivalente en otras monedas, asociado a operaciones de crédito público. Dichas operaciones se podrán instrumentar con instituciones públicas o privadas provinciales, nacionales o internacionales, por medio de una o más operaciones de endeudamiento tales como préstamos, emisiones de títulos públicos de deuda, letras, constitución de fideicomisos financieros y de garantía, securitizacíón o titulización de garantías autorizadas por la presente ley, créditos puente y/u otros medios financieros que resulten convenientes a los intereses provinciales.

Dicho financiamiento será destinado a las obras básicas de infraestructura y mejoramiento operativo de AySAM SAPEM como son: ampliación y mejoramiento de la capacidad de producción; ampliación y optimización del sistema de macro distribución de agua, instalación de macro y micro medidores,

recuperación y ampliación de colectores cloacales; recuperación y ampliación de establecimientos depuradores y purificadores; entre otras obras, con sus correspondientes proyectos.

Las obras y acciones contempladas en el plan de obras y plan de mejoramiento operativo correspondientes a AySAM SAPEM, serán ejecutadas por dicha empresa según los objetivos y metas contempladas en el Anexo I y en el Anexo II.

Las obras y acciones contempladas en el plan de obras y plan de mejoramiento operativo correspondientes al resto de los operadores, serán ejecutadas por los propios operadores como en el caso de los Municipios de Luján de Cuyo, Maipú y Tupungato, o en su caso por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transportes o por el organismo que éste designe, según los objetivos y metas contempladas en los Anexos III y IV.

(Texto según Ley 8.399, art. 149)

Artículo 6: Facúltase al Poder Ejecutivo a afectaren garantía o ceder en propiedad fiduciaria, para las operaciones del artículo anterior, los Recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos que le correspondan a la Provincia, deducido el porcentaje de Coparticipación Municipal, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2° y 3°del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera yBases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos ratificado por Ley Nacional 25.570 y Ley Provincial 7.044 o el régimen que lo sustituya, las Regalías Petrolíferas y adicionalmente otros recursos provinciales, en la medida de la utilización de la autorización para el uso del crédito contenida en esta Ley.

Artículo 7: Autorízase al Poder Ejecutivo, durante el plazo estipulado en el artículo 3° de la presente Ley para incrementar el Presupuesto de gastos de cada uno de los años contemplados en el plan estratégico de la presente Ley, contra el uso del crédito autorizado para financiar el Plan Provincial de Obras y el Plan Provincial Mejoramiento Operativo establecido en artículo 4°,

incorporando las partidas necesarias o incrementando las ya previstas en el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, cuando deba realizar erogaciones originadas en el plan de obras asociadas a cualquier operación de crédito público ya autorizadas por la presente ley.

Artículo 8: En relación al monto residual de financiamiento para el mediano plazo de Dólares estadounidenses doscientos trece millones (U$S 213.000.000), el que surge como diferencia de los montos de los artículos 4°, 5° y 7° de la presente Ley, se faculta al Poder Ejecutivo para que oportunamente remita a la H. Legislatura un nuevo proyecto de ley a fin de garantizar el financiamiento equivalente a dicho importe conforme al avance el plan estratégico y a las necesidades del servicio.

Artículo 9: Facúltase al Poder Ejecutivo a financiar el funcionamiento operativo de AySAM SAPEM mediante subsidios y/o aumentos de capital hasta la suma de Veintidós millones de pesos ($22.000.000) en el período correspondiente al año calendario2011 y hasta la suma de Once millones de pesos ($ 11.000.000) en elperíodo correspondiente al año calendario 2.012 con cargo alos respectivos presupuestos anuales.

El funcionamiento operativo de AySAM SAPEM deberá autofinanciarse mediante los aumentos tarifarios graduales que correspondan a partir de la promulgación de la presente Ley, sin contar las inversiones previstas en su artículo 4°. Lo dispuesto en el presente artículo debe considerarse como una excepción a lo dispuesto en el Artículo 17° de la Ley 3799 y sus modificatorias.

Artículo 10: Facúltase al Poder Ejecutivo a financiar el Plan de asistencia para Operadores de Gestión Comunitaria y Municipales en emergencia operacional mediante subsidios hasta la suma de Ocho millones de pesos ($ 8.000.000) en el período correspondiente al año calendario 2.011 y hasta la suma de Ocho millones de pesos ($ 8.000.000) en el período correspondiente al año calendario 2.012, con cargo a los respectivos presupuestos anuales. Lo dispuesto en el presente artículo debe considerarse como una excepción a lo dispuesto en el artículo 17° dela Ley 3.799 y sus modificatorias.

Dichos fondos serán administrados por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte o por el organismo que éste designe. Deberán ser destinados a la asistencia de Operadores de Gestión Comunitaria y Municipales que lo requieran en virtud de una emergencia operacional. La emergencia operacional será dictada por el EPAS ya sea por expresa petición de quienes prestan los servicios precitados, en cuyo caso, deberán demostrar, en razón de su estado de situación patrimonial y económica, no disponer de los fondos necesarios para la solución de la misma, o por disposición del EPAS fundada en razones de conveniencia pública propias de la emergencia.

El EPAS elevará cada caso a resolución de Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte. Dichos fondos deberán ser aplicados a ejecución de obras tales como desarrollo de nuevos servicios, construcción de perforaciones, rehabilitación de perforaciones, construcción de plantas potabilizadoras (fuentes superficiales), rehabilitación de plantas potabilizadoras, micro medición, proyectos de nuevas instalaciones, ampliación de redes existentes tanto de agua como de cloacas, reposición de cañerías tanto de agua como de cloacas, construcción de reservas, reparaciones de bombas, tableros eléctricos, otros dispositivos y/o materiales electromecánicos, con sus proyectos de ser necesarios.

Artículo 11: El Ejecutivo Provincial deberá remitirá la Legislatura Provincial, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la promulgación de la presente Ley, un proyecto que defina el nuevo rol del EPAS, del Consejo Asesor de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento (Decreto 1957/09), el Marco Regulatorio y tarifario del Agua y Saneamiento de Mendoza y el Plan Estratégico del Sector elaborado conjuntamente con los Municipios conteniendo obras y tarifa de alcance social.

Artículo 12: Facúltase al EPAS a que en aquellos casos de extrema urgencia y ante la inminente interrupción de los servicios prestados por algún Operador de Gestión Comunitaria, a ponerlo transitoriamente bajo la tutela del Municipio en cuyo territorio se encuentre el mismo, a los efectos de garantizar su continuidad

y calidad. Relevamiento y estudio de la comunidad y análisis del agua de área periurbana y rural en el marco dela Ley 8.051.

Artículo 13: Inembargabilidad e Inejecutabilidad de todos los bienes y derechos (incluida la recaudación imprescindible hasta un cincuenta por ciento (50%) de los operadores de Gestión Comunitaria de agua potable y cloacas que sean afectados a dichos Servicios serán inembargables e inejecutables por parte de terceros, mientras revistan dicho carácter.

Artículo 14: Toda acción administrativa que sugiera de la presente Ley, ya sea por el endeudamiento requerido o por la realización de las obras, deberá ser monitoreada por una Comisión Bicameral Legislativa. El Ejecutivo Provincial remitirá a la Legislatura un informe con lo realizado cada treinta(30) días.

Artículo 15: AySAM SAPEM deberá realizar todas las obras correspondientes al Plan Estratégico de Agua y Saneamiento (PEAS), comprendidas en el Anexo I de esta Ley, así como todas aquellas obras que se encaren con el financiamiento autorizado por la presente, mediante los siguientes procedimientos:

a) Por administración y/o contrato de obra de acuerdo al régimen de contrataciones de AySAM, para el caso de obras y contratación de servicios asociados hasta el monto de Dólares estadounidenses seiscientos mil (U$S600.000). Los controles técnicos y administrativos de estas contrataciones serán los previstos en los procedimientos administrativos de AySAM en acuerdo con la Ley Nacional de Sociedades N° 19.550.

b) Por administración y/o contrato de obra pública a través de licitaciones de acuerdo a la Ley 4.416 de Obras Públicas, para el caso de obras y contratación de servicios asociados que superen el monto de Dólares estadounidenses seiscientos mil (U$S 600.000). Los controles técnicos y administrativos de estas contrataciones serán los previstos en el artículo N° 16 de la presente Ley.

c) Las contrataciones de equipamiento, materiales y servicios contemplados en el Anexo II de esta Ley, así como todas aquellas

contrataciones de equipamiento, materiales y servicios correspondientes al Plan de Mejoramiento Operativo (PMO) que se encaren con el financiamiento autorizado por la presente, se regirán por los procedimientos contemplados en el régimen de contrataciones de AySAM. Los controles técnicos y administrativos de estas contrataciones serán los previstos en los procedimientos administrativos de AySAM en acuerdo con la Ley Nacional 19.550 de Sociedades.

d) A los fines previstos por el presente artículo facúltese al Poder Ejecutivo a realizar anticipos de fondos a AySAM SAPEM, con cargo a rendir cuentas, de hasta el veinte por ciento (20%) de los previstos por el plan de obras aprobado del Plan Estratégico de Agua y Saneamiento (PEAS) y de hasta el veinte por ciento (20%) de lo previsto en el programa de provisiones aprobado del Plan de Mejoramiento Operativo (PMO). Una vez rendido por AySAM SAPEM los fondos anticipados, el Poder Ejecutivo podrá renovar los anticipos con cargo hasta agotar los fondos autorizados para la ejecución de los citados programas.

(Texto según ley 8.701, art. 103)

Artículo 16: El "Plan Estratégico de Obras del Agua Potable y Saneamiento de Mendoza" estará sometido a los controles establecidos en el presente artículo:

a) Control Técnico: La ejecución de las obras mencionadas en la presente Ley y sus anexos quedan sujetas a auditorías técnicas anuales, y externas a cargo de alguna de las universidades públicas locales, competentes en la materia y seleccionadas a través de procedimientos públicos.

b) Control Económico, Financiero y de Legalidad: La administración de los fondos relacionados con las obras referidas en la presente Ley deberán contar con dictamen legal de Fiscalía de Estado y serán objeto

de auditorías económicas financieras y de legalidad anuales externas a cargo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza.

Artículo 17: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza, a un día del mes de marzo del año dos mil once.

Miriam Gallardo

Mariano Godoy Lemos

Jorge Tanus

Jorge Manzitti

LEY N° 8.364

Mendoza, 25 de octubre de 2011.
(Ley general vigente con modificaciones)

(Ndr.: ver además ley 8.530, artículo 120 - prorrógase la autorización otorgada al poder ejecutivo por el artículo 3° de la ley 8.364 a contraer empréstitos haciendo uso del crédito por un monto de hasta pesos cincuenta millones ($50.000.000), por el año 2013 y de pesos cincuenta millones ($50.000.000), por el año 2014, o su equivalente en otras monedas.)

(Ndr.: ver además ley 8530, artículo 121 - amplíase la autorización otorgada a la autoridad de aplicación de la ley 6.071 y modificatorias, por el Artículo 5° de la Ley 8.364, a disponer de la suma de pesos cuarenta millones ($40.000.000), para la puesta en marcha de este programa, hasta que sean transferidos los recursos que establece el Artículo 3° de la referida ley).
(Texto ordenado al 27/11/2013)
B.O.: 13/12/2011
Nro. Arts. : 0008

Tema: creación programa provincial financiamiento uso utilización eficiente agua riego producción productores agrícolas

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1: Créase el Programa Provincial de Financiamiento para el Uso Eficiente del Agua de Riego, destinado a productores agrícolas.

Artículo 2: Establécese que la Autoridad de Aplicación de la Ley 6.071 y modificatorias, será el órgano responsable de la reglamentación de las líneas, de financiamiento correspondientes.

Artículo 3: Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos haciendo uso del crédito por un monto de hasta pesos cincuenta millones ($ 50.000.000,00), por el año 2012 y de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000,00), por el año 2013, o su equivalente en otras monedas. A tal fin, podrá contratar con instituciones públicas o privadas provinciales, nacionales o internacionales, la realización de una o más operaciones de financiamiento tales como préstamos, emisiones de títulos públicos de deuda, letras, constitución de fideicomisos financieros y de garantía, securitizacíón o titulización de garantías autorizadas por la presente ley, créditos puente y/u otros medios financieros que resulten convenientes a los intereses provinciales. Dichos recursos tendrán afectación específica al objeto establecido por esta ley, no pudiendo la Autoridad de Aplicación destinarlos a una finalidad diferente.

(Ver además ley 8.530, art. 120 por prórroga de la autorización)

Artículo 4: Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar en garantía y/o ceder en propiedad fiduciaria para el pago de las operaciones que se realicen en virtud de la autorización establecida en el artículo 3° de la presente ley, los Recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponda a la Provincia, de acuerdo a lo prescripto por los artículos 1º, 2° y 3° del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases de Régimen que lo sustituya, los derechos sobre las Regalías Petrolíferas y adicionalmente otros recursos provinciales.

Artículo 5: Autorízase a la Autoridad de Aplicación de la Ley 6.071 y modificatorias a disponer de la suma de pesos veinte millones ($20.000.000), para la puesta en marcha de este programa, hasta que sean transferidos los recursos que establece el artículo 3° de la presente ley.

(Ver además ley 8.530, art. 121 por prórroga de la autorización)

Artículo 6: Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar el crédito presupuestario del Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación hasta el importe autorizado en el artículo 3° de la presente ley, estando autorizado el referido

Ministerio a transferir los montos obtenidos en virtud de la presente ley para ser integrados como recursos de la Autoridad de aplicación de la Ley 6.071 y modificatorias a los efectos establecidos en la presente ley.

Artículo 7: A todos los efectos de la presente, exceptúase al Poder Ejecutivo de las restricciones impuestas por el artículo 46 y concordantes de la Ley 7.314.

Artículo 8: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de Mendoza, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil once.

Miriam Gallardo
Mariano Godoy Lemos
Jorge Tanus
Jorge Manzitti

LEY N° 8.629

Mendoza, 11 de diciembre de 2013.

(Ley general vigente)

B.O.: 08/01/2014

Nro. Arts. : 00013

Tema: creación departamento general irrigación programa ciudadanía del agua comisión noviembre mes declaración

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1: créase en el ámbito del Departamento General de Irrigación el "programa ciudadanía del agua", con aplicación en todo el territorio provincial.

Artículo 2: serán objetivos de dicho programa:

a) promover la concientización de ciudadanos responsables a través de la formación en sus deberes y derechos en relación al recurso hídrico.

b) fomentar la participación de la comunidad en la promoción y ejecución de acciones en pos del cuidado del agua.

c) incorporar en el ámbito de la educación formal e informal la "ciudadanía del agua", como valor cultural y social, propiciando la conservación, concientización y uso eficiente del recurso hídrico.

d) incentivar el compromiso de los jóvenes de Mendoza en la promoción y ejecución de actividades que pongan en valor la importancia del cuidado y buen uso del recurso hídrico; reconociendo a éstos como actores determinantes en la valorización permanente de la cultura del agua como elemento irrenunciable de identidad provincial.

e) generar acciones de comunicación que contribuyan a afianzar los valores subyacentes al presente programa.

Artículo 3: declárase de interés provincial al "programa ciudadanía del agua" con el fin de revalorizar el agua como bien público con valor social, ambiental, y como bien económico, cultural, de carácter geoestratégico.

Artículo 4: establézcanse como contenidos transversales, prioritarios y obligatorios en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, en el ámbito de la dirección general de escuelas, los saberes relativos a la "ciudadanía del agua". La dirección general de escuelas deberá disponer la reglamentación necesaria a tal fin.

Los programas y subprogramas en relación a la educación formal de los niveles inicial, primario, secundario y superior, que deriven de la implementación de la presente norma deberán ser coordinados por la dirección general de escuelas.

Artículo 5: declárase al mes de noviembre de cada año como "mes del agua", tiempo durante el cual los organismos públicos centralizados y descentralizados de la provincia, deberán incluir en los actos y actividades que organicen la promoción de los valores de la "ciudadanía del agua".

Artículo 6: institúyase el reconocimiento a la responsabilidad hídrica denominado "ciudadano del agua", a favor de aquellas personas físicas o jurídicas que demuestren su compromiso y buenas prácticas con el cuidado del agua. Dicha distinción será otorgada en el mes del agua, por el Departamento General de Irrigación y en base al procedimiento que por vía reglamentaria se determine.

Artículo 7: créase, en la órbita del programa creado por esta ley, la "comisión de ciudadanos del agua", integrada por un representante por cuenca hidrológica de acuerdo a la reglamentación que se determine para tal fin. Esta comisión tendrá la facultad de proponer al Departamento General de Irrigaciónlas acciones concretas vinculadas al contenido del presente programa. Los representantes de la comisión, integrarán también los consejos de cuenca creados por el Departamento General de Irrigación.

Artículo 8: invitase a participar de las acciones que se implementen como consecuencia de la aplicación de la presente ley a los organismos públicos, universidades públicas y/o privadas, empresas del sector privado, organizaciones no gubernamentales, y demás organismos o instituciones cuyo objeto sea congruente con las finalidades del "programa ciudadanía del agua".

Artículo 9: será autoridad de aplicación de la presente ley el Departamento General de Irrigación, excepto en lo que se refiere a las competencias propias de la dirección general de escuelas en orden a lo establecido en el artículo 4.

Artículo 10: el programa ciudadanía del agua deberá ser elaborado por el Departamento General de Irrigación y remitido al poder ejecutivo para su aprobación. El mismo será de aplicación obligatoria en todos los niveles del sistema educativo provincial, debiendo garantizarse la participación de todas las escuelas de la provincia.

La autoridad de aplicación deberá poner en conocimiento de la Honorable Legislatura el contenido del programa, remitiendo anualmente un informe que dé cuenta de los resultados de la aplicación del mismo.

Artículo 11: la presente ley será reglamentada en el plazo de noventa (90) días a partir de su promulgación.

Artículo 12: sin perjuicio de los fondos que el Departamento General de Irrigación destine a la ejecución de la presente ley, podrán realizarse aportes por parte de organismos municipales, provinciales, nacionales, internacionales o del sector privado a dichos fines.

Artículo 13: comuníquese al poder ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la honorable legislatura de la provincia de Mendoza, a los once días del mes de diciembre del año dos mil trece.

Carlos G. Ciurca
Sebastián P. Brizuela

Jorge Tanus

Jorge Manzitti

LEYES N° 971 – 1.063 – 1.210 Y 1.451

Artículo 1: Coordínense los artículos vigentes de las Leyes N° 971, 1.063, 1.210 y 14.51 que crean la Sección Desagües, en la siguiente forma:

CREACION, OBJETO Y FUNCIONAMIENTO

"Artículo 1: Ley 1.451 - Artículo 2: El Departamento General de Irrigación se hará cargo de la Sección Desagües, que funcionará bajo su control y dependencia, y que sustituirá en adelante a la Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas de la Provincia, creada por la Ley N° 1.210, teniendo esta Sección las mismas funciones determinadas en el Artículo lo, incisos a), b), c) y d).

"Ley 1.210 - Artículo 1: Créase la Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas de la Provincia, dependiente del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, cuya función será:

a) "Controlar la ejecución de las obras de saneamiento de tierras en construcción;

b) "Efectuar los estudios, proyectos y presupuestos y licitar y fiscalizar la ejecución de las obras nuevas o las ampliaciones, de desagües pluviales o drenajes que sean necesarios en la Provincia;

c) "Realizar la limpieza y conservación de los desagües pluviales y drenajes existentes, y de los que se construyan en el futuro. En el único caso de que los cauces de drenaje presten simultáneamente la función de desagües de riego, quedarán bajo la administración del respectivo inspector, designado conforme a las leyes de irrigación. En el mismo caso esas inspecciones deberán solicitar obligatoriamente la ejecución de los trabajos mencionados en el párrafo primero de este inciso, a la Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas.

Si así no lo hicieren en tiempo oportuno y los cauces arriesgaran perder eficiencia, la Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas, podrá proceder a su limpieza directamente.

La Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas, hará estos trabajos por licitación pública y su costo será prorrateado entre los interesados en proporción a la superficie de tierra con derecho de agua. En caso de obras cuyo costo no sea mayor de dos mil pesos, o cuando razones de urgencia lo haga necesario, podrá prescindirse del requisito de la licitación pública, haciéndose las obras por administración. En el caso previsto en que el cauce sirva simultáneamente para desagüe de riego y drenaje, la percepción de la prorrata de limpieza y conservación estará a cargo de la inspección de los mismos, debiendo ésta reembolsar su valor a la Provincia;

d) "Establecer los padrones para determinar el canon que deberán pagar los propietarios de las tierras beneficiadas, el cual será agregado a la Contribución Directa y cobrado juntamente con éste,

Artículo 2: Ley 1.451 - Artículo 3[7]

DE LOS DESAGÜES

Artículo 3: Ley 971 - Artículo 19: Declárase obligatoria y de utilidad pública la construcción de desagües pluviales o drenajes generales y de zona dentro del territorio de la Provincia, los que revestirán el carácter condiciones de cauces de drenaje cuando beneficien o deban servir desecamiento de terrenos insalubres o desfavorables para la agricultura en razón de hallarse revenidos, inundados, encenegados o impregnados de una excesiva cantidad de agua o expuestos a tal eventualidad.

Artículo 4: Ley 971 - Artículo 2: En consecuencia de lo dispuesto en artículo anterior quedan declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación forzosa y ocupación inmediata, de acuerdo con la ley de la materia todas las superficies de terrenos necesarios para la construcción o terminación de los cauces

[7]El texto de este artículo establece disposiciones transitorias que se refieran a partidas para sueldos y otros gastos, razón por la cual se suprime.

generales y conexiones particulares, márgenes y obras necesarias, en la medida que lo determine el decreto correspondiente del Poder Ejecutivo, conforme a los estudios, proyectos de obras, informes técnicos y presupuestos que se realicen para cada obra.

Cuando por las circunstancias las aguas de los colectores no puedan ser vertidas en algún río u otro cauce natural apropiado, quedan también sujetas a expropiaciones por utilidad pública, las zonas de terrenos necesarias para recibirlas, en la extensión suficiente para que las propiedades particulares limítrofes se encuentren en absoluto fuera de su radio.

Artículo 5: Ley 971 - Artículo 3: A los efectos de los estudios técnicos, los funcionarios a quienes se encomienden, tendrán la facultad de penetrar en los predios particulares, y en caso de dificultades de requerir la respectiva orden de allanamiento del juez más inmediato, quien deberá otorgarla sin más trámite, con uso de la fuerza pública, si fuere requerida.

Artículo 6: Ley 971 - Artículo 6: Aprobados los estudios y presupuestos obras se sacarán a licitación pública, conforme a la Ley de Contabilidad.

Artículo 7: Ley 971 - Artículo 7: Es obligatorio para los dueños de propiedades particulares conectar a su costo los desagües pluviales o drenajes propios con el colector general que corresponda, reglando su situación cuando fueren varias a servirse con el mismo cauce de conexión de acuerdo en lo aplicable con lo dispuesto por el Capítulo VII de la Ley de Aguas.

Artículo 8: Ley 971 - Artículo 8: Queda prohibido levantar sobre los canales de desagüe o drenajes, exclusas, tajamares y otras construcciones que puedan afectar la corriente natural de las aguas o la condición de los cauces ni poner árboles o plantaciones sin permiso de la Comisión de Desagües o del Departamento de Irrigación en su caso.

Los contraventores pagarán una multa de quinientos o mil pesos aplicables por dichas autoridades.

Artículo 9: Ley 971 - Artículo 12: En el caso de la segunda parte del Artículo 29 de esta ley (Artículo 4 de la presente coordinación) el P.E. queda facultado para realizar estudios tendientes a sistematizar el uso de las aguas en la zona expropiada; y de modo que éstas puedan usarse en la agricultura; y en caso de resultar ello factible en condiciones ventajosas, a ejecutar las obras previa licitación.

Su costo, en tal supuesto, se cubrirá con el precio de venta en subasta pública, de los terrenos, divididos en lotes, y de acuerdo a la Ley de Colonización para industrias de granja que se dicte al efecto, aplicándose cualquier excedente que hubiera al fondo de amortización de los títulos.

DE LOS DESAGÜES PARTICULARES

Artículo 10: Ley 971 - Artículo 19: Declárase de utilidad pública como una restricción necesaria al dominio, todos los rasgos de terreno de dominio particular indispensables para el establecimiento de acueductos, márgenes y obras accesorias de riego, desagües o fabriles que requieran los predios o industrias particulares y siempre que se trate de la utilización de aguas del dominio público y de su conexión directa o indirecta con cauces de igual carácter.

Artículo 11: Ley 971 - Artículo 20: El juez competente para declarar la utilidad pública del acueducto, sus condiciones e indemnizaciones, será el tribunal establecido por el Artículo 26 de la Ley N° 322, ajustándose para ello en lo esencial, a los procedimientos de la Ley de Expropiación.

Artículo 12: Ley 971 - Artículo 21: La citación de los interesados se hará por cédula personalmente o al representante, apoderado o encargado de los predios, y si ninguno de estos medios fuere posible, por edictos durante diez días. A los efectos de esta ley se considerará que los propietarios de los predios afectados tienen en ellos su domicilio legal.

Artículo 13: Ley 971 - Artículo 22: Una vez pronunciada su resolución por el Tribunal bastará la consignación del monto de las indemnizaciones, para la ocupación del terreno y ejecución de las obras, sin perjuicio del derecho que se acuerda a las partes, de recurrir dentro del término de veinte días, sobre el monto de las indemnizaciones por ante la Suprema Corte de la Provincia, quien no podrá, en ningún caso, Ordenar la suspensión de los trabajos, durante el trámite del juicio. El procedimiento a seguir ante la Suprema Corte, será también el establecido por la Ley General de Expropiación.

CONCESIONES DE DESAGÜES

ART, 14: Ley 971 - Artículo 23: Declárase como una carga y condición inherente a las concesiones de riego de aguas públicas que se otorguen en adelante, la obligación para los predios beneficiados, de dar paso gratuitamente a los acueductos generales o particulares, que sean necesarios para la irrigación o desagües.

Artículo 15: Ley 971 - Artículo 13: Los propietarios que obtengan derecho de regadío de las aguas que llevan los cauces de desagües o drenaje, pagarán como gasto de creación de cauces, y por las unidades de superficie que se les acuerde, la cuota mínima atribuida a los desaguantes, la que ingresará como eventuales al fondo de amortización de las obras y si por ello hubiere excedente, éste pasará al de administración y conservación del cauce.

Las concesiones a que se refiere este artículo no podrán hacerse hasta después de realizados los estudios previstos por el Artículo 12 (Artículo 9 de la presente coordinación), y sólo en el supuesto que no afectaran su propósito, y en la medida que los técnicos aconsejen.

Una vez hechas las concesiones de riego, éstas y los cauces correspondientes se regirán por las disposiciones de la Ley de Aguas.

Artículo 16: Ley 971 - Artículo 17: No podrá hacerse ninguna transferencia ni establecerse gravámenes sobre las propiedades afectadas por gaviones de

desagües o cauces de drenajes, sin previo pago de las cuotas vencidas y sin hacerse constar las pendientes, bajo pena de las sanciones establecidas por el Artículo 26 de la Ley N°. 237.

OBRAS AUTORIZADAS

Artículo 17: Ley 1.063 - Artículo 1: Apruébense los estudios, planos generales y pliegos de condiciones confeccionados por el Ing. A. E. Pouslfield para la construcción de un sistema de desagües, en el Departamento de General Alvear.

Artículo 18: Ley 1.063 - Artículo 2: Autorízase la ejecución por zonas las obras indicadas en el artículo anterior, debiendo hacerse por licitación pública la red principal y pudiendo la complementaria efectuarse directamente por los interesados regantes, en ambos casos con intervención de la Superintendencia de Irrigación.

Artículo 19: Ley 971 - Artículo 4: El P. E. al considerar la conveniencia económica de la ejecución de cada obra estudiada, tendrá en cuenta las observaciones que le hubieran hecho los interesados, apreciándolas en su resolución.

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN

Artículo 20: Ley 971 - Artículo 9: Declárase obligatorio el pago de las obras para todas las propiedades con derecho de agua, lo utilice o no, o que lo obtengan en adelante, comprendidas dentro de las zonas beneficiadas, y la percepción de su importe se hará efectiva por los mismos procedimientos que para las demás contribuciones fiscales.

Artículo 21: Ley 1.451 - Artículo 9: El costo de los estudios y conservación de los desagües será reembolsado a la Provincia por los propietarios de las tierras beneficiadas, en veinte cuotas anuales iguales, sin interés.

El costo de las obras ejecutadas y a ejecutarse con fondos de la Ley Nacional N° 12.282, más un diez por ciento para compensar quebrantos y el cinco por ciento

de interés anual, será reembolsado a la Provincia por los propietarios de las tierras beneficiadas en veinte cuotas anuales iguales,

Artículo 22: Ley 1.210 - Artículo 7: Los fondos acordados por la Ley N° 12.282 sustituirán en adelante, la financiación establecida por las Leyes provinciales N° 971 y 1.063, para obras de desagües en la Provincia.

Artículo 23: Ley 1.451 - Artículo 10: El Poder Ejecutivo de la Provincia deberá depositar mensualmente en una cuenta especial que se abrirá en el Banco de Mendoza, denominada "Habilitación Sección Desagües" los fondos necesarios para el cumplimiento de esta ley.

Artículo 24: Ley 1.210 - Artículo 10: Contaduría General de la Provincia abrirá una cuenta especial, denominada "Obras de Desagües Pluviales o Drenajes autorizados por Ley N° 12.282", donde ingresarán los fondos provenientes de dicha ley y los reembolsos a la Provincia, efectuados por los propietarios de las tierras beneficiadas, y a la cual se debitarán los reembolsos que debe realizar la Provincia a la Nación, de acuerdo con la Ley N° 12.282, y los gastos de ejecución de la presente ley.

Artículo 25: Ley 1.210 - Artículo 11: Autorízase al Poder Ejecutivo a liquidar el porcentaje que de acuerdo a la Ley N° 971, correspondiere a los miembros de la Comisión de Desagües, que queda suprimida por la presente ley, debiendo el Poder Ejecutivo incorporarlo al Presupuesto de Gastos de la Provincia.

Artículo 26: Ley 1.063 - Artículo 5: Reconócese de legítimo abono, hasta la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000 m/n.), el pago de los adelantos autorizados por la Superintendencia General de Irrigación para obras de desagües realizadas con anterioridad a la presente ley, en las condiciones convenidas, y que se hará de inmediato en "Obligaciones de Desagües de la Provincia de Mendoza", Serie "B", entregadas a la par, salvo los adelantos efectuados por el Gobierno de la Provincia, que los abonarán los propietarios conjuntamente con la Contribución Directa, en veinte mensualidades. Los servicios de intereses y amortización de dichas obligaciones podrán abonarse, total o parcialmente en títulos de la

misma serie, durante un plazo no mayor de cinco años. Las contribuciones para el pago de los referidos servicios comenzarán a percibirse a medida que los desagües se vayan librando al servicio público.

Artículo 27: Ley 1.451 - Artículo 4: La Contaduría General del Departamento de Irrigación tendrá a su cargo la Habilitación de la Sección Desagües, y deberá rendir cuenta de las inversiones que efectúe con los fondos que perciba pertenecientes a ésta, directamente a la Contaduría General de la Provincia, ajustándose a las leyes y reglamentaciones vigentes sobre la materia.

Artículo 28: Ley 1.451 - Artículo 5: El Superintendente General de Irrigación queda facultado para autorizar gastos por compra directa, hasta la suma de trescientos pesos moneda nacional, hasta dos mil pesos moneda nacional, por licitación privada; y por licitación pública toda adquisición superior a este importe.

Artículo 29: Ley 1.451 - Artículo 6: Antes del quince de agosto de cada año, el Superintendente General de Irrigación, llevará a consideración del Poder Ejecutivo, el Presupuesto General de Gastos para el mantenimiento de la Sección Desagües, como así también el plan de estudios obras a realizarse en el año siguiente con sus presupuestos respectivos.

Artículo 30: Ley 1.451 - Artículo 7: La documentación de los proyectos confeccionados por la Sección Desagües, previa conformidad del Superintendente General de Irrigación y de la Dirección General de Irrigación de la Nación, deberá elevarse al Poder Ejecutivo para su aprobación definitiva.

Artículo 31: Ley 1.451 - Artículo 8: Todas las obras se efectuarán por Hitación pública, con excepción de las de conservación que podrán ejecutarse por administración, con fondos provinciales o con intervención de las inspecciones, donde las hubiere. Los contratos serán firmados por el Superintendente General de Irrigación, ad-referéndum del Poder Ejecutivo.

(Por razones de simplificación se suprimen los artículos correspondientes Disposiciones Complementarias, cuya materia carece de aplicación.)

RESOLUCIÓN N° 778

Contaminación Hídrica

Mendoza, 23 de diciembre de 1996

VISTO:

Expediente N° 217.029 caratulado: "Secretaría de Asuntos Institucionales s/Reglamento General para el Control de Contaminación Hídrica"; (T.S.221.1996), y

CONSIDERANDO:

Que actualmente es un requisito ineludible para el Estado la aplicación de los principios de política ambiental fijados oportunamente en la Constitución Nacional y en la Ley Provincial Nº 5.961, entre los que figura el uso y aprovechamiento de los recursos naturales dentro del marco del desarrollo sustentable, a fin de garantizar a nuestras generaciones futuras su goce, aprovechamiento y disfrute.

Que la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente de Dublín, 1992, ha puesto un especial énfasis en la protección de los recursos hídricos, calidad del agua y ecosistemas acuáticos, emitiendo una serie de medidas preventivas y de protección destinadas a los países miembros la Conferencia, entre ellos la Argentina.

Que dentro de ese marco normativo y siguiendo los lineamientos de Dublín, la Ley N° 6.044 impone obligaciones tales como la de procurar el aprovechamiento integral, racional y eficiente, dentro del marco de desarrollo sustentable, del recurso hídrico. Asimismo establece claramente que todo vertido o vuelco de sustancias a los cuerpos receptores deberá contar con el pertinente tratamiento, a fin de evitar la degradación de las aguas.

Que en virtud de las facultades establecidas por la Constitución Provincial, Ley General de Aguas, Leyes Nº 4.035 y 4036 de Aguas Subterráneas y Ley Nº 6044,

el Departamento General de Irrigación es la Autoridad de Aplicación de la normativa citada, dentro de su ámbito de competencia. A tal efecto está facultado a dictar los reglamentos generales que estime pertinentes a fin de hacer efectivo sus poderes como autoridad hídrica, como asimismo el de asegurarse el pleno ejercicio del poder de policía de las aguas públicas.

Que como consecuencia necesaria de ello, se entiende que es imprescindible la actualización de la normativa vigente en materia de control de contaminación hídrica, debiéndose por ello modificarse y ajustarse a los nuevos requerimientos ambientales la Resolución General Nº 634/87.

Que amen de lo expuesto, es sumamente conveniente volcar a la nueva normativa las experiencias, datos e información que ha acumulado a lo largo de este último tiempo el Departamento General de Irrigación, con el objetivo primordial de lograr una norma acorde a los requerimientos reales de nuestra Provincia.

Que dicha experiencia demuestra que una acción constante y decidida por parte del Departamento General de Irrigación ha logrado una considerable reducción de los índices de contaminación detectados.

Que el Departamento General de Irrigación, en su condición de Administrador del Recurso Hídrico Provincial, no sólo debe velar por cantidad de agua disponible para los distintos usos, sino muy particularmente por su calidad atento al incremento de las distintas actividades industriales asentadas en los frágiles oasis mendocinos.

Que por lo expuesto, la nueva normativa deberá establecer un mecanismo eficiente, sistemático y ordenado que propenda a la efectiva vigencia de las leyes de preservación y protección del ambiente, en general, y de los recursos hídricos en particular, teniendo especialmente presente las reales condiciones del aparato productivo provincial en la actualidad, a fin de lograr una paulatina y definitiva adecuación del mismo a los lineamientos impuestos por el presente

reglamento.
Por ello,

El H. Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación resuelve: Reglamento general para el control de contaminación hídrica.

CAPITULO I
AMBITO - OBJETIVOS - PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1: El presente Reglamento regulará en todo el ámbito de la Provincia de Mendoza la protección de la calidad de las aguas del dominio público provincial, dentro de la competencia fijada por la Ley General de Aguas y Leyes 4.035, 4.036, 5.961, 6.044 y 6.405.

Artículo 2: Son objetivos fijados en esta norma: a) Procurar la preservación y mejoramiento de la calidad de las aguas, de conformidad a los usos asignados legalmente o por la autoridad administrativa o a los efectos de la protección del medio ambiente; b) Impedir la contaminación o degradación de la aguas, tanto superficiales como subterráneas, sea la misma ocasionada por causas o fenómenos naturales, como la provocada por la actividad humana; c) Conservar, preservar y recuperar los ecosistemas acuáticos, en coordinación con la autoridad de aplicación pertinente; d) El ordenamiento y adecuación definitivos de los vertido existentes a través de proyectos concretos de tratamientos de los mismos; e) La regulación del procedimiento de control de vertidos y de otorgamiento de autorizaciones y permisos.

Artículo 3: Son principios generales de interpretación y aplicación de este Reglamento, los siguientes:

a) Respecto del concepto de la Unidad del Ciclo Hidrológico y de la Unidad de Cuenca;

b) Conservación y protección del ambiente y de los ecosistemas que en él se insertan;

c) Prevención, a los efectos de evitar la contaminación o degradación del recurso hídrico;

d) Reparación del daño causado e indemnización en los casos que corresponda;

e) Participación de los Usuarios;

f) Precaución, a los efectos de imponer restricciones y medidas de control, en los casos de contaminación potencial o supuesta;

g) Coordinación;

h) Información;

i) Responsabilidad objetiva;

Artículo 4: Se entiende por contaminación o degradación de las aguas toda acción o actividad humana o natural que implique la alteración de las cualidades de las mismas, en relación a los usos asignados o la protección del medio ambiente, referido tanto al dominio público hidráulico en sí, como a su entorno.

Artículo 5: En virtud de la presente reglamentación, queda prohibido en el territorio de la Provincia:

a) Toda contaminación, alteración o degradación de las aguas superficiales y subterráneas;

b) El vertido, derrame o infiltración directo o indirecto a los cursos naturales de aguas; lagos y lagunas naturales como asimismo a diques y embalses artificiales; cauces públicos artificiales; cualquier tipo de acueductos de jurisdicción del Departamento General de Irrigación y a los acuíferos subterráneos, de toda clase de sustancias, líquidas o sólidas, desechos o residuos, con excepción de aquellos que se encuentren expresa y previamente autorizadas por el Departamento General de Irrigación;

c) La acumulación de sustancias no autorizadas, basura o residuos, escombros, desechos domésticos, químicos o industriales, o de cualquier otro material en áreas o zonas que pueda implicar un riesgo o peligro para el recurso hídrico;

d) En general, la realización de cualquier tipo de actividad o acción que pueda ocasionar la degradación, alteración o contaminación del agua y sus entornos afectados.

Artículo 6: De conformidad a las facultades otorgadas por la legislación vigente al Departamento General de Irrigación en el ejercicio de su Poder de Policía, Superintendencia podrá imponer zonas o áreas de protección hídrica en el perímetro de los cursos naturales o artificiales de aguas, lagos, lagunas, diques y embalses o determinadas zonas de acuíferos subterráneos, a los efectos de la regulación de las actividades que allí se realicen y con el objetivo de evitar alteraciones o degradaciones de las aguas, y así procurar la protección y calidad de las mismas. Asimismo, se podrán imponer restricciones o la adopción de medidas preventivas o correctoras a todas aquellas actividades que, atento a su inmediatez o cercanías, puedan en forma directa o indirecta causar deterioros o daños a las aguas o al ecosistema implicado.

Artículo 7: Asimismo, Superintendencia podrá imponer reservas y vedas en aquellos cuerpos receptores naturales de aguas, o tramos o sectores de los mismos, y en determinados acuíferos subterráneos, que a juicio del organismo merezcan una protección especial y determinada. Del mismo modo y en coordinación con la autoridad pública correspondiente, el Superintendente podrá proponer la creación de Reservas Naturales en los términos de los arts. 40 y 41 de la Ley 6.045, siguiendo al respecto el procedimiento establecido por el art. 79º del citado cuerpo legal.

Artículo 8: De conformidad a lo establecido por la Ley 5.961 y sus decretos reglamentarios Nº 437/93, 691/93 y 2.109/94 y demás normas aplicables, todo proyecto de obra, actividad o servicio que se pretenda efectuar sobre el dominio público hidráulico que requiera autorización previa del Departamento General

de Irrigación, o en cualquier trámite de otorgamiento de permisos o concesiones de usos de las aguas públicas, que a criterio del Superintendente General de Irrigación puedan afectar, degradar o alterar el dominio público hidráulico, deberá contar con la pertinente Declaración de Impacto Ambiental, emanada por autoridad competente y en los términos expuestos en las normas mencionadas en el presente artículo.

CAPITULO II
DE LOS VERTIDOS

Artículo 9: Todo vuelco o vertido de sustancias o efluentes al dominio público hidráulico, deberá contar con la previa autorización administrativa correspondiente y en los términos que expresamente se determinen.

Artículo 10: Se considera vertido el vuelco de sustancias, cualquiera sea la naturaleza u origen de éstas (industriales, cloacales, de establecimientos comerciales, etc.), que directa o indirectamente caigan, lleguen o afecten, a través de evaluación, inyección, disposición, depósito o por cualquier otro medio al dominio público hidráulico, sea éste referido a las aguas superficiales como a las subterráneas. En virtud de lo expuesto, todo efluente que sea objeto de vertido deberá ajustarse a los requerimientos técnicos previstos en la presente reglamentación en su Anexo I y modificatorias.

Artículo 11: Toda empresa o establecimiento que requiera Permiso de Vertido a este Departamento General de Irrigación deberá contar, necesariamente, con el pertinente tratamiento de efluentes, a fin de que éstos cumplan con los requerimientos técnicos aprobados por el mismo. Caso contrario, deberá presentar una solicitud de suscripción de un Convenio de Gestión de Permiso de Vertido para el otorgamiento de un plazo, el cual deberá está razonablemente fundado, para implementar un tratamiento de efluentes que los adecue a las exigencias del presente Reglamento. Dicha solicitud deberá estar acompañada por un proyecto de tratamiento de efluentes, avalado y certificado por profesional responsable, con estricto cronograma de ejecución de obras y

progresiva adecuación de vertidos, el que no podrá exceder del plazo determinado por el art. 23º de la presente resolución.

Artículo 12: Los vertidos o vuelcos realizados al dominio público hidráulico sujeto a jurisdicción de este Departamento General de Irrigación deberán reunir las condiciones de calidad (química, física y bacteriológica), caudal (instantáneo máximo, promedio diario), frecuencia (variaciones diarias y/o semanales típicas), periodicidad (épocas del año en que se produce el vertido) y ubicación de su punto de vuelco, que fije este organismo público.

Artículo 13: Se establece la prohibición de la mezcla o confusión de efluentes industriales con efluentes cloacales para el vuelco de los mismos al dominio público hidráulico, salvo excepciones expresamente autorizadas por este Departamento, debidamente justificados por razones técnicas. Asimismo, queda prohibido la utilización de caudales de agua que sirvan para la dilución de efluentes, salvo casos especiales debidamente autorizados y habilitados.

Artículo 14: Queda expresamente prohibido el vertido de sustancias o efluentes, líquidos o sólidos, a piletas naturales o artificiales de infiltración y/o evaporación, pozos absorbentes, cavados, perforados, sumideros, inyectores o de otra especie, cualquiera sea su profundidad, que de algún modo puedan estar vinculadas o conectados a acuíferos libres o confinados, y que sean susceptibles de contaminar o alterar las aguas subterráneas. Estos vertidos sólo podrán ser autorizados en forma expresa y previa, siempre que la operación no implique daños o alteración de la calidad de las aguas, garantizando técnica y científicamente la seguridad de los acuíferos y las formas de monitoreo del control de tareas. Será obligatorio la presentación de un estudio hidrogeológico previo y/o perfil litológico, a cargo de los solicitantes, que deberán demostrar la inocuidad de las operaciones y sin perjuicio de lo establecido por el Art. 8º de la presente reglamentación. En los casos de disposición de efluentes o sustancias en el suelo mediante campos de derrame, infiltración, evaporación, reúso o riego, se exigirá, además, el cumplimiento de los recaudos necesarios para impedir la contaminación de aguas subterráneas o superficiales, debiéndose

verificar la existencia de desagües a cuerpos de agua superficiales. En todos los casos, a los fines de la adecuación de las tareas o actividades comprendidas en este artículo a los términos del mismo, deberán cumplimentarse las normas establecidas en el Capítulo VI de este Reglamento y en sus Anexos IV y V.

CAPITULO III
DEL TRAMITE DE OTORGAMIENTO DEL PERMISO

Artículo 15: El Superintendente General de Irrigación podrá otorgar Permiso de Vertido, a todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se hayan inscripto en el RUE y cuyos efluentes cumplan rigurosamente con las condiciones o exigencias impuestas en este Reglamento o que oportunamente solicite el Departamento. En virtud de ello, y como principio general aplicable para todos los casos, queda expresamente prohibido el vuelco de efluentes a aquellos establecimientos que no cuenten con el correspondiente "Permiso de Vertido" o que no hayan convenido formalmente con el Departamento General de Irrigación la adecuación perentoria, paulatina y definitiva de sus efluentes a través de la suscripción del correspondiente "Convenio de Gestión de Permiso de Vertido".

A tal efecto, dichos establecimientos tendrán un plazo que vencerá el primero de Abril de 1997 para iniciar formalmente la solicitud del correspondiente Convenio de Gestión de Permiso de Vertido.

Artículo 16: Todo establecimiento que no posea Permiso de Vertido y cuyos efluentes no se adecuen a las prescripciones del presente Reglamento, deberá suscribir obligatoriamente con Superintendencia General de Irrigación un Convenio de Gestión de Permiso de Vertido. Vencido dicho plazo, y no procediéndose a cumplir lo expuesto, serán considerados como establecimientos de categoría "c" del art. 26º del presente, sujetándose a la normativa allí impuesta. Asimismo, será de aplicación lo expuesto en el párrafo anterior a todo establecimiento o empresa que transcurridos sesenta (60) días

corridos, desde el inicio formal de la solicitud del correspondiente Convenio, el mismo no hubiera sido suscripto por razones imputables al solicitante.

Artículo 17: Los trámites de solicitud de "Permiso de Vertido" o de suscripción de "Convenio de Gestión de Permiso de Vertido", deberán iniciarse ante el Superintendente, Subdelegado de Aguas o Jefe de zona competente, por el titular o responsable de la empresa o establecimiento o de quien tenga la explotación del mismo, se regirá por las normas de la Ley Nº 322 y de Procedimiento Administrativo Ley Nº 3.909 y deberá contener, por lo menos y en lo pertinente, la siguiente información:

a) Número de inscripción ante el RUE, cuando lo posea;

b) Razón social, domicilio real y legal, número de CUIT ante la Dirección General Impositiva y de inscripción ante la Dirección General de Rentas de la Provincia, habilitación municipal en los casos que corresponda y demás datos identificatorios de la empresa o establecimiento. En todos los casos el peticionante deberá acreditar la personería en legal forma;

c) Si posee o cuenta con pozo de aguas subterráneas, deberá indicar padrón de rentas y nomenclatura catastral;

d) Características específicas de las actividades productivas de la empresa, causante de los efluentes o vertidos;

e) Ubicación exacta de los puntos de vuelcos, inyección, depósito de sustancias o residuos;

f) Ubicación de la cámara saca muestras y de aforo y mecanismos de cierre;

g) Características cuali y cuantitativas de los efluentes a volcar;

h) Descripción de las instalaciones de tratamiento y de los sistemas de seguridad para evitar fugas no previstas. Asimismo se deberá acompañar el Plan General de Control de Contingencias;

i) En caso de existir la posibilidad de vertido directo o indirecto que puedan inficionar a los acuíferos subterráneos, se deberá acompañar el pertinente estudio hidrogeológico;

j) Solicitud de imposición de las servidumbres que sean necesarias a los efectos de la ubicación del sistema de tratamientos, ductos y puntos de vuelco;

k) Descripción de la red de efluentes cloacales y su disposición final, para el caso que no estén conectados en forma directa a la red de saneamiento y

l) En su caso, se deberá acompañar proyecto avalado por profesional responsable, del sistema de depuración necesario para la adecuación de los vertidos a las exigencias impuestas por la presente reglamentación. Las solicitudes deberán contener el carácter de declaración jurada.

El Departamento General de Irrigación, a través de sus oficinas técnicas y cuando lo estime pertinente, podrá solicitar la información adicional necesaria con el fin de completar los datos suficientes para el otorgamiento del Permiso de Vertido o suscripción del Convenio de Gestión de Permiso de Vertido.

Artículo 18: Recepcionada la solicitud de permiso, se emitirán los pertinentes informes técnicos por las oficinas correspondientes y las Inspecciones de Cauces con jurisdicción. Una vez verificado que se han cumplido con todos los extremos exigidos en la presente reglamentación, se ordenará la publicación por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un diario circulación de la zona afectada, con cargo al interesado, la solicitud de permiso con una información sucinta de lo peticionado por la empresa o establecimiento.

Los posibles afectados o interesados tendrán treinta (30) días corridos, perentorios e improrrogables, para efectuar las observaciones o reclamos que sean pertinentes, los cuales deberán ser fundamentados por escrito. De esas observaciones, como de las que pudiera hacer el Departamento General de Irrigación, se dará vista a la peticionante por el término de quince (15) días

corridos, a fin que conteste y haga su descargo. Si las mismas no fueran contestadas o la contestación fuera insuficiente para el Departamento, se rechazará sin más la solicitud de Permiso de Vuelco. Cuando la complejidad del caso lo justifique, Superintendencia podrá ampliar, prudencialmente, los plazos fijados en el presente.

Artículo 19: Cumplidos los extremos administrativos exigidos en la presente reglamentación, y previo pago de toda deuda exigible por el Departamento General de Irrigación, el Superintendente dictará resolución otorgando o rechazando el pedido Permiso de Vertido. En este último caso, le asiste al peticionante la vía recursiva prevista en la ley Nº 322 y la ley Nº 3.918.

Artículo 20: El Permiso de Vertido deberá contener los siguientes puntos:

a) Determinación cuantitativa y cualitativa del efluente, en los términos y límites especificados en la presente reglamentación;

b) Sistema de tratamiento de efluentes debidamente visado;

c) Ubicación del punto de enlace, punto de vuelco y del conductor de vertidos;

d) Fijación de la cámara saca muestras y de aforo y mecanismo de cierre, por donde deberán circular obligatoriamente todos los líquidos previos a sus vuelcos a los cuerpos receptores. Si el Departamento lo estima necesario, en el permiso se podrán disponer complementariamente la instalación de conductos testigos, instalaciones especiales tales como cámaras compensadoras o ecualizadoras, totalizadores de volúmenes, toma muestras compensadas y cualquier otro elemento que crea conveniente a los efectos de poder asegurar y optimizar el control de los vertidos;

e) Sistema de control de funcionamiento de las instalaciones. Además, podrá contener;

f) Cronograma de las obras complementarias de tratamiento, como asimismo las previsiones necesarias que deban efectuarse para minimizar o mitigar la contaminación intertanto se terminan las obras;

g) Sistema de emergencia en caso de accidentes (Plan general de control de contingencias);

h) Plazo de vigencia del permiso;

i) Monto del canon;

j) Enumeración de las causales de declaración de caducidad del Permiso de Vertido;

k) Sanciones en caso de incumplimiento del presente Reglamento y

l) Cualquier otra condición o información que estime pertinente el Departamento.

Los Convenios de Gestión de Permiso de Vertido deberán en lo pertinente contener los puntos señalados en el párrafo anterior.

En el caso que se otorgue un Permiso de Vertido que pueda afectar directa o indirectamente las aguas subterráneas, el Departamento General de Irrigación, a través de la oficina técnica pertinente impondrá al peticionante además, las medidas accesorias necesarias para la efectiva protección del acuífero, tanto en su cantidad como calidad.

Todo permiso o autorización de vertido es precario y podrá ser revocado cuando, por razones oportunidad o conveniencia o en el ejercicio del Poder de Policía, el Departamento General de Irrigación así lo disponga.

Artículo 21: Los establecimientos o empresas que hayan obtenido el Permiso de Vertido o hayan suscripto Convenios de Gestión de Permiso de Vertido, deberán por sí mismos fiscalizar y monitorear sus instalaciones, sistemas y efluentes, con la obligación de informar de ello y con la periodicidad que en cada caso

determine el Departamento General de Irrigación, bajo pena de caducidad del permiso. Los informes y análisis pertinentes deberán adecuarse a los requerimientos técnicos y científicos exigidos por el Departamento, debiendo ser representativos de las operaciones medias y máximas del establecimiento como generador de efluentes. Deberán ser realizados y rubricados por el titular del establecimiento y por profesional u organismo público o privado competente.

En aquellos casos que se estime oportuno por el Departamento General de Irrigación, el establecimiento deberá además, llevar obligatoriamente un libro foliado y rubricado por Superintendencia, en donde se dejará constancia de los informes y análisis mencionados en el presente artículo, así como de las observaciones o emplazamientos que le formule el Inspector del Departamento. Dicho libro deberá estar permanentemente actualizado y a disposición de la autoridad de aplicación.

Artículo 22:Sin perjuicio de las obligaciones de autocontrol impuestas o convenidas, todos los establecimientos o empresas estarán sometidas al control y fiscalización de oficio que realice el Departamento General de Irrigación, por sí o por intermedio de personas autorizadas a tal efecto. Siempre y en todos los casos, la Administración podrá en cualquier momento realizar las fiscalizaciones, tomas de muestras, emplazamientos e inspecciones necesarias que estime pertinentes, en el ejercicio del poder de policía, cuyo costo será solventado por la empresa. Tendrán como objeto comprobar fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Reglamento o las asumidas en los correspondientes Convenios de Gestión de Permiso de Vertido.

Artículo 23: Todos los establecimientos y empresas sujetas a las prescripciones del presente Reglamento tendrán un plazo máximo de dos (2) años, contados a partir de la vigencia de la presente resolución, a los efectos de que dispongan la adecuación completa de sus instalaciones, sistemas y vertidos a los requerimientos técnicos exigidos por la presente resolución y sin perjuicio de las que se dicten en el futuro, obteniendo por lo tanto el pertinente Permiso de Vertido. El Superintendente General de Irrigación podrá adecuar en cada caso

concreto el plazo mencionado en este artículo, según las características de cada establecimiento, teniendo presente el grado de peligrosidad para el recurso hídrico de los efluentes a verter y la actitud asumida por el establecimiento.

CAPITULO IV
DEL REGISTRO UNICO DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 24: Todas las personas, empresas o establecimientos que viertan o puedan verter efluentes de cualquier naturaleza, directa o indirectamente, al dominio público hidráulico sujeto a jurisdicción del Departamento General de Irrigación, deberán obligatoriamente inscribirse en el Registro Único de Establecimiento (RUE) de este Departamento, conforme a los requerimientos de información que el mismo imponga. En el caso de empresas o establecimientos que no se hubiera inscripto voluntariamente en el RUE, el Departamento General de Irrigación, a través de sus oficinas, procederá si corresponde técnicamente, a inscribirlo de oficio a los fines de sujetarlo a los requerimientos de la presente normativa.

Artículo 25: A partir de la vigencia de este Reglamento, los establecimientos mencionados en el artículo anterior, dispondrán de un plazo que vencerá el primero de abril de 1997 a fin que procedan a su inscripción en el RUE. En idéntico plazo, aquellos establecimientos ya inscriptos con anterioridad en el mencionado registro, procederán a obtener, completar y actualizar la información requerida en el art. 17º del presente Reglamento. Vencido dicho plazo y no cumplido lo dispuesto en este artículo, se dispondrá la clausura de todos los puntos de vuelco, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.

Artículo 26: Las empresas y establecimientos registrados en el RUE serán inscriptos en las siguientes categorías:

a) Establecimientos que cuentan con el respectivo Permiso de Vertido.

b) Establecimientos que hayan suscripto un Convenio de Gestión de Permiso de Vertido. Deberán ajustarse al cronograma de obras, sistemas y tratamientos que convengan con el Departamento General de Irrigación, a los efectos de la adecuación de los vertidos a los requerimientos impuestos por la presente reglamentación.

c) Establecimientos que no se encuentran en ninguna de las categorías arriba mencionadas. Estas empresas tienen expresamente prohibido el vuelco o vertido de sus efluentes; procediéndose, en caso de constatarse ello, a la inmediata y automática clausura de sus puntos de vertido, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que correspondieran.

Artículo 27: Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, el Departamento General de Irrigación procederá a clasificar a los establecimientos o empresas según las características de los efluentes que vuelquen o viertan, tomando como parámetro básico la menor o mayor peligrosidad o toxicidad de los mismos. La clasificación original de los distintos tipos de establecimientos o empresas, de acuerdo a lo que aquí expuesto, se determina en el Anexo II de la presente resolución.

Artículo 28: En todos los casos la clasificación de los establecimientos, según los criterios fijados en el artículo anterior, será indicativa, pudiendo en cualquier momento Superintendencia modificarla teniendo en cuenta los cambios de las circunstancias del caso atinentes a la actividad del mismo que implique una alteración en la cantidad y/o calidad de los efluentes vertidos.

Artículo 29: El Departamento, por intermedio de la Dirección de Riego y Drenaje, determinará los controles, periodicidad y tipo de los mismos, sistemas de información y demás actividades relacionadas con el vertido de los efluentes, según la categoría en que se encuentre inscripto el establecimiento o empresa, conforme a las prescripciones del presente Título.

Artículo 30: Cuando las circunstancias del caso así lo meritúen, el Superintendente General de Irrigación podrá imponer como condición

necesaria para el otorgamiento de los Permisos de Vertidos, la integración de consorcios o Inspecciones de Vertido, integrados por establecimientos permisionarios que viertan a un mismo cuerpo receptor, pudiendo en el caso intervenir los demás usuarios interesados. Estos se regirán por sus propios estatutos, previa autorización y aprobación del Honorable Tribunal Administrativo, y funcionarán en lo pertinente bajo el Régimen de Inspecciones de Cauces, Ley Nº 6.405 y Ley de Consorcios Públicos Nº 3.603. Tendrán por objeto, entre otros, la ejecución de estudios, proyectos y obras de conservación y saneamiento de los bienes integrantes del dominio público hidráulico comprometidos; las tareas de limpieza de los mismos; el tratamiento en común de sus vertidos y la operación de plantas de tratamientos.

Artículo 31: Superintendencia podrá imponer al establecimiento que se niegue a integrar los consorcios mencionados en el artículo anterior o que no cumpla con las obligaciones que se fijen en sus estatutos, la caducidad del permiso o la rescisión de cualquier convenio y el inmediato cese de todo tipo de vertidos, con la pertinente clausura del punto de vuelco, sin perjuicio de las demás sanciones que pudiesen corresponder.

Artículo 32: Las resoluciones que dispongan el otorgamiento de Permisos de Vertidos deberán ser notificadas a la Inspección de Cauce con jurisdicción, según ley Nº 6.405. Asimismo, de las solicitudes de Permiso de Vertido o de suscripción de Convenio de Gestión de Permiso de Vertido, el Superintendente, Subdelegado o Jefe de Zona competente, podrán dar Vista a la Inspección de Cauce correspondiente, a los efectos de que emitan opinión y efectúen las sugerencias que estimen pertinentes.

CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION

Artículo 33: El Departamento General de Irrigación podrá tomar conocimiento del vuelco o vertido de efluentes, cualquiera sea su naturaleza, como de la

existencia de cualquier infracción a la presente reglamentación, de los siguientes modos:

a) De oficio, a través de su propio accionar

b) Por denuncia;

c) Por declaración o información del propio establecimiento o infractor.

Siempre y todos los casos, los funcionarios del Departamento deberán realizar una inspección para la constatación "in situ" del hecho sujeto a contralor. Asimismo, Superintendencia podrá facultar a las Inspecciones de Cauces o Asociaciones de Inspecciones a labrar las respectivas actas de constatación o de infracción, conforme a lo dispuesto en el art. 9º, inc. "e" de la Ley Nº 6.405.

Artículo 34: Constatado el vuelco o la infracción, se deberá verificar primeramente el establecimiento, empresa o persona responsable del hecho, su correspondiente identificación y determinar fehacientemente si los mismos se encuentran encuadrados legalmente bajo las prescripciones de la presente reglamentación. Si así correspondiera, se deberá verificar si se cumplen estrictamente con los términos y condiciones expuestos en el Permiso de Vertido o en el Convenio de Gestión.

Artículo 35: A continuación, posea o no el establecimiento Permiso de Vertido o Convenio de Gestión, se deberá en primera instancia determinar si el efluente posee características organolépticas que respondan o no a las exigencias establecidas en este Reglamento.

De lo expuesto surgirá si existe Contaminación Manifiesta o Contaminación Probable:

1. Contaminación Manifiesta: Es aquella que a juicio de inspector o funcionario del Departamento puede, prima facie, por su aspecto o características, ser evaluada como tal. En tales circunstancias se tomarán las siguientes medidas: 1- Se labrará Acta de Control de Efluentes; 2- En

el caso de empresas encasilladas como de actividades generadoras de efluentes de poca peligrosidad o baja toxicidad, no será imprescindible la toma de muestras para análisis; 3- A continuación se formará expediente, adjuntando el Acta de Control de Efluentes y demás documentación que se estime pertinente y se dejará constancia de ello en el legajo del RUE. De lo actuado se dará Vista al interesado, debiéndose seguir al respecto las normas procedimentales establecidas en la presente reglamentación como Régimen Sancionatorio. Finalmente el expediente se girará al Superintendente de Irrigación, Subdelegado o Jefe de Zona, si correspondiera, a fin de que se procesa a la resolución de la causa.

2. Contaminación Probable: Se considerará así a toda aquella alteración del recurso hídrico que de la inspección o constatación no surgen condiciones organolépticas inadecuadas del efluente. Se actuará de la siguiente forma:

a) Se labrará Acta de Control de Efluente;

b) Se tomará obligatoriamente muestra del efluente para su análisis en un recipiente cuyas características y condiciones se adecuen a lo requerido por las técnicas analíticas que le serán aplicadas y será identificado con un rótulo. El recipiente de muestra deberá ser entregado al laboratorio dentro del plazo que las técnicas establezcan para que el efluente no sufra alteraciones;

c) Si del análisis de la muestra se constata la existencia de contaminación al recurso hídrico, se formará expediente y se seguirá el mismo procedimiento establecido en el punto anterior, debiéndose girar finalmente la causa a Superintendencia, Subdelegación o Jefatura de Zona, según corresponda, a fin de que se disponga la resolución de la causa;

d) Si del análisis no resulta alteración o contaminación, se dará por concluida la actuación, debiéndose notificar tal proveído al establecimiento o empresa inspeccionado, sin perjuicio de verificar su inscripción en el RUE y de la aplicación del presente Reglamento en lo pertinente.

Artículo 36: A requerimiento del inspector o funcionario público, toda empresa o establecimiento sujeta a la presente reglamentación deberá exhibir y poner al alcance de los mismos los análisis por ellos realizados y la documentación exigida por el Artículo 21º, bajo pena de la aplicación de las sanciones que pudiesen corresponder.

Artículo 37: En toda inspección que se realice, se deberá labrar por duplicado el Acta de Control de Contaminación. La misma deberá ser rubricada por el inspector a cargo y por la persona responsable del establecimiento o empresa, o por quien se haya constatado como prima facie autor de la infracción, y en donde se volcará, si ello es posible, todos los datos personales de la misma. Si esta persona se negase a firmar el acta o por otras razones no lo hiciera, se dejará expresa constancia de ello. El funcionario encargado de la inspección deberá constatar con la mayor exactitud y verosimilitud posible toda aquella hechos atinentes a la presunta infracción tales como ubicación geográfica, estado del tiempo, existencia de testigos presenciales de los hechos, toma de análisis y fotografías y demás circunstancias atinentes a la presunta infracción.

La copia del acta se entregará al establecimiento o a la persona considerada infractor, en donde se le notificará de todo lo actuado y en donde se le comunicará de los plazos para efectuar el descargo, ofrecer prueba y constituir domicilio legal. El presunto infractor a los efectos del descargo y ofrecer la prueba que estime pertinente el plazo de cinco (5) días hábiles, debiendo en tal circunstancia constituir domicilio legal en el radio del Departamento General de Irrigación o Subdelegación que corresponda. En dicha notificación también se le hará saber al mismo que podrá retirar en el Departamento o Subdelegación, copia de los resultados de los análisis tomados, en el plazo que el inspector le

indique. En este caso, el plazo de cinco (5) días para descargo, correrá desde la fecha indicada por el inspector para retirar la copia de los resultados indicados. Siempre y en todos los casos, se tratará de que el acta sea rubricada por testigo presencial de los hechos, en donde constará sus datos personales.

Artículo 38: Todos los antecedentes de la inspección, así como sus resultados o la aplicación de las sanciones, si las hubiera, deberán ser registrados con la finalidad de mantener un régimen de control sistemático y efectivo.

Artículo 39: El Superintendente General de Irrigación podrá suscribir convenios con laboratorios u organismos públicos, para la realización de los análisis efectuados durante las inspecciones a fin de constatar la existencia de infracciones a la presente resolución.

CAPITULO VI
DE LAS ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS

Artículo 40: En virtud de los principios impuestos en el presente Reglamento, todas las empresas, industrias o establecimientos que en razón de sus actividades puedan en forma eventual o accidental afectar, contaminar o degradar el dominio público hidráulico quedan sujetos a los términos de este Reglamento y al ejercicio del Poder de Policía del Departamento General de Irrigación.

Artículo 41: Crease dentro del RUE una sección para registrar a las actividades y establecimientos arriba descriptos, como Potenciales Generadoras de Contaminación, y que funcionará bajo la órbita de la Dirección de Riego y Drenaje, Departamento de Contaminación. Tal inscripción podrá ser voluntaria o de oficio.

Artículo 42: Los establecimientos mencionados en el presente Capítulo, quedarán sometidos a inspecciones de contralor a los efectos de la debida prevención o que permita atenuar en debido tiempo y forma, los posibles

derrames, vuelcos o infiltraciones de sustancias líquidas o sólidas a las aguas superficiales o subterráneas. Los costos de dichos controles e inspecciones serán solventados por el establecimiento.

Artículo 43: Todas las empresas o establecimientos sujetos a las prescripciones del presente Capítulo deberán formular un Plan de Control de Contingencias, en el cual constarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier hecho o accidente que pudiese afectar al dominio público hidráulico. En dicho Plan deberán formularse las obras, sistemas, instalaciones, puntos vulnerables, procedimientos y acciones a ejecutar en caso de accidente, para garantizar debidamente la prevención de vuelcos o derrames contaminantes.

Artículo 44: El Plan impuesto en el artículo anterior deberá ser confeccionado y rubricado por un profesional responsable y sujeto al permanente contralor del Departamento General de Irrigación. El no cumplimiento de esta obligación, como asimismo el incumplimiento de los términos del Plan, hará pasible a la empresa o establecimiento de las sanciones previstas en el presente Reglamento.

Artículo 45: El Departamento General de Irrigación en coordinación con los Municipios y demás organismos públicos implicados, controlará –en función del riesgo y el daño potencial generado o a generarse– aquellas actividades que generen, produzcan, almacenen, transporten, manipulen o utilicen sustancias contaminantes o peligrosas y que puedan, eventual o potencialmente, afectar, contaminar o degradar el dominio público hidráulico sujeto a su jurisdicción.

CAPITULO VII
DEL REGIMEN TRIBUTARIO

Artículo 46: Dispónese un monto fijo de inscripción en el RUE de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150) para cada establecimiento. En el caso de que la inscripción del establecimiento o empresa fuera de oficio, el monto de la inscripción se duplicará.

Artículo 47: Establécese a toda empresa o establecimiento inscripto en el RUE que cuente con Permiso de Vertido o haya suscripto un Convenio de Gestión de Permiso de Vertido, el pago de un Canon Anual de Sostenimiento para la Preservación de Recurso Hídrico, el que será fijado y calculado para su pago conforme a la fórmula que consta en el Anexo III de la presente resolución.

Artículo 48: El pago de este canon se realizará anualmente por adelantado, pudiéndose en aquellos supuestos que determine el Superintendente General de Irrigación, fraccionarse hasta en seis (6) cuotas bimestrales.

Artículo 49: La reducción del monto del canon por la alteración de cualquiera de los parámetros de la formula mencionada en este Capítulo, regirá siempre para el futuro y partir de su solicitud, siempre y cuando se hayan verificado fehacientemente el cumplimiento de los extremos previstos. Dicha reducción será proporcional al tiempo que falte para culminar el año tributario.

CAPITULO VIII
DEL REGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 50: Las infracciones a la presente resolución serán penadas con las siguientes sanciones, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 45 de la Ley Nº 6044 y los Arts. 131 y 134 de la Ley General de Aguas:

a) Apercibimiento;

b) Multa entre pesos cien ($100) y pesos un millón ($ 1.000.000)

c) Clausura preventiva o definitiva del punto a puntos de vertido;

d) Revocación del Permiso de Vertido o rescisión del Convenio de Gestión de Permiso de Vertido.

e) Clausura de la fuente de contaminación;

f) Clausura del establecimiento;

g) Caducidad de la concesión del permiso de uso o aprovechamiento de agua, en su caso.

La imposición de la multa podrá ser concurrente con la aplicación de las restantes penas, debiéndose en todos los casos, a fin de graduar la misma, verificar la gravedad de los hechos y de la afectación; la existencia de negligencia o dolo en la infracción; el carácter de reincidente del infractor y demás circunstancias atenuantes o calificantes que rodeen al caso.

Artículo 51: La determinación de la sanción es sin perjuicio de la responsabilidad que le competa al infractor por los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico y la eventual responsabilidad criminal o contravencional por el hecho sancionado. Independientemente de ello, el Superintendente ordenará la reposición de las cosas a su estado anterior si ello es posible, debiéndose realizar las obras o trabajos necesarios a tal efecto o la demolición, destrucción o anulación de las obras o instalaciones que hayan sido realizadas en infracción a la presente reglamentación, con cargo al infractor de los gastos o erogaciones que ello signifique.

Artículo 52: En los supuestos del art. 50º, inc. B y habiendo reincidencia, el infractor será pasible de la aplicación, como mínimo, del doble del monto de la última multa aplicada.

Artículo 53: La sanción será resuelta y aplicada por el Sr. Superintendente General de Irrigación, Subdelegado de Aguas o Jefe de Zona, según corresponda, previa tramitación del expediente administrativo de rigor, en el deberá ventilarse la causa, siguiéndose al respecto lo ordenado en el Capítulo V del Reglamento. Contra las resoluciones que se dicten, el infractor podrá interponer recurso de apelación ante el Honorable Consejo de Apelaciones o Superintendente General de Irrigación, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 322.

Artículo 54: Para la tramitación de la causa y en el caso de que hubiera descargos con ofrecimiento de pruebas, se designará un instructor, el que será

un abogado del cuerpo de asesores jurídicos del Departamento General de Irrigación. El mismo ordenará la producción de la prueba que estime pertinente, sea de oficio o a instancia de parte, a los efectos del esclarecimiento de la causa y la determinación de responsabilidades, debiendo tomar todos los recaudos que considere relevantes.

Artículo 55: Si se hubiera ofrecido prueba y una vez que la causa se encuentre en estado, el infractor tendrá el plazo de ocho (8) días para alegar sobre los hechos y el derecho probado. Cumplida dicha etapa, el instructor elevará propuesta de resolución al Sr. Superintendente de Irrigación, Subdelegado o Jefe de Zona, a fin de que dicte el pertinente acto administrativo. Si el presunto infractor no hubiera hecho descargo o no ofreciera prueba, o la misma sea considerada impertinente, se procederá sin más trámite al dictado de la resolución respectiva por el funcionario competente.

Artículo 56: La resolución que se dicte será de aplicación inmediata o fijará los plazos a fin de hacer efectiva la sanción, sin perjuicio de los recursos que pudiese interponer el infractor. Dichos recursos serán sin efecto suspensivo, salvo en los casos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 3.909.

Artículo 57: En el caso de existir contaminación manifiesta y peligrosidad en el vertido o infiltración, o en los casos de extrema gravedad o urgencia, el Superintendente, Subdelegado o Jefe de Zona, podrán disponer inaudita parte y por resolución debidamente fundada, la clausura de uno o más puntos de vuelco. Inmediatamente de producida la medida, se procederá como lo dispone el presente Reglamento en su parte pertinente.

Artículo 58: Las sanciones de apercibimiento, multa hasta la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000) y clausura de puntos de vuelco podrán ser aplicadas por el Superintendente, Subdelegado o Jefe de Zona, según corresponda. Las demás sanciones y multas superiores, sólo podrán ser aplicadas por el Superintendente.

Artículo 59: El monto de las multas que sean abonadas dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución de sanción, será reducido en un cincuenta por ciento (50%).

CAPITULO IX
DEL REGIMEN TRANSITORIO

Artículo 60: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo intertanto el Departamento General de Irrigación, comunicar y explicitar sus alcances a las Subdelegaciones, Jefaturas de Zonas y las correspondientes Inspecciones de Cauces, a los efectos de que tomen los recaudos del caso.

Artículo 61: Encomiéndase al Superintendente General de Irrigación la debida publicidad del texto y alcances de la presente resolución, dirigida especialmente a los usuarios y establecimientos y empresas sujetas a los alcances de esta reglamentación.

Artículo 62: Deróguense las resoluciones Nº 413/90, 311/95 y toda otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 63: Regístrese y pase a Superintendencia para su publicación en el Boletín Oficial por tres (3) días

ANEXO I

NORMAS PARA VERTIDO DE LÍQUIDOS A CUERPOS RECEPTORES

Artículo 1: Establécense los siguientes parámetros máximos permitidos y tolerados para los vertidos directos e indirectos al dominio público hidráulico.

PARÁMETROS FÍSICOS

Ítem	Parámetro	Unidades	Máximo permitido	Máximo tolerable	Especificaciones singulares y observaciones
1	Color Verdadero	UCV	12	18	UCV o "true colour unit". Medido sobre efluente filtrado.
2	Conductividad Específica	Micro siemens a 25°C	900	1800	En algunos cuerpos receptores se permitirá valor mayor por tiempo limitado, siempre que no causen daños a terceros. Podrá exigirse control continuo.
3	Sólidos Sedimentables	ml/l	Menos de 1	10	Valores obtenidos en con de Imhoff en dos (2) horas. La exigencia podrá ser mayor para evitar posibles embanques. No se admitirán sedimentos cuando su DBO supere

					los 100 mg/l.
4	Sólidos Sedimentables Compactados	ml/l	0,5	1	Ídem anterior. Valores obtenidos a los 10 minutos. No se admitirán sedimentos cuando su DBO supere los 100 mg/l.
5	Sólidos Solubles en Éter Etílico	mg/l	50	100	Cerca de tomas para agua de bebida no podrá ser superior a 0,05 mg/l.
6	Temperatura	°C	30	45	Para casos especiales, se fijará el máximo en forma singular.

PARÁMETROS QUÍMICOS

Nª	Pará- metro	Unid.	Máximo Permitido	Máximo Tolerable	Especificaciones singulares y observaciones
7	Arsénico	mg/l	0,05	0,1	Si hay afectación a aguas subterráneas, menos de 0.05 mg/l. Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido es de 0.01 mg/l.
8	Boro	mg/l	0,5	1	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será menor de 0.03 mg/l. Este parámetro podrá ser más estricto, según los cultivos irrigados.
9	Cadmio	mg/l	0,003	0,01	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo será permitido menor a 0.003 mg/l.
10	Cianuros	mg/l	Menos de 0,05	0,05	Cerca de tomas de agua para bebidas, el máximo permitido será de 0.05 mg/l. Este parámetro podrá ser más estricto, según la afectación a la vida acuática.

11	Cloruros	mg/l	200	400	Este parámetro podrá ser más estricto si existe posibilidad de efectos corrosivos.
12	Cromo Hexavalente	mg/l	0,05	0,1	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será menor a 0,05 mg/l. Este parámetro podrá ser más estricto, según la afectación a la vida acuática.
13	Cromo Total	mg/l	Menos de 0,5	0,5	Mayor exigencia es posible cerca de tomas de agua para bebida o afectación de vida acuática.
14	Detergentes	mg/l	1	1	El máximo tolerado podrá variarse en casos particulares, en función del tipo de cuerpo receptor, pero siempre será menor de 2.0 mg/l. Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo no podrá ser mayor a 1.0 mg/l.
15	Fenoles	mg/l	0,05	0,1	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será menor a 05 mg/l.
16	Fosfatos	mg/l	0,4	0,7	Para lagos y embalses o lagunas, un valor puntual menor de 0.5 mg/l.

17	Hidrocarburos	mg/l	0,5	X	El máximo tolerado se fijará en función del tipo del cuerpo receptor y problemas que pueda causar. Siempre será menor de 5 mg/l. Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será menor a 0,1 mg/l. En todos los casos, el máximo permitido de hidrocarburos polinucleares será menor de 0,02 mg/l.
18	Manganeso	mg/l	0,1	0,5	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será menor a 0.1 mg
19	Mercurio	mg/l	Menos de 0,001	0,005	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será de 0.001 mg/l o más estricto según afectación
20	Nitratos	mg/l	Menos de 45	45	Dicho parámetro podrá ser más estricto en caso del vuelco directo o indirecto a lagos, embalses y lagunas.
21	Nitritos	mg/l	Menos de 0,1	0,1	
22	Nitrógeno Amoniacal	mg/l Np	1,5	5	Dicho parámetro podrá ser más estricto cuando se lo relacione con coliformes fecales. En caso de cuerpos

					receptores con vida acuática, el máximo permitido será de 0.02 mg
23	pH	Nro.	6.5 a 8.2	5.5 a 9.0	En algunas industrias se exigirá control continuo, debiendo indicar tipo de tratamiento.
24	RAS	Nro.	6	X	El máximo a tolerar se fijará en función del cuerpo receptor, usos posteriores del agua y problemas que puedan causarse. En ningún caso podrá ser superior a 12
25	Sodio	mg/l	150	275	Dicho parámetro podrá ser más estricto en aquellos casos de afectación a tomas de agua u otros casos especiales.
26	Sulfatos	mg/l	250	400	Dicho parámetro podrá ser más estricto en aquellos casos de posibilidad de corrosión.
27	Sulfuros	mg/l	Menos de 1.0	1	
28	Colifecales	nmp/ 100 ml	200	1000	No se autorizará, salvo casos singulares, el mezclado de líquidos residuales con cloacales. Dicho parámetro podrá ser más estricto en aquellos casos en que pueda afectar el

					agua para bebida.
29	DBO	mg/l	30	120	En algunos desagües y drenajes se permitirá expresamente un valor mayor, por tiempo limitado, siempre que no se causen problemas a terceros o cuerpos receptores. Dicho parámetro podrá ser más estricto si pudiera haber influencia en tomas de agua potable.
30	DQO	mg/l	75	250	Ídem. anterior.
31	Helmintos	huevos/ litro	Menos de 1	1	Ídem. 28.

Artículo 2: Los parámetros no incluidos en el listado del art. 1º, deberán respetar los valores que para agua potable establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) o que específicamente indique Superintendencia.

Artículo 3: No se admitirán vuelcos de lodos u otros residuos provenientes de tratamientos de efluentes industriales, salvo excepciones expresamente autorizadas.

Artículo 4: El listado de parámetros del Art. 1º del presente Anexo, debe considerarse en consonancia con todos los artículos de la Resolución y no aisladamente.

Artículo 5: Salvo indicación o autorización en contrario, los análisis seguirán las técnicas que indica el Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS).

Artículo 6: Las muestras deberán ser representativas de las condiciones reales de funcionamiento del Establecimiento y se registrará si es puntual o compensada, día y hora (o período abarcado), caudal efluente y todo otro dato característico.

Artículo 7: Los máximos permitidos no deben ser sobrepasado por nuevas industrias.

Artículo 8: No se permitirán más de tres parámetros dentro de los tolerables por establecimiento, independientemente de la cantidad de puntos de vuelcos separados con que cuente.

ANEXO II

CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS SEGÚN MAYOR O MENOR PELIGROSIDAD O TOXICIDAD DE LOS EFLUENTES INDUSTRIALES

Artículo 1: Establecerse la siguiente categorización de empresas o establecimientos:

Grupo Uno: Establecimientos cuyos efluentes en general no aportan sustancias o elementos tóxicos al dominio público hidráulico, y por lo tanto no perjudican a los usos comunes del recurso hídrico provincial. Son industrias o actividades cuyos vertidos pueden ser fácilmente controlables y mensurables, y que no poseen elementos peligrosos o potencialmente dañinos a los fines genéricos de la fiscalización de efluentes. Se incluyen a las siguientes actividades:

a) Bodegas y elaboración de bebidas alcohólicas;

b) Industrias conserveras;

c) Elaboración de cervezas;

d) Procesamiento de vegetales, incluido el proceso de almacenamiento o secado;

e) Fabricación y procesamiento de aceites vegetales;

f) Elaboración y embotellamiento de aguas minerales y bebidas gaseosas;

g) Lavadero de hortalizas;

h) Plantas potabilizadoras de agua.

Grupo dos: se refiere a aquellos establecimientos que manipulan u operan elementos o sustancias de características tóxicas o peligrosas, cuya influencia en el dominio público hidráulico a través de sus vertidos pueden alterar negativamente su calidad, afectar el medio ambiente hídrico, lo sistemas de

redes de riego o al recurso hídrico en general. Se incluyen las siguientes actividades:

a) Producción o elaboración de bienes operando con metales no ferrosos;

b) Premoldeados de hormigón;

c) Pulido y grabado de vidrios y cristales;

d) Pintados con pulverización;

e) Extracción de grasas animales;

f) Laboratorios con manipulación de productos químicos orgánicos e inorgánicos;

g) Procesamiento de carnes para consumo humano o animal;

h) Estaciones de servicio;

i) Almacenamiento y utilización de aceites minerales y demás hidrocarburos;

j) Refinerías de petróleo;

k) Refinerías en general;

l) Petroquímicas;

m) Exploración, explotación e industrialización de hidrocarburos y minerales en general;

n) Industrias que operen con polímeros;

o) Galvanización, incluyendo los tratamientos de metales con zinc, cobre, níquel, bronce u otros metales no ferrosos;

p) Tratamiento de textiles, incluyendo la aplicación de tinturas, colores, blanqueadores y otros químicos;

q) Curtiembres, incluyendo secado y curación física y química;

r) Mataderos y frigoríficos;

s) Papeleras;

t) Encurtido de aceitunas;

u) Concentradoras de mostos;

v) Fraccionadoras de vinos;

w) Plantas de tratamiento de efluentes cloacales.

Artículo 2: La clasificación de los establecimientos, empresas o actividades fijada en el artículo anterior es indicativa, pudiendo Superintendencia, en todos los casos, fijar o cambiar la clasificación o grupo en el que se inscribirá a cada establecimiento. En base a la misma, serán fijadas la periodicidad y tipo de controles y/o autocontroles, plazos de tratamientos, sanciones en razón de la mayor o menor diligencias o previsiones tomadas, así como el cumplimiento de las demás exigencias previstas en la presente.

Artículo 3: El Departamento General de Irrigación, por intermedio de la Dirección de Riego y Drenaje, fijará los métodos de contralor periódicos de los parámetros de vertidos de efluentes industriales al dominio público hidráulico.

Artículo 4: El listado de empresas, establecimientos o actividades mencionados en el art. 1º del presente Anexo, podrá ampliarse o modificarse si a juicio del Superintendente General de Irrigación pudiese existir el vertido de efluentes cuyas sustancias o elementos puedan directa o indirectamente afectar el recurso hídrico.

Artículo 5: Sin perjuicio de lo anterior y salvo disposición en contrario, los establecimientos incluidos en el grupo uno deberán informar al Departamento General de Irrigación, con una periodicidad no mayor a un trimestre, la calidad de sus efluentes debidamente certificada por un laboratorio reconocido y

siguiendo las técnicas de análisis que indica el Anexo I en los parámetros que le señale el Departamento General de Irrigación.

Artículo 6: Salvo disposición en contrario, los establecimientos incluidos en el grupo dos deberán informar al Departamento General de Irrigación, con una periodicidad no mayor a un bimestre, la calidad de sus efluentes debidamente certificada por un laboratorio reconocido y siguiendo las técnicas de análisis que indica el Anexo I en los parámetros que le señale el Departamento General de Irrigación. Esta exigencia no es aplicable a las plantas potabilizadoras de agua.

Artículo 7: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en los arts. 5º y 6º del presente Anexo, hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en el Régimen Sancionatorio General.

ANEXO III

FÓRMULA PARA LA FIJACIÓN DEL CANON DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN

Artículo 1: Establécese la siguiente fórmula de aplicación del Canon de Control de Contaminación, en los términos del art. 47º del Reglamento General de Control de Contaminación Hídrica, a los fines de la contribución al mantenimiento, control y fiscalización del dominio público hidráulico:

Canon = (V. / 6500 x P.C.) + [(V. / V.T. x C.C.C. x Cpo. R.) x (C.E. + A.)]. donde

V. (Volumen): Es el volumen total vertido por el establecimiento en un año calendario.

P.C. (Prorrata del Cauce): Canon anual establecido en el Presupuesto del Departamento General de Irrigación, de las Inspecciones de Cauces involucrados y los reembolsos de Obras puestos al cobro en cada ejercicio financiero.

V.T. (Volumen Total): Es el volumen total de vertidos a controlar en todo el ámbito provincial.

C.C.C. (Costo de Control de Contaminación): Es el costo directo del Departamento General de Irrigación para realizar el control de contaminación y que surge del Presupuesto.

Cpo.R. (Cuerpo Receptor): Bien del dominio público hidráulico al que vuelca o afecta el vertido del establecimiento, de acuerdo a los usos posteriores del agua y en función de los siguientes rangos o coeficientes:

Drenaje: 0,8

Desagüe: 1,0

Agua para potabilizar: 2,5

Agua para uso recreativo, piscícola: 2,0

Agua para riego: 1,5

C.E. (Categoría de Establecimiento): Es la categoría del establecimiento, según el art. 26º del Reglamento (con Permiso de Vertido o con Convenio de Gestión de Permiso de Vertido) y según las características del vuelco que se fijan de acuerdo a los parámetros establecidos en el Anexo I (parámetro máximo permitido o tolerado). Todo esto, de acuerdo a la siguiente ponderación: Vuelco con Permiso de Vertido con todos los parámetros dentro de los máximos permitidos: 1,0

Vuelco con Permiso de Vertido con parámetros dentro de los máximos permitidos y tolerados: 1,25

Vuelco con Convenio de Gestión de Permiso de Vertido: 2,0

A (Antigüedad): A los establecimientos con Permiso de Vertido en trámite (con convenio) se le adicionará 1 (uno) al valor de C.E. por cada año o fracción de año que demore el establecimiento en realizar las tareas necesarias para obtener el Permiso de Vertido.

Artículo 2: Aquellos establecimientos que no posean Permiso de Vertido ni Convenio de Gestión de Permiso de Vertido vigente y, que por cualquier circunstancias no hubiera sido clausurado éste o su punto de vuelco, tributará, independientemente del resto de las demás sanciones correspondientes, el equivalente a la Categoría de Establecimiento con Convenio de Gestión de Permiso de Vertido y se le considerará una antigüedad inicial de tres (3) años.

ANEXO IV

ZONAS DE RIESGO DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA

Artículo 1: A los efectos de la protección y preservación del dominio público hidráulico, sujeto a la jurisdicción del Departamento General de Irrigación, declárense como "ZONAS DE RIESGO DE CONTAMINACION HIDRICA" a todas las áreas donde se encuentren instalaciones o explotaciones de cualquier naturaleza con probable impacto en el recurso hídrico o que, por la contextura del terreno, su pendiente y demás características geográficas o ecológicas, sea previsible que durante el uso, transporte, almacenamiento, manipulación, operación o procesado de sustancias, fluidos o residuos, pudiese contaminar o dañar el recurso hídrico superficial o subterráneo.

Artículo 2: Las empresas, industrias o establecimientos públicos o privados, Municipios y cualquier otro ente que realice las actividades descriptas en el artículo anterior, deberán indicar, en el término de sesenta (60) días corridos por la entrada en vigencia de la presente resolución, la probable delimitación de esas ZONAS DE RIESGO DE CONTAMINACION HIDRICA.

Artículo 3: En el caso específico de las empresas petroleras, deberán presentar en los términos del art. 2º de la presente resolución la ZONA DE RIESGO DE CONTAMINACION HIDRICA sobre hojas topográficas con impresión del diseño de cauces y curvas de nivel, con una equidistancia máxima de veinticinco metros, en una escala no mayor de 1:100.000, graficando las trazas de los diferentes ductos que la atraviesen. Para ello podrán solicitar, en los casos dudosos o de difícil resolución, la intervención al Departamento General de Irrigación para la demarcación correspondiente, la que será realizada a través del Departamento de Control de Contaminación, Subdelegación de Aguas o Jefatura correspondiente.

Artículo 4: Las empresas petroleras, dentro de las ZONAS DE RIESGO DE CONTAMINACION HIDRICA especificadas en la presente resolución, deberán presentar la siguiente información con el carácter de declaración jurada, dentro

de los SESENTA (60) DIAS de entrada en vigencia del presente Anexo y con la periodicidad que estime prudencial el Superintendente General de Irrigación:

a) Traza de ductos y de sistemas de conducción de fluidos, abiertos o cerrados, señalando grado de dominancia con relación a la topografía existente a lo largo de los tendidos de los mismos.

b) Material y diámetro de las cañerías instaladas.

c) Carácter aéreo o subterráneo de los ductos: en el caso de aéreos, informar el tipo de estructura de los soportes, materiales y estado de conservación de los mismos. Si son subterráneas, se indicará profundidad de la tapada o entierro y tipos de aislación utilizada.

d) Estado de conservación y tiempo de los ductos.

e) Tipos de plantas de bombeo y su ubicación en el tendido.

f) Fluidos transportadores, caudales y horario de transportación.

g) Declaración de los lugares y modalidad de almacenamiento de petróleo, sus derivados o aguas salobres, con indicación de volúmenes, ubicación, sistemas de impermeabilización, y cualquier otro dato adicional referido al posible impacto al recurso hídrico por roturas o infiltración

h) Sistemas de avenamiento en caso de derrames provocados en caso de avería o rotura de ductos o sistemas de almacenaje.

i) Declaración e información referidos a los pozos de inyección y de sumidero que posean, con la indicación precisa de su ubicación, caudales previstos infiltrar, profundidad, tipos de bombeo, diámetro y material de las cañerías, estado y tiempo de las mismas, como cualquier otro dato que sirva para conocimiento cabal del correcto funcionamiento del sistema.

j) Medidas de seguridad industrial, contingente y de prevención de pérdidas para cada ducto y almacenamiento. Se indicará si son

operativas o a instalar, debiéndose en este último caso, fecha de funcionamiento prevista. En especial deberán acompañar el Plan de Control de Contingencias previsto en los arts. 43 y concordantes del Reglamento General de Control de Contaminación Hídrica.

k) Toda otra información adicional que se estime pertinente.

Artículo 5: A los efectos del efectivo cumplimiento de la presente resolución, el Departamento General de Irrigación coordinará su funcionamiento y fiscalización con el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y demás organismos públicos intervinientes, en particular a los efectos de la aplicación del art. 16º del Decreto 437/93, modificado por el Decreto 691/93 del Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 6: Toda instalación, construcción, remoción o sustitución de ducto o sistema de almacenamiento o conducción, como asimismo cualquier modificación a las medidas de seguridad o al Plan de Control de Contingencias que se efectúe en las ZONAS DE RIESGO DE CONTAMINACION HIDRICA, deberá ser comunicada previamente al Departamento General de Irrigación para su estudio y evaluación.

Artículo 7: Los municipios y cualquier otro ente que realice las actividades descriptas en el art. 1º del presente Anexo, en particular las referidas al manejo de escombros y basuras, deberán indicar al Departamento General de Irrigación la ubicación de esas áreas cuando estas ya existieran. Para el caso de nuevas instalaciones, repositorios o basurales en Zonas de Riesgo, deberá requerirse previamente la autorización del Departamento General de Irrigación.

Artículo 8: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Resolución, hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en el Capítulo VIII del Reglamento General de Control de Contaminación Hídrica, conforme al procedimiento allí establecido.

Artículo 9: Los costos provenientes de las inspecciones y determinaciones de control que correspondan aplicar en función de las tareas de prevención y

control aquí señaladas, serán por cuenta y cargo de la empresa o establecimiento involucrado.

Artículo 10: El Reglamento General de Control de Contaminación Hídrica, será de aplicación supletoria y regirá todo aquello no previsto en el presente Anexo.

ANEXO V

NORMAS DE PERFILAJE PARA EMPRESAS PETROLERAS

Artículo 1: Establécese en virtud de lo dispuesto por el Capítulo VI del Reglamento General de Control de Contaminación Hídrica, las siguientes normas de perfilaje para la ejecución de pozos de exploración, explotación, inyección y avanzada, referidas a la actividad petrolera.

Artículo 2: Todas las empresas petroleras tendrán la obligación de efectuar en los tipos de pozos mencionados en el artículo anterior y que se practiquen en el futuro y en el tramo que va desde la superficie hasta los setecientos metros de profundidad Perfilajes de RT y SP (Resistividad y Potencial Espontáneo), muestreo de Cuttings cada cinco metros (tomados con todas las "reglas del buen arte"); control de Gradiente Térmico (Control de Temperatura, tomado con igual frecuencia que la toma de muestra de cuttings); control del Lodo de entrada y salida; confección del LOG (Registro Estratigráfico Continuo) con relación de Litología-Temperatura y a Escala 1:200, en el tramo señalado a fin de determinar Zonas de Interés Hidrogeológico (ZIH).

Artículo 3: Desde los setecientos metros hasta el fondo del pozo, la empresa responsable deberá entregar un Registro Continuo de Temperatura a fin de determinar la existencia de Cuencas Geotermales, atento a que las mismas pertenecen al dominio público hidráulico provincial.

Artículo 4: En los casos de tratarse de pozos de entubación simultánea, las empresas deberán presentar Perfilajes de Rayos Gamma - u otros - señalando los tramos de interés hidrogeológicos con interpretación de las litologías que los soportan.

Artículo 5: Los Informes respectivos deberán ser elaborados y entregados al Departamento General de Irrigación en un plazo que no supere los treinta (30) días corridos de la finalización de la perforación del pozo.

Artículo 6: Previo a la ejecución de un pozo de exploración, explotación, inyección, avanzada, etc., las empresas petroleras deberán remitir a este Departamento General de Irrigación el Plan de Trabajo Propuesto (PTP) para cumplimentar los objetivos del presente Anexo y en los términos del mismo.

Artículo 7: Las empresas que no cumplan las exigencias impuestas en el presente Anexo, serán pasibles de las sanciones impuestas en el Capítulo VIII del Reglamento General de Control de Contaminación Hídrica.

RESOLUCIÓN N° 627

Mendoza, 17 de Noviembre de 2000

VISTO

Expte. N° 225.481 – E8 caratulado Policía del Agua s/Modificación Resol. 778/96 del H.T.A. (T-P-39-2000) y

CONSIDERANDO:

Que en autos la Dirección de Policía del Agua propicia la modificación de la Resolución N° 778/96 del H. Tribunal Administrativo que aprobó el Reglamento General para el Control de Contaminación Hídrica en todo el ámbito de la provincia de Mendoza, en lo que respecta al Anexo I del citado dispositivo, proponiéndose nuevos parámetros exigibles y/o tolerados para el vertido de líquidos a cuerpos receptores, conforme la tabla que glosa a fs. 29/33 de autos, como también la incorporación a los términos de dicha norma de la aceptación como parte integrante del tratamiento de los desagües cloacales e industriales, del reúso ordenado en suelo, con tratamiento en tierra e implantación de cultivos restringidos, y consecuentemente la fijación de las normas para vertido de efluentes líquidos industriales para reúso agrícola conforme la propuesta obrante a fs. 34/38; el establecimiento de dos (2) tablas conteniendo los parámetros con las normas de calidad de efluentes cloacales con tratamiento primario y secundario de acuerdo al proyecto que glosa a fs. 44/47 de autos, y un Anexo adicional que contenga la reglamentación de las áreas de cultivos restringidas especiales (ACRE), de acuerdo a la propuesta obrante a fs. 41/43 sobre la base de recomendaciones de la FAO/OMS:

Que además, se solicita la modificación del Art. 59° de la Resolución N° 778/96, con el objeto de adecuar el mismo a los objetivos institucionales propuestos que lleven a la superación del principio contaminador – pagador, por el principio "el que contamina invierte", por lo que se sugiere eliminar la simple reducción de la multa por el pronto pago, disponiendo en su lugar que la multa podrá ser

reducida cuando el infractor acredite haber introducido reformas en el sistema de tratamiento de efluentes que conlleven una mejora aceptable en la calidad del vertido con posterioridad a la sanción y dentro del término máximo de un año de impuesta la misma;

Que por lo expuesto teniendo en cuenta que las modificaciones propuestas tienden a lograr una mayor preservación y protección del ambiente en general y del recurso hídrico en particular, y atento el dictamen favorable producido a fs. 52/53 por el Dpto. Jurídico de Superintendencia;

EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN RESUELVE:

1. Modificase el Art. 59° de la Resolución N° 778/96 del H. Tribunal Administrativo correspondiente al Capítulo VIII, del Régimen Sancionatorio, el que quedará redactado como sigue:

"Art. 59°: El monto de las multas que sean abonadas dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución de sanción, podrá ser reducido hasta en 50%, cuando el recurrente demuestre fehacientemente haber introducido reformas en su sistema de tratamiento que se traduzcan en mejoras de la calidad de los efluentes, con posterioridad a la aplicación de la sanción, y dentro del término de un (1) año"

2. Modificase el contenido y la denominación del Anexo I de la Resolución 778/96 del H. Tribunal Administrativo, y su modificatoria Resol. N° 389/97, el que se denominará Anexo I a) Normas para Vertido de Líquidos a Cuerpos Receptores, y quedará redactado como se especifica en dicho Anexo, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

3. Incorpórese a la Resolución N° 778/96 del H. Tribunal Administrativo y su modificatoria Resol. N° 389/97, el Art. 23° bis, con el siguiente texto:

"Art. 23 bis: acéptese como parte integrante del tratamiento de los desagües cloacales e industriales, el reúso ordenado en suelo, con tratamiento complementario en tierra, e implantación de cultivos restringidos, debiendo complementarse el mejoramiento de los líquidos progresivamente en etapas sucesivas, antes de su ingreso al reúso.

Los espacios donde se aplicará el reúso de los efluentes se denominará "Área de Cultivos Restringidos Especiales" A.C.R.E.

Superintendencia podrá otorgar permisos de reúso de efluentes, aplicándose a tal efecto la Ley General de Aguas y supletoriamente la Resol. N° 195/99 del H.T.A. y sus modificatorias, y en el marco de la normativa prevista en los Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución, debiendo establecer en cada caso, las condiciones particulares para el reúso".

1. Incorpórase a la Resolución N° 778/96 del H. Tribunal Administrativo y su modificatoria Resol. N° 339/97, los sub. anexos del Anexo I, denominados – I –b) Normas para Vertido de Efluentes Líquidos Industriales para Reusó Agrícola; I – c) Normas de Calidad de Efluentes Cloacales con Tratamiento Primario para Reusó Agrícola; I – d) Normas de Calidad de Efluentes Cloacales con Tratamiento Secundario para Reusó Agrícola, y I.d) Categorías de Reusó, los que forman parte integrante de la presente Resolución.

2. Regístrese, y pase a Superintendencia para su publicación en el boletín Oficial y demás efectos.

Carlos E. Abihaggle
Superintendente General de Irrigación
Luis Pacífico Tittarelli
Presidente H.C.A. y H.T.A:
Valerio Morata
Vicepresidente H.C.A. y H.T.A.

Jorge L. Chambouleyrón
Consejero H.C.A. y H.T.A.
Enrique Martín
Consejero H.C.A. y H.T.A:
Enrique L. Di Filippo
Secretario H.C.A. y H.T.A.

ANEXO I a) RESOLUCIÓN N° 778/96 H.T.A

NORMAS PARA VERTIDO DE LIQUIDOS A CUERPOS RECEPTORES

Artículo 1: Establécense los siguientes parámetros máximos permitidos y tolerados para los vertidos directos e indirectos al dominio público hidráulico.

PARÁMETROS FÍSICOS

Ítem	Parámetro	Unidades	Método de Análisis	Método Standard*	Máximo Permitido	Máximo Tolerable	ESPECIFICACIONES SINGULARES Y OBSERVACIONES
1	Color Verdadero	UCV	Colorimétrico Visual	2120 – Color B	70	100	UCV o "True Colour unit" Medido sobre el efluente filtrado
2	Conductividad Específica	Microsiemens/cm a 25° C	Método de Laboratorio	2510 E	1400	2000	En algunos cuerpos receptores se permitirá valor mayor por tiempo limitado,

							siempre que no causen daños a terceros. Podrá exigirse control continuo.
3	Sólidos Sedimentables	m/l	Método de Laboratorio	2540 F	Menos de 1	10	Se deberá considerar tipo de cauce, pendiente, características de los sólidos y problemas de embarque. Valores obtenidos en cono de Imhoff en dos (2) horas. La exigencia podrá ser mayor para evitar posibles embarques. No se admitirán sedimentos cuando su DBO supere los 100 mg/l.
4	Sólidos Sedimentables Compactados	ml/l	Método del cono de imhoff	No es un método estandarizado	0,5	1	Ídem anterior. Valores obtenidos a los 10 minutos. No se admitirán sedimentos

							cuando su DBO supere los 100 mg/l.
5	Sólidos Solubles en Éter Etílico	mg/l	Método de extracción con solvente: cloroformo (o éter etílico)	Método ASTM-D-1178	30	60	Cerca de tomas para agua de bebida no podrá ser superior a 0,05 mg/l.
6	Sólidos Suspendidos Totales	mg/l	Método Gravimétrico	2540 D	40	80	
7	Temperatura	C°	Métodos de Laboratorio y de Campo	2550 B	30	40	Para casos especiales, se considerará el máximo en forma singular.

PARÁMETROS QUÍMICOS

Ítem	Parámetro	Unidades	Método de Análisis	Método Standard*	Máximo Permitido	Máximo Tolerable	ESPECIFICACIONES SINGULARES Y OBSERVACIONES
8	Aluminio	por mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica, llama o con horno de grafito. Fotocolorimetría	(3111)-3500-Al-B (3113)-3500-Al-B 3500-Al-D	0.5	1.0	En caso de cuerpos receptores con población ictícola, el contenido no podrá ser mayor de 0.2 mg/l. En uso para riego se podrá aceptar hasta un valor de 2.0 mg/l
9	Arsénico	Mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica, con generación de Hidruros. Fotocolorimetría	(31 14)-3500-As.B 3500-As	0,05	0,1	Si hay afectación a aguas subterráneas, menos de 0,05 mg.l. cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido es de 0.01 mg/l.

10	Boro	Mg/l	Fotocolorimetría (Curcumina) Fotocolorimetría (Carmín)	4500 – B.B 4500-B.C	0,5	1	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será menor a 0.3 mg/l Este parámetro podrá ser más estricto, según los cultivos irrigados.
11	Cadmio	Mg/l	Espectrometría de Absorción atómica por llama o con horno de grafito	(3111)-3500-Cd-B (3113)-3500-Cd-B	0,01	x	Se estudiará el valor máximo tolerado para cada caso en particular. Se deberá tener en cuenta que en tomas de agua para bebida, el máximo permitido será menor a 0.003 mg/l; y en agua para riego el valor máximo tolerado no deberá ser superior a 0.01.
12	Cianuros	Mg/l	Destilación previa Titulometría (Nitrato de Plata)	4500-CN.C 4500-CN. D	Menos de 0.05	0.05	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será de 0.05 mg/l. Este parámetro podrá ser más estricto, según la afectación a la vida

			Fotocolorimetría	4500 –CN. E			acuática.
13	Cloro Residual	Mg/l	Método Yodométrico Método Amperométrico de Titulación Método colorimétrico de la DFD	4500 –Cl. B 4500- Cl. D 4500- Cl. G	0.5	2	
14	Cloruros	Mg/l	Titulométrico (Mohr)	4500- Cl. B	300	500	Este parámetro podrá ser más estricto si existe posibilidad de efectos corrosivos.
15	Cobalto	Mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica	3500- Co. B	0.05	0.1	

16	Cobre	Mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica, por llama o con horno de grafito	(3111) – 3500-Cu. B (3113)-3500-Cu.B	0.5	1	Si el vuelco es efectuado en cuerpos receptores destinados a irrigar áreas de cultivo, se exigirán valores menores.
17	Cromo Hexavalente	Mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica, por llama o con horno de grafito	(3111)-3500-Cr.B (3113)-3500-Cr. B	0.05	0.1	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será menor a 0.05 mg/l. Este parámetro podrá ser más estricto, según la afectación a la vida acuática
18	Cromo Total	Mg/l	Ídem anterior	Ídem anterior	Menos de 0.5	0.5	Mayor exigencia es posible cerca de tomas de agua para bebida o afectación vida acuática
19	Detergentes	Mg/l	Surfactante	5540 C	1	1.5	El máximo tolerado podrá variarse

			Aniónicos como SAAM				en casos particulares, en función del tipo de cuerpo receptor, pero siempre será menor de 2.0 mg/l. Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo no podrá ser mayor a 1.0 mg/l
20	Fenoles	Mg/l	Método de extracción cloroformo Método fotométrico directo	5530. C 5530. D	0.05	0.1	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será menor a 0.05 mg/l
21	Fosfatos	Mg/l	Método de Cloruro Estagnoso	4500. P.D	0.4	0.7	Para lagos y embalses o lagunas, un valor puntual menor de 0.5 mg/l
22	Flúor	Mg/l	Fotocolorímetro (SFADNS)	4500- F.D	0.6	1.0	

			Método de Electrodo Selectivo de iones	4500- F.C			
23	Hidrocarburos	Mg/l	Espectroscopia infrarroja Método Stichting Concave l/72	Equivalente a Normas DIN	0.5	X	El máximo tolerado se fijará en función del tipo del cuerpo receptor y problemas que pueda causar. Siempre será menor de 5 mg/l. En todos los casos, el máximo permitido de hidrocarburos polinucleares aromáticos será menor de 0.02 mg/l, y se deberá realizar por el Estándar Methods 6440 B y C
24	Hierro Total	Mg/l	Espectrometría de Absorción atómica Método de la fenantrolina	3500- Fe. B 3500- Fe. D	3	6	En caso de tomas de agua para bebida el valor no deberá superar los 0.2 mg/l. Para el caso que en el cuerpo

							receptor exista vida acuática no deberá superar el valor de 0.5 mg/l
25	Manganeso	Mg/l	Espectrometría de Absorción atómica, por llama o con horno de grafito	(3111)-3500-Mn.B (3113)-3500-Mn.B	0.1	0.5	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será menor a 0.1 mg/l
26	Mercurio	Mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica, por vapor frío	(3112)-3500-Hg.B	Menos de 0.001	0.005	Cerca de tomas de agua para bebida, el máximo permitido será de 0.001 mg/l o más estricto según afectación
27	Níquel	Mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica, Método de Heptoxima Método de la Dimetilglioxima	3500-Ni.B 3500-Ni. D	0.2	0.5	

				3500-Ni. E			
28	Nitratos	Mg/l	Fotocolorimetría (Reducción a nitrito) Espectrometría Ultravioleta	4500-No3. B	10	45	Dicho parámetro podrá ser más estricto en caso del vuelco directo o indirecto a lagos, embalses y lagunas. Ver nota al pie dela tabla
29	Nitritos	Mg/l	Fotocolorimetría (Diazotación-Copulación)	4500-NO2.B	0.3	1	En caso de cuerpo receptores con vida acuática, el máximo permitido será de 0.06 mg/l. Ver nota al pie de la tabla.
30	Nitrógeno Amoniacal	Mg/l NH4	Método de la nesslerización. Método de la sal de fenol. Método titulométrico.	4500.NH4.C 4500.NH4.D	3	6	Dicho parámetro podrá ser más estricto cuando se lo relacione con coliformes fecales. En caso de cuerpos receptores con vida acuática, el máximo permitido será

			Método de electrodo selectivo amoníaco	4500NH4.E 4500NH4.F			de 0.02 mg/l (valor recomendado por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata)
31	PH	Nro	Método Electrométrico	4500-H+B	6.5 a 8.5	5.5 a 9.0	En algunas industrias se exigirá control continuo, debiendo indicar tipo de tratamiento
32	Plomo	Mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica Método deplasma de acoplamiento inductivo Método de la ditizona	3500Pb.B 3500Pb.C 3500Pb. D	0.5	1	En tomas de agua para bebida no aceptarán valores mayores a 0.05 mg/l
33	Radio – 226	PicoCurie/l	Método de precipitación	7500.Ra:B 7500Ra.C	5	X	Se evaluará para cada caso en particular el valor tolerado.

			Método de emanación				
34	RAS	Nro	Cálculo mediante ecuación matemática. Na RAS=..... ((Ca**+ Mg**)$^{1/2}$)/2	Para determinar de Ca y Mg, utilizar: 3500CaB,C,D,E 3500, Mg.B,C,D.	4	6	El máximo a tolerar se fijará en función del cuerpo receptor, usos posteriores del agua y problemas que puedan causarse. En ningún caso podrá ser superior a 6.
35	Selenio	Mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica, método continuo de generación de hidruros.	3500 Se. C 3500 Se. D	0.02	0.05	No se aceptará valores mayores de 0.02 mg/l en tomas de agua para bebida y para riego.

			Método colorimétrico. Método fluorómetro	3500 Se. E			
36	Sodio	Mg/l	Fotometría de emisión de llama Espectrometría de Absorción Atómica, por llama o con horno de grafito	3500 Na.D (3111)-3500-Na.B (3113)-3500-Na.B	250	400	Dicho parámetro podrá ser más estricto en aquellos casos de afectación a tomas de agua u otros casos especiales
37	Sulfatos	Mg/l	Gravimétrico (Combustión de Residuos)	4500-S-2 D	250	600	Dicho parámetro podrá ser más estricto en aquellos casos de posibilidad de corrosión.

38	Sulfuros	Mg/l	Método del azul de metileno. Método yodométrico	4500-S-2 E 4500 –SO4 C	Menos de 1.0	1	
39	Uranio	Microg/l	Método Radioquímico Método Fluorométrico	7500 UB 7500 U.C	1.500	x	Se evaluará en cada caso en particular el máximo tolerado.
40	Vanadio	Mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica. Método del Ácido Gálico	3500 V.B 3500 V.D	0.05	0.1	
41	Zinc	Mg/l	Espectrometría de Absorción Atómica	3500-Zn B	2	3	

			Método I de la Ditizona Método II de la Ditizona	3500- Zn D 3500-Zn E			

PARÁMETROS BIOLÓGICOS Y ORGÁNICOS

Ítem	Parámetro	Unidades	Método de Análisis	Método Standard*	Máximo Permitido	Máximo Tolerable	ESPECIFICACIONES SINGULARES Y OBSERVACIONES
42	Colifecales	Nmp/100 ml	Fermentación en tubos múltiples Filtración por membrana Test Coliforme Enzima Sustrato (Colilert)	9221. E 9222. D 9223 (20 Edición)	200	1000	No se autorizará, salvo casos singulares el mezclado de líquidos residuales con cloacales. Dicho parámetro podrá ser más estricto en aquellos casos en que pueda afectar el agua para bebida.
43	Coliformes Totales	NMP/100 ml	Fermentación en tubos múltiples. Filtración por membrana	9221. E 9222. D			Valores serán estudiados en cada caso teniendo en cuenta el uso
44	DBO	Mg/l	Prueba de DBO en	5210. A	30	120	En algunos desagües y drenajes se

			5 días				permitirá expresamente un valor mayor, por tiempo limitado, siempre que no se causen problemas a terceros o cuerpos receptores. Dicho parámetro podrá ser más estricto si pudiera haber influencia en tomas de agua potable.
45	DQO	Mg/l	Método de reflujo abierto. Método reflujo cerrado titulométrico o colorimétrico	5220. B 5220. C 5210. D	75	250	**Ídem anterior**
46	Helmintos	Huevos/litro	Flotación, decantación y observación mocroscópica	Técnica de sedimentación de Ockert-Teichman	Menos de 1	1	Ídem 42

				1986 Técnica del prof. J. Schwartzbrod de la Univ. De Nancy Francia			
47	Organi-clorados	Microg/l	Se podrá proponer otras técnicas previamente aprobadas por el Dpto Gral. Irrigación		Ausencia		El máximo tolerado será tratado para cada caso particular, dependiendo del tipo de cuerpo receptor, caudal volcado y usos del agua
48	Fosforado	Microg/l	Se podrá proponer otras técnicas previamente aprobadas por el Dpto. Gral.		Ausencia		El máximo tolerado será tratado para cada caso particular, dependiendo del tipo de cuerpo receptor, caudal volcado y usos del agua

			Irrigación				
	Carbamatos		Se podrá proponer otras técnicas previamente aprobadas por el Dpto. Gral. Irrigación		Ausencia		El máximo tolerado será tratado para cada caso particular, dependiendo del tipo de cuerpo receptor, caudal volcado y usos del agua

Artículo 2: Los parámetros no incluidos en el listado del artículo 1°, deberán respetar los valores que para agua potable establece la Organización Mundial de la Salud (OSM), o que específicamente indique Superintendencia.

Artículo 3: No se admitirán vuelcos de lodos u otros residuos provenientes de tratamientos de efluentes industriales, salvo excepciones expresamente autorizadas.

Artículo 4: El listado de parámetros del Artículo 1° del presente Anexo, debe considerarse en consonancia con todos los artículos de la Resolución y no aisladamente.

Artículo 5: salvo indicación o autorización en contrario, los análisis seguirán las técnicas que indica el ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS)

Artículo 6: Las muestras deberán ser representativas de las condiciones reales de funcionamiento del Establecimiento y se registrará si es puntual o compensada, día y hora (o período abarcado), caudal efluente y todo otro dato característico.

Artículo 7: Los máximos permitidos no deben ser sobrepasados por nuevas industrias.

Artículo 8: No se permitirá más de tres parámetros dentro de lo tolerable por establecimiento, independientemente de la cantidad de puntos de vuelcos separados con que cuente.

ANEXO I –b) RESOLUCIÓN 778/96 H.T.A.

NORMAS PARA VERTIDO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES PARA REUSO AGRÍCOLA

Ítem	Parámetro	Unid.	Vertidos en Acres Controlados	ESPECIFICACIONES SINGULARES Y OBSERVACIONES
A: PARÁMETROS ORGANOLEPTICOS				
1	Color	U.C.V.	No objetables	Siempre que el mismo, por su intensidad, pueda influir en el proceso de fotosíntesis. En algunos casos se analizarán las estructuras químicas de los compuestos responsables del color
2	Olor		No objetables	Para acres, deberá verificarse la no afectación a operarios y/o residentes.
3	Sabor		No objetables	Para acres, deberá verificarse la no afectación a operarios y/o residentes.
4	Turbiedad	UTN		Debe verificarse la causal de la turbiedad en algunos casos. Relacionar con los sólidos sedimentables.

B: PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS				
5	Aluminio	Mg/l	5	El valor se ajustará a los resultados de los análisis de pH del suelo.
6	Amonio	Mg/l N		Los valores serán estrictos si hay asociación con coliformes fecales.
7	Cloro Libre Residual	Mg/l		Deberá fijarse para casos de vuelcos de líquidos que hayan tenido carga microbiana. Debe controlarse y establecerse ante la presencia de sustancias nitrogenadas máximo de cloro residual combinado.
8	Cloruros	Mg/l	600	Este parámetro podrá ser regulado, si no existe posibilidad de efectos corrosivos. Ver tipos de cultivos en cada ACRE.
9	Conductividad	US/cm	2250	Verificar afectación a bebida de ganado o avícola. Si se detectan efectos negativos en cultivos, limitar caudales vertidos, para minimizar aumento salinidad habitual del recurso. En Acres, estipular cultivos. Ver lavado de terrenos. Impedir perjuicios a mediano plazo.
10	Detergentes	Mg/l	2	No provocar problemas en los cauces, suelos y cultivos. Se analizará el valor fijado para casos particulares
11	Dureza Total	Mg/l CO3Ca		En industrias con importantes aportes de calcio y/o magnesio, o para vuelcos de concentraciones de lavado de aguas de calderas, resolver en cada caso

12	Hierro Total	Mg/l	5	Puede contribuir a acidificación suelo y disminución de P y Mo, esenciales para plantas, para cuyo caso se estudiará el valor a fijar
13	Sodio	Mg/l	400	Verificar afectación a cultivos y caudales máximos a admitir. Se analizarán los contenidos en suelo de sodio intercambiable
14	Sulfatos	Mg/l	600	Problemas con bacterias sulforeductoras. Verificar riesgos de corrosión e interferencias con tratamientos de líquidos residuales
15	Zinc	Mg/l	2	Tóxico para muchos cultivos a concentraciones muy variables. Disminuye toxicidad si pH>6 y suelos textura fin o de carácter orgánico
16	pH	Unidades	6.5 a 8.5 de pH	Verificar incidencia en cultivos o bebidas de ganado o avícola. En 8.5 algunas industrias se exigirán control continuo.

C. SUSTANCIAS TOXICAS INORGÁNICAS

17	Arsénico	Mg/l	0.1	En ACRES, verificar toxicidad en tipo de cultivos. Fitotoxicidad comprobada 2 mg/l, para ciertas hierbas, 0.5 mg/l para el arroz
18	Bario	Mg/l	1	Se analizará el valor fijado para casos particulares
19	Boro	Mg/l	0.5	Verificar afectación a suelos y cultivos
20	Cadmio	Mg/l	0.01	Es tóxico para varios cultivos, siendo los límites recomendados bajos debido a su capacidad para acumularse en suelos y en los cultivos hasta concentraciones que pueden ser perjudiciales para las personas
21	Cianuros	Mg/l	0.1	Se analizará el valor fijado para casos particulares
22	Cobre	Mg/l	0.5	Verificar afectación a cultivos y limitar caudales, aconsejándose el valor fijado para casos particulares
23	Cromo Hexavalente	Mg/l	0.1	Escasos conocimientos sobre fitotoxicidad, analizándose el

				valor fijado para casos particulares
24	Cromo Total	Mg/l	0.5	Ídem anterior
25	Fluoruros	Mg/l	1	Para suelos alcalinos o neutros, puede aceptarse > cantidad de F. En períodos máximos de riesgos < de 20 años
26	Manganeso	Mg/l	0.2	Tóxico para diversas plantas a concentraciones entre unas décimas y unos miligramos por litro, aunque principalmente en suelos ácidos
27	Mercurio	Mg/l	0.003	Para Acres justificar valores > 0.001 mg/l
28	Nitratos	Mg/l NO3	*	Límite a determinar según afectación al acuífero, estableciéndose valores para cada caso en particular
29	Nitratos	Mg/lNO2	*	Ídem anterior
30	Plata	Mg/l	0.05	Límite a determinar según afectación al acuífero, estableciéndose valores para cada caso en particular
31	Plomo	Mg/l	0.5	Verificar afectación a vida acuática y uso p/bebida ganado o

				avícola En ese caso, en el recurso Pb< 0.1 mg/l. Puede inhibir crecimiento células vegetales a concentraciones elevadas. Se establecerán valores para casos particulares
32	Selenio	Mg/l	0.02	Límite a determinar según afectación al acuífero, estableciéndose valores para cada caso en particular

D. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

33	Coliformes Totales	NMP por 100 ml (tubos múltiples)	*	Valores deben ser estudiados en cada caso, según afectaciones en las futuras áreas a irrigar
34	Coliformes Fecales	NMP por 100 ml (tubos múltiples)	1000	Se puede exigir menor presencia de coliformes, teniendo en cuenta el tipo de cultivo a irrigar
35	Helmintos	Huevos /litro	1	No se permiten en general mezclas de líquidos cloacales con industriales

E. OTROS PARÁMETROS CONTROLABLES EN VUELCOS A RECURSOS SUPERFICIALES

36	DBO	Mg/l O2	*	En todos los casos, determ. individual. puede ser más o menos estricto en función de su potencial afectación al recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo
37	DQO	Mg/l O2	*	En todos los casos, determ. individual. puede ser más o menos estricto en función de su potencial afectación al recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo
38	Temperatura	°C	30	Se restringirán caudales a volcar. Casos singulares deben ser analizados
39	Sólidos Sedimentables en dos horas	Ml/l	10	Valores deben ser estudiados en cada caso, según afectaciones en las futuras áreas a irrigar
40	Sólidos Solubles en éter etílico	Mg/l	50	Valores deben ser estudiados en cada caso, según afectaciones en las futuras áreas a irrigar. Grasas deben ser de origen vegetal o animal

41	RAS	Nro	6	El máximo se fijará en función de los análisis de agua y suelo que se hagan en la superficie a irrigar
42	Fosfatos	Mg/l	*	Límite a determinar según afectación al acuífero, estableciéndose valores para cada caso en particular
43	Sulfuros	Mg/l	1	Límite a determinar según afectación al acuífero, estableciéndose valores para cada caso en particular
44	Uranio	Ug/l	1500	Se evaluará en función de cada recurso afectado, sus usos y problemas conexos
45	Radio-226	Pico Curie/l	5	Se evaluará en función de cada recurso afectado, sus usos y problemas conexos

ANEXO I C) RESOLUCIÓN N° 778/96 H.T.A.

NORMAS DE CALIDAD DE EFLUENTES CLOACALES CON TRATAMIENTO PRIMARIO PARA REUSO AGRÍCOLA

A. PARÁMETROS FÍSICO-QUIMICOS			
Parámetros	Unidad	Límite Máximo	Límite Recomendado
Conductividad	US/cm	2250	1800
PH	Unidades	5.5-9	6.5-8.0
Temperatura	°C	45	30
RAS	N°	6	4
Solubles en éter	Mg/l	100	40
Sólidos sedimentables en 10’	Ml/l	0.5	<0.5

B. SUSTANCIAS TÓXICAS INORGÁNICAS

Parámetros	**Unidad**	**Límite Máximo**	**Límite Recomendado**
ANIONES			
Sulfatos	Mg/l	600	400
Cloruros	Mg/l	500	400
Fluoruros	Mg/l	1	0.6
Sulfuros	Mg/l	1	0.5
Cianuros	Mg/l	0.1	0.05
CATIONES			
Sodio	Mg/l	500	250
Manganeso	Mg/l	0.5	0.2
Bario	Mg/l	2	1

Boro	Mg/l	1	0.5
Hierro total	Mg/l	5	3
Aluminio	Mg/l	5	2
Arsénico	Mg/l	0.1	0.05
Cadmio	Mg/l	0.01	<0.01
Cobre	Mg/l	1	0.5
Cromo (+6)	Mg/l	0.1	0.05
Cromo total	Mg/l	0.5	<0.5
Zinc	Mg/l	3	2
Níquel	Mg/l	0.5	0.2
Mercurio	Mg/l	0.005	0.001
Plomo	Mg/l	0.5	<0.5

Selenio	Mg/l	0.05	0.02
Cobalto	Mg/l	0.1	0.05
Detergentes	Mg/l	3	1
Hidrocarburos totales	Mg/l	50	10
Cloro libre residual	Mg/l	0.5	<0.5
fenoles	Mg/l	0.5	<0.5

C. NUTRIENTES

Potasio	***Mg/l***	*	*
Nitratos	Mg/l	*	*
Nitritos	Mg/l	*	*
Nitrógeno amoniacal	Mg/l	*	*
Nitrógeno total	Mg/l	*	*
Fosfatos	Mg/l	*	*
Fósforo total	Mg/l	*	*

D. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y ORGÁNICOS

Bacterias Aeróbicas	Ufc/ml	*	*
Escherichia coli	N° 100 ml	10^5	1000
Pseudomonas Aeruginosas	N°100 ml	*	*
Helmintos	Huevos/1000 ml	1	<1
DQO	Mg/l	240	70
DBO	Mg/l	170	100

E. ELEMENTOS RADIOACTIVOS

Uranio	Ug/l	1500	1500
Radio 226	Pico Curie/l	5	5

- Límite a determinar según afectación al acuífero, estableciéndose valores para cada caso en particular.
- NOTA: Los valores que figuran en la presente tabla, será revisados anualmente.

ANEXO I D) Resolución 778/96 H.T.A

NORMAS DE CALIDAD DE EFLUENTES CLOACALES CON TRATAMIENTO SECUNDARIO PARA REUSO AGRÍCOLA

A. PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS			
Parámetros	**Unidad**	**Límite Máximo**	**Límite Recomendado**
Conductividad	US/cm	2250	1800
Ph	Unidades	5.5-9	6.5-8.0
Temperatura	°C	45	30
RAS	No	6	4
Solubles en éter	Mg/l	80	30
Sólidos Sedimentables en 10’	Ml/l	0.5	<0.5

B. SUSTANCIAS TÓXICAS INORGÁNICAS

Parámetros	Unidad	Límite Máximo	Límite Recomendado
ANIONES			
Sulfatos	Mg/l	600	400
Cloruros	Mg/l	500	400
Fluoruros	Mg/l	1	0.6
Sulfuros	Mg/l	1	0.5
Cianuros	Mg/l	0.1	0.05
CATIONES			
Sodio	Mg/l	500	250
Manganeso	Mg/l	0.5	0.2
Barrio	Mg/l	2	1

Boro	Mg/l	1	0.5
Hierro total	Mg/l	5	3
Aluminio	Mg/l	5	2
Arsénico	Mg/l	0.1	0.05
Cadmio	Mg/l	0.01	<0.01
Cobre	Mg/l	1	0.5
Cromo (+6)	Mg/l	0.1	0.05
Cromo total	Mg/l	0.5	<0.5
Zinc	Mg/l	3	2

Níquel	Mg/l	0.5	0.2
Mercurio	Mg/l	0.005	0.001
Plomo	Mg/l	0.5	<0.5
Selenio	Mg/l	0.05	0.02
Cobalto	Mg/l	0.1	0.05
Detergentes	Mg/l	3	1
Hidrocarburos totales	Mg/l	10	5
Cloro libre residual	Mg/l	0.5	<0.5
Fenoles	Mg/l	0.05	<0.5

C- NUTRIENTES			
Potasio	Mg/l	*	*
Nitratos	Mg/l	*	*
Nitritos	Mg/l	*	*
Nitrógeno amoniacal	Mg/l	*	*
Nitrógeno total	Mg/l	*	*
Fosfatos	Mg/l	*	*
Fósforo total	Mg/l	*	*

D. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y ORGÁNICOS			
Bacterias aeróbicas	Ufc/ml	*	*
Escherichia coli	N° 100 ml	1000	250
Pseudomonoas Aeruginosas	N°100 ml	*	*
Helmintos			
	Huevos/1000 ml	1	<1
DQO	Mg/l		
DBO	Mg/l	70	50
		30	<30

E. ELEMENTOS RADIOACTIVOS			
Uranio	Ug/l	1500	1500
Radio 226	Pico cirie/l	5	5

- ***Límite a determinar según afectación al acuífero, estableciéndose valores para cada caso en particular.
- NOTA: Los valores que figuran en la presente tabla, serán revisados anualmente.

ANEXO I - E) RESOL N° 778/96 DEL H.T.A

CATEGORÍAS DE REUSO

(Informe Shuval y colaboradores, ENGELBERG – Suiza – 1.985)

Categoría A: (Abarca fundamentalmente cultivos industriales)

Cultivos no aptos para el consumo humano: Algodón, fibras forestales y viveros.

Cultivos normalmente procesados mediante calor, secados o envasados con procesos de esterilización antes del consumo humano: Frutas y verduras para conserva, semillas oleaginosas, oréganos y otras yerbas aromáticas desecadas, vid para vino, cereales. Verduras y/o frutas, exclusivamente para enlatados u otros tratamientos que destruyan los agentes patógenos.

Cultivos forrajeros secados al sol y recolectados antes de ser consumidos por animales. Riego de campos en zonas cercadas y sin acceso de público (viveros, bosques, zonas verdes), etc.

Categoría B: (Abarca fundamentalmente cultivos que producen frutas y verduras que se pelan o cocinan antes de ingerirse, o que están sujetos a un período de establecimiento antes de consumo).

Cultivos de pastos y forrajes verdes, no permitiendo que las vacas lecheras pasten en estas tierras, mientras se encuentren humedecidas con el líquido cloacal.

Cultivos para consumo humano que no entren en contacto directo con las aguas residuales, no se arranquen del suelo, ni se rieguen por aspersión (árboles frutales, viñas, etc.). Se cuidará que las frutas caídas al suelo y las que toquen la tierra no sean utilizadas en el consumo humano.

Cultivos para consumo humano que normalmente se ingieren sólo después de ser cocinados. Estos pueden ser regados con líquido cloacal siempre que el mismo deje de ser aplicado al terreno o vegetales, por lo menos un (1) mes

antes de la cosecha y/o consumo del producto (maíz, coliflor, repollo, pimiento, berenjena, etc.)

Cultivos para consumo humano cuya cáscara no se come (melones, sandías, pepinos, maní, etc.), tratando que el líquido cloacal no se ponga en contacto con el producto.

Categoría C: (Abarca fundamentalmente los cultivos que se consumen frescos):

Cualquier cultivo que se come crudo y se cultiva en estrecho contacto con efluentes residuales: Achicoria, apio, berro, escarola, cebolla de verdeo, frutilla, hinojo, lechuga, perejil, pimiento, rabanito, repollo, radicheta, remolacha, zanahoria.

Césped, parques y jardines en zonas con acceso de público.

De las Prácticas Agrícolas:

Aun cuando haya quedado clarificado que el riego que se permitirá tendrá un carácter de Restringido, con autorización para implantar los cultivos que se listan en las categorías A y B, solamente, este riego restringido, requiere de medidas complementarias tendientes a proteger a:

- Salud de los trabajadores
- Salud de los habitantes de la zona – Consumidores-

Por ello, se establecen las siguientes recomendaciones:

Categoría A:

Los trabajadores rurales que tienen a cargo las labranzas, el riego y la cosecha deben utilizar guantes y calzados, preferentemente botas de goma. Debe implementarse un sistema de alerta sobre el peligro de las aguas contaminadas, acompañado de una campaña de educación sanitaria.

Categoría B:

Además de las recomendaciones indicadas en la Categoría A 1 y 2 deben agregarse las siguientes:

No se debe regar por aspersión

La cosecha debe realizarse dos (2) semanas después del último riego, cuando son en verano. En invierno debe esperarse hasta tres (3) semanas antes de cosechar.

No recoger frutas caídas en el suelo, eliminar frutas y verduras dañadas

De la calidad de los Efluentes:

De acuerdo a la guía Engelber, que establece que el mejor método para proteger la salud pública, cuando se reúsan efluentes domésticos con fines de riego es el tratamiento del efluente crudo hasta alcanzar los niveles de calidad que protege esta guía. Cuando se logran estos estándares de calidad microbiológica en el agua de riego, la transmisión de enfermedades se reduce al mínimo.

Los criterios de calidad de Engelber son los siguientes:

Menos de un (1) huevo de nematodos intestinales por litro (lo que implica la casi total remoción de huevos intestinales)

Menos de ciento tres (103) coliformes fecales por 100 ml (lo que implica una alta reducción de bacterias patógenas)

DECRETO N° 1.839/74

CAPÍTULO I
DEL USO COMÚN

Artículo 1: Se considera "uso común" del agua subterránea al destinado a bebida, higiene humana y doméstica, abrevadero de animales domésticos en una entidad que no signifique o pueda considerarse explotación comercial o pecuaria, mantenimiento de jardines menores aledaños de viviendas (siempre que por su extensión o características no deban ser incluidos en el uso especial contemplado por el ap. c.) del Artículo. 49 de la Ley N°4.035) y todo otro semejante, que siendo de naturaleza común determine la autoridad de aplicación.

Artículo 2: La construcción de pozos con destino exclusivo a "uso común" no requiere autorización administrativa previa, sin perjuicio de las facultades de contralor y poder de policía que competen a la administración. No obstante el usuario deberá comunicar la construcción del pozo a la autoridad de aplicación dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días, desde que comience la utilización, indicando características del pozo, uso y calidad del agua y demás datos que estableciese la reglamentación.

Artículo3: Detectada la existencia de un pozo denunciado como de "uso común", cuyas aguas no tengan esa afectación exclusiva, la autoridad de aplicación sujetará el caso a las normas vigentes para los "usos especiales" y podrá ordenar la inmediata cesación del uso del agua, en la medida que no impida el "uso común", si éste fuese para bebida o higiene humanas.

Artículo4: Los actuales usuarios de pozos de aguas para "uso común" exclusivo deberán denunciar su existencia dentro del plazo previsto en el Art. 41 de la Ley N°4.035. La denuncia indicará -por lo menos- los datos previstos en el Art. 2o de esta reglamentación.

Artículo5: El Departamento General de Irrigación sancionará dentro de los tres (3) meses, contados desde la publicación de este decreto, un reglamento

concerniente al “uso común”, encuadrado en lo previsto en el Art. 29 de la Ley N°4.035 y en el presente decreto. Mientras no se dicte ese reglamento, la denuncia de los pozos de “uso común” contendrá los datos mínimos fijados en el Art. 2o de esta reglamentación.

CAPÍTULO II
PRIORIDADES

Artículo 6: Para aplicar la preferencia establecida en el ap. c) del Art. 7o de la Ley N°4.035 en los usos agrícolas o ganaderos, será condición indispensable de su tramitación -sin perjuicio de otros recaudos reglamentarios- el informe de la subdelegación de aguas respectiva, referido a: pronóstico de caudales, dotaciones, naturaleza del suelo, tipo de cultivo, características zonales, necesidad o conveniencia de la complementación del agua superficial y todo otro dato que sea conducente.

Artículo7: Para aplicar la preferencia establecida en el ap., c) del Art. 7o de la Ley N°4.035, en los demás “usos especiales”, será indispensable la intervención e informe favorable del Ministerio de Economía avalado por su titular, y además deberá tener intervención la subdelegación de aguas respectivas, aportando la información aludida en el artículo anterior, que fuere pertinente.

Artículo8: Para decidir la prioridad en los casos de concurrencia entre los órdenes de preferencia con “relación al uso” y con “relaciónal sujeto solicitante” se seguirá el criterio establecido por el Art. 8o de la Ley N°4.035.

Artículo9: Para establecer el “beneficio económico-social” aludido en el Art. 8o de la Ley N°4.035 en los casos singulares, serán requisitos: a) Intervención necesaria e informe favorable del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, avalado por su titular; b) Intervención necesaria e informe del Ministerio de Economía, avalado por su titular, en los casos previstos en los aps, c), d) y e) del Art. 49 de la Ley N°4.035.

Artículo 10: El Poder Ejecutivo podrá establecer mediante decretos acuerdo aquellas zonas en las cuales genéricamente las prioridades fijadas en el Art. 4o

de la Ley N°4.035 deban ser alteradas por razones de política general, socioeconómicas o de fomento. En tales casos no será menester el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior, para resolver sobre los casos singulares.

Artículo11: El Poder Ejecutivo podrá establecer mediante decretos prioridades de orden general en función a la promoción o a la disuasión de determinados tipos de cultivos, ya sea sólo en base a ese factor o en conjunto con factores zonales.

CAPÍTULO III
DE LA AUTORIZACIÓN PARA PERFORAR Y DE LA CONCESIÓN

Artículo12: Las solicitudes de concesión se ajustarán a los requisitos del Art. 9 de la Ley N°. 4.035 y a los establecidos por el actual reglamento general de perforaciones (Res. 451/53 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación), en todo aquello que fuere compatible con la Ley N°4.035 y hasta tanto el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación sancione el reglamento respectivo.

Artículo13: En las solicitudes actualmente en trámite las disposiciones de la Ley N°4.035 se aplicarán a las etapas pendientes de cumplimiento y se respetarán los procedimientos concretados, si se hubiesen cumplido conforme al Reglamento General de Perforaciones (Resol. 451/53 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación). En los supuestos de pozos con obra terminada, que contarán con la previa aprobación del plan de trabajos y con la autorización para perforar expedidos conforme al reglamento antes citado, la Superintendencia General de Irrigación queda facultada para dictar la autorización de uso, dentro del régimen del aludido reglamento y el caso quedará equiparado a los previstos en el Art. 47 de este decreto, con la obligación consiguiente por el Art, 49. La regla anterior se aplicará siempre que a la publicación de este decreto el interesado hubiere solicitado la autorización de uso y la demora en obtenerla no le fuere imputable.

Artículo14: Para cumplir con el requisito establecido en el inc. d) del Art. 9o de la Ley N°4.035 será suficiente la copia del plano aprobado por la Dirección de

Geodesia y Catastro o del que se encuentre archivado en el Registro Gráfico del Departamento General de Irrigación, siempre que estuvieren encuadrados en la Res. 130/60 de la Superintendencia General de Irrigación (y/o normas complementarias o que la sustituyan).

Artículo15: Mientras el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación no sancione un nuevo reglamento será de aplicación el reglamento general de perforaciones, dictado por Res. 451/53 de ese organismo (y resoluciones complementarias y modificatorias), en todo cuanto sus normas se concilien con las previsiones de las Leyes N°4.035 y 4.036 y del presente decreto.

Artículo16.: En los casos de oposición a que alude el Art. 11 de la Ley N°. 4.035 la autoridad de aplicación podrá exigir oficiosamente la producción de pruebas con cargo a los interesados o a cualquiera de ellos, conforme al interés que prevalezca.

Artículo17: La autoridad de aplicación propenderá a la paulatina y eficiente medición de los caudales, tanto en los casos previstos en el inc. c) del Art. 12 de la Ley N°. 4.035, como para las perforaciones actualmente existentes.

Artículo18: La autoridad de aplicación elevará a consideración del Poder Ejecutivo, dentro de los seis (6) meses contados desde la publicación de este decreto, un planeamiento general con el fin de concretar el objetivo previsto en el artículo precedente, señalando un programa de operación y los recursos necesarios. En el ínterin se utilizará los sistemas de medición que resulten más económicos, sobre la base del consumo de energía eléctrica o de medición acumulativa de las revoluciones de los motores de combustión interna (sin perjuicio de poder aplicarse otros que propongan los usuarios y que resulten aceptables por la administración). Supletoriamente se procederá por medición promedio de caudales en relación a las características de la perforación, aprovechamiento y explotación de que se trate. En ningún caso se permitirá la existencia de surgentes sin sistemas de cierre.

Artículo19: Cumplido el informe técnico exigido por el Art. 15 de la Ley N°. 4.035, de las actuaciones se dará vista al Poder Ejecutivo por el plazo de diez (10) días hábiles, notificándose al señor ministro de Obras y Servicios Públicos. El Poder Ejecutivo, dentro de ese lapso, podrá formular observaciones de legitimidad.

Artículo 20: Transcurrido el plazo de vista anteriormente previsto, sin mediar observaciones, el expediente quedará automáticamente en estado de resolver, debiendo expedirse el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación dentro de los treinta (30) días hábiles.

Artículo 21: Si el Poder Ejecutivo hubiera efectuado observaciones, el plazo previsto en el artículo 16 de la ley N° 4.035 se considerará ampliado por quince (15) días hábiles, con el objeto de realizar el examen de ellas. En los casos que el Poder Ejecutivo hubiese ejercido la facultad prevista en el art. 19 de esta reglamentación, la resolución que dice el Honorable Tribunal Administrativo –si desestimare las observaciones- deberá serle notificada, en la misma forma establecida en esa norma, como condición para su inscripción y estabilidad, la que se producirá transcurrido el término que hubiere para promover la acción de inconstitucionalidad.

CAPÍTULO IV
DE LAS MODALIDAD DE LAS CONCESIONES

Artículo 22: Todo convenio privado que implique la venta de aguas subterráneas es ilícito y nulo. La parte que figure como “vendedora” quedará encuadrado en el inc. b) del artículo 35 de la ley N°4.035 y los otros intervinientes en igual situación, salvo que estos últimos acrediten circunstancias o motivos que los compelieron a someterse al convenio y que resulten atendibles a juicio de la autoridad de aplicación.

Artículo 23: Cuando se pretenda utilizar un volumen de agua mayor que el concedido, deberán seguirse los trámites normales de toda nueva solicitud de concesión. Cuando a pesar de no ser necesario aumentar el volumen se pretenda extender la utilización del agua a propiedades, establecimientos o actividades

no previstas en la solicitad inicial o en la concesión y que no correspondan al mismo titular de ésta, se deberá solicitar nueva concesión y tendrá que justificarse que la extensión es factible por el empleo de mejores medios técnicos de aprovechamiento.

Artículo 24: Cuando la concesión sea exclusiva para un solo "uso especial" y el concesionario –sin aumentar volumen- pretende realizar una utilización parcial y accesoria para un uso distinto al concedido y de inferior rango de prioridad, no se requerirá nueva concesión, pero el concesionario tendrá obligación de solicitar previamente una autorización, que será otorgada sumariamente por la autoridad concedente, la que dispondrá su anotación en los registros y títulos respectivos. Si el uso accesorio fuera de rango superior al concedido, se requerirá nueva concesión y ésta también será necesaria cuando el nuevo uso no pueda ser considerado como accesorio.

Artículo25: Las concesiones para uso agrícola serán otorgadas por volumen máximo y se imputarán a la propiedad o propiedades para las cuales se haya solicitado la concesión o concesiones en la superficie prevista y demarcada en plano. No obstante el concesionario o concesionarios podrán variar por sí mismo, la ubicación de la zona regada o extender a mayor superficie la utilización, siempre que el área ampliada se encuentre dentro de los títulos de dominio previstos en la solicitud inicial, no se supere el volumen máximo concedido y el inmueble no se encuentre beneficiado con derecho de agua superficial (de cualquier tipo). En esos casos sólo existirá la obligación de comunicar la reubicación o mayor extensión, dentro de los treinta (30) días acompañando la demarcación en copia del plano respectivo.

Artículo26: Si la concesión fuera para complementar riego superficial, el agua subterránea sólo podrá aplicarse al área a la cual es inherente la concesión de riego superficial (cualquiera sea el tipo de este último derecho). Si la concesión fuese solicitada para complementa riego superficial y también para extender cultivos, los sistemas de conducción de ambas utilizaciones deberán ser independientes, autorizado previamente por la subdelegación de aguas respectiva y demarcados en los planos. Sólo mediante resolución de la

Superintendencia General de Irrigación, en casos debidamente justificados, podrá excepcionarse la regla anterior. En los casos de concesiones para completar riego superficial y también extender cultivos no será de aplicación la regla de reubicación o extensión directa prevista en el Art. 25.

Artículo27: En las transferencias de dominio de inmuebles o establecimientos beneficiados con concesiones de aguas subterráneas se en tienden comprendidas dichas concesiones y sus accesorios, sin limitación alguna y el nuevo propietario asumirá automáticamente las responsabilidades de concesionario. En las transferencias de dominio de inmuebles o establecimientos beneficiados con concesiones de aguas subterráneas, se deberá previamente efectuar la transferencia de las concesiones de aguas subterráneas, como condición para su inscripción en los registros públicos. Cuando se pretenda excluir de la transferencia de dominio a las concesiones de aguas, previamente deberá procederse a solicitar la extinción de ellas.

CAPÍTULO V
DEL TIEMPO EN LA CONCESIÓN

Artículo28: Las concesiones para los usos indicados en los incs, a y b) del Art. 49 de la Ley No. 4.035 serán de carácter permanente. Las concesiones para los usos señalados en los incs. c.), d) y f) de la misma norma, serán de carácter indefinido y durarán mientras se ejercite la industria o actividad para las que fueron otorgadas.

Artículo 29: Sin perjuicio de las reglas indicadas en el artículo anterior, las concesiones podrán ser por tiempo determinado o por temporadas determinadas en función de las características propias del uso que se haga de la concesión o en virtud de otros factores, que se establezcan reglamentariamente.

Artículo30: Las normas anteriores deben entenderse establecidas sin perjuicio de las causales legales de extinción.

CAPÍTULO VI

SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS Y OCUPACIONES TEMPORARIAS

Artículo31: Será condición de toda concesión de aguas subterráneas la sujeción de su titular a soportar las servidumbres administrativas que impongan las autoridades competentes tanto para los sistemas de aguas subterráneas como superficiales, sin compensación o indemnización, salvo que acredite que la afectación que sufre implica un desmedro de sus derechos patrimoniales que supere una proporción del tres por ciento (3%) en relación al valor total implicado.

Artículo32: Mientras no se sancione una reglamentación especial, las servidumbres administrativas que se impongan para el uso de aguas subterráneas se regirán en lo pertinente por las normas de la ley de aguas y sus complementarias, con la adecuación que resulte necesaria para compatibilizarlas con las Leyes N°4.035 y 4.036 y el presente decreto.

Artículo33: La resolución que establezca la imposición de servidumbres administrativas para el uso de aguas subterráneas tendrá ejecutividad inmediata, siempre que la administración fundadamente considerara que no se excede la pauta de afectación gratuita establecida en el Art. 31.

Artículo 34: En materia de servidumbres para el uso de aguas subterráneas regirá el principio de presunción de la existencia de la servidumbre y la regla de la responsabilidad objetiva.

Artículo35: Toda solicitud de concesión importa el sometimiento implícito a la regla del Art. 31 y demás disposiciones de este capítulo. En los casos previstos en el inc. c) del Art. 9 de la Ley N° 4.035, la conformidad del titular de dominio implica el mismo sometimiento. En los supuestos de presentarse resolución que acredite ser adjudicatario del inmueble sometido a un plan de colonización, será necesario presentar la aceptación expresa del titular de dominio a las condiciones fijadas en este capítulo, a menos que de la resolución aludida o de normas legales o reglamentarias del plan de colonización de que se trate surjan

facultades suficientes para que el adjudicatario se someta por sí solo a la condición fijada en el Art. 31 y sus consecuencias.

Artículo 36: La extinción de la concesión de aguas subterráneas, porcualquier causa que fuere, no incidirá en la situación de las servidumbres que se encuentren establecidas y que afecten al titular de la concesión extinguida.

Artículo37: Las ocupaciones temporarias que afecten a terceros no serán indemnizables, cuando no excedan los treinta (30) días y no se ocasione-durante el período de ocupación o por motivo de ésta- un daño real y concreto.

CAPÍTULO VII
REGISTRO Y CATASTRO

Artículo38: El Registro de Perforaciones previsto en el Art. 25 de la Ley N°4.035 se perfeccionará a partir de los actuales registros de perforaciones existentes en el Departamento General de Irrigación, y a contar desde los tres meses de la publicación de este decreto deberá integrarse progresivamente con un catastro de las perforaciones existentes.

Artículo 39: Hasta tanto el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación no dicte un reglamento para la organización y funcionamiento del Registro de Directores y Constructores, se aplicarán al respecto las normas actualmente vigentes en esa repartición.

CAPÍTULO VIII
ADECUACIÓN DE LAS PERFORACIONES EXISTENTES

Artículo40: Los interesados que no deseen aceptar la concesión prevista en el Art. 37 de la Ley N°. 4.035, tendrán las siguientes opciones:

a) Exteriorizar fehacientemente ante la autoridad de aplicación su voluntad de no aceptar la concesión y renunciar expresamente a la reclamación indemnizatoria;

b) Exteriorizar fehacientemente ante la autoridad de aplicación su voluntad de no aceptar la concesión y formular la reclamación indemnizatoria ante la administración;

c) Interponer directamente demanda judicial por reclamación indemnizatoria.

Artículo41: En los casos del inc. c) del artículo precedente, la falta de interposición de la demanda judicial dentro del plazo previsto en el Art. 37 de la Ley N°4.035 implica la aceptación de la concesión conforme al Art. 47 y sujeta al interesado a las consecuencias y responsabilidades de la calidad de concesionario.

Artículo42: En los casos previstos en el inc. a) del Art. 40, la presentación deberá efectuarse ante la unidad administrativa de Aguas Subterráneas del Departamento General de Irrigación, dentro del plazo previsto en el Art. 37 de la Ley N°4.035, bastando al respecto la expresión de no aceptar la concesión y de renunciar a cualquier reclamación indemnizatoria e indicar los datos que individualicen a la perforación. En esos casos y una vez que se haga lugar a la presentación, el interesado podrá disponer libremente del equipo de extracción. También podrá disponer de otros bienes y elementos de la perforación, en tanto con ello no se produzcan modificaciones en la estructura del pozo y medie autorización expresa de la autoridad de aplicación, la que tendrá en cuenta los factores de seguridad y protección del acuífero.

Artículo43: En los casos del inc., b) del Art. 40, la presentación deberá efectuarse ante el Departamento General de Irrigación, dentro del plazo previsto en el Art. 37 de la Ley N°4.035, debiendo cumplir los siguientes recaudos:

a) Acompañar testimonio del título de dominio o -en caso de no ser propietario el solicitante- conformidad expresa del titular de dominio o del organismo adjudicante en los planes de colonización donde se manifieste que el solicitante puede reclamar para sí la indemnización;

b) Certificado del Registro Público de la Propiedad de que no existen gravámenes o estén trabados embargos u otras medidas cautelares. La

conformidad del acreedor hipotecario o embargante o de quien solicitara las medidas cautelares, viabilizará el trámite de la renuncia;

c) Copia del plano de mensura en el caso de tratarse de los usos especiales que así lo hicieran menester o descripción del establecimiento, industria o actividad beneficiada;

d) Descripción e individualización del pozo;

e) Descripción de las mejoras existentes;

f) Señalar el monto de la indemnización que se pretende, indicando someramente las bases de su estimación;

g) Indicar -con carácter de declaración jurada- si se adeudan tributaciones referidas al inmueble, establecimiento o actividad de que se trate, señalando datos y montos.

La falta de presentación en el plazo previsto en el Art. 37 de la Ley N° 4.035 o de cumplimentar alguno de los recaudos establecidos anteriormente, implicará las mismas consecuencias fijadas en el Art. 41, salvo que para los requisitos aludidos en los aps. a), b), c), e) o g) se solicitara un término adicional para cumplirlos, en cuyo supuesto la autoridad de aplicación podrá acordar hasta quince (15) días hábiles con ese objeto.

Artículo44: Con la presentación y elementos señalados en el artículo anterior, el Departamento General de Irrigación formará expediente administrativo y agregará los informes técnicos que fuesen aconsejables dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles. Las actuaciones así reunidas serán elevadas al Honorable Tribunal Administrativo de ese Departamento, quien dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores deberá estimar la indemnización que considere corresponder y las elevará al Poder Ejecutivo, por vía del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El Poder Ejecutivo, dentro de los treinta (30) días hábiles de recibidas las actuaciones, dictará decreto aprobando la estimación efectuada por el Honorable Tribunal Administrativo o modificándola. Si no se pronunciase dentro del plazo previsto, la estimación del Honorable Tribunal Administrativo se considerará aprobada. Aprobada expresa o tácitamente o fijada la estimación por el Poder Ejecutivo se notificará de ella al interesado,

para que en el término improrrogable de veinte (20) días hábiles acepte el valor ofrecido o estime el que considere justo. Estando de acuerdo el interesado, el Poder Ejecutivo dispondrá el pago respectivo y la realización de los actos correspondientes: pudiendo deducir los importes por tributaciones adeudadas (a las que alude el ap. g) del Art.43) del monto indemnizatorio, si no se hubiesen abonado en el ínterin. En caso de no estar de acuerdo el interesado y efectuar propuesta, podrá estudiarla y decidir su aceptación o rechazo dentro de los veinte (20) días hábiles subsiguientes de recibida, considerándose rechazada la propuesta del interesado si el Poder Ejecutivo no se pronunciara favorablemente en dicho término. En los supuestos que el interesado no se presente dentro del término de vista de la estimación o no se llegare a acuerdo sobre el valor, quedará expedita la vía de la reclamación judicial.

Artículo 45: En los supuestos del Art. 43, cuando se trate de aguas para el abastecimiento de población y sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del Art. 32 de la Ley N°4.035, la presentación deberá efectuarse ante la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, quien formará el expediente administrativo y reunirá los informes técnicos que fueren aconsejables, dentro de los sesenta (60) días hábiles, elevando las actuaciones al Poder Ejecutivo con opinión sobre el monto de la reclamación. El Poder Ejecutivo, dentro de los treinta (30) días hábiles fijará la estimación, procediéndose posteriormente como lo establece el artículo anterior.

Artículo 46: En todos los casos del Art. 37 de la Ley N°4.035, la no aceptación de la concesión por el interesado no será procedente cuando sea de aplicación la regla establecida en el último párrafo del Art. 37 de dicha ley.

Artículo47: Todos aquellos titulares de perforaciones, actualmente registradas en el Departamento General de Irrigación, transcurrido el plaza del Art. 37 de la Ley N°4.035 sin que haya concretado debidamente alguna de las opciones previstas en el Art. 40 de este decreto, gozaránautomáticamente de la concesión de usar las aguas subterráneas en las condiciones que actualmente operan los pozos según sus registraciones, siendo título provisorio de la concesión la autorización ya otorgada por el Departamento General de Irrigación. La anterior

regla general se entiende que es sin perjuicio de los reconocimientos, determinaciones o ajustes de volúmenes que se efectuarán al tramitarse los títulos definitivos de las concesiones, para cuya fijación se atenderá a la racional utilización del recurso, y -en especial para el uso agrícola- a las características de los cultivos y zonas, evitándose el riego excesivo.

Artículo48: El uso del agua subterránea cesará inmediatamente a partir de la exteriorización de la voluntad del interesado de no aceptar la concesión, según los casos previstos en los Arts. 42 y 43. En los supuestos de reclamación indemnizatoria directa en sede judicial (inc. c.) del Art. 40) el uso cesará en la forma prevista en el Art. 39 de la Ley No 4.035 o antes, si la exteriorización de esa voluntad se hubiese hecho conocer con anticipación a la Administración. En todos los casos la autoridad de aplicación tendrá las facultades del Art. 39 de la Ley No 4.035 para hacer cesar el uso.

Artículo49: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 47, los titulares de las autorizaciones ya otorgadas, deberán presentarse ante el Departamento General de Irrigación dentro de los seis (6) meses desde la publicación de este decreto, solicitando el otorgamiento del título definitivo de la concesión. El Honorable Tribunal del Departamento General de Irrigación podrá prorrogar el plazo establecido en este artículo por otro período igual y podrá establecer reglamentariamente los recaudos que deban reunir esas solicitudes o que deban cumplirse por las que se presenten antes de que se dicte esa reglamentación. Los requisitos que se establezcan deberán contemplar y adaptarse a la situación preexistente y no podrán ser de tal entidad que afecten irrazonablemente a las situaciones legítimas existentes.

La regla anterior deja a salvo lo previsto en el Art. 47 en cuanto a la determinación definitiva de volúmenes. La autoridad de aplicación podrá acordar reglamentariamente plazos para el cumplimiento de los requisitos que deban satisfacerse para el otorgamiento del título definitivo, los cuales no podrán exceder de los seis (6) meses contados desde el vencimiento del término para efectuar la presentación inicial. La falta de presentación pidiendo el título

definitivo o de cumplimiento de los requisitos, en los plazos correspondientes, serán causales de caducidad de la concesión.

Artículo50: En la presentación a que alude el artículo anterior, el titular de la autorización, cuando el pozo se encuentre registrado a su solo nombre pero sus aguas sean utilizadas por él y otras personas, deberán denunciar expresamente esas situaciones reales, como así las convenciones privadas que pudieren existir al respecto (acompañando copias de los instrumentos respectivos, que existieren). En esos casos tanto el trámite como el título definitivo de la concesión darán intervención y contemplarán la situación de esos terceros. El titular registrado que omita efectuar la denuncia aludida, incurrirá en causal de caducidad de la concesión, la que en principio no perjudicará a los terceros. Estos -en todo supuesto- tendrán legitimación para intervenir en los trámites y defender sus derechos, como también para presentarse directa y anticipadamente ante la autoridad de aplicación cuando el titular registrado, beneficiado por lo dispuesto en el Art. 47, desconociera o menoscabara la situación real de utilización del agua que preexistiera.

Artículo51: Las concesiones previstas en el Art. 47 implican la sujeción a las normas establecidas en el Cap. VI de esta reglamentación.

Artículo52: En los supuestos contemplados en el Art. 49, las normas del Art. 35 de la Ley N°4.035 no tienen efecto retroactivo. Tampoco regirán los plazos fijados por el Art. 16 de dicha ley para que se expida el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación, pero éste deberá otorgar los títulos definitivos dentro del plazo máximo de seis (6) meses desde que cada expediente quede en estado de resolver.

Artículo53: No obstante lo establecido por el Art. 47 las perforaciones a las cuales les corresponda automáticamente la concesión, deberán sujetarse a las reglamentaciones, cargas y demás obligaciones que impongan las normas atinentes a las aguas subterráneas.

CAPÍTULO IX
SUB DELEGADOS Y AUTORIDADES DE CAUCES

Artículo54: Las subdelegaciones de aguas del Departamento General de Irrigación tendrán facultades de contralor y poder de policía sobre las aguas subterráneas, en sus respectivas zonas de influencia. Sin perjuicio de la regla anterior, el Departamento General de Irrigación procederá -dentro de los treinta (30) días contados desde la publicación de este decreto- a demarcar precisamente las competencias territoriales de las distintas subdelegaciones en materia de aguas subterráneas. Las facultades de las subdelegaciones se entienden sin perjuicio de las que competan a otros organismos o funcionarios administrativos específicamente con relación a las aguas subterráneas.

Artículo55: En los supuestos de aprovechamientos de aguas subterráneas como refuerzo o complemento de aguas superficiales, las facultades legales de las autoridades de cauces se extenderán al contralor y policía de las primeras, sin perjuicio de las demás competencias específicas o prevalecientes.

CAPÍTULO X
REGULACIÓN. AGOTAMIENTO DE LA FUENTE. ZONAS DE RESERVA

Artículo56: Las solicitudes de declaración de agotamiento de la fuente o para la delimitación de zonas de reserva, previstas en el ap. 3) del Art. 23 de la Ley N°4.035, deberán ser elevadas con todos los informes técnicos que las avalen y se cursarán por intermedio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Artículo57: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo podrá disponer la realización de estudios directos o la participación de otros organismos o entidades, a los fines de evaluar las solicitudes o de examinar en forma directa los problemas que detecte. Asimismo podrá proceder a declarar agotamiento de fuentes o delimitar zonas de reserva, en forma oficiosa, sin ser menester la iniciativa o la intervención del Departamento General de Irrigación.

Artículo 58: El Poder Ejecutivo podrá -actuando en forma directa u oficiosa- ejercer las facultades previstas en el ap. 1) del Art. 23 de la Ley N°4.035, para restringir, limitar o regular el uso o extracción de agua subterránea. Las facultades del Poder Ejecutivo, consignadas en el presente artículo, no obstan al ejercicio de las estatuidas por la norma citada por parte de las autoridades de aplicación.

CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo59: El Departamento General de Irrigación, por los órganos que correspondan, deberá elevar al Poder Ejecutivo -dentro de un plazo no mayor de seis (6) meses desde la fecha de este decreto- las siguientes labores e informaciones:

- **a)** Planeamiento o programa -generales y tentativos- para dar cumplimiento a lo previsto en los incs. a), b), c) y e) del Art. 3 de la Ley N° 4.036, con indicación correlacionada de las necesidades y recursos; La prevista en los incs. h) e i) de la norma antes citada, sin perjuicio del carácter permanente de esta última obligación;
- **b)** Proyecto para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el inc. g) del Art. 39 de la Ley N°4.035. El proyecto tendrá en cuenta el criterio político de acordar prioridad a los consorcios de usuarios cuyos integrantes realicen personal y directamente la explotación.

Asimismo el Departamento General de Irrigación informará al Poder Ejecutivo, dentro de los treinta (30) días de este decreto, con respecto a las necesidades aproximadas en cuanto a personal, bienes y servicios que serían menester en función de las primeras fases de aplicación de las Leyes N°4.035 y 4.036, según previsiones mínimas conducentes a una operación inmediata, indicando también los actuales recursos y posibilidades de recursos que en ese sentido existen o pueden encontrarse dentro del área de ese departamento.

Artículo60: El Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación sancionará, dentro de un plazo no mayor de cuatro (4) meses

contados desde la publicación de este decreto, y sin perjuicio de las facultades acordadas por el inc. a) del Art. 4o de la Ley N°4.036, los siguientes cuerpos normativos: 1) reglamentos para las solicitudes y trámites de las concesiones; 2) reglamento técnico de perforaciones; 3) reglamento de los usos especiales del agua subterránea; 4) reglamentos para el registro y catastro de las perforaciones; 5) reglamentos de directores y constructores de perforaciones (los que contemplarán las cargas, derechos o tributaciones que se aplicarán).

Artículo61: El Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación, con el objeto de coordinar los aspectos esenciales de la política hídrica, elevará a conocimiento del Poder Ejecutivo -dentro del plazo máximo fijado en el artículo anterior y siempre antes de sancionar las normas respectivas- los estudios y proyectos referidos a la imposición de cargas financieras a las concesiones (inc. f) del Art. 4o de la Ley N°4.036), indicando los fundamentos técnicos y lineamientos políticos que se hayan seguido y las correlaciones o comparaciones que puedan formularse con respecto a las cargas o costos de las aguas superficiales.

Artículo 62: El presente decreto será refrendado por los señores ministros de Hacienda en su carácter de tal y como interino de Obras y Servicios Públicos, de Gobierno y de Economía.

Artículo 63: Comuníquese, etc.

DECRETO-LEY N° 555/75

Artículo 1: Objeto: El sistema financiero creado por este decreto ley tiene por objeto formar un fondo permanente que permita al Estado realizar obras públicas de riego y sus complementarias, conforme al régimen que se determina en los artículos siguientes.

Artículo 2: Destino del fondo: El fondo para obras menores creado por las Leyes Nros. 1420, 1744, 1981, Decreto-Ley No 2066/1957, Ley No 2508 y los recursos de la presente, que tendrán carácter permanente, estarán destinados a:

a) En general: A ejecutar toda clase de obras de utilidad pública para la conducción de aguas vivas, desagües y saneamiento, en las zonas a determinar conforme al Art. 11;

b) En particular:

1. Obras de sistematización del riego y de control y distribución de caudales en los cauces públicos.
2. Impermeabilización de cauces públicos, cuando aquellos de los cuales deriven estén impermeabilizados, salvo casos muy especiales y previa justificación de la necesidad.
3. Obras de reacondicionamiento y conservación de las existentes administradas directamente por el Departamento General de Irrigación.
4. Obras de sistematización y encauzamiento de Sobrantes y desagües para refuerzo de dotaciones de cauces públicos. .
5. Perforaciones, obras y trabajos para alumbrar aguas subterráneas para refuerzo de dotaciones de cauces públicos.
6. Obras, instalaciones e instrumental accesorio para estaciones de aforo y nivoglaciometeorológicas en las cuencas de los ríos.
7. Completar y revisar el catastro de riego en las zonas de regadío,
8. Toda otra obra que el Departamento General de Irrigación juzgue necesaria, por razones de conveniencia pública u oportunidad administrativa.

Artículo 3: Obras de utilidad o interés público: Se considerarán de utilidad o interés público las obras construidas para servicio de todos los usuarios de un cauce público y las que se construyan para el servicio de particulares concesionarios a condición de que constituyan una mejora efectiva en la distribución de las aguas.

ART, 4: Obras excluidas: Quedan excluidas del régimen del presente decreto-ley las siguientes obras:

a) Las que menciona el Art. 192 de la Constitución de la Provincia de Mendoza;
b) Las determinadas en el Art. 13 del convenio aprobado por Ley No 1388, de noviembre de 1940;
c) Las obras previstas en su presupuesto por las inspecciones de cauces, salvo las aludidas en los Arts. 17 y 18 del presente; y
d) Todas las demás obras que se autoricen sin cargo al presente.

Artículo 5: Formación del fondo: El fondo permanente que se crea por el presente decreto-ley se depositará en las cuentas especiales que, a la fecha de su promulgación se encuentren abiertas o se abran en el futuro a la orden del Departamento General de Irrigación y estará formado por los siguientes conceptos:

a) Con el aporte anual básico por hectárea que efectuarán las propiedades, con derecho de agua superficial del dominio público o privado;
b) Con el aporte anual básico por hectárea que efectuarán los concesionarios o permisionarios de uso de aguas públicas o privadas destinadas a producir fuerza motriz o energía eléctrica. La potencia del aprovechamiento, a los fines de la aplicación del aporte anterior, será la instalada. A los efectos determinados en el presente inciso, se equipará un H. P. o fracción instalada a una hectárea de riego. La reglamentación podrá establecer una escala adecuada de este aporte proporcional a la potencia instalada;

c) Con el aporte anual básico por hectárea que efectuarán los concesionarios permisionarios de uso de aguas públicas o privadas destinadas a uso industrial o abastecimiento de poblaciones. En las concesiones a otorgar en el futuro se considerará, para su cobro, que el litro por segundo equivale a una hectárea de esta categoría, fijándose al otorgar la concesión el caudal máximo a derivar. Cualquier fracción se equipará a entero al solo efecto de la tributación:

d) Con el aporte inicial, y por esta única vez, de Diez millones de pesos ($ 10.000.000), que efectuará el Gobierno de la provincia de Mendoza, con recursos del Plan de Obras Públicas 1975;

e) Con el aporte de Diez millones de pesos ($ 10.000.000), que efectuará el Gobierno de la provincia de Mendoza, a partir del año 1976 y durante el término de Cinco (5) años, con recursos del Plan de Obras Públicas y de acuerdo al criterio que se establece en el Art. 79;

f) Con las contribuciones impuestas por las Leyes Nros, 1420, 1744, 1981, Decreto-Ley No. 2066/1957 y Ley No 2508, que deban reintegrarse por los beneficiados por la aplicación del Art, 23 de la Ley No 1920;

g) Con los tributos establecidos en el Art. 28 de la Ley No 1920 y sus complementarias Nros. 2032 y 2274;

h) Con los reembolsos de obras mayores de riego que deban hacer efectivos los nuevos concesionarios o permisionarios de aguas públicas, cuando el beneficio haya sido otorgado con posterioridad a la confección de las cuotas de reembolso de obras. La cuota unitaria, para estos casos, será la que hubiere fijado el Poder Ejecutivo en el prorrateo de cada una de las obras;

i) Con las Contribuciones que para una determinada obra, de las comprendidas en el régimen del presente decreto-ley, pudieran hacer terceros, concesionarios o no de aguas públicas, interesados en la construcción de una obra;

j) Con el aporte de donaciones, legados y otros fondos o bienes que acepte o determine el Honorable Tribunal Administrativo del

Departamento General de Irrigación, pudiendo destinar éste el todo o una parte de los superávits del presupuesto de la mencionada repartición estatal;

k) Con aportes o desgravaciones impositivas, en la forma en que las leyes Nacionales o Provinciales lo establezcan;

l) Con otros aportes extraordinarios que pudieran hacerse para refuerzo del fondo de la presente.

Artículo 6: Aportes de los concesionarios: Los aportes correspondientes al Art. 5o, incisos a), b) y c) se regirán por el presente régimen:

a) Concesionarios de derecho de agua superficial, del dominio público o privado, Treinta pesos ($ 30.-) por Ha., y por año;

b) Concesionarios o permisionarios de uso del agua pública o privada destinada a producir fuerza motriz: Treinta pesos ($ 30, -) por Ha., y por año;

c) Concesionarios o permisionarios de uso del agua pública o privada destinada a uso industrial y abastecimiento de poblaciones: Ciento veinte pesos ($ 120) por Ha. y por año.

Los montos antes citados se actualizarán anualmente en función de Índice General de la Construcción de la Provincia de Mendoza, que elabora la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas.

El índice a que se hace referencia en el apartado anterior tendrá base 100 para el año 1975 y se aplicará el que surja al 31 de agosto del año inmediato anterior al ejercicio para el cual se desea determinar el aporte.

Cuando del resultado de la planificación que establece el Artículo 8° surjan evidencias de que, en una o más zonas de la Provincia, se ha alcanzado o se está próximo a alcanzar el objetivo óptimo perseguido por el presente decreto-ley o cuando existan razones que aconsejen la declaración de una o más zonas de fomento, el Honorable Tribunal Administrativo podrá solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia la suspensión o la reducción del régimen que establece el presente artículo. Esta petición podrá ser aprobada o rechazada de acuerdo a

la merituación que oportunamente realice el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 7: Forma de establecer el monto anual de aportes gubernamentales: El aporte del Gobierno de la Provincia de Mendoza consignado en el Art. 5o, inc. e) se efectivizará de acuerdo a la siguiente tabla de distribución:

Ejercicio 1976	$5.000.000
Ejercicio 1977	$2.000.000
Ejercicio 1978	$1.500.000
Ejercicio 1979	$1.000.000,
Ejercicio 1980	$500.000

Artículo 8: Planificación de las obras: Anualmente, el Superintendente General de Irrigación formulará y someterá a aprobación del Honorable Tribunal Administrativo el "Plan de Obras" a ejecutar con los recursos previsibles del fondo creado por el presente decreto-ley.

El plan anual de obras se derivará del plan de largo plazo que el Departamento General de Irrigación elaborará, en función de las necesidades de cada zona y de la conveniencia económica de aquéllas. El Poder Ejecutivo reglamentará la participación de los concesionarios, a través de las Inspecciones de Cauces y Juntas Honorarias de Regantes, en la determinación de la necesidad de las obras y su inclusión en planes de corto, mediano y largo alcance.

Artículo 9: Obras imprevistas y urgentes: El plan anual de obras contemplará, en su capítulo "Varios", un monto que no podrá exceder del Diez por ciento (10%) de los recursos estimados del ejercicio, para financiar obras imprevistas.

El Honorable Tribunal Administrativo podrá modificar el plan de obras aprobado para el ejercicio, en casos de extremada urgencia debidamente comprobada por Superintendencia.

Artículo 10: Forma de realización de las obras: Las obras que se financien con fondos del presente decreto-ley se ejecutarán por los sistemas, formas y medios que establece la Ley Orgánica de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza.

Cuando existan razones de urgencia debidamente acreditadas o conveniencia debidamente fundada, el Honorable Tribunal Administrativo podrá ordenar su realización por administración, licitación privada o según convenga, siempre que se cumplan las disposiciones que al respecto fije la ley citada.

Artículo 11: Zonas de aplicación del Decreto-Ley: A los fines derivados de la presente norma legal, la Provincia de Mendoza se dividirá en las siguientes zonas:

- **a)** Río Mendoza, sus afluentes, zonas de influencia y Arroyo Carrizal;
- **b)** Río Tunuyán Superior, su tramo medio hasta el Dique El Carrizal y sus afluentes, Arroyos y Vertientes de Tunuyán, San Carlos y zonas de influencia;
- **c)** Río Las Tunas, Arroyos y Vertientes de Tupungato y zona de influencia;
- **d)** Río Tunuyán Inferior y zona de influencia;
- **e)** Río Atuel y zona de influencia;
- **f)** Río Diamante, sus afluentes y zona de influencia;
- **g)** Río Malargüe, sus afluentes y zona de influencia;
- **h)** Río Grande y Barrancas, sus afluentes y zona de influencia.

Artículo 12: Inversión de los fondos: La inversión de los fondos se hará conforme a lo que cada zona recauda de los distintos recursos previstos por el Art. 5o.

Dentro de cada zona en particular, los fondos se aplicarán en base al orden de prioridades fijado en el plan anual de obras.

Artículo 13: Criterio para la asignación de los fondos: Los recursos detallados en el Art. 59 se distribuirán conforme a los siguientes criterios:

- **a)** Los previstos por los Incisos a), b), c), f), g), h) e i), se afectarán a la zona que les dio origen;
- **b)** Los previstos por los Incisos d), e), j), k) y l), se afectarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. El Cuarenta por ciento (40%) se distribuirá tomando como base el hectareaje de cada zona. Para el cómputo de esta superficie se consignarán únicamente las concesiones en uso;
2. El Veinte por ciento (20%) se distribuirá en partes iguales entre las distintas zonas.
3. El Cuarenta por ciento (40%) restantes se distribuirá en función de la eficiencia de la recaudación por ejercicio vigente en las distintas zonas. A tal efecto, se considerará el promedio de la recaudación por todo concepto de los Tres (3) últimos ejercicios, calculado sobre la base de las concesiones en uso.

Los componentes del fondo a que se refiere el Inciso b) se distribuirán entre las zonas para las que se incluyan proyectos en el plan de largo plazo mencionado en el Art. 8. Ninguna zona podrá ser excluida de dicha distribución sin resolución fundada de Superintendencia, la que deberá ser ratificada por el Honorable Tribunal Administrativo.

Artículo 14: Estudio, proyecto y ejecución de las obras: Las obras a ejecutar con los fondos del presente decreto-ley, serán construidas por el Departamento General de Irrigación, salvo lo dispuesto por el Art. 192 de la Constitución Provincial.

Los concesionarios de riego, las Inspecciones de Cauces y los entes públicos podrán, por propia iniciativa o por encargo fundado del Honorable Tribunal Administrativo, realizar estudios y proyectos. El Honorable Cuerpo aprobará o desestimará los mismos mediante resolución fundada en los informes de las dependencias técnicas del Departamento General de Irrigación.

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Honorable Tribunal Administrativo podrá, por resolución fundada, encargar a entes públicos la realización de estudios y proyectos que crea necesarios.

Artículo 15: Del reembolso de las obras:

a) Proporción del costo de obra que deberá reembolsarse: Salvo lo

dispuesto en los Arts. 17 y 18, las obras que se financien con los fondos que provee este decreto-ley, serán reembolsables en el Ochenta por ciento (80%) de su costo. La parte no reintegrable se considerará obra de fomento con cargo a los fondos de este decreto-ley;

b) Monto total a reembolsar: Al Ochenta por ciento (80%) del costo de obra consignado en el inciso precedente se le agregará una carga financiera y el porcentaje que se determine por gastos indirectos, según lo preceptuado en los incisos g) y h) de este mismo artículo. El monto así establecido se reembolsará conforme al procedimiento reglado en el inciso i);

c) Criterio para determinar quiénes deben reembolsar el costo de las obras: Deberán contribuir todos los concesionarios beneficiados con la realización de la obra y en proporción a la superficie que respectivamente tengan empadronada;

d) Cuota de reembolso mínima: La cuota anual del reembolso, por hectárea y por obra, no podrá ser menor que la cuota aporte dispuesta en el Art. 5, inciso a), para el año inmediato anterior al de la puesta al cobro del reembolso. En el caso de que la obra se reembolse en un solo ejercicio, el monto podrá ser menor que el dispuesto en el párrafo anterior;

e) Plazo máximo para efectuar el reembolso: El término del reembolso no podrá exceder de Cinco (5) años, salvo que la cuota anual sea más del triple del importe establecido en el inciso precedente. En caso, previo a determinar el monto a reembolsar por año, se requerirá la opinión de las autoridad del o de los cauces beneficiados, las que podrán oponerse. Producida esta eventualidad el reembolso anual será igual o tres veces el importe de la cuota aporte para el año anterior al de la puesta al cobra de la obra;

f) Determinación del plazo del reembolso: La cantidad de años en que debe devolverse, al fondo de obras, el monto reembolsable se obtendrá dividiendo este último por la cuota mínima del reembolso.

De resultar tal cociente mayo o igual que cinco, el término aludido se fijará en Cinco (5) años. Si el cociente es menor que cinco, el termino será el que resulte de la división, considerándose la fracción como un año más;

g) Interés de financiación: En el monto a reembolsar deberá computarse un porcentaje de financiación que será igual a la tasa de interés que cobre el Banco de Mendoza para operaciones de créditos de fomento, al momento de realizarse el cálculo;

h) Tratamiento de los gastos indirectos: No podrá invertirse anualmente en: sueldos de personal técnico contratado, viáticos, movilidad, compra de instrumental, publicación de edictos y todo otro gasto que origine el estudio, el proyecto y la dirección de la obra, una suma superior al 10% del monto estimado, ingresar al fondo permanente para el ejercicio a que se refiere el gasto.

Estas erogaciones deberán registrarse en capítulo separado de las originadas para el funcionamiento normal del Departamento General de Irrigación y los fondos que se destinen tendrán afectación específica

Por este tipo de conceptos, el Departamento General de Irrigación podrá incorporar, al costo total de obra, hasta un máximo del 10% del presupuesto oficial, monto que tendrá carácter reembolsable;

i) Determinación de la cuota anual de reembolso por hectárea: La cuota anual de reembolso por hectárea se obtendrá mediante el siguiente procedimiento:

a. El monto total a reembolsar –determinado en el inciso b)- se divide por la superficie beneficiada por la realización de la obra;
b. El importe total a reembolsar por hectárea –obtenido en el punto anterior- se divide por el número de años en que debe efectuarse el reembolso del monto a que se refiere el inciso b);

j) Época en que deberá realizarse la liquidación del costo de la obra, el cálculo de la cuota de reembolso y la puesta al cobro: Salgo lo dispuesto en los arts. 17 y 18, la determinación del costo final de obra

y el cálculo del reembolso anual deberán practicarse inmediatamente de producida la recepción provisoria de la obra.

El monto que se determine a reembolsar por hectárea y por año deberá ponerse al cobro no después del ejercicio siguiente al de recepción provisoria y en forma conjunta con las demás cargas de la concesión y tasas que percibe el Departamento General de Irrigación;

k) Cauces gravados con reembolsos: En los cauces gravados por reembolsos en vigencia, provenientes del presente y de las Leyes Nros. 1420, 1744, 1981, Decreto-Ley No. 2066/1957 y Ley No 2508, podrán, mediante resolución fundada del Honorable Tribunal Administrativo, construirse otras obras financiadas mediante el sistema de este Decreto-Ley, cuando razones de necesidad o urgencia así lo aconsejen;

l) Excepciones al presente régimen de reembolsos: Se exceptúan del régimen de reembolsos establecido en el presente decreto ley, las obras realizadas o en curso de ejecución, conforme al régimen de las Leyes Nros. 1420, 1744, 1981, Decreto-Ley No 2066/1957 y Ley No. 2508. Dichas obras se reembolsarán en la forma y plazo fijados por esta última ley.

Artículo 16: Intervención de las autoridades de cauces: Durante el estudio y proyecto de las obras, las autoridades de cauce o los concesionarios individualmente podrán pedir vista de los estudios y proyectos en ejecución y efectuar las observaciones que estimen pertinentes Todas estas presentaciones serán resueltas por el Superintendente General de Irrigación, previo informe técnico. La resolución que recaiga será irrecurrible.

Terminado el proyecto de obra, de la documentación completa se dará vista a la autoridad del cauce por el término de Diez (10) días hábiles, prorrogables por Cinco (5) días más. Si se hiciesen observaciones, éstas se elevarán al Honorable Tribunal Administrativo, quien resolverá sin recurso alguno. Transcurrido el término consignado sin formularse observaciones, el proyecto quedará automáticamente aprobado.

Artículo 17: Régimen especial: El Departamento General de Irrigación podrá,

cuando lo estimare conveniente, contraer préstamos o contratar la construcción y financiación de las obras aludidas en el Art del presente decreto-ley.

También podrá actuar como agente de las Inspecciones de Cauces para obtener préstamos o construir obras financiadas en los cauces bajo la jurisdicción de una determinada Inspección. En estos casos el Departamento General de Irrigación podrá avalar las obligaciones asumidas por la Inspección, debiendo previamente convenirse la regulación de los cobros y pagos de la amortización.

Artículo 18: Administración, amortización de préstamos y sistema de reembolsos en el caso del régimen especial. Los préstamos obtenidos o las obras construidas conforme a la primera parte del artículo anterior, se pagarán por sus beneficiarios, en la forma que establezca el Honorable Tribunal Administrativo.

La forma de amortización del préstamo y el prorrateo de su costo se establecerá en el convenio que deberán formalizar la Inspección y el Departamento General de Irrigación.

Artículo 19: Derogación de disposiciones anteriores: Derógase la Ley No 2508 y toda otra disposición que se oponga al presente decreto-ley,

Artículo 20: Vigencia. Este decreto-ley tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.

Artículo 21: Reglamentación: El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, dictará la reglamentación necesaria para el cumplimiento del presente decreto-ley.

Artículo 22: Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial.

IRRIGACIÓN

Resol. N° 249

Mendoza, 15 de junio de 2.018

VISTO: El Expediente Nº 762.505-2 caratulado: "Dirección de Policía del Agua y Control de Calidad del Agua s/ Proyecto de Resolución Estimulación Hidráulica Yacimiento No Convencional"; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Provincial Nº 248/18 se ha reglamentado un procedimiento específico para el control ambiental de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no convencionales;

Que el mencionado Decreto encomienda al Departamento General de Irrigación, en función de su autarquía constitucional (art. 188º Constitución de Mendoza), una serie de cuestiones que deben ser debidamente reguladas por éste Organismo, complementando el Decreto Provincial para su correcta aplicación;

Que el artículo 9º del Decreto Nº 248/18 establece: "Dispóngase que se realicen los controles de las medidas preventivas para preservar aguas superficiales y subterráneas a satisfacción de la autoridad competente en materia hídrica, en función de los resultados obtenidos en el estudio hidrogeológico previos al inicio de las actividades, para determinar las condiciones del agua antes, durante y una vez finalizado el proceso de fractura";

Que el artículo 16º del Decreto Nº 248/18 prevé que el permisionario, concesionario y/u operador propondrá un plan de monitoreo para controlar la calidad del recurso hídrico subterráneo. La campaña de monitoreo se realizará bimestralmente y los informes con los resultados analíticos serán presentados a la autoridad de aplicación ambiental e hídrica, siendo ésta última la que deberá evaluarlos;

Que en virtud de dichas disposiciones, corresponde al DGI establecer las medidas preventivas que deberán cumplir los permisionarios, concesionarios y/u operadores que realicen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no convencionales para preservar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas;

Que asimismo, en virtud de su autarquía constitucional y la competencia fijada por las Leyes de Aguas, corresponde al DGI producir el informe previo a la concesión legal para el uso de aguas públicas superficiales (art. 194º) o bien otorgar permisos precarios (Res. Nº 944/06 HTA), teniendo a su vez la autoridad concedente en materia de aguas subterráneas (Leyes Nº 4035 y 4036), por lo que es éste Organismo quién debe definir los aspectos vinculados al uso de las aguas públicas en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no convencionales;

///

Cdor. CESAR F. BERNUES
PRESIDENTE
H.C.A. y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Ing. Agrim. SERGIO L. MARINELLI
SUPERINTENDENTE GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Ing. Agr. ALEJANDRO JUAN GENNARI
CONSEJERO
H.C.A. y H.T.A.
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

Dr. LEONARDO RUBEN MUZZINO
SECRETARIO DEL H.C.A. y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Resol. N° 249

//-2

Que por su parte, los artículos 5º inc b) y 7º inc s) del Decreto prevén que los interesados deberán acreditar fehacientemente la autorización del DGI para el uso del agua, indicando en el artículo 10º que el agua de fractura para el caso de yacimientos en producción deberá provenir preferentemente del agua de formación;

Que conforme lo prevé el artículo 9º inc. c) del Decreto Nº 170/08 las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contar con el respectivo estudio hidrológico, hidrogeológico e hidráulico del área y/o yacimiento;

Que a los fines del correcto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 248/18 y en ejercicio de sus funciones, la Dirección de Policía y Calidad del Agua sugiere el dictado de una norma complementaria sobre los aspectos de competencia propia del DGI;

Que sin perjuicio de las previsiones reglamentarias referidas a la Evaluación de Impacto Ambiental que debe exigir y controlar la autoridad de aplicación de la Ley Nº 5961, corresponde al DGI reglamentar y controlar las diversas actividades en orden al uso y protección de las aguas, conforme contemplan las leyes Nº 6044, de Aguas, Nº 322, Nº 4035 y concordantes;

Por ello y en uso de sus facultades;

EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
R E S U E L V E:

1. La presente Reglamentación estatuye las exigencias que deben cumplimentarse para la preservación del recurso hídrico y complementa el Decreto N° 248/18 en los aspectos propios de competencia del Departamento General de Irrigación, en virtud de las consideraciones expuestas.

2. A los fines del cumplimiento de los artículos 9º y 16º del Decreto N° 248/18, el estudio de impacto ambiental que deberá presentarse ante la Autoridad Ambiental y oportunamente ser sometido a dictamen sectorial del DGI (conforme art. 4º Decreto Nº 248/18), deberá contener una Línea de Base que incluirá un estudio hidrológico e hidrogeológico de la zona de influencia hídrica de la actividad a desarrollar, el que especificará:

   - Inventario de puntos de agua y su caracterización (hidroquímica, aforos)
   - Tipo y cantidad de niveles acuíferos presentes
   - Descripción de las unidades hidrogeológicas: litología, espesores.
   - Piezometría y dinámica de flujo
   - Parámetros hidráulicos
   - Vinculación de los acuíferos con las aguas superficiales

///

Cdor. CESAR P. BERNUÉS
PRESIDENTE
H.C.A. Y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Ing. Agrón. SERGIO L. MARINELLI
SUPERINTENDENTE GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Dr. LEONARDO RUBEN MUZZONO
SECRETARIO DEL H.C.A. Y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Ing. Agr. ALEJANDRO JUAN GENNARI
CONSEJERO
H.C.A. Y H.T.A.
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN

- Vinculación con otras cuencas hidrogeológicas
- Modelo conceptual hidrogeológico
- Caracterización hidroquímica; que debe incluir como mínimo los siguientes parámetros de análisis: pH, Cond. Eléctrica, sólidos disueltos totales, alcalinidad total, dureza total, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, potasio, boro, metano, VOCs, Betex, hidrocarburos totales, aluminio, arsénico, bario, cadmio, cobre, cromo total, estroncio, hierro total, litio, cobalto, manganeso, mercurio, níquel, plomo, selenio, zinc, vanadio, radio y uranio.

Entiéndase por Área de Influencia Hídrica aquella en la que la actividad hidrocarburífera regulada pueda impactar o incidir, conforme las características hidrológicas e hidrogeológicas del área. El mencionado estudio, con las solicitud de uso de aguas a que refiere el artículo 3º de la presente.

Asimismo, de considerarlo necesario y como medida preventiva y complementaria del estudio hidrológico e hidrogeológico, el D.G.I. podrá solicitar un Análisis de vulnerabilidad del acuífero, el que será valorado al momento de emitir el dictamen sectorial.

3. A los fines del cumplimiento de los Artículos 5º inc b); art. 7º inc s) y art. 10º del Decreto Nº 248/18, se deberá observar, en lo pertinente, el procedimiento establecido por la Res. Nº 944/06 HTA y sus modificatorias.

   Los permisos de uso de agua superficial o las concesiones de uso de agua subterránea para proyectos de estimulación hidráulica que otorgue el D.G.I., pagarán un canon diferencial por m^3 a utilizar en la estimulación hidráulica. El monto a pagar por m^3 de agua extraída, será determinado en el presupuesto anual del Departamento General de Irrigación y será abonado previo al inicio de cualquier actividad de estimulación hidráulica. Asimismo se faculta a Superintendencia a adecuar los valores correspondientes fijados en el presupuesto vigente del año 2018 respecto de las actividades a realizar por este tema en cuestión.

   En las Áreas en Producción sólo podrá utilizarse agua de formación como agua de fractura. En los casos que el permisionario, concesionario y/u operador no disponga del volumen suficiente para realizar las tareas de estimulación hidráulica, deberá demostrar acabadamente ante el D.G.I. la no disponibilidad de agua de formación.

///

Cdor. CESAR R. BERNUES
PRESIDENTE
H.C.A. y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Ing. Agrim. SERGIO L. MARINELLI
SUPERINTENDENTE GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Dr. LEONARDO RUBEN MUZZINO
SECRETARIO DEL H.C.A. y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Ing. Agr. ALEJANDRO JUAN GENNARI
CONSEJERO
H.C.A. y H.T.A.
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

Resol. N° 249

//-4

La empresa operadora deberá además considerar la posibilidad de recibir agua de formación de yacimientos próximos, para lo cual deberá gestionar esta alternativa ante las operadoras vecinas, debiendo en su caso presentar una declaración jurada del/los operador/es consultado/s. En tales supuestos, el DGI evaluará la posibilidad de utilizar otras fuentes de provisión de aguas al proyecto, cuyo origen no sean aguas de formación, según la disponibilidad hídrica de cada cuenca en función de los pronósticos de erogaciones y estudios de acuíferos y atendiendo particularidades de cada caso, respetando el régimen de prioridades y preferencias legales.

4. En cumplimiento de los Art. 9º y 16º del Decreto Nº 248/18 y en función de los resultados de los estudios de Línea de Base Hidrológica e Hidrogeológica, la empresa deberá proponer al DGI un Plan de Monitoreo, el cual deberá contar con los siguientes requerimientos mínimos:

a. Debe estar diseñado en concordancia con el modelo hidrogeológico conceptual definido en los estudios previos y debe ajustarse a los resultados de la Línea de Base hidrogeológica.
b. Debe contar con pozos de monitoreo que permitan el acceso y muestreo del agua subterránea en todos los acuíferos descriptos que presenten una conductividad eléctrica inferior a 6.000 usc/m en los estudios previos. El DGI podrá exigir la construcción de pozos de monitoreo, aprobar su localización, profundidad y diseño constructivo; en la cantidad suficiente en función de las características de la Línea de Base hidrogeológica. Estos deberán ser construidos con carácter previo al inicio de las actividades del proyecto.
c. En los pozos de monitoreo se deberán medir periódicamente los niveles estáticos y parámetros fisicoquímicos in situ, asimismo se tomaran muestras de agua para monitoreo hidroquímico.
d. El programa de monitoreo deberá incluir la toma de muestra y medición de parámetros in situ de los cuerpos de agua superficiales que puedan estar vinculados con los recursos subterráneos, así como también aquellos que puedan verse afectados por las actividades del proyecto en superficie.
e. Los análisis hidroquímicos de las muestras deberán incluir como mínimo los mismos parámetros contenidos en los estudios Hidrológico e Hidrogeológico que incluyen la Línea de Base.
f. En los monitoreos, se deberá incluir el muestreo y análisis de las aguas de retorno en cada fractura y de purga respecto de cada fuente a utilizar.
g. El DGI podrá definir, en cualquier momento, cambios en la frecuencia, sitios y grupo de análisis a realizar respecto al Plan de Monitoreo propuesto por la Empresa. Asimismo, podrá exigir la utilización de trazadores en el agua de fractura.

///

Cdor. CESAR R. BERNUES
PRESIDENTE
H.C.A. Y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Ing. Agrim. SERGIO L. MARINELLI
SUPERINTENDENTE GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Ing. Agr. ALEJANDRO JUAN GENNARI
CONSEJERO
H.C.A. Y H.T.A.
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

DR. LEONARDO RUBEN MUZZINO
SECRETARIO DEL H.C.A. y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Resol. N° 249

//-5

5. El DGI requerirá la presentación de los estudios técnicos necesarios para garantizar la integridad de los pozos, estado de la cementación, perfil de corrosión, prueba de hermeticidad del casing, evaluación de la corrosión del casing y prueba de integridad previstos en el art. 7º del Decreto Nº 248/18, al momento de emitir el Dictamen sectorial. Dichos estudios, que tienen por finalidad conocer la integridad mecánica del pozo antes de realizarse la estimulación hidráulica, los perfiles y pruebas mencionadas, deberán ser revisados y evaluados por un Organismo competente que califique la aptitud mecánica del pozo para soportar las presiones durante la estimulación hidráulica. En caso que los mismos no hayan sido acompañados, se autoriza a Superintendencia ha afrontar el costo de su realización, debiendo luego repetirlo de la empresa operadora. Asimismo, dichos estudios técnicos podrán ser requeridos en forma periódica conforme coordine el Departamento General de Irrigación con la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5961.

6. Todos los acuíferos a proteger deben ser perforados con lodo base agua. La protección física deberá implementarse mediante la cementación de los acuíferos aptos para uso, la que se extenderá por encima del techo y base del acuífero de tal manera de contar con un margen de seguridad que garantice la protección del mismo. La integridad de la cementación deberá ser evaluada mediante perfilaje CBL y DVL (adherencia tubería – cemento – formación). El estado de corrosión de la cañería y cementación de dicha zona de interés deberá ser evaluado con una periodicidad que fije la Autoridad de Aplicación.

7. La Superintendencia deberá determinar en cada caso la distancia mínima de prevención respecto de los cursos de agua permanente y cauces en general, que puedan afectar el recurso hídrico de la zona; a partir de la cual podrán establecerse áreas de almacenamiento de aguas de formación, almacenamiento de combustible, productos químicos, motores de usinas, cuadro de maniobra y subestructura, comprendiendo toda instalación utilizada para la explotación que pudiere ser potencialmente riesgosa para el recurso hídrico, incluso lo referido a las operaciones de estimulación propiamente dichas, conforme lo dispuesto por el art. 6º Res. Nº 778/96 HTA, así como también, podrá imponer reservas y vedas en aquellos cuerpos receptores naturales de aguas, tramos o sectores de los mismos, y en determinados acuíferos subterráneos, que a juicio del organismo merezcan una protección especial y determinada (conforme art. 7º Res. Nº 778/96 HTA).

8. Las exigencias y condiciones establecidas en el presente reglamento podrán ser agravadas por la Superintendencia, en oportunidad de emitir dictamen sectorial, cuando las características del proyecto así lo exijan en el marco de los principios de prevención y precaución fijados en la Ley Nº 25.675.

///

Cdor. CESAR F. BERNUES
PRESIDENTE
H.C.A. y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Ing. Agrim. SERGIO L. MARINELLI
SUPERINTENDENTE GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Dr. LEONARDO RUBEN MUZZIO
SECRETARIO DEL H.C.A. y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Ing. Agr. ALEJANDRO JUAN GENNARI
CONSEJERO
H.C.A. y H.T.A.
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

Resol. N° 249

//-6

9. Facultar a Superintendencia a elaborar los Protocolos de Seguimiento y Control para los proyectos que se desarrollen en la Provincia. Asimismo, y sin perjuicio de inspeccionar cada operación, deberá exigir la entrega periódica de los registros continuos de almacenamiento de datos recabados en las mismas por la empresa.

10. La vigencia de la presente reglamentación será a partir de su publicación, debiendo la autoridad de aplicación de la Ley Nº 5961 requerir la adecuación de cualquier trámite en curso a la presente regulación.

11. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, en el sitio web oficial del DGI y remítase copia a la Dirección de Protección Ambiental.

Cdor. CESAR F. BERNUES
PRESIDENTE
H.C.A. Y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Ing. Agrim. SERGIO L. MARINELLI
SUPERINTENDENTE GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Dr. LEONARDO RUBEN MUZZINO
SECRETARIO DEL H.C.A. y H.T.A.
Departamento General de Irrigación

Ing. Agr. ALEJANDRO JUAN GENNARI
CONSEJERO
H.C.A. Y H.T.A.
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION